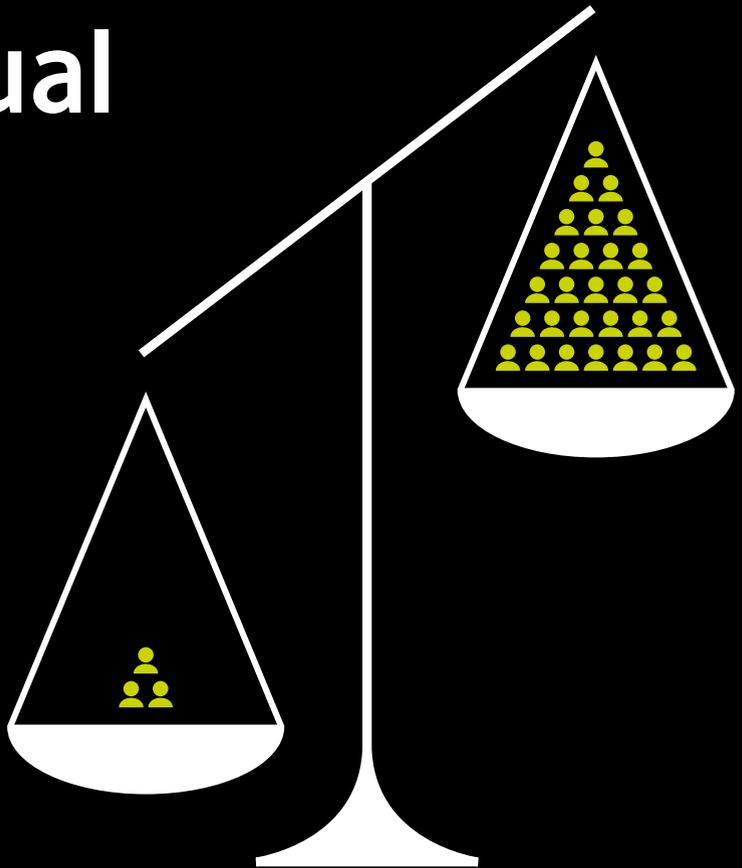
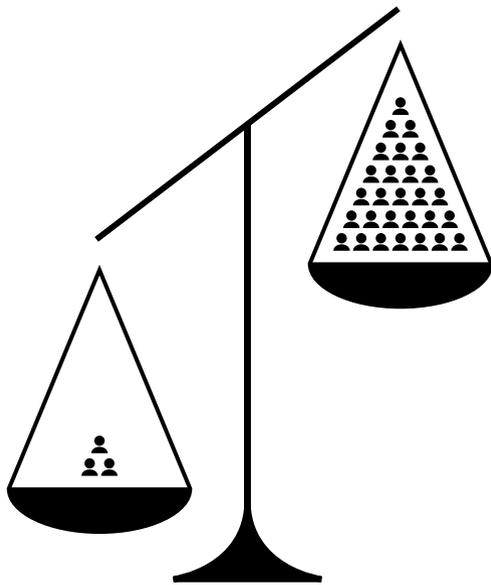


**Anastasio
Ovejero**

**Desigualdad
y pobreza
en el mundo
actual**



Desigualdad y pobreza en el mundo actual



**Anastasio
Ovejero**

**Desigualdad
y pobreza
en el mundo
actual**

ISBN: 978-94-03-64637-4

Fecha de edición: marzo 2022

Diseño de portada: Gonzalo Ovejero

Maquetación: Gonzalo Ovejero

Contacto: anastasio.ovejero@uva.es

Libro descargable desde anastasio.ovejero.net

Este libro está publicado bajo una licencia CC BY-NC-ND 4.0 license, lo que significa que está permitido copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato, siempre que sea para uso no comercial y dando crédito al autor original de manera adecuada. No se permiten obras derivadas.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>

Madrid © 2022 Creative Commons.

*A quienes, en esta época neoliberal,
aún sueñan con un mundo justo, igualitario y solidario,
y luchan por él.*

ÍNDICE

Capítulo 1

Introducción

1.1. El compromiso de los científicos sociales	11
--	----

Capítulo 2

La hegemonía neoliberal y sus efectos

2.1. Introducción	25
2.2. Qué es la globalización actual.....	26
2.3. Algunas características de la globalización neoliberal	28
2.4. Paradojas, trampas y mentiras del neoliberalismo.....	33
2.5. El poder de las grandes empresas transnacionales	40
2.6. Principales efectos de la globalización neoliberal.....	45
2.7. La educación en el tercer mundo: Otra trampa a favor de los países ricos.....	50
2.8. Conclusión.....	52

Capítulo 3

La deuda como mecanismo de explotación y control del tercer mundo

3.1. Introducción	57
3.2. La deuda como dispositivo para el control neoliberal del mundo.....	58
3.3. La deuda del tercer mundo.....	60
3.4. Conclusión.....	69

Capítulo 4

El incremento desmedido de las desigualdades y sus consecuencias

4.1. Introducción.....	71
4.2. Algunos datos.....	74
4.3. Qué es la desigualdad y cómo se mide	79
4.4. Algunos fenómenos están agravando las desigualdades	82
4.5. Consecuencias de las desigualdades	91
4.6. Explicación psicosocial de los efectos negativos de las desigualdades.....	101
4.7. ¿Qué se puede hacer para reducir las desigualdades?.....	109
4.8. Conclusión	112

Capítulo 5

Exclusión social

5.1. Introducción	117
5.2. Definición y concepto de exclusión social.....	118
5.3. Factores explicativos de la exclusión social.....	122
5.4. Conclusiones	127

Capítulo 6

Pobreza en los países sin desarrollar

6.1. Introducción: Qué es el tercer mundo.....	129
6.2. Los principales focos de pobreza.....	133
6.2.1. África.....	136
6.2.2. Asia:.....	142
6.2.3. América Latina	147
6.3. El nuevo colonialismo.....	153
6.4. Consecuencias psicológicas y psicosociales de la pobreza	158
6.5. ¿Es posible terminar con la pobreza y la desigualdad? Propuestas de solución.....	163
6.6. Conclusión	174

Capítulo 7

La Ayuda Oficial al Desarrollo y sus trampas

7.1. Introducción.....	179
7.2. Ayuda al Desarrollo	180
7.3. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio.....	185
7.4. Crítica a la Declaración del Milenio y a la Ayuda Oficial al Desarrollo	189
7.5. Los Informes del Milenio	196
7.6. Algunas propuestas de solución	205
7.6.1. Medidas generales.....	205
7.6.2. Medidas concretas.....	208
7.7. Conclusión.....	211

Capítulo 8

Pobreza en los países desarrollados: El cuarto mundo

8.1. Introducción.....	213
8.2. Desigualdad, pobreza y crisis de la sociedad del bienestar y del Estado social.....	216
8.3. Pobreza y desigualdad en los países desarrollados	222
8.3.1. Reino Unido	225
8.3.2. Estados Unidos	226
8.4. Desigualdad y pobreza en España	232
8.5. Conclusión.....	236

Capítulo 9**La esclavitud, un fenómeno dramático**

9.1. Introducción	239
9.2. La esclavitud: El papel desempeñado por España	241
9.3. Cifras y beneficios	248
9.4. El traslado de africanos negros a América	251
9.5. La situación de los afroamericanos en Estados Unidos	258
9.6. Conclusión.....	270

Capítulo 10**Conclusiones y propuestas de solución**

10.1. Introducción	273
10.2. ¿Es posible recuperar el planeta y terminar con la desigualdad y la pobreza?	274
10.3. ¿Tenemos motivos para ser optimistas?	282
10.4. Conclusión.....	290

Bibliografía citada

Referencias.....	293
------------------	-----

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

1.1. El compromiso de los científicos sociales

Quisiera comenzar este libro haciendo más las palabras de Ignacio Martín Baró, con las que me identifico plenamente: «Yo tengo que ser militante en mi historia y en mi situación, y lo tengo que ser en cuanto psicólogo social y con la psicología social. Militante quiere decir que tomo parte, que soy partidario, y no debe confundirse (que a veces sí ocurre) con falta de objetividad» (2003, p. 17). También yo quisiera ser objetivo, en la medida de lo posible, pues no le faltaba razón a José Bergamín cuando decía que «Si yo fuera un objeto, sería objetivo; como soy un sujeto, soy subjetivo». Lo que sí seré, en la medida de lo posible, es imparcial; ser objetivo es más difícil.

Por otra parte, la historia que se cuenta en este libro viene de muy atrás, digamos de momento que al menos de la Revolución francesa: los conservadores quieren mantener las desigualdades mientras los progresistas desean que disminuyan tales desigualdades para hacer posible un mundo más justo y más solidario. Los actuales neoliberales, que lo primero que hacen es apropiarse indebidamente del término «liberal», son lo que más han aumentado la desigualdad desde hace tiempo. Estos «liberales», como a menudo les gusta llamarse a ellos, de liberales tienen muy poco. De hecho, votan en el parlamento contra las leyes que amplían las libertades individuales como el divorcio, el aborto, la eutanasia o el matrimonio entre personas del mismo sexo. Se llaman liberales porque –dicen ellos– creen en el «libre mercado», una de las mayores mentiras del actual orden económico mundial, pues ese libre mercado no existe. Y restringen la

libertad meramente a la libertad del dinero para ir de un sitio a otro con el exclusivo fin de obtener beneficios a costa de quien sea y la libertad de las empresas para trasladarse (deslocalización) allí donde los salarios sean más bajos y los derechos laborales no existan. Se hacen llamar liberales, pero son ante todo neoconservadores a ultranza. Por eso, «los últimos años se han caracterizado por una ofensiva conservadora en pro de la desigualdad: el llamado “neoliberalismo” que, posteriormente, sería sustituido por una forma todavía más extrema de “desigualitarismo”, los llamados “neoconservadores” que han impuesto sus puntos de vista en los Estados Unidos y países satélites y han reducido el ímpetu igualitario de las otras dos ideologías clásicas» (Tortosa, 1999, p. 57).

Pero nos encontramos en una época difícil, en la que el llamado «efecto Dunning-Kruger» impera por doquier.¹ Ya Marat decía que «la ignorancia favorece enormemente el despotismo». Por eso, como subraya Jean Ziegler (2006, p. 274), informar y hacer transparentes las prácticas de los señores es la tarea principal del intelectual». Esa es una de las cosas que pretende este libro. Por eso deseo responder a preguntas como las siguientes: ¿Por qué, en pleno siglo XXI, sigue habiendo tanta pobreza en el mundo a pesar de que la Revolución Industrial primero y la revolución tecnológica después han incrementado formidablemente el crecimiento económico y la riqueza? ¿Por qué esa riqueza ha sido acaparada obscenamente por unos pocos de forma que las desigualdades económicas y sociales son hoy día enormes? ¿Por qué todos los años siguen muriendo millones de personas, sobre todo niños pequeños, a pesar de los monumentales avances de la medicina (sobre todo en los campos de los antibióticos, las vacunas y la cirugía) y del inmenso desarrollo de la agricultura?

Pero antes de seguir adelante me gustaría hacer una aclaración: ¿estamos ante un libro de psicología social o de sociología? Aparte de que las fronteras entre las ciencias sociales son muy movedizas y, por ello, están muy desdibujadas,

1 Según este sesgo, los mediocres no son conscientes de sus limitaciones intelectuales y pretenden pontificar sobre todos los temas, poniéndose a la altura, o más arriba aún, de los sabios y los expertos. Y como ni siquiera saben que no saben, jamás aprenderán nada. Se creen graduados por Internet y son incapaces de reconocer su mediocridad intelectual y su ignorancia. Por eso son ellos quienes más contribuyen a extender los bulos y las falsas noticias.

tenemos que tener muy presente, como escribe Jesús de Miguel (2005, p. 14), siguiendo a Eliot Freidson (2001), que «básicamente las profesiones son campos de poder». Y la distribución de ese poder entre la psicología social y la sociología se hace compleja dada la citada ambigüedad de sus fronteras. Por ejemplo, pienso que gran parte de la mejor psicología social la están haciendo algunos microsociólogos, desde el momento en que la mayoría de los psicólogos sociales se olvidaron, en mayor o menor medida, del adjetivo de su disciplina («social») y se quedaron con el sustantivo («psicología»), como consecuencia de su profunda formación positivista.

De hecho, ya desde sus inicios la psicología social se nutrió tanto de la psicología como de la sociología, surgiendo tempranamente dentro de su seno dos psicologías sociales: una más psicológica y otra más sociológica, de las que la primera fue siempre la dominante. Ello dio lugar a una permanente tensión interna que se «resolvió» con un fuerte afianzamiento de su psicologismo y de su positivismo, lo que está teniendo al menos estas consecuencias (Ovejero, 2016c): un aislamiento cada vez mayor de las demás ciencias sociales; una gran dificultad para conseguir suficiente interdisciplinariedad; una casi permanente ausencia de relevancia social; y una pérdida de hegemonía dentro de las ciencias sociales (House, 2008). De hecho, cuando más relevante fue nuestra disciplina y cuando su trabajo fue más fructífero fue precisamente cuando ambas ramas de la psicología social colaboraron y cuando, juntas, trabajaron también con otros científicos sociales (Sewell, 1989): su relevancia llegó al punto de influir definitivamente en la decisión que en 1954 tomó la Corte Suprema estadounidense de suprimir la discriminación racial en las escuelas públicas. Sin embargo, desde entonces, principalmente por haber abandonado la interdisciplinariedad y la colaboración con las demás ciencias sociales, la psicología social no ha dejado de acelerar su declive. Este declive va unido al de las ciencias sociales en su conjunto (House, 2008), que han sido sustituidas por la economía a la hora de analizar los procesos sociales, como corresponde al auge del neoliberalismo. No es por azar que los años 1950-1980 fueran los años de la socialdemocracia y a partir de 1980 haya sido el neoliberalismo conservador el que se ha implantado ya no solo en las relaciones económicas y laborales, sino incluso en las relaciones humanas, justamente desde que se intentó, con tantos instrumentos a su servicio, que el famoso *Informe de la Trilateral* (Crozier, Huntington y Watanuki, 1975) impusiera sus

dictámenes por doquier. De ahí que si queremos que la psicología social vuelva a ocupar un lugar relevante dentro de las ciencias sociales deberíamos dedicar más tiempo y más esfuerzo a analizar los problemas reales del mundo actual (véase Ovejero, 2010, 2014a, 2014b, 2016b, 2017a, 2017b).

Además, tengamos presente que la psicología social no se caracteriza por los temas que trata, pues son los mismos que los de las demás ciencias sociales (aunque con un énfasis especial en el estudio de las actitudes, la influencia social y los grupos pequeños), sino por un enfoque, por una perspectiva, o sea, por una forma de ver la realidad social desde una perspectiva esencialmente psicosocial. Y eso es lo que pretendo hacer aquí: tratar los mismos temas que tratan otras ciencias sociales (la desigualdad, la pobreza y la exclusión social), pero hacerlo desde un enfoque psicosocial, añadiendo los efectos psicológicos y psicosociales que tienen la desigualdad, la pobreza y la exclusión social.

Pues bien, uno de los principales problemas de la psicología social, el que provocó la profunda crisis por la que atravesó en los años 70 y de la que aún no se ha recuperado completamente, es justamente la escasa relevancia social de sus investigaciones (Ring, 1967). Precisamente por querer ser más psicológica que social, nuestra disciplina se ocupó durante décadas muy poco de los problemas reales que afectaban a la sociedad, entre ellos la desigualdad, la pobreza o la exclusión social. Y cuando lo ha hecho ha sido de una forma muy reduccionista, con un fuerte psicologismo e individualismo, de tal manera que ni siquiera toca las causas reales de tales problemas. Por el contrario, pienso que los psicólogos sociales deberíamos implicarnos más en el análisis y solución de tales problemas. Al fin y al cabo, como dijo Miller (1969), la principal finalidad de la psicología debería ser incrementar el bienestar psicológico de las personas. Y, como veremos mejor, esos problemas (las desigualdades, la pobreza, el hambre y la exclusión social) conllevan serios trastornos no solo físicos (enfermedades y muerte prematura) sino también psicológicos (angustia, ansiedad y depresión). Por eso, esos temas deberían estar en primera línea de la agenda de investigación de la psicología social.

Por otra parte, a pesar de que hoy día, en plena hegemonía neoliberal, existen grandes dificultades para desarrollar una psicología social crítica y emancipatoria, creo que ello es todavía posible. Y una manera de hacerlo es precisamente

centrando nuestras investigaciones en los problemas reales de la gente, entre los que la desigualdad, la pobreza y el hambre son sin duda algunos de los más serios. Por eso considero que este libro es un texto de psicología social que pretende analizar los problemas reales de la gente real. Y lo primero que habría que hacer es señalar a los verdaderos responsables de tal situación de pobreza que, evidentemente, no son los propios pobres: ya está bien de echarle la culpa, una vez más, a las víctimas de lo que les pasa. No debemos seguir viendo los problemas sociales como problemas individuales o personales. El capitalismo neoliberal ha conseguido que, psicologizando los problemas sociales, creamos que, en lugar de deberse a las injustas políticas llevadas a cabo por el capitalismo, tales problemas son responsabilidad de los propios afectados (los desempleados no tienen trabajo porque no son capaces de adaptarse a las condiciones de la globalización; los criminales lo son porque tienen problemas personales, a menudo relacionados con sus genes o sus cerebros; quienes fracasan escolarmente es porque su CI no está a la altura de las exigencias de la escuela moderna o porque son muy vagos). De esta manera, la psicología está contribuyendo poderosamente a que la ciudadanía no perciba quiénes son los responsables reales de tales problemas y no culpabilice a las políticas de precarización laboral que están siendo tan dañinas para los trabajadores (Ovejero, 2014a, 2016a, 2016b). Y está contribuyendo también a que los psicólogos sociales dejen de analizar el golpe de Estado planetario que están dando los más ricos contra el resto de la ciudadanía (Ariño y Romero, 2016; Ovejero, 2014a; Stiglitz, 2012), a menudo utilizando instrumentos judiciales (el tristemente famoso *lawfare*).

Por tanto, quisiera defender aquí que una de las tareas más urgentes de los psicólogos, al menos si queremos ser críticos y si queremos mantener una mínima honradez intelectual, es desenmascarar los intereses y fines ocultos que se esconden tras muchas de nuestras prácticas profesionales, pues no olvidemos que lo primero que hacen las organizaciones de todo tipo es echar una tupida cortina de humo que oculte sus verdaderas intenciones para que así ni siquiera sus propios miembros conozcan su funcionamiento y sus objetivos reales (véase Martel, 2019 con respecto al funcionamiento real del Vaticano). Así, bajo la etiqueta de «ayuda a los demás» y de «mejora de la calidad de vida» a menudo la psicología esconde otros intereses y objetivos, como pasó con la aplicación de los test de inteligencia (Ovejero, 2003; Torregrosa, 2003).

La psicología y la psicología social, pues, han servido –y siguen sirviendo– al mantenimiento del *statu quo* y, por consiguiente, a la defensa de los intereses de los poderosos, y lo hacen prescribiendo quiénes son psicológicamente normales (que son precisamente los que mejor se adaptan a las exigencias del capitalismo), psicologizando los problemas sociales (la culpa de tales problemas no será del sistema sino de sus víctimas) y contribuyendo con todo ello a la producción de una ideología legitimadora que consiga que los ciudadanos no perciban las injusticias, y que, cuando las desigualdades sean tan enormes que se haga imposible ocultarlas, sigan creyendo en un mundo justo y en el que cada uno tiene lo que se merece. De hecho, es evidente que vivimos en una sociedad injusta en la que tanto las riquezas como toda clase de recursos y de poder están muy desigualmente repartidas, siendo bien conocido que son precisamente las desigualdades entre individuos, entre grupos sociales y entre países la esencia definitoria del propio capitalismo. Esas desigualdades se han desbocado en los últimos 40 años (Apfelbaum y Batt, 2014; Ariño y Romero, 2016; Atkinson, 2016; Bourguignon, 2012; Deaton, 2015; Dubet, 2014; Milanovic, 2012, 2016; Rosanvallon, 2012; Secchi, 2015), y cada vez está más claro lo dañinas que son para las personas, para los países e incluso para la propia economía (Ariño y Romero, 2016; Atkinson, 2016; Bauman, 2014; Ovejero, 2014a, 2016b; Piketty, 2014, 2021; Stiglitz, 2012; Therborn, 2015; Wilkinson, 1996, 2001, 2004; Wilkinson y Pickett, 2009). De hecho, si en 1996 decía la ONU que las 225 fortunas más grandes del mundo tenían una riqueza equivalente a la de los 2.500 millones de personas más pobres, en 2014 señalaba Oxfam Intermon que ya eran solo 85 las que tenían tanto como los 3.500 millones más pobres, pero solo dos años después esa misma ONG ya afirmaba que «actualmente, ocho personas (ocho hombres en realidad) poseen la misma riqueza que 3.600 millones de personas (la mitad de la humanidad)» (Oxfam Intermon, 2017, p. 2): la desigualdad no es solo obscenamente desproporcionada, sino que está creciendo a un ritmo vertiginoso y, lo que es aún peor, ha aumentado mucho más durante las dos recientes «crisis» que tanto daño han hecho a tantos millones de personas: la financiera y la sanitaria.

Si ello es así, ¿cómo es posible que la ciudadanía acepte acríticamente tal situación e incluso vote a partidos que dicen explícitamente que seguirán políticas neoliberales? La respuesta es obvia: a causa de la inculcación en la ciudadanía de la ideología del neoliberalismo, ideología que facilita la construcción del sujeto

neoliberal, segunda pata sobre la que se basa el indiscutible éxito de los más ricos en la batalla de las ideas (Coriat, 2015; Laval y Dardot, 2013; Lazzarato, 2011; Ovejero, 2014a). Como escribe Isaac Prilleltensky (1994, pág. 17), «a la gente se le hace creer, a través de una serie de distorsiones, que la actual situación social es justamente la mejor de las posibles».

Además, el papel que está desempeñando la psicología positivista en todo esto se entiende mejor si acudimos al concepto de «hegemonía» de Antonio Gramsci (1997) así como al de «aparatos ideológicos del Estado» de Louis Althusser (1988). No olvidemos que los mensajes persuasivos de tales aparatos ideológicos «penetran tan profundamente en la conciencia de una cultura que la gente acepta incuestionablemente sus presiones» (Sampson, 1983, p. 128). De ahí que «una de las principales tareas de la psicología crítica consista en mostrar las formas en que la psicología contribuye a mantener un *statu quo* social y cultural que es injusto, frívolo e incluso, en cierta medida, perjudicial para el bienestar humano» (Richardson y Fowers, 1997, p. 266). Todo ello, unido a nuestra capacidad de construir la realidad psicológica, muestra el gran protagonismo que tenemos los psicólogos para construir la realidad, lo que nos confiere una enorme e inexcusable responsabilidad. No olvidemos que la psicología, sobre todo algunas de sus ramas como la psicología del trabajo y de los recursos humanos, hablan a menudo desde los presupuestos ideológicos de la sociedad capitalista de mercado, tras haber internalizado previamente sus bases teóricas (individualismo, competición, etc.). Así, el individualismo de la psicología occidental está contribuyendo eficazmente al mantenimiento tanto del control social como del propio orden social dominante (Israel, 1979), con lo que, en cierta medida, la psicología –al igual que otras ciencias sociales, como la economía– se ha convertido en un producto de la sociedad capitalista, individualista y conservadora, a la vez que en un potente pilar de tal sociedad: al verse a sí misma como neutra y objetiva, la psicología dice describir la realidad psicológica y social tal como es, cuando lo que realmente está haciendo es prescribir y, por consiguiente, construir una realidad que interesa al sistema y a los poderosos, de forma que incluso las enfermedades mentales son inventadas (véase Álvarez, 2008; González y Pérez, 2008). No olvidemos que como señalan tanto Torregrosa (1985/1988) como Gross (1974/1983), la función ideológica esencial de la psicología social positivista consiste precisamente en despolitizar la ciencia psicosociológica y

presentarse como un campo de conocimiento objetivo y neutral. Sin embargo, coincido con Martí Baró (1983) en que cuando la psicología habla de su asepsia y neutralidad ello no es sino un mero engaño ideológico, disfrazado de falsa epistemología. Como decía Torregrosa (1985/1988, p. 656), «la psicología social tendría como función contribuir, con sus formulaciones teóricas y sus técnicas, al mantenimiento de esta situación de dominación y no a la resolución de los problemas derivados de la misma». Por tanto, se hace necesario un enfoque crítico que explique los problemas sociales acudiendo, no a explicaciones psicologistas, sino haciendo hincapié en los factores sociales que los producen y en las contradicciones de la propia sociedad.

En conclusión, no parece que haya muchas dudas de que la psicología constituye un potentísimo dispositivo que puede ponerse tanto al servicio del poder y el control social como al servicio de la emancipación del ser humano y de la construcción de una sociedad más racional, más libre, más justa y más solidaria (Ovejero, 2017a, 2021). Pero, como defiende Foucault, (1975/1976), el poder no solo amenaza, castiga y reprime, sino que también crea, premia y construye subjetividades a su imagen, de forma que se reduzca toda posibilidad de resistencia. Y en la construcción de esa subjetividad tanto la psicología social como su práctica profesional son instrumentos cruciales, tanto para fomentar la sumisión y la obediencia, que incrementan el control social, como para impulsar la resistencia y la rebeldía, que facilitan la libertad, la justicia y la emancipación. Por consiguiente, esta disciplina puede ser de gran utilidad para abordar los grandes problemas que la humanidad tiene planteados actualmente.

En definitiva, en lugar de encerrarse en su torre de marfil académica, recreándose en el uso de sus artilugios metodológicos y dejando a la sociedad fuera de sus intereses de investigación, los psicólogos, sobre todo los sociales, deberían dedicarse a aplicar sus conocimientos a la mejora de la salud psicosocial de la ciudadanía, como había exigido Miller (1969). Y para ello resulta imprescindible investigar muy en serio temas como la desigualdad, la pobreza y el hambre, así como sus efectos psicológicos y psicosociales. Se hace imprescindible un enfoque que se centre en el sufrimiento real de las personas reales, en el hambre que pasan cientos de millones de personas, en la exclusión social que sufre tanta gente.

Otra cosa es que resulta más cómodo encerrarse en el ámbito académico y no salir a la calle, pues el compromiso social sin duda les crea problemas a los psicólogos. Y los temas que veremos en este libro son algunos de los que más ampollas levantan, pues, de una u otra manera, chocan con los intereses de los más ricos y poderosos. De hecho, como puntualizan Wilkinson y Pickett (2009, p. 13), «mientras los científicos de la naturaleza no tienen que convencer, uno a uno, a las células o a los átomos para que acepten sus teorías, los teóricos sociales han de enfrentarse a una plétora de puntos de vista individuales y a fuertes intereses subrepticios». Un ejemplo muy esclarecedor es el que nos proporcionan Wilkinson y Pickett: en 1874, Ignaz Semmelweiss descubrió que si los médicos se lavaran las manos antes de atender a las mujeres durante el parto se reduciría drásticamente el número de muertes por fiebres puerperales (manifestaciones clínicas de una infección en la mujer después de haber dado a luz). Pero para que su estudio fuese de utilidad hubo de convencer a mucha gente –en especial a sus colegas médicos– para que cambiasen sus hábitos. Su verdadera batalla no fue el descubrimiento en cuanto tal, sino lo que siguió. Sus teorías fueron ridiculizadas y esta incompreensión le condujo a la locura y, al final, se suicidó. Pese a esto, sus colegas médicos no tomaron en serio sus conclusiones hasta que Louis Pasteur y Joseph Lister desarrollaron la teoría de las enfermedades producidas por gérmenes, que da la explicación de por qué tenía razón Semmelweiss. Pero él ya no pudo verlo.

Ya he dicho que la consecuencia más evidente y más dañina del neoliberalismo y de sus políticas es el aumento de las desigualdades; y al haber más desigualdad, la población se hace más individualista y competitiva, lo que, a su vez, fomenta los apoyos ideológicos del propio neoliberalismo (Sánchez-Rodríguez *et al*, 2019) que consigue así más poder para crear más desigualdades a favor suyo (Bauman, 2011, 2014). Además, en estas democracias neoliberales el poder es una cosa y el gobierno es otra: el gobierno lo tiene quien gana las elecciones, el poder quien tiene el dinero y controla las instituciones básicas, como la judicatura. Y son quienes tienen el poder quienes han decretado otro de los principios esenciales del neoliberalismo: que sus beneficios deben ser privados, mientras que sus pérdidas deben ser públicas, nuevo mecanismo de incremento de la desigualdad económica. Todo ello lleva a que cada vez el mundo sea más insostenible dado el alto porcentaje de lo que llama Bauman (2005) «vidas desperdiciadas», per-

sonas sin empleo, a menudo sin techo, que pululan día y noche por las calles de las grandes ciudades. Su número está aumentando mucho a causa del proceso de robotización que está teniendo lugar precisamente en un contexto neoliberal. De ahí la necesidad que tiene el sistema capitalista actual de aprobar la renta básica universal, con dos objetivos esenciales: evitar una revolución social y distribuir una cierta cantidad de dinero para que todos sigan siendo consumidores, al menos a un cierto nivel, lo que permitirá a las empresas seguir vendiendo sus productos. No olvidemos que se trata de la solución que dio Zbigniew Brzezinski, consejero de Seguridad Nacional del gobierno de Jimmy Carter al problema de qué hacer con la «población sobrante»: pan y entretenimiento, dijo él, o sea, renta mínima universal y fútbol todos los días. Y los poderosos aceptaron su propuesta, que supone una vuelta al viejo «pan y circo» de los romanos.

Pero en el corazón del nuevo capitalismo, caracterizado cada vez más por la robotización del trabajo, late ya el corazón del viejo monstruo, aunque con careta nueva: el fascismo. Esta vez en nombre de la libertad. Como dijo en una ocasión Thomas Mann, si el fascismo vuelve algún día, lo hará en nombre de la libertad. Qué razón tenía el escritor alemán. Y una de las pruebas la pudimos comprobar no hace mucho en nuestro propio país. Más en concreto, mientras se mantenga la ideología neoliberal, sabemos cuál va a ser la consecuencia de la robotización del trabajo y de la consiguiente pérdida progresiva de empleos. Ahora bien, los trabajadores sin cualificar se están haciendo cada vez más racistas porque están convencidos de que los inmigrantes les quitan el trabajo. Y no se dan cuenta –y nadie se lo explica– de que los que realmente les quitan el trabajo no son los inmigrantes sino las políticas neoliberales y la robotización gestionada por los propios neoliberales: los robots no piden aumentos de sueldo, no cogen vacaciones ni descansos, ni pagan impuestos, lo que hace más difícil la financiación de la protección social y más probable el incremento de las desigualdades.

Pero, tal como veremos en este libro, los efectos del incremento de la desigualdad afectan tanto a los países pobres como a los países ricos. Es evidente que en Estados Unidos y algo menos en Europa, miles de trabajadores blancos tienen muchos motivos para estar enojados. Michael Kimmel (2019) nos lo explica con claridad. Pero sorprenden sus reacciones más frecuentes: dirigen su agresividad contra los inmigrantes y las feministas, dado su convencimiento de que son los inmigrantes y las mujeres los que les quitan sus empleos, cuando realmente quie-

nes les quitan los empleos son los propios grandes empresarios que trasladan sus empresas a países donde los salarios son muy bajos y los derechos laborales nulos, y que compran robots para hacer el trabajo de sus antiguos empleados, a los que, por tanto, echan a la calle. Pero ante esta situación, miles de obreros culpan a los inmigrantes y a las feministas y se pasan a la extrema derecha. Eso explica en gran medida el éxito electoral de Trump, y no solo de él. Este fenómeno, para muchos tan inexplicable, puede entenderse mejor si acudimos a la vieja teoría de la personalidad autoritaria de Theodor Adorno (Adorno *et al.*, 1950). Quienes tienen una estructura autoritaria de personalidad, cuando llegan momentos de crisis profunda, desarrollan un miedo exacerbado a la libertad (Fromm, 1976/1941) y se echan ciegamente en manos de quienes creen que les sacarán del agujero (Ovejero, 1981). Ello ayuda a entender también el éxito de Hitler y del nazismo en la Alemania de los años 30 del siglo pasado. ¿Nos espera a nosotros algo similar?² Sin duda, una nueva ola de autoritarismo se otea en el horizonte.

¿Qué hacer? ¿Por dónde debería ir la solución? Evidentemente, la solución pasa por la organización de los afectados y de la clase trabajadora en general. «Supongamos que eres un obrero del sector automovilístico y te han bajado el sueldo, recortado tus prestaciones y puesto en peligro permanente el control de tu carga horaria. Lo normal es que estés mosqueado. ¿Pero con quién? Abandonado a tus propios medios –y a las conversaciones con tus amigos– podrías concluir que todo lo anterior es culpa de insaciables magnates corporativos que se llenan los bolsillos, viven a todo trapo y exprimen hasta el último céntimo del trabajador estadounidense. Podrías llegar incluso a volverte de izquierdas y hacer frente común con personas en una situación cercana a la tuya, con la intención de obligar al gobierno a regular la industria, subir los salarios, proteger las prestaciones e instaurar un sistema público de salud. Hasta podrías afiliarte a un sindicato» (Kimmel, 2019, p. 74). Pero no, los trabajadores en esa situación suelen hacer justamente lo contrario, de forma que, dirigidos por locutores de radio o presentadores de televisión ultraconservadores o de extrema derecha o jaleados en las redes sociales, le echan la culpa a los inmigrantes (que «deben irse a sus países») y a las mujeres («que deberían quedarse en casa»), y se escoran a la derecha más extrema.

2 Sobre este asunto, véase el libro *Anatomía del fascismo*, de Robert O. Paxton (2019).

En resumidas cuentas, hoy día, ya bien entrado el siglo XXI, tenemos que enfrentarnos a nivel planetario a los que tal vez sean nuestros cinco mayores problemas:

1) Las cada vez más crecientes «desigualdades», que amenazan a la convivencia pacífica entre los humanos e incluso a la propia democracia. Resulta inviable una democracia real en una sociedad altamente desigualitaria, pues quienes tienen demasiado poder impondrán sus intereses al resto, como ya está ocurriendo.

2) Los altos niveles de pobreza que hacen que haya muchos millones de personas muriendo de hambre. A veces se discute si es peor la desigualdad o la pobreza. No habría que dedicar mucho tiempo a esta discusión, pues las dos cosas suelen estar relacionadas, aunque no necesariamente. Sin duda la desigualdad tiene peores efectos que la pobreza. La pobreza ejerce sus efectos negativos dependiendo del nivel de la desigualdad. En una sociedad igualitaria, como podían ser muchas de las naciones agrícolas de hace uno o dos siglos, donde la mayoría de sus habitantes eran moderadamente pobres (no les sobraba nada, pero no pasaban hambre: su economía de subsistencia les proporcionaba suficiente pan, patatas, garbanzos, vino, huevos y algún pollo o gallina, además de uno o dos cerdos cada año), estos podían ser felices, salvo que alguna enfermedad grave se cebara con la familia. En cambio, las desigualdades tienen consecuencias negativas de todo tipo (económicas, sociales, psicológicas, psicosociales, políticas, etc.) sea cual sea el nivel medio de la riqueza (o la pobreza), como ha demostrado Wilkinson (2001; Wilkinson y Pickett, 2009) y como veremos más adelante.

3) Estamos destrozando el planeta y la atmósfera hasta unos niveles que harán difícil la vida humana, lo que, por lo tanto, terminará con nuestra especie (contaminación de la atmósfera, de los mares y de la tierra, calentamiento climático, etc.).

4) Existe otro problema que hace difícil solucionar el anterior. Me refiero a nuestra irracionalidad intrínseca: somos tan irracionales que cuando la mayoría de la población sea consciente de nuestros problemas ambientales y acepte ponerles una solución viable, probablemente sea ya demasiado tarde (basta con ver cuál ha sido la reacción de parte de la derecha española ante los in-

tentos juiciosos del ministro de Consumo de fomentar una dieta saludable y de poner freno a las macrogranjas).

5) Por si lo anterior fuera poco, desde hace un par de décadas se ha recrudecido otro problema que hace más difícil aún solucionar los cuatro anteriores. Me refiero al predominio de la posverdad y a la aceptación generalizada de las «falsas noticias» (*fake news*). No es un problema nuevo, pero ha adquirido una fuerza y una virulencia antes nunca vistas. Existen razones, relacionadas unas con la irracionalidad humana y con el llamado «efecto Dunning-Kruger», otras con las nuevas tecnologías, y otras con la actual hegemonía neoliberal, que ayudan a entender esta situación.

Por otra parte, al igual que otros autores, como es el caso de Atkinson (2016), yo no pido una igualdad económica total: ello no es posible y tal vez ni siquiera deseable. Me conformaría con que las actuales desigualdades se redujeran sustancialmente. Ya Platón decía, en *Las Leyes*, que nadie debería ser cuatro veces más rico que el miembro más pobre de la sociedad, cosa muy alejada de nuestra realidad actual.

En este libro trataré, preferentemente, los temas de la desigualdad, la pobreza y el hambre, y la exclusión social. Veremos también las propuestas de solución que se están planteando y qué podemos hacer para paliar el sufrimiento de tantos millones de personas. Pero veamos antes, en el próximo capítulo, en qué consiste realmente el neoliberalismo y cómo está afectando al empeoramiento de tales problemas.

CAPÍTULO 2

LA HEGEMONÍA NEOLIBERAL Y SUS EFECTOS

2.1. Introducción

Resulta difícil entender el mundo actual, y sobre todo el alto nivel de desigualdad existente, sin tener en cuenta la hegemonía neoliberal dominante. Para comenzar a entender lo que aquí quiero exponer, recordemos que durante el mes de febrero de 2002 se produjeron simultáneamente dos acontecimientos importantes y opuestos entre sí: uno tuvo lugar en Nueva York, en el centro financiero y de poder del Norte, el Foro Económico de Nueva York; el otro se celebró en Porto Alegre, en pleno Sur, el Foro Social de Porto Alegre. El primero, se centraba en lo económico y el segundo en lo social. Y los dos tenían como centro de su deliberación la globalización, pero con objetivos bien diferentes: mientras que para el Foro de Nueva York la globalización es inevitable, dado que es inherente al actual progreso tecnológico, y el único camino para acabar con la pobreza, en cambio, para el Foro de Porto Alegre no es inevitable ni la consecuencia necesaria de la revolución tecnológica sino que es contingente a las políticas que se adopten, y es muy negativa, pues cuanto más crezca más ganarán los ricos y más perderán los pobres, incrementándose de forma alarmante e inaceptable las desigualdades de todo tipo. Por eso exigía que la economía y el progreso tecnológico se orientaran en una dirección más social.

Pues bien, en línea con las ideas básicas del Foro de Porto Alegre, el objetivo de este libro es mostrar que no existe ningún determinismo, que el hambre, la pobreza y las desigualdades no son fatalidades y, por tanto, no son inevitables,

sino productos de unas políticas concretas que van dirigidas, intencionadamente, a enriquecer a unos pocos. En eso consiste básicamente esta globalización neoliberal. Al fin y al cabo, lo que pretendían Hayek, von Mises y demás padres del neoliberalismo no era abolir el Estado sino ponerlo al servicio de una nueva configuración del mundo que pusiera freno al fuerte impulso que se estaba dando a favor de la igualdad y la justicia social, y que defendiera los intereses y los privilegios de los más ricos.

2.2. Qué es la globalización actual

Más en concreto, ¿a qué nos referimos específicamente cuando hablamos de globalización? En primer lugar, debemos tener en cuenta que nos encontramos ante un fenómeno sumamente complejo en el que se mezclan, inextricablemente unidos, aspectos técnico-económicos, aspectos políticos y aspectos ideológicos. Por una parte, los aspectos técnico-económicos quedan perfectamente recogidos en la definición que de «globalización» da el Diccionario de la Real Academia Española, en la 22ª edición (2001): «Tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales». La globalización es eso, pero es muchas cosas más que quedan escamoteadas, sospecho que no inocentemente, en esta definición. Por otra parte, los aspectos políticos, que son los que producen hambre, pobreza y desigualdad, son denunciados una y otra vez por los críticos de la globalización (Bauman, 1999; Beck, 1998; Chomsky, 2001; Ellwood, 2007; Estefanía, 2001; Falk, 2002; Fariñas, 2005; George, 2007; Gray, 2000; Martin y Schumann, 2001; Ovejero, 2004, 2014a; Peet, 2005; Quatrepoint, 2008; Ramonet, 2009; Safranski, 2004; Sampedro y Taibo, 2006; Stiglitz, 2002; Ziegler, 2004, 2006). También deben ser tenidos en cuenta, y de una forma muy especial, los aspectos ideológicos de esta globalización neoliberal dado que, a pesar de que constituyen la auténtica columna vertebral de esta, apenas se tienen en cuenta. Así, José R. Torregrosa decía al periódico iberoamericano *Hoy* (27 de abril de 1999), que la globalización es un proyecto ideológico para desarmar a los países que van a verse sometidos, prolongadamente, a la subordinación. Por su parte, el francés Guy Bois (2004, págs. 49-50) escribía que «los historiadores conocen bien que ninguna mutación social de importancia se ha producido jamás sin grandes cambios ideológicos [...]. Por ello, de buena gana me inclinaría a pensar que la baza principal de

la mundialización no es el poder nuclear, ni el dólar, ni el poderío de la máquina económica americana, ni la longitud y ramificaciones de la cadena de apoyos y complicidades que tiene en el mundo; para mí es simplemente la baza ideológica. Y que, en definitiva, a pesar del intelectualismo aparentemente excesivo de la afirmación, todo se resolverá en el campo de la confrontación de las ideas». De ahí la gran importancia que tienen las resistencias a la globalización y el interés que tienen los poderosos en silenciarlas e incluso criminalizarlas.

En resumen, podríamos decir, con Noam Chomsky (2001), que la globalización es la imposición ideológica, política y económica de las grandes multinacionales, fundamentalmente estadounidenses, en defensa de sus intereses. Pero dejando claras dos cosas: que nos estamos refiriendo a la «globalización neoliberal» y que en esta lo negativo no es tanto la globalización cuanto el neoliberalismo, a causa principalmente del daño que sus políticas están haciendo a la población mundial, al planeta y a la propia democracia (Chossudovsky, 2002).

La actual globalización que, empujada por la última revolución tecnológica, comenzó a finales del siglo XX pudo haber sido muy diferente a lo que ha sido, pero coincidió en el tiempo con la victoria de Margaret Thatcher en el Reino Unido y con la de Ronald Reagan en EE. UU. y, por consiguiente, con el comienzo de la hegemonía neoliberal en todo el planeta, de forma que se tiñó hasta los tétanos de neoliberalismo. Como escribe Thomas Piketty (2021, p. 205), «el cuestionamiento del Estado social y de la fiscalidad progresiva producido desde la década de 1980 no solo se ha basado en la retórica. También se ha materializado en un conjunto de normas y tratados internacionales diseñados para que el cambio sea lo más irreversible posible. El núcleo de esas nuevas normas es la libre circulación de capitales, sin ninguna contrapartida en términos de regulación o fiscalidad común. En síntesis, los Estados han establecido un sistema jurídico en el que los agentes económicos han adquirido un derecho casi sagrado a enriquecerse utilizando las infraestructuras públicas y las instituciones sociales de un país (sistema educativo, asistencia sanitaria, etc.) y a trasladar luego sus activos a otra jurisdicción, de un plumazo o con un clic de ratón, sin que se haya previsto el seguimiento de dicha riqueza en cuestión y su imposición justa y en coherencia con el resto del sistema fiscal». No es raro, pues, que aumenten las desigualdades y que, en consecuencia, suba electoralmente la extrema derecha por doquier.

Pero resulta interesante preguntarnos, con Piketty (2021, pp. 205-207), cómo hemos podido llegar a este punto. El propio Piketty añade que distintos estudios han mostrado el largo trabajo preparatorio del *lobby* bancario, que se activó en las décadas de la posguerra para lograr este resultado, y en particular el papel de las asociaciones patronales, los bancos y los gestores de grandes patrimonios en la coproducción de la ley y posteriormente en su uso más ventajoso para conseguir el máximo de elusión fiscal (Henri-Giret, 2019; Guex, 2020; Weeks, 2021). También debemos tener en cuenta tanto la desregulación de los flujos financieros en beneficio de los más ricos (François y Lemerrier, 2021) como la utilización de los tratados internacionales para proteger la propiedad y evitar la redistribución, algo que ya formaba parte de la doctrina que proponía Hayek desde 1940 con vistas a estructurar el mundo de la posguerra, doctrina que terminó por imponerse a partir de 1980 gracias a los grupos de presión privados. Y sin olvidar, añade Piketty, el papel central, a veces paradójico, desempeñado por los gobiernos europeos en cuanto a la liberalización de los flujos de capital que tuvo lugar primero en Europa y después en todo el mundo a finales de la década de 1980.

Y, sin embargo, los propios investigadores del FMI, Ostram, Loungani y Furceri (2016), reconocen que sus recetas neoliberales habían llevado a «un aumento de la desigualdad que daña el nivel y la sostenibilidad del crecimiento». En una investigación algo anterior, Isabel Ortiz y Matthews Cummings (2013) analizaron 314 informes del FMI (publicados entre enero de 2010 y febrero de 2013) y mostraron que los recortes del gasto público «no ayudan a promover crecimiento económico robusto y generador de empleo, ni a mejorar el nivel de vida ni la cohesión social», sino que servían para empeorar la situación económica y hacían más difícil la salida de la crisis económica. Las políticas neoliberales, pues, están haciendo mucho daño a cientos de millones de personas.

2.3. Algunas características de la globalización neoliberal

En sentido amplio, la globalización no es un fenómeno reciente, sino que podemos remontarlo, al menos, a los romanos. La política expansionista del Imperio romano puede ser considerada una globalización del mundo occidental. Lo mismo podemos decir, y con más propiedad, del colonialismo que llevaron a cabo las potencias europeas (España, Portugal, Inglaterra, Francia, Holanda, Bélgica,

etc.). Pero la globalización actual tiene características propias a causa sobre todo de la revolución tecnológica y de su fuerte componente neoliberal. En efecto, los neoliberales han podido conseguir sus objetivos gracias en gran medida a las posibilidades que les dan las nuevas tecnologías, a lo que habría que añadir dos fenómenos que son producto, a la vez, de decisiones políticas y de posibilidades tecnológicas: la desregulación financiera y la deslocalización de las empresas. El primero ha conseguido la expansión de la banca, sobre todo la de inversión, hasta límites insospechados, y el segundo ha hecho bastante irrelevante la movilización sindical, pues las empresas se van de los lugares donde hay sindicatos fuertes y salarios altos a otras partes donde la sindicación es débil e incluso inexistente y los sueldos bajos o muy bajos.

Por otra parte, los neoliberales lograron construir el «sujeto neoliberal», consiguiendo que la mayor parte de la ciudadanía internalizara los valores y la ideología del propio neoliberalismo, haciéndose ellos mismos neoliberales, de forma que la bajada de impuestos (como si la sanidad, la educación o las pensiones no se financiaran con ellos), la reducción del poder de los sindicatos, el recorte del gasto social, etc. les parecen cosas positivas, aunque muestran una preocupante incoherencia, como cuando, al día siguiente de votar a un partido que promete bajar los impuestos, se manifiestan exigiendo una ambulancia y un pediatra en su pueblo, como si ambas cosas no se pagaran con los impuestos.

Por otra parte, a partir de los años 70 y sobre todo en los 80, se aceleró la revolución tecnológica hasta límites que pocos años antes no podíamos ni sospechar, trastocando tantas cosas que podemos decir que hemos entrado en una nueva era, la era de la información (Castells, 2000, 2001a, 2001b), en la que las nuevas tecnologías están produciendo mucha riqueza. Puede gustarnos o no esta revolución tecnológica, así como la nueva época a que está dando lugar, pero no cabe ninguna duda de que se trata de algo inevitable e irreversible. Podemos decir que, considerada en sus aspectos técnicos, la actual globalización es inevitable. Lo que no son en absoluto inevitables son las consecuencias sociales a que está llevando la gestión neoliberal de la revolución tecnológica: y en eso consiste principalmente esta globalización. Y es que la revolución tecnológica tuvo lugar precisamente cuando los importantes grupos intelectuales de presión (*think tanks*), encabezados por von Hayek y su Círculo de Pelegrín, empezaron a tener éxito, consiguiendo el poder en dos países de la importancia del Reino

Unido (Margaret Thatcher llegó al poder en 1979) y sobre todo de los Estados Unidos (Ronald Reagan ganó las elecciones 1980). Y ese cambio político se vio muy fortalecido a causa del colapso de la URSS, lo que hizo que, por primera vez en muchos siglos, un solo país –un imperio–, los Estados Unidos de América, consiguiera una hegemonía planetaria que le permitía imponer su ideología neoliberal y sus intereses al resto del mundo.

Por consiguiente, un análisis del contenido de la ideología de los miembros del citado Círculo de Pelegrín (Von Hayek, Friedman, etc.) sería algo realmente fundamental para entender tanto esta globalización como su actual crisis (véase un interesante análisis en Ramonet, 2009, pág. 34 y ss.). Friedrich von Hayek ya había expuesto en 1960, en *Los fundamentos de la libertad* (2020), un programa que podríamos resumir en las siguientes propuestas: desregular, privatizar, limitar la democracia, suprimir las subvenciones para la vivienda y los alquileres, disminuir los seguros de desempleo, reducir los gastos en educación y sanidad, y terminar con el poder sindical. Tanto Thatcher como Reagan, con gran escándalo en toda Europa, pusieron en práctica ese programa. Hoy día ya pocos se escandalizan de que tal programa haya sido impuesto en toda Europa, a menudo por parte de gobiernos que se dicen socialdemócratas, con la ayuda de los medios de comunicación y de otras instituciones, como el Banco Central Europeo o la propia Academia Sueca, que ha otorgado el «Nobel de Economía»¹ tanto a Von Hayek como a otros neoliberales, entre ellos Milton Friedman (1976) o Gary Becker (1992). Y en cuanto a las limitaciones democráticas que proponen, no olvidemos que ya en 1981 Von Hayek declaró, precisamente en el Chile de Pinochet: «Mi preferencia personal se inclina a una dictadura liberal y no a un

1 Suele conocerse a este premio como Premio Nobel de Economía, pero ello no es así. El premio Nobel de Economía no existe. Nobel no dejó su dinero para este premio. Pero el Banco de Suecia, aprovechando el gran prestigio de los premios Nobel, le dio ese nombre. Por eso habría que llamarle «Premio Banco de Suecia», porque de ninguna manera es un Premio Nobel. Y tengamos presente también el enorme sesgo ideológico de este premio. Como subraya Torres (2021, p. 34), alrededor de los dos tercios de los 84 galardonados hasta 2020 (de los que solo dos fueron mujeres) defienden enfoques y propuestas de política neoliberal, que, al fin y al cabo, es la defendida por el banco que inventó el premio. Y es que el objetivo de este premio no es otro que «consolidar la economía como una ideología con apariencia de conocimiento objetivo que justifica el orden existente y frena el cambio social» (Torres, 2021, p. 34).

gobierno democrático donde todo liberalismo esté ausente» (*El Mercurio*, 12 de abril de 1981). De hecho, y como es bien conocido, tanto Von Hayek como varios de sus discípulos, viajaron a Chile aconsejando a Pinochet las políticas a seguir, cosa que aceptó este, y cuyas consecuencias aún está pagando el pueblo chileno. Por ejemplo, en 1988, tras quince años de experiencia neoliberal, el 45 por ciento de los chilenos se encontraba bajo la línea de pobreza, con una tasa de desempleo del 20 por ciento.² Pero a pesar de ello, Friedman calificó estos resultados como «el milagro de Chile», declaración que fue tan repetida por los medios de comunicación internacionales que casi se convirtió en un lugar común. Pero no decían que ese «milagro de Chile» era la pobreza de buena parte de la población o que los planes de pensiones privados habían fracasado estrepitosamente. Como escribe Ramonet (2009, p. 39), «en el fondo, el neoliberalismo mantiene una relación poco feliz con la democracia, que Hayek aceptaba solo de modo limitado. Se siente más cómodo con regímenes autoritarios que, en caso de ser necesario, pueden imponer por medio del terror las alteraciones económicas y sociales que exige la aplicación de su teoría». No es por azar que los primeros laboratorios donde Hayek o Friedman experimentaron sus ideologías económicas fueran en el Chile de Pinochet y en la Indonesia del dictador Suharto (Klein, 2007).

Ahora bien, si, como veremos más adelante, esta globalización está teniendo efectos muy negativos para tantos millones de personas, ¿cómo es posible que estas aprueben con su voto esas políticas que tanto daño les hacen, eligiendo a gobernantes que las aplicarán? No es fácil dar una respuesta precisa y detallada a esta pregunta, pero tal respuesta –además de incluir la imposición de tales políticas, principalmente a los países pobres, por parte de los organismos internacionales, en especial por los que componen lo que Peet (2005) llama la «maldita trinidad» (FMI, BM y OMC: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Organización Mundial del Comercio)– debe hacer referencia al componente ideológico del neoliberalismo. Me refiero a la ideología del TINA (*There Is Not Alternative*). En efecto, tras convencer a la gente de que, a largo plazo, esta globalización es totalmente inevitable y de que solucionará todos los problemas del planeta, la gente terminó apoyando electoralmente tales políti-

2 Probablemente todo eso esté empezando a cambiar tras las movilizaciones populares de 2019 y la reciente victoria electoral de Gabriel Boric, el 19 de diciembre de 2021.

cas, aunque, sorprendentemente, oponiéndose a sus consecuencias, como si no tuvieran nada que ver con ellas. Y es que, así como la Revolución Industrial llevó a las consecuencias que llevó (hambre en los habitantes de las ciudades industriales europeas y colonialismo en el tercer mundo) a causa no de su contenido tecnológico sino de la aplicación de sus políticas y de una ideología muy eurocéntrica, igualmente los efectos negativos de la actual revolución tecnológica son la consecuencia de la aplicación política de una ideología muy concreta y muy insolidaria como es el neoliberalismo, que está produciendo altas tasas de desigualdad, pobreza y exclusión social. Y es que «la globalización, lejos de ser solo un proceso uniformizador de características homogeneizadoras a nivel espacial, territorial y regional, es también un proceso que genera desigualdades y diferencias» (Alonso, 1999, p. 96). Y, lo que es peor, sus consecuencias negativas son globales porque «la receta diseñada se aplicó de forma sistemática en todos los países; en unos por voluntad propia, o de sus gobiernos, y en otros de forma obligada y en grandes dosis» (Martínez, 2002, pp. 47-48). Como dice Pierre Bourdieu, la esencia del neoliberalismo es un programa de destrucción de las estructuras colectivas cuando estas pueden convertirse en un obstáculo para el avance de la lógica del mercado puro. El neoliberalismo pretende «construir un orden social cuya única ley sería la búsqueda del interés egoísta y la pasión individual por el beneficio» (Bourdieu, 1998, p. 3). La palabra globalización es una absoluta mentira en sí misma y una total e hipócrita falsedad (Ovejero, 2002). Estamos ante la más brutal e inhumana insolidaridad, una de cuyas consecuencias es el incremento de la desigualdad, la pobreza y la exclusión social.

La globalización, pues, como escribe Etxezarreta (2001, pág. 13), «no es más que el nombre que se da a la etapa actual del capitalismo. Nada más que esto. Ni nada menos. Los tiempos cambian, pero las formas de dominación permanecen y se repiten. No cambia nada esencial en las sociedades capitalistas que llevan ya existiendo más de dos siglos. Siempre han sido –y la globalización sigue siéndolo– sociedades basadas en la explotación de unas personas por otras», así como también de unos países por otros, con los efectos de hambre, miseria, enfermedad y muerte que ello tiene para millones de personas. «Para decirlo brutalmente, si la economía global podía descartar a una minoría de países pobres, económicamente muy poco interesantes, podía también desentenderse de las personas muy pobres que vivan en cualquier país, siempre que el número de consumidores

potencialmente interesantes fuera suficientemente elevado» (Hobsbawm, 1995, pág. 565). Es decir, que después de prescindir del tercer mundo, la globalización prescinde también del cuarto mundo (los pobres de los países ricos). Y es que «la aplicación de las políticas neoliberales y los resultados de la revolución tecnológica han creado una sociedad dual, caracterizada por una minoría de personas que concentran los recursos, el consumo, el ahorro, la inversión, los derechos de propiedad, el poder económico, político, militar y cultural, distanciada cada vez más de una inmensa mayoría de la población excluida del progreso, la esperanza y las oportunidades» (Martínez, 2002, p. 51). Además, como la globalización da libertad de circulación planetaria a los capitales, pero no a las personas, los pocos beneficios que generan los países pobres no quedan en esos países para crear riqueza y trabajo, sino que salen en busca de una mayor rentabilidad, quedándose los países pobres cada vez más pobres y sus ciudadanos cada vez con más hambre, creciendo mucho las migraciones (Solé y Cachón, 2006).

En síntesis, la globalización facilitada por la revolución tecnológica puede hacerse de muchas maneras. Pero cuando aquí hablo de «globalización» me refiero a la única globalización realmente existente, que es la globalización neoliberal, la cual se ve facilitada por el predominio del capitalismo financiero que, a su vez, es el principal causante de la crisis actual y, paradójicamente, el más beneficiado por tal crisis (Ramonet, 2009, p. 47). El proceso de mercantilización generalizada a que asistimos no parece que vaya a dejar de expandirse, con las nefastas consecuencias que ya estamos padeciendo (Maalouf, 2009). Y es que, como escribía Vidal-Beneyto (2008), «el neoliberalismo ha llevado la desigualdad a límites intolerables». Todo lo anterior se ve enormemente potenciado por los cada vez más poderosos mecanismos de desinformación al servicio de los poderosos (Chomsky y Herman, 1990; Otte, 2010), que está haciendo desaparecer el pensamiento crítico (George, 2009).

2.4. Paradojas, trampas y mentiras del neoliberalismo

La globalización neoliberal fue impuesta por el Consenso de Washington al servicio de los más ricos del planeta. Pero la primera trampa y la gran mentira estaba ya en el propio nombre. En efecto, ¿dónde estuvo el consenso? ¿qué y cuántos países lo consensuaron? Más en concreto, y esto constituye otra mentira del neoliberalismo, el BM manipula los datos. En efecto, como escribe Michel Chos-

sudovsky (2002), la legitimidad de las reformas del «libre mercado» se basa en la ilusión de que, a largo plazo, la globalización conducirá a la prosperidad para todos,³ ilusión que solo puede sostenerse mediante la descarada manipulación de las cifras relativas a la pobreza global. Así, el BM «estima» que el 18 % del tercer mundo es «extremadamente pobre» y el 33 % «pobre». Pero ello es el resultado de fijar arbitrariamente la «línea superior de la pobreza» en un ingreso per cápita de un dólar al día, o sea, un ingreso per cápita anual de 370 dólares (Banco Mundial, 1990), de forma que quienes tienen un ingreso per cápita mayor a un dólar son clasificados arbitrariamente como «no pobres». Dicho de otra manera, a través de la burda manipulación de las estadísticas de ingresos, las cifras del BM cumplen el propósito de presentar a los pobres de los países en vías de desarrollo como un grupo minoritario. Y otros organismos internacionales copian esos datos manipulados con lo que también ellos engañan con las cifras.

En definitiva, «los gobiernos del G7 y las instituciones globales como el FMI, el BM y la OMC, casualmente niegan el aumento del grado de pobreza en el mundo. Ocultan las realidades sociales, manipulan las estadísticas oficiales, distorsionan los conceptos económicos. Por otra parte, en los medios, se bombardea a la opinión pública con esplendentes imágenes de crecimiento global y prosperidad. Se dice que la economía global mundial florece gracias al ímpetu de las reformas del “libre mercado”» (Chossudovsky, 2002, p. 36). De hecho, otra mentira es la utilización del crecimiento y de la reducción del número de pobres en China, India y Corea del Sur para demostrar las bondades de las recetas neoliberales. Sin embargo, tales países no pusieron en práctica tales recetas. Así, «países que no tomaron la medicina recetada se utilizan constantemente como prueba de la excelencia de la globalización. China, la India y Corea del Sur han seguido durante unos cincuenta años variantes de una política que el BM y el FMI prohíben ahora adoptar a los países pobres» (Reinert, 2007, p. 118). También las potencias europeas y Estados Unidos consiguieron un gran potencial haciendo precisamente todo lo contrario a lo que ahora exigen a los demás paí-

3 Sin embargo, según la FAO, la organización de las Naciones Unidas que se dedica a los problemas de la alimentación en el mundo, el hambre no ha dejado de aumentar en el planeta desde 2014, a pesar de que durante esos años se han conseguido las mayores cosechas de alimentos de la historia (FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF, 2020).

ses (Reinert, 2007, pp. 167-168). Ya en el siglo XVIII se decía en Estados Unidos: «No hagas lo que los ingleses dicen que hagas, sino lo que los ingleses hicieron». Algo similar habría que decir hoy día a los países pobres: «No hagáis lo que los estadounidenses y los europeos dicen que hagáis; haced lo que ellos hicieron», y lo que siguen haciendo: proteger su propia industria y subvencionar su agricultura. Quien sí siguió la terapia de choque recomendada por el FMI fue Rusia, lo que tuvo unas consecuencias desastrosas para su población.

Es más, las trampas del liberalismo comenzaron casi desde su mismo inicio. En efecto, «los ideales de la Revolución francesa –libertad, igualdad y fraternidad– fueron traicionados por el movimiento liberal a medida que fue evolucionando. Es más, el liberalismo económico desvirtuó, hasta anularlos, los principios del liberalismo político. Las inmensas desigualdades económicas transformaban en conceptos vacíos para la mayoría de la población los derechos civiles y políticos. No se trataba tan solo de que palabras como «igualdad» y «solidaridad» sonasen como blasfemias en la nueva situación, sino que incluso la libertad poseía sentido únicamente para una minoría privilegiada. La mayor parte de los ciudadanos no tenía otra libertad que la de vender su fuerza de trabajo. La situación había evolucionado hacia un nuevo despotismo, donde el único cambio era la titularidad del grupo dominante» (Martín Seco, 1995, p. 67). De hecho, añade este autor (p. 68), «la concentración de los medios de producción en pocas manos arrojaba a la indefensión más absoluta a la mayoría de los ciudadanos –proletarios– que carecían de cualquier propiedad, incluso de la de su propio cuerpo y actividad, porque aun de la libertad de disponer de ellos estaban privados». Así pues, ni igualdad, ni libertad, y menos aún solidaridad. El nuevo orden mundial suponía una tiranía del dinero, y una nueva dictadura, la dictadura de los más ricos, que son los que tienen el poder real, tanto económico como político.

Pero la principal mentira –y a la vez trampa– del neoliberalismo es el tan cacareado «mercado libre», pues es evidente que no existe. «En contra de la charlatanería de los profetas de la libre empresa, solo hay que asomarse al análisis de la economía mundial y a la estructura de sus diferentes sectores productivos para constatar que lo que menos existe es libre competencia. Sea cual sea la rama de actividad, siempre encontramos un número de empresas gigantes que controlan el mercado y la actividad. Cuando el volumen de ventas de muchas de ellas supera el PIB de casi todos los países, resulta ciertamente irónico que continuemos

hablando de libre mercado» (Martín Seco, 1995, p. 124). De hecho, como sugiere Reinert (2007, p. XXVI), «al Sur hambriento le bastaría poder vender sus alimentos al Norte para salir de la pobreza». Pero para él no hay libre mercado. Y ahí estriba una de las principales diferencias entre los países pobres y los ricos: estos últimos pasaron por una etapa «sin libre comercio», en la que imperaba el proteccionismo, justamente lo que, ahora que son ricos y poderosos, prohíben a los países pobres. Europa y luego EE. UU. crecieron y se hicieron países ricos gracias a que hicieron justo lo contrario de lo que ahora exigen, *manu militari*, a los países pobres. «No olvidemos que, históricamente, el libre comercio global ha sido siempre una quimera, y los países que menos se adhirieron a él durante los momentos cruciales de su desarrollo se han convertido en las economías con más éxito del planeta. [...] Todos los países actualmente ricos pasaron obligatoriamente por un período de protección del sector industrial» (Reinert, 2007, p. 24). De hecho, dice Reinert (2007, p. 25), «Estados Unidos protegió su sector industrial durante cerca de ciento cincuenta años». Y lo mismo hicieron los demás países que hoy día son ricos. Así, añade Reinert (64), «el actual gobierno noruego, encabezado por el mismo partido laborista, se dedica a prohibir a otros las medidas políticas que nos hicieron (Reinert es noruego) ricos a nosotros, y sin embargo pretendemos ser líderes en economía paliativa aliviando los síntomas de la pobreza» Por eso, al menos en cierto sentido, la Ayuda al Desarrollo, tanto la oficial como la privada, es otra hipocresía, como luego veremos.

Por otra parte, la mentira del mercado libre es más sangrante en esta época del neoliberalismo, porque es cuando más se repite y cuando menos se cumple. En efecto, por mencionar solo dos datos proporcionados por Juan Torres (2021, p. 56): solo dos empresas controlan las tres cuartas partes del comercio mundial de granos, con el nefasto efecto que ello tiene en el hambre de millones de personas; tres grandes empresas controlan todo el mercado de café tostado molido. No hay ni libre mercado ni libre comercio. Como ya he dicho, los países ricos subieron por la escalera del proteccionismo para lograr la riqueza y prosperidad que ahora tienen y para dominar los mercados. Pero una vez que están arriba y dominan los mercados, impiden que los demás suban por esa misma escalera y pongan en peligro su poder y sus privilegios.

En suma, no existe el mercado libre. Se trata tal vez del mayor engaño de la economía política del mundo capitalista. En efecto, «el Nuevo Orden Mundial

se basa en el “falso consenso” de Washington y Wall Street, que dictaminan que el “sistema de libre mercado” es la única opción posible en el camino predestinado a la “prosperidad global”. Todos los partidos comparten hoy este consenso, incluyendo ecologistas, socialdemócratas y excomunistas» (Chossudovsky, 2002, p. 20). Ni existe el mercado libre ni existe la famosa mano invisible de Adam Smith, según la cual la conducta individual egoísta lleva inexorablemente al bienestar colectivo. Por eso se le llama «mano invisible», porque nadie la ha visto nunca. Y tampoco existen unos mercados abiertos, y menos en la actual era del neoliberalismo. Los mercados «funcionan en muchas ocasiones sin competencia, con el poder de los monopolios manipulándolos, sin que los ciudadanos dispongan de la misma información que aquellos, por lo que están en desigualdad de oportunidades. Si la globalización depende más de las decisiones de los mercados realmente existentes que de las personas, se pone en cuestión el concepto mismo de democracia» (Estefanía, 2017, p. 262). Además, «esas medidas liberalizadoras se establecen de modo muy asimétrico, pues se le imponen a los países más débiles y empobrecidos mientras que las grandes potencias se protegen. Eso es lo que está haciendo que aumente la desigualdad en el mundo, no solo entre los países más ricos y los demás, sino también en el interior de los primeros porque, al mismo tiempo, se debilitan las políticas redistributivas que permiten repartir equitativamente las ganancias de ese proceso. Afirmar que abrir las fronteras de par en par a los productos extranjeros es beneficioso para todas las economías y, más aún, permitir que eso ocurra solo en los países más pobres es dar alas a un sistema de comercio internacional basado, en el mejor de los casos, en el trato igual a los desiguales y, en el peor, es una asimetría que no puede sino multiplicar constantemente los desequilibrios y desigualdades» (Torres, 2021, pp. 126-137). No existe el libre mercado, pues «la manipulación del mercado es la fuerza impulsiva básica del capitalismo» (Reinert, 2007, p. 256).

También es mentira la tan repetida «libertad neoliberal». Continuamente hablan de «libertad», pero se la niegan a gran parte de la humanidad. En efecto, mientras que la libertad para la circulación del dinero es total, para la circulación de las personas es muy limitada. Y por si todo eso fuera poco, a todos esos pobres y hambrientos les prohibimos que vengan a los países ricos a buscar un futuro mejor, para ellos y para sus hijos, para lo que hacemos leyes, construimos muros y vallas con concertinas, etc.

Todas esas mentiras se reflejan en las políticas de «ajuste estructural» que tanto daño están haciendo a los países pobres. En efecto, los más ricos han conseguido enriquecerse a costa del empobrecimiento de la gran mayoría de los países pobres («efecto Mateo»⁴). Y lo han logrado principalmente a través de un instrumento esencial: el ajuste estructural aplicado a los países pobres por el FMI, el BM y más tarde por la OMC. Y siempre con el ejército norteamericano detrás, para proteger, en última instancia, los intereses de las grandes empresas estadounidenses y, de paso, los intereses de los más ricos del planeta. Y es que «este nuevo orden financiero internacional se nutre de la pobreza humana y de la destrucción del medio ambiente natural. [...] Además, estas reformas –cuando se aplican simultáneamente en más de 150 países– conducen a una “globalización de la pobreza”, un proceso que socava la subsistencia humana y destruye a la sociedad civil en el Sur, el Este y el Norte» (Chossudovsky, 2002, pp. 26-27). Como escribe el premio de Economía del Banco de Suecia, Joseph Stiglitz (2002, pp. 16-17), «las políticas de ajuste estructural del FMI –diseñadas para ayudar a un país a ajustarse ante crisis y desequilibrios más permanentes– produjeron hambre y disturbios en muchos lugares, e incluso cuando los resultados no fueron tan deplorables y consiguieron a duras penas algo de crecimiento durante un tiempo, muchas veces los beneficios se repartieron desproporcionadamente a favor de los más pudientes, mientras que los más pobres en ocasiones se hundían aún más en la miseria. Pero lo que más me asombraba era que dichas políticas no fueran puestas en cuestión por los dirigentes de tales países: su temor a perder la financiación del BM era tal que aceptaban tan dañinas políticas». De esta manera, añade Stiglitz, aunque nadie estaba satisfecho con el sufrimiento que acompañaba a los programas del FMI, se suponía que todo el dolor provocado era el precio a pagar para llegar a ser una exitosa economía de mercado y que, a largo plazo, ello reduciría el sufrimiento de tales países a largo plazo. Pero tal momento está cada vez más lejos. De hecho, en el mundo subdesarrollado, la

4 Se llama efecto Mateo por la frase que aparece en el Evangelio de Mateo (3:12), dicha por Jesucristo: «Porque a cualquiera que tiene, se le dará más, y tendrá en abundancia; pero a cualquiera que no tiene, aun lo que tiene se le quitará». Sin embargo, una frase similar está también en el Evangelio de Marcos (4:25): «Porque a todo el que tiene, más se le dará, y tendrá en abundancia; pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará», o en el de Lucas (8:18): «Por tanto, tened cuidado de cómo oís; porque al que tiene, más le será dado; y al que no tiene, aun lo que cree que tiene se le quitará».

globalización neoliberal no está cumpliendo sus promesas de beneficio económico, sino que, por el contrario, sigue haciendo mucho daño a muchos países y a cientos de millones de personas.

En resumidas cuentas, como señala Chossudovsky (2002, p. 27), «bajo la jurisdicción del FMI, el mismo “menú” de austeridad presupuestaria, devaluación, liberalización del comercio y privatización se aplica simultáneamente en más de 150 países endeudados. Las naciones deudoras renuncian a su soberanía económica y al control de las políticas fiscales y monetarias, el banco central y el ministerio de finanzas son organizados (a menudo con la complicidad de las burocracias locales), las instituciones estatales son desmanteladas y se instala una “tutela económica”. Las instituciones financieras internacionales establecen un “gobierno paralelo” que pasa por encima de la sociedad civil.⁵ Los países que no se sujetan a los “objetivos de desempeño” del FMI son incluidos en la lista negra», y el castigo suele ser terrible (véase el caso de Venezuela). «El ajuste estructural promueve instituciones fantasma y una democracia parlamentaria ficticia, que a su vez sostiene el proceso de reestructuración económica» (Chossudovsky, 2002, p. 27), por lo que, añade este autor (p. 28), puede ser considerado como «una forma de “genocidio económico” que se desarrolla mediante la consciente y deliberada manipulación de las fuerzas del mercado». Por ejemplo, concluye Chossudovsky (2002, pp. 30-31), en muchos países endeudados del tercer mundo, el salario real en el sector laboral ha disminuido en más del 60 % desde comienzos de los noventa. En Nigeria, durante el gobierno militar del general Ibrahim Babangida, el salario mínimo descendió más del 85 % en los años ochenta; en Vietnam, los salarios estaban por debajo de los diez dólares al mes, mientras que el precio nacional del arroz se niveló al precio mundial como resultado del programa del FMI adoptado por el gobierno de Hanoi, de forma que, por ejemplo, un maestro de escuela secundaria de Hanoi recibía un salario mensual de menos de 15,2 dólares en 1991; en Perú, a raíz del *Fujishock* patrocinado por el FMI y el BM y puesto en marcha por el presidente Alberto Fujimori en agosto de 1990, los precios de los carburantes aumentaron más de un 3.000 % de un día para otro, mientras que el precio del pan aumentó un 1.200 %, mientras

5 Ello supone una clara y evidente «suspensión de la democracia» y, en todo caso, el establecimiento de una democracia ficticia, no real.

que el salario mínimo real bajaba más del 90 %. Y mientras, los beneficios de las grandes empresas transnacionales no dejaban de crecer. Al fin y al cabo, como afirma Torres (2021, p. 169), el FMI es la institución «que impone las políticas que se llevan a cabo en la práctica totalidad de los países del planeta». Y su objetivo último no es otro que incrementar cuanto sea posible los beneficios de los más ricos, con lo que ha conseguido que actualmente exista una concentración de la renta y la riqueza desconocida en mucho tiempo.

2.5. El poder de las grandes empresas transnacionales

El poder hoy día lo tienen los mercados, máscara esta tras la que se ocultan los más ricos y poderosos del mundo, así como las grandes empresas transnacionales. Por eso nunca les vemos el rostro. Un intelectual checo, Ivan Klima, escribió que «a diferencia de los anteriores usurpadores de poder, estas estructuras de poder no tienen rostro ni identidad, son invulnerables a los golpes y las palabras. Su poder es, quizá, menos ostentoso, menos abiertamente declarado, pero es omnipresente y no cesa de crecer» (Tomado de Estefanía, 2017, p. 22). Por eso, tenemos miedo «a un nuevo poder fáctico al que se denomina genéricamente “los mercados”, que busca reducir los beneficios sociales y las conquistas de la ciudadanía que se desprende de él, esos beneficios y esas conquistas crean ineficiencias en el sistema: miedo a quedarnos sin ese bien cada vez más escaso que se llama “trabajo”, a reducir nuestro poder adquisitivo, al subempleo, a la marginación económica, y social, etcétera» (Estefanía, 2017, p. 22). De hecho, en esta globalización neoliberal el poder se encuentra sobre todo en las empresas transnacionales, en las personas más ricas (nunca hubo tan pocas personas tan ricas y con tanta influencia en el planeta como ahora) y también, aunque menos, en los grandes organismos internacionales (no elegidos democráticamente): FMI, OMC, BM, etc.

Como escribe Ziegler (2006, pp. 210-211), «cada multinacional capitalista organiza no solo su Ministerio de la Propaganda, sino también sus propios servicios de espionaje y contraespionaje, así como sus propios equipos de ejecutores. Estos servicios secretos funcionan en los cinco continentes. No solo se infiltran en los cuarteles generales de los cosmócratas competidores, sino también en los diferentes gobiernos nacionales. [...] Algunas de estas empresas son especialmente hábiles para infiltrarse en la burocracia de las grandes agencias especializadas de

la ONU». Pongamos un ejemplo, tomado de Ziegler (pp. 239-240), que muestra cómo a veces las grandes empresas abusan de millones de personas, generalmente pobres. Hacia 1980, investigadores ingleses descubrieron que la leche materna tenía efectos infinitamente más beneficiosos sobre el crecimiento de los recién nacidos que la leche en polvo de Nestlé. Sus datos, que fueron publicados por Oxfam, llegaban a la conclusión de que empujar a las mujeres –en especial a las del tercer mundo– a renunciar a la leche materna en beneficio de la compra de productos Nestlé era un atentado contra la salud, el bienestar y el desarrollo físico y psíquico de los bebés. Por su parte, UNICEF ha evaluado en 4.000 el número de bebés que mueren cada día por la ingestión de leche en polvo mezclada con un agua insalubre o administrada en biberones sucios, como suele ocurrir en los países pobres. Si se hubieran alimentado con la leche materna, estarían vivos. Sin embargo, a pesar de esto, añade Ziegler, algunos estudios realizados en África occidental y en América Central muestran los métodos utilizados por algunas grandes empresas para promover sus productos. En inmensos carteles, que se alzan en las encrucijadas de las ciudades de Togo, Benin y Burkina Faso, vemos a mujeres negras con sus bebés en los brazos. «Por el bien de tu hijo, dale leche en polvo», se puede leer en el cartel. A menudo, un rostro blanco sonríe en segundo plano, sugiriendo que todas las madres blancas dan leche en polvo a sus bebés. De esta manera, y teniendo en cuenta el prestigio que en el África negra tiene la forma de consumir de los blancos (y la credibilidad que tienen sus productos), no es extraño que muchas mujeres africanas sanas, tras haber sido incitadas por este tipo de publicidad, dejen de amamantar a sus hijos y, con el escaso dinero del que disponen, compren unas cucharadas de leche en polvo. Porque las mujeres de las chabolas no suelen poder comprar latas enteras. Además, mezclan el polvo con agua que en el 80 por ciento de los casos está contaminada.⁶ Por tanto, no solo el bebé no podrá disfrutar de los efectos inmunitarios de la leche materna, sino que tampoco recibirá la cantidad de leche necesaria y, lo que es peor aún, pronto tendrá diarreas que en muchos casos acabarán en muerte. Y por si

6 Según Riccardo Petrella (1999), un tercio de la población mundial no tiene acceso a un agua sana y a un precio asequible y la mitad no tiene acceso al alcantarillado. Muchos millones de personas no tienen acceso a agua potable: unos 285 en el África subsahariana, 248 en el sur de Asia, 398 en el este de Asia, 180 en el sudeste de Asia y en el Pacífico, 92 en América Latina y el Caribe y 67 en los países árabes.

todo esto fuera poco, algunas multinacionales hacen una campaña de entrega gratuita de leche en polvo a las madres durante un mes, por lo que se les retira su leche, y cuando termina el mes no tienen ni leche materna ni pueden comprar la leche en polvo, lo que constituye una auténtica tragedia para toda la familia.

Pero todo ello es posible porque, como dice Chossudovsky (2002, p. 12), «el FMI, el BM y la OMC no son más que burocracias. Son «instituciones» que operan bajo una sombrilla intergubernamental y en nombre de intereses económicos y financieros muy poderosos. Los banqueros de Wall Street y las cabezas de los conglomerados de negocios más grandes del mundo están indudablemente detrás de estas instituciones globales. Interactúan regularmente con los funcionarios del FMI, el BM y la OMC en sesiones cerradas, así como en numerosas reuniones internacionales». Más aún, los estatutos de los bancos centrales de los países de la OCDE se modificaron para satisfacer las exigencias de las élites financieras, de manera que, añade Chossudovsky (pp. 323-324), «en la práctica el banco central (que no rinde cuentas al gobierno ni a la legislatura) opera como una burocracia autónoma bajo la tutela de intereses financieros y bancarios privados. En Estados Unidos, el Sistema de la Reserva Federal está controlado por unos cuantos bancos privados que son los accionistas de los doce bancos de reserva federal. En la Unión Europea, el Banco Central Europeo, sito en Frankfurt, está controlado por los grandes bancos alemanes que son el Deutsche Bank y el Dresdner Bank (ahora fusionados en un conglomerado único), junto con unos cuantos bancos europeos e instituciones financieras. Lo que esto significa es que ya no existe una política monetaria como medio de intervención estatal; esta está en manos de la banca privada. En comparación con la notoria escasez de fondos estatales y la incapacidad del estado para financiar los programas gubernamentales con políticas monetarias, “la creación de dinero” (que implica tener el control de los recursos reales) tiene lugar dentro de la red interna del sistema bancario internacional, que lo único que persigue es acrecentar la riqueza privada».

Y todo ello se ve facilitado por el hecho de que «quienes son elegidos para los altos puestos públicos cada vez más son los titeres o burócratas que operan en nombre del *establishment* financiero. Los acreedores del estado se han convertido en los depositarios del poder político real y operan discretamente tras bambali-

nas» (Chossudovsky, 2002, p. 324). Con ello, la democracia se debilita cuando no desaparece, con el consenso y el apoyo de prácticamente todos los poderes reales y fácticos, incluidos casi todos los partidos con representación parlamentaria. También los partidos socialdemócratas, neolaboristas y excomunistas «se han convertido en los servidores fieles del *establishment* financiero» (Chossudovsky, pp. 324-225). Después, políticos relevantes de estos partidos son bien pagados, siendo puestos en los consejos de administración de las grandes empresas, donde ganan mucho y trabajan poco.

Pero el poder de las grandes empresas y de las personas más ricas proviene también de la influencia que ejercen sobre los medios de comunicación, que mayoritariamente son de su propiedad, y de los muchos *think tanks* que financian muy generosamente para que, manipulando las mentes de la población, conformen la opinión pública a favor de las políticas que benefician a los más ricos y a las grandes empresas.⁷ Pero proviene también de la enorme influencia que ejercen sobre las principales instituciones de gobierno internacional (el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, principalmente) así como sobre la mayoría de los gobiernos. Por eso, «a partir de los años ochenta los niveles de desigualdad volvieron a crecer no solo porque aumentaron las diferencias entre lo que ganaban y lo que poseían unos y otros, sino también porque la mayor parte de los gobiernos decidieron limitar la capacidad redistributiva del Estado mediante el paso gradual hacia sistemas de impuestos más regresivos: el cambio de impuestos directos hacia los indirectos, o el desplazamiento de los impuestos del capital (los que pagan las empresas, los que invierten en Bolsa o en otros productos financieros) hacia los del trabajo (los que pagan los asalariados)» (Estefanía, 2017, p. 160).

7 Como dice Joaquín Estefanía (2017), si Marx decía que el motor de la historia es la lucha de clases, Keynes mantiene que son las ideas y no los intereses las que más influyen en los cambios sociales. Y los neoliberales, siguiendo curiosamente en este punto a Keynes, defienden que son las ideas las que mueven el mundo. Por eso desde hace más de 50 años se han empleado a fondo para manipular a la población y meter en sus cabezas las «ideas correctas», es decir, las de la ideología neoliberal.

Veamos un ejemplo evidente de esa desafortunada carrera por bajar los impuestos⁸ (Estefanía, 2017, p. 161): en el verano de 2016 se supo que la multinacional tecnológica Apple estaba pagando al Estado irlandés (evidentemente, con su complacencia), en concepto de impuestos, tan solo el 0,005 % de sus beneficios (el equivalente a 50 euros por cada millón de beneficios). Ello causó un auténtico escándalo y una multa de 13.000 millones de euros a Apple por parte de la Comisión Europea, que era alta, pero mucho menor de lo que se había ahorrado en impuestos. Pero en 2020, el Tribunal General de la Unión Europea le dio la razón a Apple, eximiéndola de pagar esa multa. Además, ese poder de las grandes multinacionales, hoy día hegemónico, se percibió con claridad en la gestión de la crisis financiera de 2008-2010. En efecto, durante esa crisis «el secretario del Tesoro americano (sic) pidió permiso al Congreso para poner en marcha un plan de ayuda al sector financiero por valor de 700.000 millones de dólares. Luego vendrían muchos más. Cantidades bestiales que hacen justa la apreciación de que durante esta crisis se ha ayudado a los bancos (y a los banqueros), pero no se han puesto cantidades ni siquiera aproximadas para proteger a los ciudadanos de sus desgracias» (Estefanía, 2017, p. 213). En España, el gobierno del PP regaló, sin que nunca fuera devuelto, 70.000 millones de euros a la banca, mientras esta desahuciaba a miles de ciudadanos de sus hogares por haber perdido el empleo y no poder pagar la hipoteca.

Más en concreto, lo que están haciendo las grandes transnacionales es construir un nuevo colonialismo basado ante todo en la mano de obra barata, pero también en el endeudamiento de los países y en las condiciones exigidas para que esos países puedan conseguir los préstamos que solicitan. En efecto, si la economía del capitalismo de la colonización se basó en la esclavitud y el expolio de las materias primas de las colonias, la economía del actual nuevo orden mundial se basa ante todo en la mano de obra barata y el control de las economías y las políticas de los países del tercer mundo, sobre todo a través del poder del FMI,

8 Tengamos muy presente que si los impuestos bajan no hay más remedio que aumentar la deuda, o reducir los gastos. No hay otra alternativa. Y en ambos casos quien gana es siempre la banca: la deuda ata en corto a los países que la tienen alta, con lo que la democracia se debilita enormemente (poco importa lo que vote la ciudadanía, lo primero que hay que hacer es pagar la deuda); y la reducción de los gastos del Estado no suele afectar a los gastos militares, sino a sociales (educación, sanidad, pensiones, etc.).

de la OMC y del BM, y de la deuda pública. «El sistema económico global se alimenta de la mano de obra barata» (Chossudovsky, 2002, p. 83), lo que consiguen principalmente de estas tres maneras: 1) el incremento del desempleo en todos los países, sobre todo en los desarrollados; 2) la llegada masiva de inmigrantes desde los países pobres a los países ricos; y 3) la deslocalización de las empresas, que se van de los países donde los sindicatos son poderosos y donde los salarios son altos y los derechos laborales dignos, a países donde no existen los sindicatos o son muy débiles y donde, por consiguiente, los salarios son bajos o muy bajos y los derechos laborales inexistentes. Pero no olvidemos, como nos recuerda Chossudovsky, que es la pobreza masiva la que regula el costo internacional de la mano de obra, o sea, el principal apoyo de la economía del nuevo orden mundial neoliberal es la mano de obra barata, mantenida con los «ejércitos de reserva» que el capitalismo tiene en los países pobres y en los desempleados de los países ricos. Todo ello, obviamente, produce un auténtico desplome de los salarios en los países desarrollados, en especial el de los trabajadores sin cualificar. Así, en EE. UU. tales salarios siguen igual o más bajos que hace cincuenta años, a pesar del gran crecimiento de su economía. Y ello, a su vez, está produciendo un enorme aumento de las desigualdades económicas y sociales.

En suma, como dice Ziegler (2006, p. 271), las personas más ricas y poderosas del mundo están saqueando el planeta, atacan a los Estados y cuestionan la soberanía popular, subvierten la democracia, destrozan la naturaleza y destruyen a los hombres y mujeres, sus libertades y su felicidad, dado que sus políticas, como veremos en el próximo apartado, son muy dañinas para gran parte de la población del planeta.

2.6. Principales efectos de la globalización neoliberal

Para hacer un análisis rápido, y a la vez profundo, de cuáles son las consecuencias reales para la gente de la actual gestión neoliberal de la globalización, basta con examinar los *Informes sobre desarrollo humano* de la ONU de los últimos años o los de Oxfam Intermon, como haré en los próximos capítulos. Lo que dicen estos informes, confirmado empíricamente, es estremecedor. Como señala un *Informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo* (PNUD, 2005b, p. 1): «Cada hora que pasa y sin acaparar la atención de los medios, mueren más de 1.200 niños. [...] Las causas de muerte varían, pero la abrumadora mayoría se

debe a una única patología: la pobreza. [...] Con la actual tecnología, recursos financieros y acumulación de conocimientos, el mundo tiene la capacidad de superar la pobreza extrema». Pero no se hace mucho por superarla. Y quienes más mueren son niños menores de cinco años: unos 25.000 al día, uno cada tres segundos. Y la mortalidad infantil es el indicador que mejor capta las diferencias de oportunidades de desarrollo humano. Casi todas estas muertes ocurren en los países pobres, pero el gasto para prevenir las enfermedades se concentra en los países ricos (PNUD, 2005c, p. 30).

Resumiendo, al menos a mi juicio, los cuatro principales efectos de esta globalización son el incremento desmedido de las desigualdades, la devastación del mundo del trabajo, el deterioro de la democracia y el cambio climático con su consecuente destrucción del planeta. Como escribe Chossudovsky (2002), desde que terminó la guerra fría, la humanidad está pasando por una crisis económica y social de una gravedad sin precedentes, que está llevando a grandes sectores de la población mundial a un rápido empobrecimiento, aumentando enormemente el hambre y la miseria en el África subsahariana, en el sur de Asia y en algunas partes de Latinoamérica, de manera que esta «globalización de la pobreza», que en gran medida ha revertido los logros de la descolonización, se inició en el tercer mundo al mismo tiempo que la crisis de la deuda de principios de los ochenta y la imposición de las letales reformas económicas del FMI. Todo ello es la consecuencia directa del incremento imparable de las desigualdades.

En cuanto a la devastación del mundo del trabajo, también aquí nos mintieron cuando, al colapsar todo el Imperio soviético, nos dijeron que comenzaba el fin de la historia y que pronto en todo el planeta triunfaría la democracia y todos los trabajadores del mundo tendrían los mismos derechos laborales y los mismos salarios que los occidentales. Y muchos lo creyeron. Pero fue justamente al revés: la desregulación financiera y la deslocalización de las empresas están permitiendo que se reduzcan los salarios de los trabajadores de los países desarrollados y que empeoren sus condiciones laborales (Ovejero, 2014a). Y no pararán hasta que tales salarios y condiciones laborales sean similares a los de China donde se exprime al máximo a la clase trabajadora.

Con respecto al debilitamiento de la democracia, el principal factor que lo produce es la cada vez mayor desigualdad entre ricos y pobres, siendo muchas las

multinacionales que tienen más riqueza que el PIB de muchos países, siendo tal su poder que, por encima de lo que vote la ciudadanía, las decisiones más importantes a nivel político y económico las toman ellas, que no han sido elegidas democráticamente. Por último, y en estrecha relación con el debilitamiento de la democracia, la destrucción del planeta, la contaminación de la tierra y los mares, la incesante emisión de CO₂, la tala de bosques, la eliminación de especies animales o el cambio climático, son la consecuencia directa de la imposición de los intereses de los más ricos y de las grandes empresas, y de la consiguiente pérdida de poder de los Estados. Es enorme el poder que tienen las grandes multinacionales para que los gobiernos no tomen medidas que limiten su actividad contaminadora (basta con recordar a los hermanos Koch). Y es ese poder el que impide tomar medidas para la sostenibilidad del planeta, así como de la propia democracia. Y ello es así porque donde las desigualdades son extremadamente grandes, entre países y entre personas dentro de cada país, es imposible que haya democracia, pues los poderosos no consentirán que los gobiernos hagan nada, por muy democráticos que sean, que perjudique sus intereses o menoscabe sus privilegios. Ello explica la guerra sin cuartel que contra Podemos, en España, han llevado a cabo los poderes económicos, mediáticos y judiciales, en un proceso que yo no dudaría en considerar como un caso paradigmático de *lawfare*.⁹

Sin embargo, una de las grandes paradojas de esta globalización neoliberal es que mientras dice que su principal objetivo es el crecimiento económico, toma unas medidas que hacen que la economía global entre en un círculo vicioso que dificulta el crecimiento. Así, como escribe Chossudovsky (2002, p. 103), el Tratado de Libre Comercio (TLC) restringe el movimiento de trabajadores mexicanos hacia los Estados Unidos con la finalidad de mantener la mano de obra mexicana como «ejército de reserva» de mano de obra barata, cumpliendo la función

9 «*Lawfare* o guerra jurídica es la utilización de una combinación de varios mecanismos legales, mediáticos y económicos para neutralizar e incluso aniquilar a un enemigo político. Es un término que surge en el ámbito militar y, por tanto, se puede considerar una táctica bélica que, por vía de la judicialización de la política, la aplicación de una legislación extraterritorial unilateral o la inferencia en los sistemas legales y judiciales a través de mecanismos de cooperación asimétrica, logra justificar los objetivos de reconfiguración política...» (Tirado, 2021, en Pablo Iglesias, 2022). Los casos más paradigmáticos han sido el *lawfare* contra Lula en Brasil y en España contra Podemos.

de bajar los salarios pagados a los trabajadores estadounidenses y canadienses, así como la de socavar el papel de los sindicatos. Algo similar habría que decir del caso europeo y los trabajadores africanos. Todo ello es facilitado y fomentado por la división de clases de los países pobres. En efecto, «en los países con bajos salarios las élites de poder se aseguran de que los costes de mano de obra se mantengan bajos y poder así seguir repartiéndose el botín con los inversores extranjeros. Las personas de estos países no llegan nunca a poder mejorar en algo: solo la élite de poder se vuelve más rica y más poderosa» (Gallin, 2004, p. 113).

Además, la internalización de la ideología neoliberal por gran parte de la población está haciendo que todo ello se vea como algo normal y las desigualdades pasen casi completamente desapercibidas. Cuando le digo a mi alumnado que España es uno de los países europeos con más desigualdades y más pobreza de la UE no lo creen. Son datos que están bien escondidos y no aparecen en los titulares de las noticias diarias. Forman parte de los «silencios sociales». Cuenta Joaquín Estefanía que una periodista británica, Gillian Tett, experta en el análisis de los sofisticadísimos productos financieros que facilitaron la crisis financiera, puso en circulación este concepto de los «silencios sociales», esas noticias de algo que, aunque sea muy relevante y ayude a reproducir el sistema y sus estructuras de poder a lo largo del tiempo, habitualmente se omiten o se ignoran, para que nada cambie. «Uno de esos silencios sociales fue, durante mucho tiempo, la desigualdad» (Estefanía, 2017, p. 137). Y el propio Joaquín Estefanía pone este ejemplo: uno de los «silencios sociales» de la crisis económica es la debilidad de los sindicatos, lo que tiene una repercusión directa en aquella. Los sindicatos han desaparecido de la vida de la mayoría de los asalariados. Si hubieran existido sindicatos más fuertes y preparados, los sacrificios de la crisis habrían estado más repartidos.

Últimamente se ha instalado en la sociedad occidental esta falsa verdad (posverdad), que no es otra que esta: «la distribución solo puede practicarse en el seno de cada clase social, de cada estamento, de cada grupo, no entre unas clases sociales y otras. En el marco de la globalización, la redistribución es imposible desde el capital hacia el trabajo: solo puede ser interna en el mundo del trabajo y de las clases medias, desde los más favorecidos hacia los menos. Si no se hace así, si no se redistribuye en el seno de cada grupo social y se toca al capital y al segmento del uno por ciento, las empresas y los ciudadanos ricos abandonarán

los países de altos impuestos hacia aquellos de impuestos bajos, las zonas de las generosas prestaciones sociales hacia los que no tengan estado de bienestar o este sea muy frágil y no universal, aprovechando la libertad de movimientos de capitales. Por eso es por lo que la mayor parte de las reformas fiscales que se han aplicado en los últimos tiempos reducen los impuestos al capital y palían o eliminan los impuestos al patrimonio (a lo que se posee, no a lo que se gana) y el de sucesiones y donaciones (a lo que se hereda, reduciendo la igualdad de oportunidades). Los asalariados, ya suficientemente demediados por la crisis, son los que principalmente padecen esas reformas fiscales y las reformas laborales que exigen dosis cada vez superiores de flexibilidad del mercado de trabajo» (Estefanía, 2017, pp. 140-141). Con ello no deja de aumentar la desigualdad. Se trata de una de las primeras cosas que deben ser corregidas si se quiere transitar a una sociedad más justa y más igualitaria.

En definitiva, ¿el capitalismo neoliberal es un sistema económico que produce mucha riqueza y que, por tanto, reduce la pobreza y la desigualdad, como defienden sus partidarios, o, más bien, como denuncian sus detractores, se trata de un sistema explotador que beneficia a los capitalistas y perjudica a los trabajadores, incrementando la pobreza y la desigualdad? Un interesante estudio sobre este tema lo realizó Jeffrey G. Williamson (1987), concluyendo que el capitalismo produjo en Gran Bretaña una gran desigualdad, aumentando esta hasta mediados del siglo XIX aproximadamente, disminuyendo después, aunque de forma moderada. Pero debemos tener en cuenta que el incremento de los sueldos y la consiguiente reducción moderada de la desigualdad no era algo intrínseco al propio capitalismo ni siquiera a la riqueza que producía, y menos aún a la voluntad de los capitalistas, sino a las luchas obreras que consiguieron muchas mejoras en sus condiciones laborales, a costa de mucho esfuerzo y de muchos muertos. La desigualdad es inherente al capitalismo. De ahí que los gestores del nuevo orden mundial estén intentando –y consiguiendo– terminar con la igualdad que se había dado durante el siglo XX, de manera que en muchos aspectos estamos volviendo a los años de antes de 1910 cuando el capitalismo fomentó la desigualdad (Williamson, 1987).

En resumidas cuentas, parece claro que la actual globalización aumenta la pobreza, pero no hay ninguna duda de que incrementa las desigualdades, tanto dentro de los países como entre los países. Basta con examinar los datos que muestra

Manuel Castells (2000, 2001a, 2001b): las desigualdades salariales entre los trabajadores cualificados que más ganan y los no cualificados son cada vez mayores en Estados Unidos, a la vez que los países desarrollados van distanciándose progresivamente de los más pobres, quedando muchos de ellos absolutamente estancados, sobre todo en el África subsahariana. Los países menos desarrollados constituían, en 2002, el diez por ciento de la población mundial, pero solo generaban el uno por ciento de la renta mundial. Treinta y cuatro de estos países están en África, nueve en Asia, cinco en el Pacífico y uno en el Caribe. Por otra parte, desde que, en 1971, se creó esta categoría, solo Botswana consiguió salir de la extrema pobreza gracias a una adecuada política agrícola, al margen de las consignas del FMI. En cambio, Senegal, que llevó a cabo varios planes de ajuste estructural del FMI, entró en 2001 en el grupo de países de extrema pobreza.

2.7. La educación en el tercer mundo: Otra trampa a favor de los países ricos

No cabe ninguna duda de que una de las vías más eficaces para que los países pobres salgan de la pobreza es la educación, sobre todo la educación de niñas y mujeres. Sin embargo, no es un camino fácil, sobre todo por tres razones. La primera y la más obvia estriba en que, precisamente por ser pobres, tales países tienen muchas dificultades para financiar adecuadamente la educación de toda la población. La segunda, poco conocida, es que a menudo el FMI, a través de los planes de ajuste estructural, exige a los países que piden un préstamo al BM que privaticen su sanidad y su educación y que cobren a las familias por llevar a los niños al colegio. Eso hace difícil, por no decir imposible, la escolarización de gran parte de la población. La tercera es que los pocos que consiguen una formación universitaria en el tercer mundo (por ejemplo, en Medicina o en Informática), se ven tentados a trasladarse a un país rico donde recibirán un sueldo enormemente superior al que recibirían en su país de origen. Y eso sí que es una vergüenza, pues de esta manera los profesionales formados en los países pobres, con grandes esfuerzos por parte de estos países, ayudan al desarrollo de los países ricos. Se trata de otra vía por la que los países pobres financian el desarrollo de los países ricos. ¿Cuánto le cuesta a un país del África subsahariana formar a un médico? Y luego se va a un país rico a ejercer su profesión.

Además, tengamos presente, como subraya Reinert (2007, pp. 116-117), que, en países como Haití, especializados en la producción no mecanizada, mejorar el nivel de educación de la población no contribuirá a elevar la riqueza del país, pues si no hay demanda de personal especializado, los especialistas probablemente emigren. Y es que una estrategia basada en la educación solo tiene éxito cuando se combina con una política industrial que proporcione empleo a las personas cualificadas. Pero lo dramático es que eso es prohibido por el BM y el FMI. En efecto, para recibir ayuda de los países ricos o del BM, los países pobres tienen que cumplir ciertas condiciones, que son las que impone el FMI, entre otras abrir sus fronteras a los productos de los países ricos con los que no pueden competir. Por tanto, «al insistir en la importancia de la educación sin permitir simultáneamente una política industrial que cree demanda de gente cualificada –como ha hecho Europa durante los últimos cinco siglos–, las instituciones de Washsington no hacen más que acrecentar las cargas financieras de los países pobres haciéndoles financiar la educación de gente que al final solo encontrará trabajo en los países ricos. Una política educativa debe verse acompañada por una política industrial que cree demanda de gente bien formada» (Reinert, 2007, pp. 116). De hecho, añade Reinert, se calcula que el 82 % de los médicos jamaicanos trabajan en el extranjero; el 70 % de los guayaneses con formación universitaria trabajan fuera del país; los hospitales norteamericanos absorben las enfermeras de países anglófonos como Trinidad. Por tanto, «el hecho de que la gente con formación universitaria de los países pobres pueda encontrar un nivel de vida mucho más alto en países ricos es una amenaza para el propio tejido social de muchos de esos países: los más competentes, los mejor formados, emigran. Aunque el dinero que esos emigrantes envían a sus parientes es muy relevante –en países como El Salvador el flujo de remesas de los emigrantes constituye la mayor fuente de divisas extranjeras–, se gasta generalmente en consumo, no en inversión» (Reinert, 2007, pp. 116-117).

En síntesis, a primera vista puede parecer que lo que necesitan los países pobres es tener gente mejor formada. Pero eso no es suficiente; puede incluso ser contraproducente, pues si las personas bien formadas no tienen empleo, tendrán que emigrar a otros países, con lo que el gasto en su formación habrá sido un negocio ruinoso para su país. Esos países necesitan, simultáneamente, personas bien formadas y empleos donde esas personas puedan ejercer sus habilidades.

Eso es lo que hicieron en su día los países ahora ricos. Más aún, «las naciones que solo atienden al lado de la oferta de gente instruida acaban educando para la emigración. El flujo de gente instruida de los países pobres a los ricos se une al flujo de capital en la misma dirección, como uno de los “efectos perversos” (Gunnar Myrdal) de la economía mundial. En muchos países pobres el principal artículo exportado es, tristemente, la propia elite instruida, cuyas remesas constituyen en algunos casos el principal ingreso compensador de la balanza de pagos. También parece que esas remesas se destinan principalmente al consumo más que a la inversión y que, en algunos casos, desalientan más que estimulan los esfuerzos del propio país. ¿Para qué trabajar por 50 centavos de dólar por hora en Haití si tu hermano recibe un salario mínimo de 6,40 dólares por hora en Florida y envía parte de ese dinero a casa?» (Reinert, 2007, pp. 233-234).

La solución a este estado de cosas es evidente y consiste en permitir a los países pobres vender sus productos agrícolas en condiciones de igualdad, en un libre mercado real, que no es el existente; ayudarles a implantar un buen sistema educativo, desde preescolar a la universidad, pero –y es el tercer pilar del desarrollo de los países pobres– no obstaculizar el que construyan una red industrial para emplear a sus titulados.

2.8. Conclusión

Los dos principales efectos negativos del capitalismo (aumento de las desigualdades y destrozo del planeta) son intrínsecos a este sistema económico. En efecto, según Pomeranz (2000), el desarrollo del capitalismo estuvo siempre estrechamente relacionado con los sistemas de división internacional del trabajo, la explotación generalizada y abusiva de los recursos naturales del planeta, y la dominación militar y colonial de las potencias europeas sobre el resto del mundo a través de lo que se conoce como colonialismo. Trabajos posteriores confirman esta conclusión (Fernández Aúz y Eguibar, 2016; Beckert y Rockman, 2016; Levy, 2021), conclusión más cierta aún hoy día que hace cincuenta años. Ahora bien, los principales problemas de desigualdad y pobreza en el mundo no provienen de la globalización en sí misma, sino de la «gestión neoliberal de la globalización». Y el hambre no deriva de la falta de alimentos, sino de las políticas que el neoliberalismo lleva a cabo con respecto a la distribución de los

alimentos. Nadie se muere de hambre por no haber alimentos, sino por no tener dinero para comprarlos. Existen soluciones, relativamente fáciles, para reducir drásticamente el hambre en el mundo, siempre que haya voluntad para ello, que es justamente lo que falta en las grandes potencias y en los más ricos. Así, los directivos de Oxfam Intermon, Ignasi Carreras y Gonzalo Fanjul (2005), afirman que «convertir la deuda de los 32 países más pobres del mundo en salud y educación tendría para el conjunto de los países ricos un coste de tan solo 1.800 millones de dólares anuales durante diez años». Pero tales soluciones no son viables porque los más ricos, que no las desean, poseen mucho poder, a través principalmente de la banca. De hecho, «la banca siempre fue una fuente de poder inmenso gracias al privilegio que le proporciona el crear dinero de la nada. Sin embargo, cuando además utiliza los depósitos de sus clientes para invertir, su influencia y capacidad de decisión la han convertido en la gran fuerza que domina el mundo. No solo controla el sistema financiero, sino todas las industrias, incluyendo la de los medios de comunicación, que adoctrinan y generan sometimiento social, y también las instituciones políticas y judiciales. El volumen de activos que poseen es extraordinario: solo los diez bancos más grandes del mundo disponen de unos 35 billones de dólares, es decir, más o menos la mitad del PIB mundial, y los veinte mayores, unos 57 billones. Y eso les permite adueñarse de la propiedad que desean, controlar las actividades que les interesen en cualquier lugar del mundo o comprar voluntades allí donde quieran influir o lograr que se actúe a su conveniencia» (Torres, 2021, pp. 87-88).

Además, los más ricos no tienen solo el poder que les da la banca, sino también tienen el poder que les da el dificultar la organización de los trabajadores y debilitar el poder de los sindicatos (por ejemplo, en muchas grandes empresas los sindicatos están prohibidos), mientras ellos sí están perfectamente organizados. Así, como nos recuerda Juan Torres (2021), el diario *The New York Times* desveló que nueve representantes de los grandes bancos de Estados Unidos se reúnen el tercer miércoles de cada mes en una oficina de Manhattan, en Nueva York, para proteger sus intereses controlando directamente el mercado de derivados, que mueve más de setecientos billones de dólares, unas diez veces el PIB mundial (Story, 2010). Por consiguiente, puntualiza Torres (2021, p. 89), la banca no es solo una correa de transmisión del dinero, es sobre todo el sujeto más poderoso de los que intervienen en todos los mercados del mundo, no solo en el financie-

ro, y con tantos tentáculos que bien puede definirse, en palabras del profesor François Morin (2015), como una hidra que domina la economía, la política, la cultura y los valores sociales. Más en concreto, añade Torres (p. 91), «el privilegio que tiene la banca y que le permite dominar el mundo es el de crear de la nada el 90 por ciento del dinero que circula en el planeta», o sea, concluye Torres, poner en manos de los bancos el poder casi ilimitado de crear dinero cuando concede préstamos es lo que ha hecho que la deuda se haya convertido en el motor fatídico de las economías de nuestro tiempo, como veremos en el próximo capítulo. Y ahí estriba una de las más grandes paradojas de nuestra economía: «El problema, sin embargo, radica en que el negocio de la banca consiste en endeudar cuanto más mejor al resto de los sujetos económicos. Por tanto, para obtener cada vez más beneficios lo que ha de hacer la banca es utilizar su enorme poder para tratar de imponer políticas que limiten la generación de ingresos y que obliguen a endeudarse, convirtiendo a la deuda en el motor de las economías» (Torres, 2021, p. 92). De ahí que la democracia sea incompatible con el capitalismo y con las desigualdades que produce: no puede haber democracia allí donde el poder y el dinero se distribuyen muy desigualmente, pues los poderosos tendrán el poder de imponer sus intereses a todos los demás, como ocurre, por no poner sino un ejemplo, con la propiedad de los medios de comunicación, hoy día en manos de los más ricos (Cagé y Huet, 2021). Con ello desaparece uno de los pilares esenciales de las democracias reales: la independencia de la prensa.

Por otra parte, la democracia también está muy debilitada hoy día por el hecho de que son los acreedores, no la ciudadanía, ni tampoco sus representantes parlamentarios elegidos en las urnas, quienes realmente mandan. Los gobiernos y los ministros de finanzas no rinden cuentas a la población que les ha elegido sino a las grandes instituciones de inversión y a los bancos comerciales (Chosudovsky, 2002, p. 320). Además, en esa misma línea, las agencias de calificación de riesgos hacen muy bien su trabajo (Ovejero, 2014a; Rügemer, 2013). Así, «en 1995, la evaluación negativa de la deuda sueca fue crucial en la decisión de reducir los programas de servicio social, como las becas para los niños y los beneficios del seguro de desempleo que tomó el gobierno socialdemócrata minoritario. La evaluación del crédito para la deuda pública de Canadá, también hecha por Moody's, fue el factor decisivo para despedir empleados públicos y cerrar hospitales provinciales. Las provincias canadienses (que carecen de fi-

nanciamiento adecuado) se han visto obligadas a “adelgazar” los fondos para la salud, educación y seguridad social» (Chossudovsky, 2002, p. 320).

En resumen, lo que realmente quieren los más ricos y poderosos es, sencillamente, quedarse con todo. Al fin y al cabo, como puntualiza Daniel Bernabé (2021), «el neoliberalismo fue siempre algo más que un modelo económico basado en el fanatismo de mercado, fue el proyecto de dominación de clase mediante resortes políticos, económicos y culturales que pretendieron una subversión democrática mediante la conculcación progresiva de derechos, pero también mediante el alzamiento de las armas llegado el caso», como demostró Naomi Klein (2007). Y por si ello fuera poco, «desde principios de los ochenta, muchas de las deudas de las grandes corporaciones y de los bancos comerciales han sido convenientemente desaparecidas y transformadas en deuda pública. Este proceso de “conversión en deuda” es una característica central de la crisis: las pérdidas de los negocios y de la banca han sido sistemáticamente transferidas al estado. [...] Los “paquetes de rescate” para corporaciones y bancos comerciales con dificultades se basaron en el principio de transferir la carga de las deudas corporativas a la hacienda estatal» (Chossudovsky, 2002, pp. 320-321). Todo ello, evidentemente, incrementó la deuda pública con lo que, paradójicamente, quien ganó fue la banca de inversión, y lo hizo por partida doble. Y quienes más perdieron –y también por partida doble–, fueron los ciudadanos y ciudadanas de todo el planeta, en especial los trabajadores más pobres.

Ahora bien, ¿cuál es el futuro? De momento solo hay incógnitas, lo que hace que aumente todavía más nuestra incertidumbre. Y por si todo ello fuera poco, llegó la pandemia de la covid-19 a multiplicar hasta límites insospechados tal incertidumbre, viéndose más incrementada aún en estos últimos días a causa de la aparente vuelta de la guerra fría, tal como se está comprobando en el conflicto entre Rusia y Ucrania, la invasión de esta por aquella y la reacción de los países de la OTAN. Y no olvidemos que la incertidumbre suele fortalecer a las fuerzas más conservadoras incluso aunque hayan sido en gran medida las causantes de esa incertidumbre. Sin embargo, sí se otea en el horizonte algún cambio esperanzador. En efecto, se observa que las mismas instituciones que tomaron medidas neoliberales durante la crisis financiera –las cuales emperoraron aún más, tanto la situación de la población, particularmente de la más pobre, como la economía general– están ahora, sorprendentemente, proponiendo un cambio de rumbo

y tomando medidas opuestas para salir de la crisis económica provocada por la actual pandemia (Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo, Reserva Federal, Comisión Europea, etc.). Probablemente se estén dando cuenta de que las políticas neoliberales no solo hacen mucho daño a la mayoría de la población, sino que debilitan también a la economía general, dificultando el crecimiento, produciendo –y esto es sin duda lo que más preocupa a esas instituciones internacionales– una sustancial falta de dinamismo empresarial y productivo (Sebastián, 2021). Incluso defensores a ultranza del capitalismo, como Case y Deaton (2020), reconocen los estragos que han hecho las políticas neoliberales y proponen una reorientación radical del capitalismo para que sirva al interés público. Y es que, como subraya Joaquín Estefanía (2021), afortunadamente, el capitalismo está cambiando de piel. Como recientemente escribía Mario Ríos Fernández (2022), aunque es pronto para hablar del final del neoliberalismo como paradigma económico dominante, sí parece que algunos de sus dogmas empiezan a resquebrajarse después del impacto social, económico y laboral causado por la pandemia de la covid-19. El fetichismo por la austeridad, una política monetaria restrictiva o la negación del intervencionismo estatal parecen estar siendo guardados en un cajón, no sabemos si para cambiar de paradigma o solo a la espera de que las fuerzas a favor del mercado vuelvan a recuperar la hegemonía ideológica.

CAPÍTULO 3

LA DEUDA COMO MECANISMO DE EXPLOTACIÓN Y CONTROL DEL TERCER MUNDO

3.1. Introducción

Para entender mejor buena parte de este libro, pero sobre todo para entender cabalmente la pobreza del tercer mundo, resulta de utilidad analizar el funcionamiento de la deuda externa. Si algo ha cambiado en la actual fase del capitalismo es el gran protagonismo del sector financiero. Fue precisamente el «socialdemócrata» Bill Clinton quien «revocó de un plumazo todas las restricciones regulatorias a los principales conglomerados bancarios de Wall Street. [...] bancos comerciales, casas de bolsa, fondos de compensación, inversiones institucionales, fondos de pensiones y aseguradoras pueden invertir libremente en los negocios de unos y otros» (Chossudovsky, 2002, p. 335). Es más, revocó también la ley Glass-Steagall de 1933, pilar del New Deal de Roosevelt, ley que había sido decretada «como respuesta al clima de corrupción, manipulación financiera y “comercio confidencial” que llevó a la quiebra a más de cinco mil bancos, en los años posteriores a la caída de Wall Street en 1929». Con ello, y libres ya de la regulación del gobierno, añade Chossudovsky que «los gigantes financieros tienen la capacidad de estrangular los negocios locales en Estados Unidos y de dominar la economía real». Ya no hay ningún impedimento al movimiento del capital financiero, lo que es tanto como decir que Merrill Lynch o Deutsche-Bankers Trust, concluye Michel Chossudovsky (p. 337), pueden ir a donde les apetezca, desatando la quiebra de la banca nacional de cualquier país y de sus institu-

ciones financieras. De hecho, Wall Street ha ido invadiendo un país tras otro. Sin embargo, aunque el poder de la banca es enorme, sobre todo el de la banca de inversión, necesita crecer más y más. Y para ello nada mejor que conceder préstamos gigantescos a todos los países del mundo, en especial a los del tercer mundo, para poder así matar dos pájaros de un tiro: obtener pingües beneficios económicos y tener controlados a esos países: un país endeudado no es un país libre, ni autónomo ni independiente. Como escribe Torres (2021, p. 154), «la deuda es una esclavitud y muchos economistas críticos han demostrado que haberla convertido en motor de las economías contemporáneas es la causa de que haya más crisis financieras que nunca».

3.2. La deuda como dispositivo para el control neoliberal del mundo

La deuda es hoy día el principal mecanismo para controlar a un país. En efecto, para que el BM conceda un préstamo importante a una nación, el FMI le exige poner en práctica una serie de políticas que favorezcan los intereses de los acreedores, lo que dificulta –o incluso hace imposible– el desarrollo económico de esa nación, de manera que, de esta forma, queda sometido por mucho tiempo. Eso es precisamente lo que ha ocurrido durante las últimas décadas en casi todo el tercer mundo. En efecto, como dice Chossudovsky (2002, p. 44), en 1970, el total de la deuda de los países en vías de desarrollo era aproximadamente de 62.000 millones de dólares, aumentando tal deuda nada menos que ocho veces en la década de los setenta, hasta alcanzar los 481.000 millones en 1980. Esa deuda total del tercer mundo llegó en 1998 a casi los dos billones de dólares (32 veces más que en 970). De esa manera, ya a mediados de los ochenta «los países en vías de desarrollo se habían convertido en exportadores netos de capital a favor de los países ricos» (Chossudovsky, 2002, p. 45).

De hecho, subraya Chossudovsky (pp. 50-51), «los acreedores aceptan renegociar solo si las naciones deudoras se someten a las “condicionalidades políticas” anexadas a los convenios de préstamo. El objetivo es imponer la legitimidad de la relación del servicio de la deuda, al tiempo que se mantiene a las naciones deudoras en una camisa de fuerza que les impide embarcarse en una política económica nacional independiente. Para ello se diseñó una nueva generación de “préstamos condicionados a políticas” [...] Los préstamos tenían por objetivo apoyar cambios políticos; estos últimos eran estrechamente supervisados por

las instituciones de Bretton Woods, y su evaluación se basaba en el “desempeño de las políticas”. En otras palabras, una vez firmado el convenio de préstamo, los desembolsos podían interrumpirse si el gobierno no se sujetaba a lo convenido, y se corría el riesgo de que el país fuera puesto en la lista negra por el llamado “grupo coordinador de ayuda” de donantes bilaterales y multilaterales». Y lo que es peor, añade este autor (pp. 51-52), «la naturaleza de estos convenios de préstamos no favorecía a la economía real, puesto que nada de ese dinero se canalizaba a la inversión. [...] El resultado de este proceso era el estancamiento de la economía nacional, la generalización de la crisis de la balanza de pagos y el aumento de la carga de la deuda». Y los países pobres solo tenían dos salidas: o morían por falta de recursos o los mataban los ajustes estructurales del FMI. Un ejemplo evidente de lo que estoy diciendo es América Latina: en 2001 su deuda era de unos 750.000 millones de dólares, lo que, como subraya Ziegler (2004, p. 219), originaba una transferencia hacia los acreedores de unos 25.000 millones de dólares al año, lo que significa que durante los últimos treinta años del siglo XX, el continente latinoamericano tuvo que dedicar cada año al pago de la deuda entre el 30 % y el 35 % de los ingresos obtenidos de la exportación de sus bienes y servicios. O sea, en 2001, cada habitante (incluyendo ancianos y recién nacidos) debía, de media, 2.550 dólares a los acreedores del norte. Este problema no ha hecho sino empeorar desde entonces. Por otra parte, la hipocresía de los países ricos llega al punto de pregonar que a menudo condonan la deuda a los países pobres. ¡Mentira! Cuando lo hacen, persiguen fundamentalmente dos metas: premiar a quienes se han plegado a las directrices del Consenso de Washington, por lo que la explotación masiva de esos países está ya asegurada, y conseguir que ese país pueda devolver con mayor garantía el resto de su deuda.

Pero el «problema de la deuda» no afecta solo a las naciones pobres, sino también a los países desarrollados, como es el caso de España, donde la deuda privada (familias y empresas) es mucho mayor que la pública. De ahí que «el endeudamiento que se ha generado en los últimos años puede ser calificado con toda razón como la nueva esclavitud de las clases trabajadoras» (Gálvez y Torres, 2010, p. 66). No olvidemos, como añaden estos autores, que el endeudamiento es algo más que deber dinero a un banco. «Es una losa, una auténtica carga que pesa sobre las espaldas de los sectores sociales más débiles y que los paraliza. Es una de las causas principales, por no decir la principal, de la gran desmovilización

social de nuestro tiempo, de la sumisión y de la falta de respuestas a la pérdida relativa de bienestar que padecen las clases más desfavorecidas. Estas son, lógicamente, las más endeudadas y las peor afectadas por la precariedad laboral y por la amenaza de la pérdida del empleo, pero la esclavitud de la deuda (como le ocurre incluso a países enteros y no solo a las personas individualmente consideradas) las enajena y las deja sin pies, sin manos y nos atreveríamos a decir que sin cerebro para hacer frente a la situación social en la que se encuentran, con asimetrías cada vez más grandes pero a las que se enfrentan en silencio y procurando tan solo salir del pozo y sobrevivir de cualquier manera que sea» (Gálvez y Torres, 2010, p. 67).

Por otra parte, entre otras cosas, la deuda soberana es la consecuencia de no querer implantar una fiscalidad progresiva que cargara a las élites económicas con unos impuestos justos y solidarios. Por el contrario, la deuda se carga sobre los hombros de la población en general y son las élites las que más ganan con ella, pues además de eximirles de pagar los impuestos que les correspondería en una sociedad justa, ganan mucho dinero con los intereses que el Estado debe pagar por la deuda. Por eso afirma Piketty (2014, p. 635) que la deuda pública «a menudo favorece la redistribución al revés de los más modestos hacia los que tienen medios para prestar al gobierno (a los que, de manera general, sería obviamente preferible hacerles pagar impuestos)». La deuda, pues, constituye un mecanismo esencial para incrementar las desigualdades.

Como vemos, efectivamente, la deuda es tal vez el dispositivo más importante que actualmente tienen los más ricos para controlar las políticas del mundo entero y poner a todo el planeta al servicio de sus intereses. En cierta medida, los ejércitos y la violencia militar se dejan para casos extremos y han sido sustituidos por la deuda y la violencia financiera. Pero ello es cierto sobre todo en el caso de las naciones pobres.

3.3. La deuda del tercer mundo

Pero la soga con que el sector financiero tiene amarrado al mundo, tanto a los países desarrollados como, en especial, a los menos desarrollados, no es solo la deuda pública, sino también la privada. En efecto, como señala Micheline Rousset (1996, p. 179), «en los años 70, los créditos privados se desarrollaron de una

manera rápida, substituyendo a los créditos públicos. Los países en vías de desarrollo, aprovechando el alza de los precios de las materias primas, tenían grandes proyectos de desarrollo. Los bancos disfrutaban de una liquidez abundante que intentaban rentabilizar. Efectivamente, el alza de los precios del petróleo había permitido a los países de la OPEP aumentar sus depósitos en los grandes bancos americanos y europeos, y estos intentaban “reciclar sus petrodólares”. Así, pensaron conseguir buenos clientes en los países en vías de desarrollo. Los proyectos industriales de los países prestatarios debían permitirles aumentar sus exportaciones para obtener las divisas necesarias para pagar los intereses». Sin embargo, añade esta autora (p. 180), «a principios de los 80, el extraordinario endeudamiento del tercer mundo estalló en plena luz con el anuncio hecho por México, en 1982, de su incapacidad para cumplir sus compromisos. Y otros países le siguieron». Como consecuencia de ello, «a principios de los 80, el FMI intentó poner en marcha las condiciones que permitirían el reembolso íntegro de la deuda: renegociación de plazos y medios financieros nuevos. Pero en vez de eliminar las dificultades, dichas medidas provocaron un aumento de la deuda que llegó al billón de dólares en 1985. Los programas de ajuste provocaron un empobrecimiento de amplias capas de la población y las consiguientes tensiones sociales en varios países: Egipto y Túnez, por ejemplo. Como los préstamos del FMI y del BM no son renegociables, los países prestatarios están obligados a garantizar prioritariamente el pago de los intereses a dichas organizaciones, para beneficiarse de nuevos fondos. Por lo tanto, las transferencias netas de capital resultaron favorables a los países desarrollados a partir de 1983. Entre 1983 y 1990, los flujos netos de capital hacia los países ricos representaron 150,5 millardos de dólares. ¡El Sur financiando al Norte!» (Rousselet, 1996, p. 182). A partir de 1983 se ha producido una transferencia neta de recursos financieros desde las naciones pobres a las ricas, de tal manera que, como subraya también Pedro Montes (1993, p. 76), son los países pobres los que están financiando el de los países ricos.

Tres grandes problemas son inherentes a la deuda soberana de los países, sobre todo de los más pobres: 1) la deuda es la cadena que les ata a los intereses de los países ricos y especialmente a los de la banca internacional; 2) el dinero de los préstamos se gasta generalmente en comprar armas y en artículos de lujo para las élites de esos países, lo que no fomenta el crecimiento económico ni la mejora

de la vida de la población, sino todo lo contrario; y 3) quién paga la deuda y los intereses derivados es principalmente la población, incluyendo a las siguientes generaciones. Explícitamente lo dice Susan George (en Rousselet, 1996, pp. 199-200): «Los africanos han tenido que pagar diez millardos de dólares anuales desde hace diez años, y por eso la misma cantidad no ha podido invertirse en satisfacer necesidades básicas. Las élites de estos países han logrado cargar a las espaldas de sus compatriotas el peso del reembolso de la deuda y se habla menos de ello. Se han aprovechado del dinero conseguido mediante la corrupción y la fuga de capitales al extranjero, que las devaluaciones recomendadas por el FMI revalorizan. Han decidido comprar armas y realizar proyectos de prestigio que actualmente se critican. Pero cuando llega la hora de pagar, les toca a los más pobres, que son los que sufren políticas de ajuste estructural. Los salarios reales han descendido del 30 al 90 por ciento. Los servicios públicos se degradan o desaparecen. Las élites que se pueden pagar servicios privados no se ven muy afectadas, al contrario, puesto que los obreros y los criados les salen más baratos. Por lo que respecta a los bancos, el Sur no es un problema, porque han podido diversificar sus riesgos de manera que la deuda del Sur no afecte demasiado a sus cuentas. En cuanto al FMI y al BM, sus estatutos precisan que no pueden cancelar ni reducir las deudas contraídas, y así han aumentado los préstamos destinados no a proyectos de desarrollo sino a favorecer el pago a los bancos. Y los deudores están obligados a cumplir con sus compromisos si quieren acceder a nuevas ayudas. Además, si no obedecen las recomendaciones del BM tendrán también dificultades para acceder a la ayuda bilateral. El BM y el FMI se encuentran en el centro de una tela de araña que aprisiona a estos países».

En concreto, entre las condiciones que impone el FMI a un país pobre para que el BM le conceda un préstamo destacan las siguientes (Chossudovsky, 2002):

1) Liberalización comercial: consiste invariablemente en la eliminación de cuotas de importación y la reducción y unificación de los aranceles, lo que lleva inevitablemente al desmantelamiento de la industria nacional, orientada básicamente al mercado interno, lo que, a su vez, fomenta el consumo de productos exteriores, sobre todo suntuarios, casi todos provenientes de los países más desarrollados. Ello, evidentemente no hace sino incrementar su deuda exterior de una forma brutal.

2) *Despojo y privatización de las empresas estatales*: el ajuste estructural constituye un medio para apoderarse de los activos reales de los países endeudados mediante el programa de privatización, de forma que las empresas estatales más rentables «son adquiridas por el capital externo o por empresas mixtas, a menudo a cambio de deuda. El producto de estas ventas, depositado en el tesoro, se canaliza hacia los clubes de Londres y París. El capital internacional obtiene el control o la propiedad de las empresas estatales más rentables a muy bajo costo. Además, dado el gran número de países endeudados que venden sus empresas públicas al mismo tiempo, el precio de la propiedad estatal se derrumba. En algunos países, la propiedad estatal de “sectores estratégicos” (petróleo, gas, telecomunicaciones) y servicios públicos está establecida en la constitución. La privatización de estos sectores puede requerir, como en el caso de Brasil, la previa enmienda de la constitución» (Chossudovsky, 2002, pp. 67-68). Ello supone una nueva suspensión y debilitamiento de la democracia.

3) *Reforma fiscal*: el FMI y el BM exigen a los países a los que conceden sus préstamos que introduzcan cambios fiscales, como son la bajada de impuestos a los más ricos o la sustitución de impuestos directos por otros indirectos. Todo ello supone un aumento de la carga impositiva para los grupos de ingresos medianos y bajos. Otra medida fiscal que se exige es el decreto de generosas exenciones fiscales al capital extranjero como forma de «atraer la inversión externa», aunque lo que hace esta medida es perjudicar el desarrollo económico de ese país.

4) *Tenencia de la tierra y privatización de las tierras cultivables*: se exigen también una serie de reformas agrarias consistentes en «otorgar títulos de propiedad a los agricultores, estimulando al mismo tiempo la concentración de tierras agrícolas en un número menor de manos. Los derechos consuetudinarios sobre la tierra también se ven afectados. La tendencia es hacia la confiscación o hipoteca de la tierra perteneciente a los pequeños agricultores, el crecimiento del sector agroindustrial y la formación de una clase de trabajadores agrícolas estacionales y sin tierra. [...] La privatización de la tierra tiene también como fin servir al pago de la deuda externa, ya que el producto de las ventas de tierras públicas aconsejadas por el BM se emplea para generar ingresos que se canalizan, por el tesoro nacional, a los acreedores internacio-

nales» (Chossudovsky, 2002, pp. 68-69). Todo ello lleva a un mayor empobrecimiento del país y una reducción de la propiedad comunal.

5) *Desregulación del sistema bancario*: ello tiene efectos muy dañinos para los países, entre otros estos tres: la pérdida por parte del banco central del control de la política monetaria que pasa a manos de los bancos comerciales internacionales, la eliminación de la banca pública que es sustituida por la banca extranjera y la entrada de «capital golondrino» atraído por tasas de interés artificialmente altas. Este capital recibe este nombre porque huye del país cuando encuentra otro donde los intereses son más altos, dejándolo sumido en la miseria y necesitando más préstamos que aumentarán su deuda.

6) *Liberalización de los movimientos de capital*: el capital extranjero puede circular libremente dentro y fuera del país, lo que permite a compañías extranjeras repatriar libremente sus ganancias en divisas.

7) *Reciclaje del dinero sucio hacia el servicio de la deuda*: la liberalización de los movimientos del capital estimula la «repatriación del capital fugado», ya sea del «dinero negro» (dinero que eludió la recaudación fiscal) o «dinero sucio» (proveniente del comercio ilegal o de actividades delictivas), lo que les viene muy bien a los acreedores, dado que es una forma de canalizar el dinero «sucio» y «negro», depositado en el extranjero, hacia el pago de la deuda externa, a la vez que les permite a las clases sociales privilegiadas lavar grandes sumas de dinero obtenidas ilegalmente.

A todo ello habría que añadir otra medida esencial exigida por el FMI: los recortes sociales, en especial el desmantelamiento del sistema de pensiones, de la sanidad y de la educación públicas. Por ejemplo, exige que el Estado deje de financiar la educación primaria y secundaria, con lo que la mayoría de las personas pobres se convertirán en analfabetas.

Las implicaciones sociales de todo ello son sintetizadas así por Chossudovsky (2002, pp. 76-77): «Debido a la falta de recursos se clausuran escuelas y los maestros quedan despedidos; en el sector salud, hay una recesión generalizada en la atención curativa y preventiva como resultado de la falta de equipo y materiales médicos, condiciones laborales deficientes y baja paga del personal médico. La falta de recursos se “compensa”, en parte, por el cobro de cuotas de registro y de

uso. [...] Este proceso, sin embargo, implica la privatización parcial de los servicios sociales esenciales del gobierno y la exclusión *de facto* de grandes sectores de la población (particularmente en las zonas rurales) que no pueden pagar las diversas cuotas vinculadas a los servicios de salud y educación. [...] Congelar el número de graduados de los colegios de formación de maestros y aumentar el número de alumnos por maestro son condiciones explícitas de los créditos de ajuste del sector social del BM. El presupuesto de educación se recorta, el número de horas-contacto que pasan los niños en la escuela se reduce y se instala un sistema de doble turno: ahora un maestro trabaja por dos, los restantes maestros son despedidos y los ahorros resultantes son canalizados por la Tesorería hacia los acreedores externos». Algo similar ocurre en el campo de la salud. En efecto, el FMI y el BM prohíben las ayudas estatales a la salud porque consideran que suponen una «distorsión indeseable del mercado», afirmando que un gasto de ocho dólares al año por persona es más que suficiente para obtener servicios médicos aceptables (Banco Mundial, 1993, p. 106). Además, exigen que las comunidades rurales empobrecidas participen en unidades de primeros auxilios sustituyendo a las enfermeras cualificadas y a los auxiliares médicos (pagados hasta ahora por el ministerio de salud) por voluntarios sin entrenamiento y semianalfabetos. Todo para que el Estado ahorre dinero al coste que sea para pagar su deuda externa. Una consecuencia de todo esto es la vuelta de enfermedades contagiosas ya desaparecidas, como el cólera, la fiebre amarilla, la malaria o el dengue. El pago de la deuda es prioritario y debe anteponerse a la satisfacción de las necesidades de la población.

En resumidas cuentas, «los pueblos de los países pobres se matan trabajando para financiar el desarrollo de los países ricos. El Sur financia al Norte, especialmente a las clases dominantes de los países del Norte. El medio de control más poderoso del Norte sobre el Sur es actualmente el servicio de la deuda. Los flujos de capitales Sur-Norte son excedentarios con respecto a los flujos Norte-Sur. Los países pobres pagan anualmente a las clases dirigentes de los países ricos mucho más dinero del que reciben de ellas, en forma de inversiones, créditos de cooperación, ayuda humanitaria o ayuda llamada al desarrollo» (Ziegler, 2006, p. 71). Así, añade Ziegler, las ayudas públicas al desarrollo aportadas por los países industriales del Norte en 2003 a los 122 países del tercer mundo ascendieron a 54.000 millones de dólares. Durante ese mismo año, estos últimos transfirieron

ron a los bancos del Norte 436.000 millones de dólares en concepto de pago de la deuda y sus intereses, que suelen ser de cinco a siete veces más elevados que los de los mercados financieros (Ziegler, 2006), de tal forma que la deuda absorbe la mayor parte de los recursos del país endeudado. Y cuando hay amenaza de insolvencia, el lazo se aprieta y el FMI exige realizar nuevos recortes presupuestarios. ¿Qué se recorta? «En ningún caso el presupuesto del ejército, los servicios secretos o la policía. Estas instituciones son esenciales para garantizar la seguridad de las inversiones extranjeras. El ejército, los paramilitares y los policías siempre protegen a los cosmócratas depredadores y sus instalaciones contra las amenazas, vengan de donde vengan. El FMI tampoco tocará la fiscalidad. Los impuestos indirectos, y especialmente al consumo, son aceptables: afectan en primer lugar a los pobres. Sin embargo, un impuesto progresivo sobre la renta (o sobre el patrimonio) se considera una herejía. El FMI no está para ayudar a la redistribución de la renta nacional. Existe para apretar las tuercas y garantizar el pago regular de los intereses de la deuda» (Ziegler, 2006, p. 77).

¿Y quién paga las consecuencias? La población general y sobre todo los más pobres. Las élites no, evidentemente. A los ricos les da igual que se cierren los colegios públicos, pues llevan a sus hijos a colegios privados, ni les preocupa que se deteriore la sanidad pública, pues ellos tienen ya su sanidad privada (a menudo los prestigiosos hospitales de Estados Unidos o de la Unión Europea). Un ejemplo claro de todo lo que estoy diciendo fue Tailandia (Ziegler, 2006): en julio de 1997, los especuladores extranjeros atacaron la moneda nacional, el baht, con la esperanza de obtener muchos y rápidos beneficios sobre una moneda débil. El Banco Central de Bangkok sacó centenares de millones de dólares de sus reservas y compró bahts en el mercado, intentando salvar su moneda. No sirvió de nada. Después de tres semanas de lucha, el Banco Central tiró la toalla y llamó al FMI. Este impuso nuevos préstamos al gobierno. Con estos nuevos créditos, Bangkok debía pagar prioritariamente a los especuladores privados. Así es como ninguno de los especuladores extranjeros perdió el menor céntimo en Tailandia. El FMI obligó también al gobierno a reducir el gasto público, a cerrar centenares de hospitales y escuelas, a suspender el arreglo de las carreteras y a revocar créditos que los bancos públicos habían concedido a las empresas tailandesas. Como resultado, en el plazo de dos meses cerraron miles de fábricas y centenares de miles de tailandeses y trabajadores inmigrantes perdieron sus empleos.

Otro ejemplo, algo diferente, fue Brasil. Con ocasión de una conversación con Éric Toussaint, mucho antes de su elección, Lula dijo: «Pensamos que ningún país del tercer mundo está en condiciones de pagar su deuda. Pensamos que los gobiernos del tercer mundo que deciden seguir pagando la deuda externa están optando por llevar a su pueblo al abismo. Existe una incompatibilidad total entre la política de desarrollo de los países del tercer mundo y el pago de la deuda. Pensamos que hay que suspender inmediatamente el pago de la deuda». ¿Por qué? Lula respondió: «Con el dinero destinado al pago de la deuda podemos crear un fondo de desarrollo destinado a financiar la investigación y el desarrollo de tecnologías, enseñanza, sanidad, reforma agraria, una política de progreso para todo el tercer mundo. Este fondo estaría controlado por el propio país, a partir de una instancia que habría que crear, y de la que formarían parte el Congreso, los movimientos sindicales, los partidos políticos; constituirían una comisión destinada a la administración de este fondo» (en Ziegler, 2006, p. 192-193). Pero cuando llegó a la presidencia, los acreedores, el BM, el FMI, Wall Street y la banca internacional no le permitieron a Lula llevar a cabo sus proyectos en este punto. Y comenzó una feroz guerra contra él y contra Brasil, sobre todo a partir del mes de agosto (de 2002), antes incluso de que Lula ganara las elecciones. El real fue atacado en todas las plazas financieras del mundo y perdió una parte importante de su valor. «El chantaje era de una claridad cristalina: si el pueblo brasileño tenía la desgraciada idea de elegir a Lula, el real se hundiría completamente y Brasil se convertiría en una nación de apestados. Todos los inversores extranjeros se retirarían de su territorio. Y se instalaría la miseria más negra» (Ziegler, 2006, p. 194). Y a las clases medias, añade Jean Ziegler, se les dijo que serían las primeras en ser liquidadas. En una economía en ruinas, pronto estarían como los pobladores de las favelas. La Rede Globo, la cadena nacional de televisión más influyente en Brasil, junto con otros medios (otras cadenas de TV, así como las emisoras de radio de derechas y los periódicos más influyentes, como *O Globo* o la *Gazzeta Mercantil*) difundieron tales predicciones apocalípticas. La reacción del Partido de los Trabajadores no se hizo esperar y a finales de agosto envió una carta al FMI garantizando que su candidato, si resultaba elegido, respetaría escrupulosamente todos los compromisos financieros asumidos por el presidente Fernando Henrique Cardoso. Lula ganó la segunda vuelta de las elecciones el 27 de octubre de 2002. Pero no pudo llevar adelante sus planes sobre la deuda de Brasil.

En suma, concluye Ziegler (p. 71), «ésta es la expresión misma de la violencia estructural que habita el orden actual del mundo. No hacen falta ametralladoras, napalm, carros blindados para dominar y someter a los pueblos. Para eso, ya está la deuda». Y por eso, lo mejor que puede hacer una nación para mantener su independencia y su libertad es no endeudarse, lo que, por otra parte, se consigue con un sistema fiscal progresivo y con políticas de austeridad. Ahora bien, la austeridad ha tenido históricamente al menos estos dos significados: el progresista y el conservador. «Durante mucho tiempo la idea de la austeridad había sido lúcidamente progresista y procedía del calvinismo. Hace tan solo unas décadas, la austeridad era uno de los instrumentos centrales de que se disponía para impugnar desde la raíz un modelo de crecimiento basado en el derroche y en el desaprovechamiento de los recursos naturales, una herramienta para sentar las bases de la sustitución del consumo más extremo y para luchar –más adelante se empezaría a hablar en estos términos– contra el cambio climático, considerado aceleradamente el problema más grave de la humanidad. El interrogante es en qué momento esta idea fuerza de una austeridad progresista se transformó en algo tan diferente como ha sido la política aplicada en Europa –especialmente en Europa del Sur– durante la Gran Recesión, y qué tiene que ver aquella austeridad con esta» (Estefanía, 2017, pp. 224-225). De hecho, hace más de cuarenta años, el secretario general del PCI, Enrico Berlinguer, adelantaba una versión de la austeridad muy distinta de la austeridad autoritaria de nuestros días y afirmaba que una sociedad más austera puede ser una sociedad más justa, menos desigual y más humana. Podemos decir que Berlinguer proponía lo que podríamos llamar una «austeridad de izquierdas», pero lo que nos han impuesto estos últimos años ha sido una «austeridad de derechas». Fueron dos profesores italianos de la Universidad de Harvard, Alberto Alesina y Silvia Andagna quienes teorizaron en 1998 sobre este tipo de austeridad. Según ellos, todo ajuste fiscal que base sus objetivos en recortar los gastos y vaya acompañado de una moderación salarial y de un proceso de devaluación tendrá carácter expansivo. O sea que, según ellos, los recortes de hoy llevarán al crecimiento de mañana. Sin embargo, no solo esto no está demostrado, sino que parece que es justamente al revés. En todo caso, aunque tuvieran razón, ¿qué pasa con los millones de personas que quedan por el camino, que pasan hambre e incluso mueren? Según los partidarios de estas teorías, eso no serían sino «meros daños colaterales» de la «austeridad expansiva». Sin embargo, como puntualiza Joaquín Estefanía

(2017, p. 229), «ha sido la propia realidad (lo sucedido en los países del sur de Europa, fundamentalmente en Grecia, Portugal y España) la que ha desacreditado y debilitado esas teorías, hechas suyas por la Alemania de Angela Merkel y, sobre todo, de su ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, [...] Si se analizan las porciones de “austeridad expansiva” que se han administrado en Europa, se puede concluir que ha habido menos crecimiento económico que antes, pero sobre todo que no se ha reducido la deuda pública ni se ha protegido a las poblaciones más debilitadas».

En suma, subraya Chossudovsky (2002, p. 73), «el proceso mismo de “apretarse el cinturón”, impuesto por los acreedores, socava la recuperación económica y la capacidad de los países para saldar su deuda. En otras palabras, las medidas subyacentes contribuyen a aumentar la deuda externa. [...] El paquete de estabilización económica destruye la posibilidad de un proyecto de desarrollo nacional. Las reformas del FMI-BM desmantelan brutalmente los sectores sociales de los países en vías de desarrollo, desbaratando los esfuerzos y las luchas del período poscolonial y revirtiendo “de un plumazo” el fruto de los progresos pasados. A lo largo de todos los países en vías de desarrollo aparece un patrón consistente y coherente: el paquete de reformas del FMI-BM lleva al desplome económico y social». Pero las políticas neoliberales sobre la deuda también hacen mucho daño a la población de los países desarrollados, de forma que, como resume Joaquín Estefanía (2017, p. 230), el resultado de tanta austeridad de derechas es evidente: «Somos más pobres, más desiguales, más precarios y estamos menos protegidos, y la naturaleza sufre un proceso de devastación acelerado».

3.4. Conclusión

Existen muchas medidas posibles para solucionar el problema del hambre, la pobreza y las enfermedades de los pobres. Y no hablo de medidas utópicas, sino de medidas que son perfectamente posibles, si hubiera suficiente voluntad política. «¿Acaso alguien puede creer que si se dedican billones de dólares a rescatar los bancos mientras se niegan unos pocos miles de millones para acabar con la muerte por hambre y falta de agua limpia de 35.000 personas cada día es porque hacer esto último es algo “técnicamente imposible”, “económicamente inviable o ineficiente”, “demasiado costoso”, “imposible de compatibilizar con otras prioridades de gastos”, etc.? ¿Alguien puede pensar de verdad que es por

razones de eficacia o técnica económica que se deje que los mercados actúen por su cuenta y sin ningún control social, que los multimillonarios y los grandes propietarios de capitales especulativos no paguen impuestos, o que el 60 % de los trabajadores del mundo estén empleados sin contrato alguno, ganando menos de dos dólares diarios y sin protección social de cualquier tipo? ¿Es posible que alguien crea que eso ocurre porque de verdad no se pueden hacer las cosas de otro modo? Es evidente que no. Si parece que las medidas alternativas a la crisis son irrealizables es solo porque se piensa en la lógica dominante en el actual sistema y, sobre todo, en el actual marco de relaciones de poder» (Gálvez y Torres, 2010, pp. 187-188). Lo que no puede ser una solución es pedir más préstamos al BM, pues, en ese caso, el FMI se encargará de defender los intereses de los acreedores al precio de hundir al país endeudado y de empobrecer aún más a su población.

Pero esa es la encrucijada en que se encuentran con frecuencia los países pobres. Si no reciben los préstamos que piden al BM no pueden salir adelante. Y si lo reciben, quedan entrampados, y sus dificultades para desarrollarse son todavía mayores. Así, esos países no podrán salir nunca de este círculo vicioso y quedarán sometidos permanentemente a los intereses de los países ricos y de la banca internacional, siempre con la inestimable ayuda del FMI, del BM y de la OMC. Así pues, «la deuda exterior actúa como un cáncer sin tratar. Aumenta constantemente. Inexorablemente. Este cáncer impide que los pueblos del tercer mundo salgan de la miseria. Y los conduce a la agonía» (Ziegler, 2006, p. 83). Niños sin poder ir a la escuela, enfermos sin poder entrar en un hospital ni ser atendidos por un médico, ancianos sin ingresos, etc. Sin embargo, esta situación tiene solución, si los países más poderosos y las personas más ricas quisieran solucionarla. De hecho, según UNICEF, dar acceso a la escuela a todos los niños de 6 a 15 años del mundo costaría unos 7.000 millones de dólares al año, durante diez años. Esta suma es inferior a lo que gastan anualmente los habitantes de Estados Unidos en compras de productos cosméticos. Es también inferior a lo que gastamos durante un año los europeos en helados. Como vemos, pues, la solución existe, solo es cuestión de voluntad política. La vida de muchos cientos de millones de personas está en juego.

CAPÍTULO 4

EL INCREMENTO DESMEDIDO DE LAS DESIGUALDADES Y SUS CONSECUENCIAS¹

4.1. Introducción

El tema de la desigualdad es central para la sociedad y para la vida de los individuos. Pero se trata de un tema que apenas ha sido analizado, ni en economía ni en sociología y menos aún en psicología social. Es más, algunos economistas, como Robert Lucas, llegan a afirmar explícitamente que la economía no debe preocuparse para nada de la desigualdad, solo del crecimiento. Igualmente, Martin Feldstein, profesor en Harvard, afirma categóricamente que «el énfasis debe ponerse en la eliminación de la pobreza y no en la distribución global del ingreso o en la magnitud general de la desigualdad» (2005, p. 12). Sin embargo, algunos autores, como iremos viendo en este libro, han mostrado la gran importancia que tiene la desigualdad en prácticamente todas las esferas de la vida humana, tanto individual como colectiva.

Por otra parte, los críticos de la actual globalización solemos decir que la desigualdad económica es mayor hoy día que nunca antes. Debo matizar esta afirmación. Se dice también que el capitalismo ha reducido la pobreza y la desigualdad, lo que no es cierto. Los datos disponibles señalan que la industrialización capitalista produjo una mayor desigualdad en el siglo XIX, como se

1 Ya en mi libro *Los perdedores del nuevo capitalismo* (Ovejero, 2014a), dediqué un capítulo al tema de las desigualdades producidas por el nuevo capitalismo y sus consecuencias. Remito al lector a aquel capítulo del que, en todo caso, rescato algunos datos aquí.

constata en Francia y en Alemania (Morrison, 2000), en Suecia y en los Países Bajos (Morrison, 2000) o en Estados Unidos e Inglaterra (Lindert, 2000). Sin embargo, a lo largo del siglo XX, «en todos los centros del capitalismo se produjo una reversión hacia la igualdad. Dicha reversión comenzó con la Primera Guerra Mundial en Europa y con la depresión de los años treinta en Estados Unidos y se mantuvo hasta la crisis del petróleo de los setenta» (Thertorn, 2015, p. 83). Pero esta tendencia igualatoria se produjo más por la reducción de los recursos de los de arriba que por el incremento de los de abajo. Pero a partir de 1980 las desigualdades volvieron a aumentar mucho en prácticamente todos los países, sobre todo en aquellos más neoliberales, como EE. UU., el Reino Unido o Chile. Uno de los autores que mejor han estudiado este tema, Walter Scheidel (2018), afirma que «la desigualdad creció o se mantuvo bastante estable durante casi toda la historia documentada y las reducciones significativas han sido infrecuentes» (p. 40). De ahí la sorprendente importancia que tiene el hecho del enorme incremento de la desigualdad durante los últimos cuarenta años. No es cierto, como muchos creen, que la desigualdad es inherente a la especie humana y a nuestras sociedades. No es así. De hecho, a lo largo de la historia ha habido civilizaciones que han sido muy igualitarias (Kropotkin, 2005/1902), como muchas de las existentes en América antes de llegar los castellanos (Clastres, 1978, 1981, 1986). Y entre 1914 y 1980 la desigualdad se redujo mucho en casi todo el mundo. «Por primera vez desde la peste negra, en una escala sin par desde la caída del Imperio romano, el acceso a los recursos materiales estaba distribuido de manera mucho más equitativa y, lo que es aún más inusual, en grandes extensiones del planeta. Al final de esta “gran comprensión”, normalmente en las décadas de 1970 o 1980, la desigualdad efectiva tanto en el mundo desarrollado como en los países en vías de desarrollo más poblados de Asia había caído a unos niveles desconocidos desde la transición al sedentarismo y la domesticación alimentaria miles de años antes» (Scheidel, 1918, p. 131).

Por otra parte, aunque, al parecer, el análisis de la historia humana indica que las pestes y pandemias han sido uno de los pocos factores que han contribuido a reducir la desigualdad, los datos actuales indican que la pandemia de la covid-19 está incrementando la desigualdad en el planeta. A mi modo de ver, una pandemia puede aumentar la desigualdad o puede reducirla, dependiendo de cómo se gestione. «Es por eso por lo que las consecuencias de la pandemia deben ser

aprovechadas por las fuerzas políticas que defienden proyectos igualitarios y emancipadores. Las izquierdas y todas las opciones políticas preocupadas por el aumento de la desigualdad en las últimas décadas deben aprovechar el contexto actual y tener en cuenta que la igualdad no solo se consigue con movilización y luchas, o con victorias electorales, por aplastantes que estas sean. Para combatir la desigualdad hace falta dar la batalla por las ideas. Producir marcos ideológicos coherentes que aúnen ambición política y posibilidades prácticas. El debate, la reflexión, la experimentación, la negociación y el acuerdo alrededor de qué instrumentos o mecanismos son los más justos para combatir la desigualdad son vitales para que estos sean considerados legítimos socialmente y eficaces en su cometido. Sin poder y sin alternativas ideológicas consistentes no hay cambio posible. La izquierda, por lo tanto, no debe olvidar la batalla cultural si quiere realmente reducir la desigualdad que rompe sociedades y deshumaniza al individuo. Una batalla ideológica que deben llevar a cabo las instituciones u organizaciones de intermediación como son los partidos o los sindicatos» (Ríos Fernández, 2022).

¿Cómo produce la desigualdad el capitalismo? De diferentes maneras, pero la más habitual es la siguiente: «Cuando la tasa de rendimiento del capital supera de modo constante la tasa de crecimiento de la producción y del ingreso –lo que sucedía hasta el siglo XIX y amenaza con volverse la norma en el siglo XXI–, el capitalismo produce mecánicamente desigualdades insostenibles, arbitrarias, que cuestionan de modo radical los valores meritocráticos en los que se fundamentan nuestras sociedades democráticas» (Piketty, 2014, p. 15). Y es lo que está ocurriendo ahora como nunca lo había hecho antes en el siglo XX. De hecho, se pregunta Thomas Piketty (2014, p. 473): «¿Podrían llevar las fuerzas de la globalización financiera, en el siglo que se inicia, a una concentración del capital aún más grande que todas las observadas en el pasado? ¿O quizá esto ya ha ocurrido? [...] ¿Va a incrementarse de manera ilimitada en el siglo XXI el porcentaje del capital mundial propiedad de los ultrarricos que aparecen en las revistas?». Todo parece indicar que de momento eso es así. En efecto, añade Piketty más adelante (p. 482): «Hoy en día, la participación del 0,1 % más rico es propietario del 20 % de la riqueza toda del planeta y el 1 % más rico tiene casi el 90 % de tal riqueza, mientras que los 3.700 millones más pobres de la población mundial poseen menos del 5 % de la riqueza mundial. Por ejemplo, solo entre 1990 y 2010, la

fortuna de Bill Gates pasó de 4.000 millones de dólares a 50.000 millones, o en Francia, la riqueza de Liliane Bettencourt pasó de 2.000 millones de dólares a 25.000 millones.

4.2. Algunos datos

Desde finales del siglo XVIII hasta 1980 hemos asistido a un proceso continuado de reducción de la desigualdad. Pero tal reducción no se debió al capitalismo sino a las movilizaciones sociales y sindicales, de tal manera que, a partir de 1980, cuando las élites económicas consiguieron derrotar a los sindicatos y reducir drásticamente las movilizaciones obreras, nuevamente aumentaron las desigualdades. De ahí que Thomas Piketty (2021, p. 10) concluya que «la tendencia a largo plazo hacia la igualdad es constatable desde finales del siglo XVIII, pero ha tenido un alcance limitado». En efecto, añade Piketty, «las diversas desigualdades siguen situándose en niveles considerables e injustificados en cualquier caso (estatus, propiedades, poder, ingresos, género, origen, etc.), y además suelen acumular sus efectos a nivel individual. Constatar la existencia de una evolución hacia la igualdad no significa que haya que sacar pecho, al contrario. Es más bien un llamamiento para continuar con la lucha, a partir de una base histórica sólida. Centrarse en cómo se ha producido realmente la evolución hacia la igualdad permite extraer lecciones valiosas de cara al futuro, para comprender mejor los conflictos y las movilizaciones que han hecho posible dicha evolución, así como los mecanismos institucionales y los sistemas legales, sociales y fiscales, educativos y electorales que han permitido que la igualdad se haya convertido en una realidad perdurable». Por eso tenemos que tener muy presente que el actual capitalismo no es algo irreversible: existen siempre otras alternativas.

Aunque no es fácil hacer esta afirmación, sin embargo, podemos decir que nunca había habido una desigualdad tan grande como ahora. Por ejemplo, en 1688 la renta anual de las 186 familias más ricas de Inglaterra era de 2.600 libras esterlinas al año como media, mientras que las 450.000 familias más pobres tenían una renta anual de 15,5 libras cada una, es decir, 168 veces menos (Phelps, 1999, p. 22), lo que, aunque refleja una desigualdad escandalosa, era muchísimo menor que la actual. Y las diferencias entre países no eran tan profundas como hoy día. En efecto, los historiadores calculan que la brecha entre el país más rico y el más

pobre podía ser de 5 a 1, y que los ingresos por persona en los países europeos apenas era el doble que el de India o China (Landes, 2000), mientras que la diferencia entre los diez países más ricos del mundo y los diez más pobres puede ser ahora de 30 a 1, y de 400 a 1 la brecha entre Suiza y Mozambique (Milanovic, 2005, pág. 53) y la renta per cápita de Qatar supera a la del país más pobre en 428 veces. No olvidemos que una persona que haya nacido en Noruega o Suecia tendrá una mucho mayor esperanza de vida y más oportunidades sanitarias y educativas que otra persona nacida en el África subsahariana o en algún país pobre de Asia o de América Central, donde la esperanza de vida es de unos 32 años menos.

Las desigualdades se observan de una forma especial en las grandes empresas. En efecto, como señalan Wilkinson y Pickett (2009), en 2007, los directores ejecutivos de las 365 mayores empresas de Estados Unidos cobraban más de quinientas veces el salario del empleado medio, y tales diferencias no han hecho sino aumentar desde entonces, a pesar de la crisis. De hecho, en las quinientas empresas reseñadas por *Fortune*, las diferencias salariales en 1997 eran casi diez veces mayores que en 1980, que es justo cuando más empezaron a subir las desigualdades, gracias a las políticas del neoliberalismo controlando el poder económico mundial.

De igual forma, ya en 1996 informaba la ONU de que las 358 personas más ricas del mundo tenían tantos recursos como los 2.300 millones más pobres, pero en 2001 ya eran solo 225 las personas que tenían más riqueza que los 3.000 millones de personas más pobres, en 2014 solamente las 85 personas más ricas (78 hombres y 7 mujeres) sumaban tanto dinero como 3.570 millones de pobres del mundo. Los informes recientes de Oxfam muestran que actualmente «8 personas poseen ya la misma riqueza que 3.600 millones de personas, la mitad más pobre de la humanidad» (Oxfam, 2017, pág. 1) y que el «82 % del crecimiento de la riqueza mundial del último año ha ido a parar a manos del 1 % más rico, mientras que a la mitad más pobre de la población mundial no le ha llegado nada de ese crecimiento» (Oxfam Intermon, 2018, pág. 12). Aunque la proporción del 1 % y el 0,1 % más rico es llamativa, el hecho de centrarse en estos grupos conlleva el riesgo de ocultar otro problema creciente en materia de desigualdad: la disminución y el estancamiento de las condiciones de vida de los hogares de ingresos medios» (PNUD, 2018, p. 4). Y todo parece indicar que, al contrario

que en otras pandemias, en la actual de la covid-19 están aumentando aún más las desigualdades. Así, el último informe de Oxfam Intermon (2022) señala que la fortuna de los diez hombres más ricos del mundo se ha más que duplicado, pasando de 700.000 millones de dólares a 1,5 billones de dólares (1.300 millones de dólares al día) durante los primeros dos años de la pandemia, mientras han bajado los ingresos del 99 % y los pobres han aumentado en más de 160 millones. En España, según este mismo informe, solo durante el primer año de pandemia, más de un millón de personas pasaron a encontrarse en situación de carencia material severa, mientras la riqueza de los 23 principales multimillonarios creció un 29 %.

Como vemos, las cifras de desigualdad se hacen cada año más dramáticas: esa es la consecuencia obscena del cada vez mayor poder de los más ricos y de las empresas transnacionales; y de la crisis financiera de 2008-2010 que tanto benefició a quienes eran sus responsables. De hecho, cada día mueren por hambre y por enfermedades fácilmente curables –es decir, mueren de «pobreza»– unas 80.000 personas, la mayoría de ellas, unas 50.000, niñas y niños menores de cinco años. El empeoramiento de esta situación es tal que en algunos países la esperanza de vida ha bajado y la mortalidad infantil ha subido durante los últimos años, a pesar de los grandes avances de la medicina. Y todo ello es más grave aún si tenemos en cuenta las consecuencias tan graves que tienen las desigualdades, como muestran diferentes estudios (Wilkinson, 2001; Wilkinson y Pickett, 2009), dado que, entre otras cosas, deterioran muy seriamente la calidad de vida de todos los humanos, ricos y pobres. Pero ello se hace más peligroso aún si tenemos en cuenta que un estudio del Carnegie Institute demostraba en 1979 que el futuro de cualquier persona depende mucho más de las circunstancias sociales que tuvo de niño, de su lugar geográfico de nacimiento y de la situación social y económica de sus padres que de su talento y de sus esfuerzos, de forma que, por ejemplo, el hijo de un abogado de una gran empresa tenía 27 veces más probabilidades que el hijo de un empleado eventual de esa misma empresa de recibir a los 40 años un salario que esté en el 10 por ciento más alto de su país, aunque los dos hubieran estado en la misma clase, tuvieran el mismo cociente intelectual y hubieran obtenido las mismas notas (Bauman, 2014).

Sin embargo, como iremos viendo, la pobreza no es una fatalidad producida por el azar o por factores no controlables, sino debida a las políticas que gobiernos

y grandes empresas llevan a cabo, y que no parece quieran rectificar. Así, el BM, que dice interesarse por la pobreza, no se preocupa por la desigualdad, con lo que, «al abordar los abusos visibles y no la lógica invisible, contribuye a la reproducción de esta última» (Houtart y Polet, 2001, p. 78). Y es que hoy día el problema más importante del mundo es el de la desigualdad, más que el de la pobreza (aunque ambas cosas están muy relacionadas), porque está estrechamente vinculado con el desequilibrio de poder entre unos y otros.

Por otra parte, existen muchas pruebas de que el incremento desmesurado de la desigualdad a partir de 1980 es una de las consecuencias directas del éxito y auge del neoliberalismo y de sus políticas. Un ejemplo claro lo constituye Estados Unidos. En efecto, la evolución de la desigualdad de ingresos observada en ese país «viene dada en gran medida por una enorme desigualdad educativa, en el marco de (i) un sistema tributario cada vez menos progresivo en un contexto de crecimiento en las remuneraciones de los trabajadores de mayores ingresos desde 1980; y (ii) el incremento significativo de los ingresos por capital de los mejor remunerados en los 2000» (World Inequality Lab, 2017, pp. 6-7). Además, las políticas neoliberales están consiguiendo que se esté reduciendo mucho la riqueza nacional pública, lo que hace que los Estados tengan menos recursos para ayudar a las personas y familias necesitados, lo que, obviamente, está aumentando la desigualdad. En efecto, «desde 1980 se observan en prácticamente todos los países, tanto ricos como emergentes, transformaciones de gran tamaño en la propiedad de la riqueza, que pasa del dominio público al privado. Así, mientras la riqueza nacional (pública más privada) ha crecido de manera notable, la riqueza pública se ha hecho negativa o cercana a cero en los países ricos (las deudas superan a los activos). Esto limita la capacidad de los gobiernos para reducir la desigualdad, y ciertamente tiene implicaciones importantes para la desigualdad de riqueza entre los individuos» (World Inequality Lab, 2017, p. 10). Por tanto, añade este informe: «En las últimas décadas, los países se han vuelto más ricos mientras que los gobiernos se han vuelto pobres». Y no olvidemos que la relación entre la riqueza pública y privada es un determinante crucial del nivel de desigualdad de los países. De hecho, la disminución de la renta pública en prácticamente todos los países limita la capacidad de los gobiernos para regular la economía, redistribuir los ingresos y reducir la desigualdad. Así, en Estados Unidos, la participación del 1 % más rico en la renta nacional ha pasado del 22 %

al 39 % entre 1980 y 2014, incremento que es más desmedido aún en el 0.1 % más rico» (World Inequality Lab, 2017, p. 13). En otros países, como Francia, tal incremento ha sido más moderado, pero China y Rusia, en su transición del comunismo al capitalismo, han experimentado incrementos significativos en la concentración de la riqueza, de forma que el 1 % más rico duplicó su participación tanto en China como en Rusia entre 1995 y 2015, pasando de 15 % a 30 % en el primer caso y de 22 % a 43 % en el segundo (World Inequality Lab, 2017, p. 13).

Por otra parte, en las dos últimas décadas, el 20 % más rico de la humanidad poseía el 83 % de los ingresos globales, mientras que el 20 % más pobre tenía tan solo 1 % de tales ingresos (Mestrum, 2018, p. 97). El índice de Gini global era de 0,43 en 1820, aumentó a 0,56 en 1850, a 0,61 en 193, a 0,64 en 1950, a 0,68 en 1980 y hasta 0,71 en 2002 (Ortiz y Cummins, 2011). Además, a menudo la desigualdad aumenta incluso cuando hay altas tasas de crecimiento. Así, en China, el coeficiente Gini subió de 0,32 a principios de los 1990 a 0,43 a finales de los 2000. En el conjunto del continente asiático, el coeficiente Gini pasó de 0,39 a 0,46 en el mismo período (Banco Asiático de Desarrollo, 2012, p. 19). Por impresionantes que puedan ser estas cifras, si se analiza la desigualdad en términos de riqueza (no de ingresos), el resultado es incluso peor (Naciones Unidas, 2013, p. 33). El 1 % más rico de la población posee la mitad de la riqueza del mundo (Oxfam Intermon, 2014). Y mientras, grandes cantidades de dinero están en paraísos fiscales, lo que camufla el problema de la desigualdad, que es aún mucho mayor de lo que se dice. Y las previsiones de futuro que hace el *Informe de la World Inequality Lab* (2017, pp. 14-15) son aún peores, sobre todo teniendo en cuenta los efectos tan dramáticos de la pandemia sobre la pobreza y la desigualdad, de forma que, concluye este informe, de continuar las tendencias actuales, la riqueza del 0.1 % más rico del mundo será equivalente a la de toda la clase media en 2050.

En suma, si es cierto que «la historia de la sociedad capitalista es la historia de la desigualdad» (Torres y Montero, 1999, p. 78), también lo es que tal desigualdad está incrementándose muy peligrosamente en las últimas décadas. El número de millonarios está aumentando, pero el número de pobres más aún. Y lo que es peor, esa desigualdad está aumentando tanto en períodos de recesión económica como en períodos de expansión, lo que está siendo posible, entre otras razones, porque la manipulación informativa ha conseguido que el problema de la desigualdad pase desapercibido.

4.3. Qué es la desigualdad y cómo se mide

El tema de la desigualdad es tan importante que muchos sociólogos opinan que se trata del «núcleo o elemento central de la sociología» (López-Aranguren, 2005, p. 59). Sin embargo, sostiene este autor que «lo que interesa destacar de este proceso es que la desigualdad no es un fenómeno natural sino el resultado de un proceso social; es decir, se explica en función de las diferentes formas en que se organiza una comunidad para atender sus necesidades fundamentales. Más en concreto, argumenta López-Aranguren, «la desigualdad social es la condición por la cual las personas tienen un acceso desigual a los recursos de todo tipo, a los servicios y a las posiciones que la sociedad valora. Las sociedades occidentales industrializadas contemporáneas son sociedades de clases sociales, es decir, la estructura de clases es el rasgo fundamental de las sociedades capitalistas. De manera que la desigualdad está ligada a la clase social, pero también está ligada al género, a la etnia, a la religión y a la edad. Las formas extremas de desigualdad toman la forma de opresión económica, o política, o religiosa, o cultural; y en su manifestación más extrema llega a lo que se denomina exclusión social» (2005, p. 61). Es más, añade este autor (pp. 62-63), «en una sociedad de clases la desigualdad está institucionalizada, es inherente a la estructura y funcionamiento de las instituciones, pero nadie cuestiona este orden de cosas, lo aceptamos como normal. [...]. En una sociedad de clases, la desigualdad está, además, legitimada. La forma principal de legitimación de la desigualdad es la creencia generalizada en que la distribución diferencial de los recursos, servicios y posiciones que valoramos es normal, natural, justa. Esta creencia se adquiere en el proceso de socialización y es mantenida por medio de ciertos artefactos a los que atribuimos una calidad científica», como es el caso del cociente intelectual (Ovejero, 2003).

Por su parte, Göran Therborn (2015, p. 11) define la desigualdad como «una violación de la dignidad humana, una negación de la posibilidad de desarrollo de las capacidades humanas. Puede adoptar múltiples formas y tiene múltiples consecuencias: muerte prematura, mala salud, humillación, subyugación, discriminación, exclusión del conocimiento o de la vida social predominante, pobreza, impotencia, estrés, inseguridad, ansiedad, falta de confianza en uno mismo y de amor propio y exclusión de las oportunidades que ofrece la vida».

Existen dos formas básicas de ver la desigualdad: la conservadora y la progresista (López-Aranguren, 2005, p. 70): la primera defiende que la desigualdad es justa, necesaria e inevitable, pues creen que cada uno tenemos lo que nos merecemos; la segunda, en cambio, afirma que la desigualdad es injusta, pero que es posible evitarla o, al menos, reducirla significativamente, por lo que los progresistas creen que es posible conseguir una sociedad más igualitaria y más justa. Por tanto, mientras el objetivo de los conservadores es mantener el *statu quo* y, por tanto, defienden los privilegios de los más ricos y poderosos, los progresistas, en cambio, tienen como objetivo introducir cambios sociales radicales que mejoren la situación de los más pobres y que se dirijan a la consecución de una sociedad más igualitaria, más justa y más solidaria. Y existen diferentes tipos de desigualdad: económica (desigualdad de riqueza y de renta), política (desigualdad de poder) y social (desigualdad de honor o prestigio social), aunque son las dos primeras, estrechamente relacionadas entre sí, las más importantes.

En cuanto a las formas de medir la desigualdad, tal vez la más utilizada sea el coeficiente Gini, que mide la desigualdad en todas las capas sociales en lugar de considerar solo los extremos. Si toda la renta fuese a parar a una sola persona (desigualdad máxima) y el resto no recibiera nada, el coeficiente Gini sería de 1. Pero si la renta se compartiese de una manera igualitaria y todos tuvieran exactamente los mismos ingresos (total igualdad), el Gini sería de cero. O sea, cuanto más bajo sea su valor, más igualitaria es una sociedad y cuanto más alto sea, menos igualitaria es. Pues bien, el índice Gini está mostrando que en los últimos 30 años la desigualdad está aumentando en casi todos los países (Caparrós, 2015, p. 359): China pasó de tener un Gini de 0,27 en los años ochenta al 0,48 actual; en ese periodo Suecia pasó de un coeficiente de 0,20 a otro de 0,25, Alemania de 0,24 a 0,32, y en Gran Bretaña de 0,26 a 0,40. Y lo que es peor, el coeficiente Gini de la desigualdad del mundo –si se comparan los ingresos de todos los habitantes del mundo– es de 0,70, lo que refleja una enorme desigualdad.

Las desigualdades entre países, que eran inherentes al capitalismo ya en sus primeras fases, se hicieron más grandes con la colonización. «Desde aproximadamente 1870 las naciones industrializadas más desarrolladas se dedicaron a anexionarse el resto del mundo, de común acuerdo, pero también con gran rivalidad entre ellas. La necesidad de tener y mantener colonias se argumentó a menudo en términos económicos por los británicos, partidarios de la expansión

colonial porque consideraban que el imperio era el único modo de mantener mercados en un mundo crecientemente proteccionista. También los europeos del continente eran partidarios de la expansión colonial porque consideraban que era la única forma de conseguir la riqueza de que disfrutaba Gran Bretaña» (López-Aranguren, 2005, p. 113). Y fue el desarrollo de aquella cruel colonización lo que explica la creciente desigualdad entre países ricos y países pobres. En poco tiempo, el mundo se polarizó a nivel económico. Merece la pena revisar lo que escribió Lenin sobre el imperialismo para entender mejor el colonialismo y sus efectos sobre los países colonizados. Según Lenin, en su libro *El imperialismo, fase superior del capitalismo*, define el imperialismo con estos cinco rasgos esenciales: 1) la concentración de la producción y del capital, que conduce a la creación de los monopolios; 2) la fusión del capital bancario con el capital industrial, lo que conduce a la creación de la oligarquía financiera; 3) la exportación de capitales adquiere una importancia particularmente grande; 4) la formación de asociaciones internacionales monopolistas de capitalistas que se reparten el mundo; y 5) la terminación del reparto territorial del mundo entre las potencias capitalistas más importantes, expandiéndose enormemente el colonialismo.

Ello puso las bases para que los países pobres tuvieran muy difícil salir de la pobreza a causa principalmente de su escaso poder frente a los países ricos y frente a las grandes empresas transnacionales. Después, su creciente deuda externa les dificultó aún más salir de la pobreza, pues su riqueza apenas sirve para pagar los intereses de la deuda, quedándoles muy pocos recursos para su propio desarrollo económico y social. Ello crea una situación de pobreza tal que obliga a su población a emigrar. Pero lo grave es que quienes emigran son especialmente los jóvenes, sobre todo los que ya tienen una formación educativa y/o profesional, lo que empobrece aún más a esos países, pues pierden sus mejores cabezas y sus mejores brazos, pierden sus mejores recursos humanos. ¿Cómo salir así de la pobreza? La consecuencia es la cada vez mayor desigualdad entre países ricos y países pobres.

Y lo que es peor, como ya he dicho, cuando un país pobre deba pedir un nuevo préstamo al BM –lo que es frecuente– el FMI le hará aceptar el «plan de ajuste estructural» que normalmente le exigirá al Gobierno reducir los gastos en sanidad o en educación (pero no en compra de armas) para tener recursos con los que hacer frente al pago de la deuda. Y ese plan también suele exigirles a

los países endeudados abrir sus mercados a las importaciones de los países más desarrollados, lo que socava su economía local y destruye la forma de vida de los agricultores, artesanos y pequeños fabricantes locales, que se arruinan y tienen que emigrar a las grandes ciudades o salir fuera del país. Y mientras, los países más ricos financian las exportaciones de sus productos agrícolas, con lo que la ruina de la agricultura de los países pobres ya es completa, lo que incrementa mucho las desigualdades entre naciones ricas y naciones pobres.

4.4. Algunos fenómenos están agravando las desigualdades

Como ya dije, las dos guerras mundiales y la pandemia de 1918, aunque de esta casi no se habla, redujeron mucho la desigualdad. Así, Japón, que había sido uno de los países más desiguales del planeta, donde, en 1938, el 1 % más rico recibía el 19,9 % de todos los ingresos brutos y transferencias, redujo ese porcentaje en los siete años siguientes hasta el 6,4 %, y el porcentaje de ingresos del 0,1 % más rico se redujo del 9,2 % al 1,9 %. Y mayor aún fue el descenso del patrimonio de esta élite, de forma que el del 1 % más rico se redujo un 90 % entre 1936 y 1945 y casi un 97 % entre 1936 y 1949, mientras que el del 0,1 % más opulento bajó un 93 % y un 98 %, respectivamente. Por tanto, «en lo tocante a los ingresos de las élites, Japón pasó de ser una sociedad cuya distribución era tan desigual como la de Estados Unidos en vísperas de la caída de la bolsa de 1929 –un nivel máximo para el 1 %– a equipararse con la de la Dinamarca actual, el país más igualitario en lo relativo a porcentaje de ingresos más elevados. Y la riqueza de las élites prácticamente había quedado erradicada» (Scheidel, 1918, p. 136). Algo similar, aunque menos pronunciado, ocurrió en países como Alemania, Canadá, EE. UU., Francia, Italia o Reino Unido. Como añade Scheidel, la guerra total redujo la desigualdad en un grado sin precedentes en la historia, a causa sobre todo de la movilización de millones de soldados, que llevó a estos dos fenómenos: una subida progresiva de impuestos, que transfirió un 70 % de las propiedades de los más ricos al Estado, y una fuerte inflación, que evaporó el dinero que los ricos tenían en renta fija. Por tanto, concluye Scheidel (1918, pp. 149-150), «la guerra y los años inmediatamente posteriores fomentaron un cambio secular, que sustituyó a una clase rica y poderosa de accionistas que habían controlado la gestión y exigían elevados dividendos por un sistema corporativo más igualitario de empleo de por vida, salarios en función de la antigüedad y sindicatos

en las empresas. Además de reestructurar las empresas y sus relaciones con los trabajadores y la reforma agraria, los impuestos progresivos fueron un mecanismo esencial para mantener la igualdad que afloró durante la guerra». De forma similar, también Thomas Piketty afirma que «en gran medida, la reducción de la desigualdad a lo largo del siglo transcurrido era el producto caótico de las guerras y de los choques político-económicos provocados por estas, y no el resultado de una evolución gradual, consensual y tranquila» (2014, p. 300).

Ahora bien, ¿por qué volvió a subir mucho la desigualdad a partir de 1980? Como estamos viendo, son muchos los factores que están llevando a un aumento imparable de las desigualdades, entre los que habría que decir algo de algunos fenómenos más recientes, como son los relacionados con la fiscalidad y los paraísos fiscales, la reducción progresiva de la riqueza nacional, el cambio climático, la crisis financiera de 2008 o la actual pandemia de la covid-19. Aunque la fiscalidad es uno de los instrumentos más eficaces para reducir la desigualdad, el fraude fiscal, en especial a través de los paraísos fiscales, está disminuyendo mucho esa eficacia. De hecho, «los activos en paraísos fiscales se han incrementado considerablemente desde la década de 1970, y en la actualidad representan más del 10 % del PIB mundial» (World Inequality Lab, 2017, p. 15). Ciertamente, el fraude fiscal no es algo nuevo, pero la globalización neoliberal lo ha incrementado hasta niveles realmente asfixiantes para los Estados y, por tanto, enormemente lesivos para las personas y los grupos más desfavorecidos y para el estado del bienestar en general. Un alto fraude fiscal dificulta mantener una buena sanidad, un adecuado sistema escolar o unas pensiones dignas. Y son principalmente las grandes empresas las que se están aprovechando de este sistema para no pagar sus impuestos, trasladando, por ejemplo, los beneficios a lugares que apliquen impuestos más bajos.² Así, según un informe del PNUD (2016), la Comisión Europea (2016) determinó en agosto de 2016 que el tipo efectivo del impuesto sobre sociedades que pagó Apple fue un 0,005 % en el ejercicio fiscal 2014, gracias a un régimen especial de impuestos vigente en Irlanda, donde podían registrarse los beneficios de las ventas en toda Europa. Ello hizo que, como apunta el

2 En Estados Unidos, por poner solo un ejemplo, estas empresas solo aportan «el 9 % de la recaudación fiscal frente al 32 % de 1952 [...] el Tesoro está dejando de recaudar 90.000 millones de dólares anuales» (Pozzi, 2011, p. 15).

World Inequality Lab (2017, pp. 4-5), desde 1980, «la desigualdad de ingresos se ha incrementado rápidamente en Norteamérica, China, India y Rusia, mientras que ha crecido moderadamente en Europa. Desde una perspectiva histórica más amplia, este incremento marca el fin del régimen igualitario de postguerra, que tomó distintas formas en estas regiones» (2017, pp. 4-5). Existen pruebas de que el incremento de la desigualdad en el mundo es una consecuencia directa de las políticas del neoliberalismo, sobre todo de las fiscales, y del fraude al fisco.

Otro fenómeno que viene dándose desde el comienzo del poder neoliberal, en 1980, es el de la reducción progresiva de la riqueza nacional pública en casi todos los países, lo que hace que los Estados tengan menos recursos para ayudar a las personas y familias necesitadas y, por tanto, para reducir la desigualdad del país. La consecuencia se hace ver con claridad: «La combinación de privatizaciones a gran escala con el incremento de la desigualdad de ingresos ha potenciado la concentración de la riqueza» (World Inequality Lab, 2017, p. 12).

En cuanto al indiscutible cambio climático que empezó ya hace tiempo y que se está agravando día a día, hay que decir que uno de sus efectos va a ser –está siendo ya– un mayor aumento de la desigualdad. Según Oxfam Intermon, la gran mayoría de las víctimas del cambio climático son precisamente las más pobres, las que viven en países que contribuyen en menor medida al cambio climático (Oxfam Intermon, 2015). Nos encontramos en un punto clave de la historia de la humanidad y del planeta. En efecto, como señala un reciente informe del PNUD (2020), existe entre los científicos la creencia generalizada de que estamos saliendo del Holoceno, que ha durado unos 12.000 años y durante el cual nació la civilización humana, y entrando en una nueva época geológica, el Antropoceno, donde los seres humanos somos una fuerza dominante que condiciona el futuro del planeta y el cambio climático. La pregunta crucial es: ¿qué vamos a hacer para gestionar esta nueva y peligrosa situación? No parece que estemos dispuestos a hacer mucho. Un ejemplo evidente es lo que ocurrió el pasado mes de julio cuando el ministro de Consumo, Alberto Garzón, hizo unas declaraciones a favor de moderar nuestro consumo de carne para mejorar nuestra salud y para contribuir a la sostenibilidad del planeta, dado que la producción masiva de animales –principalmente en enormes granjas industriales– reduce la extensión de tierra dedicada a alimentos para los humanos e incrementa enormemente la emisión de gases contaminantes, sobre todo de metano, que ponen en peligro la

vida en la tierra. La respuesta de muchos políticos relevantes no se hizo esperar: mientras que el líder de la oposición declaró que ya está bien de que el gobierno entre en nuestra vida privada y nos diga lo que tenemos que comer (como si no lo estuvieran haciendo todos los días todos los gobiernos cuando decretan cualquier ley), el secretario general del PP subía a la red la foto de una parrilla al fuego llena de carne y un escueto mensaje dirigido al citado ministro: «¡A tu salud!» Y el colmo fue que el propio presidente del gobierno al que pertenece ese ministro, Pedro Sánchez, declaraba: «A mí me ponen un chuletón en su punto y eso es imbatible». En la misma dirección fueron las respuestas de los presidentes socialistas de Castilla-La Mancha o de Extremadura. Después de estas reacciones no creo que nos sorprendan las del ministro de Agricultura desmarcándose de las declaraciones de Garzón o las de las asociaciones de ganaderos echándose las manos a la cabeza y diciendo que eso era el comienzo de la ruina del sector. Más grave aún fue la reacción a las palabras de ese mismo ministro, defendiendo la ganadería extensiva y criticando los efectos negativos de las macrogranjas industriales: se produjo un auténtico maremoto en España. Sinceramente, ante estas reacciones, ¿alguien cree de verdad que podremos poner fin al desastre ecológico y que evitaremos caer en el abismo? ¿Alguien piensa que podremos dejar a nuestros nietos un planeta en el que se pueda seguir viviendo? Supongo que hubiera ocurrido igual si a algún ministro del gobierno se le hubiera ocurrido aconsejar un uso moderado del avión, del coche, del ascensor, del aire acondicionado o de la calefacción. El calentamiento del planeta no es solo un problema de sostenibilidad del propio planeta y, por tanto, de posibilidad o no de la vida en la tierra a corto plazo, sino que tiene efectos muy negativos a corto plazo para millones de personas: intensifica la pobreza, incrementa el hambre en el mundo y aumenta la desigualdad.

Por otra parte, toda crisis económica empeora la situación de los más pobres y necesitados, pero ello es más cierto aún si esa crisis económica se produce en plena hegemonía neoliberal. Eso fue lo que ocurrió con la gravísima crisis que tuvo lugar a partir del hundimiento del Lehman Brothers en 2008, que fue aprovechada por los más ricos para sacar ventaja económica de ella, para lo que, entre otras cosas, impusieron sus políticas de austeridad, tan dañinas para gran parte de la población, en especial para los más débiles económicamente, pero también para las clases medias. Así, por ejemplo, las políticas de austeridad en

España entre 2010 y 2016 incrementaron los niveles de desigualdad y exclusión laboral y social (Ayala, 2014; Rodríguez Cabrero, 2018). Sabemos que la crisis financiera de 2008 sirvió para empeorar la situación de los más pobres e incluso de las clases medias y para mejorar la de los más ricos, lo que se tradujo en mayores tasas de desigualdad. En efecto, la desigualdad, medida por el coeficiente de Gini, que ya había aumentado mucho desde mediados de la década de 1970, aumentó más aún desde 1980 y más todavía a partir del año 2000 (PNUD, 2016, pp. 30-31). En esos años, el 50 % del aumento de la riqueza mundial se lo llevó el 1 % más rico, mientras que el 50 % más pobre recibió únicamente el 1 %. De ahí que, tras la crisis, la riqueza mundial se concentrara mucho más, de forma que el 1 % más rico acaparaba el 32 % de los ingresos mundiales en 2000 y el 46 % en 2010. Y en Estados Unidos, el 0,1 % más rico pasó de tener el 12 % de la riqueza nacional en 1990 al 19 % en 2008 (antes de la crisis financiera) y al 22 % en 2012 (tras la crisis) (PNUD, 2016, p. 31). Evidentemente, todo ello afecta muy negativamente a la democracia. Así, como apunta Fernández Albertos (2012), en España el sistema democrático se debilitó durante la crisis financiera y las políticas se subordinaron a las exigencias del poder financiero, principalmente porque aumentaron las desigualdades.

Aunque aún tenemos pocos datos y menos perspectiva histórica, parece que la actual pandemia sanitaria, en contra de lo ocurrido en otras pandemias, está aumentando la desigualdad. Como es bien conocido, el capitalismo se ha caracterizado siempre por un egoísmo atroz que le llevó a preferir siempre un aumento de beneficios económicos a corto plazo que cualquier otra opción más inteligente a largo plazo. Y ese torpe cortoplacismo a menudo le ha pasado factura. Es lo que está pasando ahora con la pandemia. Los países más ricos han gastado cantidades ingentes de dinero en vacunar a su población (por cierto, dejando sospechosamente de comprar vacunas más baratas y comprando otras que, además de proteger la salud de la ciudadanía, engordan la cuenta de beneficios de algunas de las multinacionales farmacéuticas más poderosas del planeta). Pero siguen ayudando muy poco a que se vacunen también los pobres de los países pobres, que constituyen la mayoría de los habitantes del planeta. Y lo grave es que, mientras no se haga eso, la vacunación de la población occidental será poco eficaz para erradicar la enfermedad. Porque el virus seguirá circulando entre esos miles de millones de personas pobres y no solo les causará muchísimo daño,

sufrimiento y muertes a ellos, lo que debería ser suficiente motivo para que los gobiernos decretaran el interés público de tales vacunas, sino que será más difícil llegar al final de la pandemia. De ahí que, al menos por motivos de seguridad sanitaria mundial, las vacunas deberían repartirse gratuitamente, o casi, entre los países pobres. Si no se hace eso, el virus circulará libremente entre esas poblaciones y dará lugar a miles de mutaciones, hasta que pueda llegar un momento en que aparezca una cepa que escape a la acción de las vacunas y, entonces, le echaremos la culpa a los pobres de habernos contagiado a nosotros, cuando realmente ha sido nuestro egoísmo cegato el que les ha contagiado a ellos (y, consecuentemente, a nosotros también). ¿Pero qué podemos hacer para que los ricos, las multinacionales, los gobiernos, los políticos y todos nosotros, nos demos cuenta de que en este planeta tan interconectado o nos curamos todos o terminamos enfermando todos? Ahora tenemos la oportunidad de extender la solidaridad a todo el planeta y, con ello, salvarnos todos, o la de vacunarnos solo nosotros, dejando en la cuneta a los más pobres del mundo, a sabiendas de que, con ello, todos perderemos, excepto unas pocas multinacionales farmacéuticas que habrán hecho el negocio de la historia, a cuenta de la vida de millones de personas.

Como ya he dicho, parece que esta pandemia sí está aumentando la desigualdad. Según el instituto francés World Inequality Lab (2021), la pandemia está haciendo que el 10 % de la población más rica concentre ya el 52 % de las rentas y el 76 % de la riqueza del planeta, mientras que el 50 % más pobre solo capte el 8 % de los ingresos y el 2 % del patrimonio. Según este instituto, la pandemia está polarizando más aún el planeta, aumentando tanto el número de millonarios como el número de pobres. La desigualdad de rentas y riqueza ya aumentó mucho como consecuencia de la reciente crisis financiera, de forma que se ha duplicado durante las dos últimas décadas la diferencia entre los ingresos del trabajo y el capital que percibe el 10 % más rico de la población y el 50 % más pobre. Y la concentración de la riqueza ha llegado a una cuota «extrema», puesto que el 10 % más poderoso posee ya tres cuartas partes de todo el patrimonio mundial. Y la covid no ha hecho sino reforzar y acelerar aún más esa tendencia. Además, eso se observa en todas las partes del mundo, aunque más en unas (Estados Unidos, Rusia e India) que en otras (Europa y China). El informe constata, además, una regla muy preocupante: cuanto más rico es un ciudadano, más crece

su riqueza. Desde los años noventa, el 0,01 % más rico vio cómo crecía un 5 % cada año; el 0,001 %, un 5,9 %, y el 0,00001 %, un 8,1 %. También en España el índice de Gini³ ha subido mucho desde el inicio de la pandemia, según los datos provisionales del servicio de estudios de CaixaBank (2021). Más graves aún son las previsiones de futuro que hace el *Informe del World Inequality Lab* (2017, p. 14) para 2050. Sin embargo, las instituciones internacionales (el FMI o la Reserva Federal), al parecer, están cambiando de rumbo y, en esta pandemia, están adoptando políticas opuestas a las tomadas durante la crisis financiera para salir de la crisis, políticas opuestas a las neoliberales. Como escribe Estefanía (2021), «la pandemia de la covid ha actuado como una especie de lupa que ha agrandado la visión de los problemas y los puntos débiles del sistema, y ha acelerado las metamorfosis que estaban latentes. El coronavirus es la metástasis de un sistema que hace tiempo que ya daba señales de insostenibilidad social, ambiental y democrática». Esta pandemia nos está avisando de la crisis general que ya se ve venir, una crisis a la vez económica, cultural, social, ambiental y democrática (Attali, 2021).

En síntesis, a lo largo del siglo XX ha disminuido la desigualdad, pero solo hasta 1980 y además benefició principalmente a la clase media. En concreto, según Piketty (2021), en vísperas de la Primera Guerra Mundial el 10 % más rico poseía en torno al 85 por ciento de la propiedad total, bajó al 50 % en 1980, pero nuevamente subió al 55 % en 2020. Es decir, «son las “clases dominantes” (el 1 % superior) las que han visto deteriorarse su posición relativa, mientras que la parte correspondiente a las “clases acomodadas” (el siguiente 9 %) se han mantenido casi estable a lo largo del siglo XX (alrededor del 30 por ciento de la propiedad total). Por el contrario, la parte en manos del 40 % más rico ha aumentado de forma espectacular: apenas representaba el 13 % de la propiedad total a principios del siglo XX, se triplica entre 1914 y 1980 y pasa a situarse alrededor del 40 % a principios de la década de 1980, estabilizándose en torno a ese nivel desde entonces (con un ligero descenso)» (Piketty, 2021, p. 54). De ahí la conclusión de este autor (pp. 54-56): «Seamos claros: la concentración

3 Si el coeficiente de Gini tiene un valor entre cero y uno, el índice de Gini lo tiene entre cero y cien, pues con la finalidad de evitar decimales multiplica por cien el coeficiente. Así, un coeficiente Gini de 0,32 es lo mismo que un índice Gini de 32.

de la propiedad sigue siendo extremadamente alta, y no hay que sobreestimar la magnitud de la evolución hacia la igualdad. A principios de 2020, el 10 % más rico posee más del 55 % de todo lo que se puede poseer en Francia (el 1 % más rico posee casi el 25 %), mientras que el 50 % más pobre no posee casi nada (apenas el 5 % de la propiedad total). Y si nos centramos en la propiedad de los medios de producción, que determina la distribución del poder económico y la estructura de las relaciones jerárquicas en el trabajo, la concentración sería aún mayor (sobre todo entre el 0,1 % o el 0,01 % de las mayores fortunas, un grupo reducido que ha experimentado un repunte muy claro en las últimas décadas).⁴ Notemos también que la parte de la riqueza total en manos del 50 % más pobre, que siempre ha sido ínfima, ha disminuido considerablemente desde la década de 1980». De hecho, en Francia –y en los demás países–, añade Piketty (p. 61), la desigualdad de ingresos sigue siendo muy alta a principios del siglo XXI. Así, la diferencia de ingresos medios es de 1 a 8 entre el 50 % más pobre y el 0,1 % más rico. Y las desigualdades en el caso de los patrimonios son todavía mucho mayores que las de los ingresos.

En resumidas cuentas, la reducción de la desigualdad que ha tenido lugar a lo largo del siglo XX ha afectado solo, aunque ello es importante, a las clases medias, mientras la mitad de la población seguía siendo casi tan pobre como siempre. Ello fue posible gracias a las políticas fiscales que aumentaron enormemente la recaudación del Estado, lo que hizo posible que este, por primera vez en la historia, invirtiera mucho en gasto social, en especial después de 1945 (Martínez-Toledano y Piketty, 2021). Y es que, también por primera vez, «el Estado escapó al control exclusivo de las clases dominantes. Fue la consagración del sufragio universal, de la democracia parlamentaria y representativa, del proceso electoral y de la alternancia política, todo ello impulsado por una prensa independiente

4 Nos recuerda Piketty en nota a pie de página que, según la revista *Challenges*, solo las quinientas personas más ricas de Francia (alrededor del 0,001 % de la población) han pasado de poseer 200.000 millones de euros en 2010 (10 % del PIB) a 710.000 en 2020 (30 % del PIB), es decir, de aproximadamente el dos al seis por ciento de la riqueza patrimonial total. Pero nadie se escandaliza: estamos en plena hegemonía cultural e ideológica neoliberal.

y por el movimiento sindical»⁵ (Piketty, 2021, p. 154). Además, esa tendencia igualadora se rompió a partir de 1980 con la «revolución de las élites económicas» que son las que realmente han salido ganando, y mucho, desde entonces, a costa de todos los demás, habiendo aumentado mucho la desigualdad en estas cuatro décadas. Pero no olvidemos que la clase media creció mucho gracias a las políticas fiscales y sociales aplicadas después de 1950, impulsadas por las luchas sociales, políticas y sindicales. Sin esas luchas no hubiera sido posible el incremento de los salarios, el establecimiento de un sistema de pensiones ni la sanidad y la educación de calidad y gratuitas. La información disponible actualmente sugiere que las medidas de fiscalidad progresiva, con impuestos casi confiscatorios a los más ricos, «fueron un gran éxito histórico. Condujeron a una importante reducción de las disparidades de riqueza y renta, al mismo tiempo que mejoraron la situación de las clases medias y populares, ampliando el Estado social y fomentando un mejor rendimiento económico y social general. Es la lucha por la igualdad y la educación lo que, históricamente, ha permitido el desarrollo económico y el progreso humano; no la sacralización de la propiedad, la estabilidad y la desigualdad» (Piketty, 2021, p. 168).

En suma, el informe del PNUD (2020) afirma que «en poco más de una década, la crisis financiera mundial, la climática, la de desigualdad y la de la covid-19 han puesto de manifiesto que la propia resiliencia del sistema se está resquebrajando. Los sistemas de amortiguación se están debilitando a toda velocidad. Las conexiones que una vez fueron elásticas se han vuelto frágiles, más propensas a romperse que a ofrecer flexibilidad, lo que conlleva una mayor desestabilización del sistema terrestre. El resultado es que las perturbaciones se traducen más fácilmente en contagio –ya sea económico, ambiental o viral–, que se propaga de forma indiferente a través de las fronteras porosas de los Estados nación y escala los muros ilusorios que separan el planeta de los seres humanos. Sencillamente, ya no podremos seguir haciendo las cosas como hasta ahora. [...] El objetivo del desarrollo humano es más pertinente que nunca: que las personas puedan llevar

5 Por eso, lo primero que hizo la contrarrevolución de los más ricos a partir de los años 70 fue debilitar al máximo a los sindicatos y apropiarse de los medios de comunicación, terminando así con la prensa libre. Una vez que consiguieron ambas cosas, ya les fue más fácil reducir la fiscalidad progresiva, pagar cada vez menos impuestos y enriquecerse obscenamente (véase Sáez y Zucman, 2021).

una vida que valoren» (PNUD, 2020, p. 9). Y añade que «el desarrollo humano basado en la naturaleza ayuda a abordar conjuntamente los tres desafíos centrales del Antropoceno: mitigar el cambio climático y adaptarse a este, proteger la biodiversidad y garantizar el bienestar humano para todas las personas» (p. 10). Y para conseguirlo hay que tener en cuenta que son muchos los factores que interaccionan entre sí y que provocan el efecto invernadero. Así, los subsidios a los combustibles fósiles, que, si se hubieran eliminado en 2015, habrían hecho que las emisiones mundiales de carbono disminuyeran un 28 %, y también un 46 % las muertes asociadas a la contaminación atmosférica provocada por dichos combustibles (Coady *et al.*, 2019). Debemos reducir el consumo de carne y aumentar el de verduras o legumbres, abogar por la ganadería extensiva y restringir al máximo la intensiva, prohibiendo las macrogranjas industriales, aminsonar todo lo posible la utilización del coche, del avión, de la calefacción, del aire condicionados, etc. Sinceramente, ¿estamos dispuestos a hacer todo esto por salvar el planeta para que nuestros nietos o biznietos puedan seguir viviendo en él?

4.5. Consecuencias de las desigualdades

Ciertamente, algunos parámetros de la desigualdad mundial están mejorando. Pero no hay que echar las campanas al vuelo. En efecto, según el PNUD (2019), en algunos aspectos, las desigualdades están reduciéndose mucho, como muestra la mejora en la esperanza de vida al nacer o el porcentaje de población con estudios primarios. Sin embargo, están apareciendo algunos parámetros nuevos, esenciales para el desarrollo humano durante las próximas décadas, en los que hay unas desigualdades inaceptables, como ocurre en el acceso al conocimiento o a las tecnologías más avanzadas. Así, en los países más desarrollados, la proporción de la población adulta con estudios superiores está creciendo seis veces más que en los países menos desarrollados. Además, de seguir el curso actual de reducción de las desigualdades, el mundo no conseguirá erradicar la privación extrema en salud y educación hasta 2030, cuando se espera que todavía mueran anualmente tres millones de niños menores de cinco años y que 225 millones de niños estén sin escolarizar. Pero esas desigualdades entre países ricos y países pobres, y entre pobres y ricos dentro de cada país, tienen consecuencias sobre la salud de la población más pobre, sobre su educación, sobre su esperanza de vida, etc. Así, según datos recogidos de Caparrós (2015), Níger gasta cinco dólares

por habitante y año en salud, mientras que Estados Unidos gasta 8.600, Francia 4.950, Argentina, 890 y Colombia 432. En 2009, había en Níger 538 médicos, uno por cada 28.000 habitantes. Y, sin embargo, los países ricos –que ponen tantas trabas a la inmigración–, captan a los pocos profesionales sanitarios de los países pobres, con lo que a estos les costó formarlos. Veamos algunos de los efectos de la desigualdad sobre la vida de la ciudadanía:

1) *Salud*: tanto la salud de la población general como el bienestar infantil están estrechamente relacionados con la desigualdad (Wilkinson, 2001, Wilkinson y Pickett, 2009). Cuanto más desigual sea una sociedad más estrés, más ansiedad, más depresiones y más suicidios hay, y también serán más frecuentes enfermedades físicas como las cardiovasculares, estando todo ello muy relacionado con unas malas relaciones interpersonales. Es sabido que «los conflictos y tensiones con otras personas son con mucho los acontecimientos más estresantes de la vida diaria en términos de bienestar emocional a corto y largo plazo», por delante incluso de las exigencias del trabajo y los problemas de dinero (Lassner, Matthews y Stoney, 1994). Como escribe Wilkinson (2001, p. 12) «a menudo se ha podido comprobar que cuanto menor es el grado de desigualdad socioeconómica, tanto más saludable es la sociedad. En aquellas sociedades en que las diferencias en las rentas entre ricos y pobres son pequeñas, los índices de mortalidad tienden a ser más bajos y la gente vive más tiempo. Ello puede ser debido a que las sociedades más iguales son menos estresantes: las personas están más predispuestas a confiar las unas en las otras y son menos hostiles y violentas unas con otras». Y es que, añade Wilkinson (p. 14), «las desigualdades socioeconómicas ejercen un profundo efecto en la calidad del entorno social y del bienestar psicosocial de la población». Ello se constató en Rusia, donde en una sola década, tras la caída de la URSS, las políticas neoliberales impuestas por el FMI incrementaron enormemente las desigualdades y, con ellas, las tasas de morbilidad, que hicieron que la esperanza de vida bajara mucho. Y sabemos también que «los índices de mortalidad son dos o tres veces más altos entre las personas pertenecientes a las capas más bajas de la jerarquía social que entre las que se encuentran en los puestos más elevados» (Wilkinson, 2000, p. 14), a causa probablemente del estrés y la ansiedad producidos por la estructura social y la posición social. Esos son tal vez los dos factores psicosociales intermedios que explican los

muchos y graves efectos negativos de las desigualdades económicas y sociales en la salud. De hecho, en las sociedades más igualitarias, la gente –incluso las personas pobres– tiene menos estrés y ansiedad que la población de sociedades más desiguales. Se ha encontrado también que las personas que ocupan los peldaños más bajos en la escala de estatus mueren antes y los jefes tienen más probabilidades de llegar a una edad avanzada (Marmot, 2004). Además, es evidente que la pobreza y la desigualdad producen malnutrición infantil, lo que lleva, a su vez, a un gran retraso del crecimiento en los niños pobres, lo que, además, lleva a unos efectos perversos que pueden durar toda la vida e incluso transmitirse a las siguientes generaciones (Therborn, 2015).

Durante mucho tiempo se desconocían los efectos negativos que tienen sobre la salud los factores psicosociales, en especial el estrés y la ansiedad, y los efectos positivos que tiene la amistad y el apoyo social. Pero las cosas empezaron a cambiar con los estudios sobre los efectos psicosociales de la pérdida del empleo, sobre todo tras encontrarse que el grado de control que tienen las personas sobre su trabajo constituía una predicción muy fiable de la salud, por lo que es crucial la autogestión laboral (Ovejero, 2021), habiéndose encontrado también que la salud empeora no solo cuando se pierde el empleo sino incluso cuando aparece la amenaza de perderlo (Wilkinson, 2000, p. 22). Y es que los factores psicosociales son fundamentales para la salud. Así, «numerosos estudios demuestran que las tasas de mortalidad o de enfermedad son de dos a cuatro veces más altas entre los que se encuentran socialmente más aislados. En un experimento se le suministraba a la gente gotas nasales que contenían el virus del resfriado. Aquellos que tenían amigos en pocos ámbitos de la vida tenían una probabilidad cuatro veces mayor de desarrollar resfriados que las personas que tenían amigos en muchos ámbitos. Otro estudio descubrió que después de sufrir un ataque cardíaco, la gente con un buen apoyo social tenía tres veces más posibilidades de sobrevivir que aquella que no lo tenía» (Wilkinson, 2000, pp. 57-58). Y es que las desigualdades producen estrés generalizado y persistente que, a su vez, va desgastando el sistema inmunológico, lo que lleva a lo que Marmot llama «factor de vulnerabilidad general». «Éste es un punto fundamental. En vez de pensar en la salud solo en términos de exposición a agentes infecciosos o a otros riesgos ambientales, deberíamos pensar más en lo que afecta a las defensas del cuerpo, al sistema

inmunológico y a la capacidad de resistir a la exposición a un amplio espectro de circunstancias potencialmente nocivas, o a reparar los daños resultantes» (Wilkinson, 2000, p. 62).

En resumidas cuentas, como subrayan Wilkinson y Pickett (2009, p. 197), «la mayoría de los grandes problemas sociales y de salud del mundo rico están más extendidos en las sociedades desiguales. [...] de hecho, los problemas a los que se enfrentan sus poblaciones son entre tres y diez veces más comunes que en las sociedades más igualitaristas. Pero la desigualdad, añaden estos autores (p. 205), no es algo negativo solo para los pobres: lo es para todos. De hecho, «la tasa de enfermedades mentales del conjunto de la población es cinco veces mayor en los países más desiguales que en los menos desiguales. De igual manera, en las sociedades más desiguales los individuos tienen hasta cinco veces más probabilidades de ir a la cárcel, seis veces más de ser obesos y también seis veces más posibilidades de verse envueltos en un homicidio. La razón de estas diferencias tan acusadas está, sencillamente, en que los efectos de la desigualdad no se limitan a los más desfavorecidos, sino que afectan a la gran mayoría de la población» (Wilkinson y Pickett, 2009, p. 205). Por ejemplo, las tasas de mortalidad de las clases bajas de Suecia, un país muy igualitario, son más bajas que las de las de la clase más alta de Inglaterra o Gales (Vagero y Lundberg, 1989; Leon, Vagero y Olausson, 1992).

2) *Esperanza de vida*: por mencionar solo algunos datos, recordemos que el hambre es una de las razones principales que explican que la esperanza de vida sea de 41 años en Mozambique y de 82 en España; de 38 en Zambia y de 83 en Japón (Caparrós, 2015). Pero aquí existen también grandes diferencias entre las personas ricas y las pobres dentro de los países desarrollados. En efecto, «de acuerdo con las estimaciones disponibles, en algunos países desarrollados el diferencial de esperanza de vida a los 40 años entre el uno por ciento de la población con mayores ingresos y el uno por ciento con menores ingresos es de 15 años para los hombres y 10 años para las mujeres» (PNUD, 2019, p. 2). Entre 1990 y 2008, la esperanza de vida de los estadounidenses blancos sin título universitario se redujo tres años, y en el caso de las mujeres más de cinco años (Olshansky *et al.*, 2012). El paso del socialismo de Estado al capitalismo privado en la Unión Soviética produjo un enorme incremento de la desigualdad (Therborn, 2015, p. 18). Así, en Rusia, el índice de Gini subió

de 27 en 1990 a 46 en 1993, en Ucrania de 25 en 1992 a 41 en 1996, y continuó ascendiendo hasta 52 y 46 respectivamente en 2001 (UNICEF, 2004). En 1995, la vuelta al capitalismo había generado 2,6 millones de muertes prematuras solo en Rusia y Ucrania (Cornia y Panmiccià, 2000, p. 5). En 2009, la esperanza de vida seguía siendo en Rusia y en Ucrania inferior a la que tenían en 1990 (WHO, 2012). Desde 1990 hasta hoy día, la esperanza de vida de las personas pobres ha bajado mucho en todos los países europeos, sobre todo en el Reino Unido, no por azar el país más neoliberal de Europa. Pero también en Finlandia la diferencia de esperanza de vida a los 35 años entre el 20 % más rico y el 20 % más pobre aumentó en 12,5 años para los varones y en 6,8 años para las mujeres entre 1988 y 2010 (Tarkianen *et al.*, 2011). Otro dato que muestra claramente la estrecha relación existente entre la desigualdad (más que la riqueza) y la esperanza de vida es la comparación entre Estados Unidos (78 años), el país más rico de la tierra, pero con mucha desigualdad, y Cuba (79 años), un país pobre, pero con mucha menos desigualdad (UNICEF, 2012). Colin McCord y Harold Freeman (1990) calcularon que la población negra masculina de Harlem (Nueva York) tenía menos probabilidades de llegar a los 65 años que la de Bangladesh. En suma, «las personas que tienen un determinado nivel de renta, especialmente las de rentas bajas, parecen estar más sanas en lugares más igualitarios. En otras palabras, a mayor igualdad mejor salud encontramos» (Wilkinson, 2000, p. 25).

3) *Obesidad*: también la obesidad está muy influida por el grado de igualdad o desigualdad que haya en un país. Por eso está aumentando a medida que las políticas neoliberales se aplican más. En el pasado, los ricos estaban gordos y los pobres delgados, pero en los países desarrollados este patrón se ha invertido desde hace unas décadas (Brunner, Juneja y Marmot, 1998). De hecho, como dice la periodista Polly Toynbee (en 2004), «la gordura es un problema de clase social», tras comprobar, amparándose en los altos índices de obesidad en EE. UU. y en los bajos niveles en los países escandinavos, que la desigualdad en la renta podía ser una de las causas del problema. De hecho, «los niveles de obesidad tienden a ser más bajos en los países donde las desigualdades de renta son menores» (Wilkinson y Pickett, 2009, p. 103). Por consiguiente, concluyen estos autores (p. 124), «la disminución de la desigualdad podría suponer un paso importante en la lucha contra esta “epidemia” de obesidad».

4) *Felicidad*: no es cierto que las personas del primer mundo seamos tan felices como creemos. Por el contrario, «como no gozamos de unas relaciones sociales relajadas y carecemos de la satisfacción emocional que todos necesitamos, buscamos consuelo en la comida, en las compras compulsivas, en el gasto desmesurado, o caemos víctimas de los excesos ante el alcohol, los medicamentos psicoactivos o las drogas. ¿Cómo hemos llegado a padecer tanto sufrimiento mental y tanta alteración emocional cuando gozamos de niveles de riqueza y confort sin precedentes en la historia de la humanidad? A menudo sentimos que nos falta algo de tiempo libre para pasar con los amigos, aunque hasta eso nos puede parecer algo inalcanzable» (Wilkinson y Pickett, 2009, p. 12). La responsabilidad de este estado de cosas se debe mucho a la internalización por parte de la ciudadanía de la ideología neoliberal, particularmente de sus rasgos más definitorios: individualismo feroz, egoísmo atroz, competencia de todos contra todos y fatalismo. Resulta difícil ser feliz viviendo en un mundo con esas características, tan contrarias a la forma de ser tradicional humana: social, cooperativa y solidaria. La consecuencia de ello es que «en lugar de una sociedad mejor, lo único que perseguimos –la mayoría al menos– es mejorar nuestra propia situación como individuos en esta sociedad, tal y como es. El contraste entre el éxito material y el fracaso social que se produce en muchos países ricos es una significativa señal de alarma. Sugiere que, para lograr mejoras en la calidad real de vida, tenemos que alejarnos de los estándares materiales y de crecimiento económico actuales y concentrar nuestra atención en mejorar el bienestar psicológico y social del conjunto social» (Wilkinson y Pickett, 2009, p. 22). No obstante, uno de los más potentes instrumentos para que la gente sea feliz es el nivel de igualdad que exista en un país. «No es solo que el aumento del bienestar y la felicidad no sean ya la consecuencia visible del crecimiento económico, es que se han producido aumentos a largo plazo en los niveles de ansiedad, depresión y muchos otros problemas de índole social» (Wilkinson y Pickett, 2009, p. 24). Los suicidios, que en España ya cuadruplican a los muertos en accidentes de tráfico, han aumentado en torno a un 15 % en los dos años de pandemia: unos 4.000 en 2021, de los que 3.000 eran hombres. Como dicen Wilkinson y Pickett (2009, p. 28), «cuanto más se posee, cada cosa que se adquiere –ya sean barras de pan o un coche– contribuye menos al bienestar de uno. Si se tiene hambre, una barra de pan lo es todo, pero cuando estamos saciados una barra de pan más o menos no supone

ninguna diferencia sustantiva, e incluso puede convertirse en un estorbo si se pone rancia». Ello debería empujarnos a ser más solidarios, pues mientras importantes mejoras económicas en los países ricos no incrementan la felicidad de sus habitantes, pequeñas mejoras en los países pobres aumentan mucho la felicidad de su población. En todo esto, las dos variables cruciales aquí, más aún que la pobreza, son la desigualdad social y el lugar que ocupamos en la jerarquía social, como ha mostrado la sociología clínica.

5) *Desigualdad social, violencia y delincuencia*: «una de las razones que nos hacen pensar que el entorno social se deteriora allí donde las diferencias en la renta son mayores es la del fuerte vínculo existente entre la desigualdad y la violencia» (Wilkinson, 2000, p. 443), sobre todo si tenemos en cuenta, como dijo Gandhi, que «la pobreza es la peor forma de violencia». La relación entre desigualdad y violencia ha quedado demostrada en épocas y entornos diferentes (Wilkinson y Pickett, 2009, p. 168). Pero no solo la tasa de delincuencia está relacionada con la desigualdad de un país, sino también las tasas de encarcelamiento. «En las sociedades más desiguales, donde las distancias entre las clases son mayores, donde la falta de confianza y el miedo al delito son algo generalizado, la sociedad en general y los legisladores en particular muestran una mayor disposición a encarcelar a la gente y a las acciones meramente punitivas hacia los que delinquen. [...] En las sociedades más desiguales, el dinero que debería destinarse a bienestar y educación se invierte en cambio en los sistemas judicial y penal» (Wilkinson y Pickett, 2009, p. 179), como es el caso paradigmático de EE. UU. También se ha encontrado que la desigualdad aumenta la violencia escolar y el acoso escolar o *bullying*. En efecto, «en las sociedades más desiguales, los niños sufren mayor acoso escolar, peleas y conflictos varios» (Wilkinson, 2000 y Pickett, 2009, p. 162).

6) *Movilidad social y desigualdad de oportunidades*: a pesar del famoso mito del «sueño americano», tan denostado por Noam Chomsky (2017), es sabido que Estados Unidos tiene la tasa más baja de movilidad social de todos los países desarrollados. Pero la gente, dentro y fuera de Estados Unidos, sigue creyendo en ese «sueño americano». Si alguna vez hubo en ese país un ascensor social, hace ya tiempo que dejó de funcionar. Son los países escandinavos (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca e Islandia), que son mucho más igualitarios, los que tienen las tasas de movilidad ascendente más altas.

7) *Desigualdad y protección del planeta y del medio ambiente*: aunque los problemas para el medio ambiente –y por tanto para la vida en el planeta– vienen de lejos y se deben a diferentes factores, ha sido la hegemonía neoliberal –y la implantación de sus políticas– lo que más ha incrementado los riesgos para el planeta. Unos mayores índices de igualdad constituyen un importante factor de protección del planeta y de contención del cambio climático, sobre todo porque «aumentar la igualdad es la clave para reducir la presión cultural al consumismo» (Wilkinson y Pickett, 2009, p. 246). Como escribió Henry Wallich (1972), «el crecimiento es un sustitutivo de la igualdad de renta». Y para Robert Frank (2007), el nivel de vida es algo relativo que depende de las comparaciones con los demás. De ahí que los hábitos de consumo de los ricos reduzcan el grado de satisfacción de todos los demás, que intentarán consumir más y más, con lo que disminuye su capacidad de ahorro y aumentan sus deudas y sus horas de trabajo, por lo que los países más desiguales tienden a tener jornadas de trabajo más largas. De hecho, «los ciudadanos de los países menos igualitarios trabajan el equivalente a dos o tres meses más por año» (Wilkinson y Pickett, 2009, p. 248). Todo ello «refuerza la idea de que la desigualdad anima al consumo. Si el consumismo está motivado en gran medida por el deseo de imitar, por la competencia por el estatus o simplemente por el afán de mantenerse a la altura de los demás, esto explica por qué continuamos buscando el crecimiento económico, a pesar de que obviamente no beneficia al conjunto de la sociedad» (Wilkinson y Pickett, 2009, p. 249). Un simple experimento de Solnick y Hermenway (1998) demostró que el deseo de ganar más esconde un afán de mejorar el estatus: se pidió a varias personas que escogieran entre tener menos dinero que los demás en una sociedad rica o tener una renta mucho menor en una sociedad más pobre, pero donde serían más ricos que los demás. El 50 por ciento de los sujetos contestó que renunciaría a la mitad de sus ingresos a cambio de vivir en una sociedad en la que estuvieran mejor situados que los demás. Ello demuestra cuánto valoramos el estatus social: una vez cubiertas nuestras necesidades vitales, lo que de verdad valoramos son las posesiones relativas. Como dijo alguien: la felicidad consiste en ganar cien dólares al mes más que tu cuñado. Relacionado con ello está el llamado «efecto Veblen», según el cual los artículos de consumo se escogen por su valor social más que por su utilidad práctica: la finalidad que realmen-

te persiguen muchas personas con sus conductas ostentosas es aparentar y mostrar un estatus superior.

En suma, como dicen Wilkinson y Pickett (2009, p. 251), «las políticas para combatir el calentamiento global no deben considerarse intentos por limitar las posibilidades de la satisfacción material, y han de estar acompañadas por medidas igualitarias que nos estimulen a mejorar la calidad de nuestras vidas de formas distintas y nuevas. Estamos hablando de un cambio en el concepto de satisfacción humana, de la transición del crecimiento económico a la humanización de la sociedad».

8) *Deterioro de la democracia*: otra de las consecuencias más evidentes de las desigualdades económicas es el debilitamiento (o desaparición) de la democracia: democracia y desigualdad son incompatibles. La democracia es más plena allí donde hay más igualdad, como ocurre en los países escandinavos, y menos plena donde hay una mayor desigualdad como ocurre en Estados Unidos, México, Brasil o España. De hecho, «hemos de reconocer que los gobiernos hace ya tiempo que no controlan las decisiones económicas (Beck, 2007), ya que tan solo deben ocuparse de proporcionar seguridades suficientes a los inversores, quienes, con sus decisiones, se supone, proporcionarán mayor bienestar a los gobernados por aquéllos» (Martínez Osés, 2010, pp. 522). No pudo decirlo de forma más claro Lula, al día siguiente de su primera elección, cuando se dirigió a los movimientos sociales de los que provenía, diciéndoles que habían llegado a la presidencia, pero no al poder. Los acontecimientos posteriores, sobre todo su encarcelamiento por una falsa acusación de corrupción, le dieron la razón. Una cosa es tener el gobierno y otra bien distinta tener el poder. Como en su día escribió Ramoneda (1999, p. 35), «en las democracias realmente existentes, el principio de soberanía popular está corregido por la capacidad de quienes ejercen el poder económico, que siendo muchos menos pueden más». Como señala Joseph Stiglitz (2020, p. 29), «la desigualdad económica se traduce inevitablemente en poder político y quienes lo ejercen lo utilizan en beneficio propio. Si no reformamos nuestras políticas, nuestra democracia se convierte en una burla, e iremos evolucionando hacia un mundo caracterizado por la premisa de “un dólar, un voto”, en lugar de “una persona, un voto”. Si hemos de tener, como sociedad, un sistema efectivo de pesos y contrapesos ante los abusos potenciales de los

muy ricos, debemos crear una economía con una mayor igualdad en cuanto a riqueza e ingreso».

Finalmente, tengamos presente que los efectos negativos de las desigualdades suelen ser acumulativos, hasta el punto de que algunas desigualdades básicas comienzan antes del nacimiento y se mantienen toda la vida. Así, según el PNUD (2019, p. 11), los niños nacidos en familias con bajos ingresos son más propensos a gozar de mala salud y a alcanzar niveles de estudios más bajos. Aquellos con un nivel de estudios inferior accederán probablemente a salarios más bajos, al tiempo que los niños con peor salud tendrán mayor riesgo de no poder asistir a la escuela. Cuando los niños crecen, suelen formar una pareja con otra persona de un estatus socioeconómico similar, con lo que las desigualdades pueden transmitirse a la siguiente generación. Además, los más ricos son cada vez más ricos y tienen cada día más poder, lo que les permite poner las leyes –sobre todo las fiscales– a su favor, lo que les enriquece aún más, a costa de todos los demás. Por eso es urgente corregir esas desigualdades y reducir sus dramáticos efectos. Pero, «para ello debemos actuar ahora, antes de que los desequilibrios de poder económico se traduzcan en un profundo dominio político». De ahí que «el hecho de contar con un conjunto de capacidades básicas –como sobrevivir más allá de los cinco años de edad o aprender a leer– suponga un paso muy importante para la formación de capacidades aumentadas en etapas vitales posteriores» (PNUD, 2019, p. 7). Es en esas capacidades básicas donde más habría que incidir.

A todo lo anterior se une otro fenómeno que no hace sino ampliar las desigualdades: la despolitización de los pobres. «Cuando el sistema, en términos generales, se percibe como injusto, quizá debido a exclusiones sistemáticas o al clientelismo (intercambio de apoyo político a cambio de beneficios personales), la población tiende a desvincularse de los procesos políticos, amplificando así la influencia de las élites» (PNUD, 2019, p. 11). Por eso debemos actuar pronto, antes de que los desequilibrios de poder económico se trasladen al ámbito político. Y uno de los caminos es el fiscal. En efecto, «los impuestos –ya sean sobre los ingresos, el patrimonio o el consumo– pueden ser muy útiles para corregir las desigualdades. Permiten recaudar ingresos para mejorar servicios públicos esenciales (sanidad y educación) y proporcionar un seguro social que beneficia tanto a las personas pobres como a quienes se encuentran en el tramo intermedio de la distribución de los ingresos» (PNUD, 2019, p. 17).

Ahora bien, ¿por qué la desigualdad se asocia a tantos factores negativos como son los problemas de salud, el fracaso escolar, la delincuencia o la obesidad? «Porque las sociedades más desiguales tienen más problemas en general» (Wilkinson y Pickett, 2009, p. 43). De ahí que, añaden estos autores (p. 47), «reducir la desigualdad es la mejor manera de mejorar la calidad de nuestro entorno social y, por consiguiente, la calidad real de vida, la de todos nosotros».

4.6. Explicación psicosocial de los efectos negativos de las desigualdades

Una buena introducción a cualquier explicación psicosocial de los efectos negativos tanto de la desigualdad como de la pobreza consiste en analizar con cierto detenimiento la obra e ideas tanto de Ignacio Martín Baró (Barrero, 2015), como de Paulo Freire (véase Ovejero, 1997, 2017c), de quien se nutre en gran medida la obra de Martín Baró. El separarse de la filosofía y abandonar la reflexión para centrarse solo en los datos empíricos es lo que facilitó el que la psicología sirviera para integrar al individuo en el sistema social y político, por injusto que este fuera, lo que, por otra parte, ayudó a legitimar ese sistema injusto. Quizás el ejemplo más evidente de todo esto es la legitimación y justificación de la propiedad privada, algo esencialmente injusto, y que es la base de la pobreza y de la desigualdad, pero que es aceptado acriticamente por la inmensa mayoría de la ciudadanía. No olvidemos, como escribe Barrero (2015, p. 17), «que la psicología nace a finales del siglo XIX como un dispositivo de dominio, control y sometimiento de la subjetividad y como tal, desde su nacimiento, sirve a intereses ideológicos de grupos minoritarios que utilizan su saber cómo fuente de poder, sumisión, discriminación, estigmatización y patologización» (véase Ovejero, 2011).

Vallisoletano afincado en El Salvador, Ignacio Martín Baró hizo sus estudios de psicología social en Estados Unidos, justamente cuando gran parte de la psicología social estadounidense estaba enfrascada en una gran crisis, entre otras cosas por falta de relevancia social, pero también por los problemas metodológicos inherentes a la disciplina e incluso, para una minoría, por su sometimiento a los intereses del capitalismo norteamericano. Martín Baró, que estaba muy influido por dos de los fundadores de la teología de la liberación –sus profesores y amigos, Ignacio Ellacuría y Jon Sobrino– decidió embarcarse en una psicología de la liberación que estuviera al servicio de los pobres de El Salvador y de toda

América Latina y que fuera de utilidad para sacar a la psicología social de la profunda crisis en que se encontraba. Pero, como dice Luis de la Corte (2000a), la propuesta de Martín Baró no tiene como propósito destruir la psicología social dominante, sino reconstruirla, tratando de plantear una alternativa a cada una de sus críticas y dando ejemplo de ello con su propia actividad científica, aunque, como escribe el propio Martín Baró (1983, pp. 1-2), al acercarse a la psicología social dominante, el lector latinoamericano no puede dejar de sentir que los aspectos más cruciales de su existencia son completamente ignorados. Por eso, a su programa para construir una psicología de la liberación se le llama también «psicología social desde Centroamérica». Porque debemos tener presente que no puede hacerse ciencia desde ningún sitio ni desde ningún momento histórico concreto. Lo que pretendo hacer en este apartado es mostrar la utilidad de Martín Baró para un análisis psicosociológico de la pobreza.

Martín Baró parte del concepto de cultura y de su conexión con la ideología, porque, para él, como nos recuerda de la Corte (2000b), la cultura es ideología en cuanto a que constituye una superestructura, en términos marxistas, con lo que cumple la función de legitimar el orden social establecido. De hecho, resulta difícil entender la pobreza, y algo tan relacionado con ella como es el concepto de propiedad privada, sin tener presente el papel que cumple la ideología en todo ello. Sobresale aquí el análisis que hace Martín Baró del «fatalismo», tan frecuente en los colectivos pobres latinoamericanos (y en los de todo el mundo), que constituye uno de los pilares sobre los que se sostiene el mantenimiento de la pobreza en el planeta. Otro concepto que nos ayuda a explicar la resignación de los pobres ante su dramática situación es el de «poder», que utiliza mucho Martín Baró y que es definido por él como el conjunto de relaciones de dos o más actores sociales (personas, grupos, etc.), con la condición de que exista una desigual distribución de recursos entre ellos, lo que les permite a los poderosos imponer su voluntad y sus intereses a los demás. Ambos conceptos, el de ideología y el de poder, están íntimamente relacionados y se retroalimentan el uno al otro: la ideología produce poder, y luego el poder produce la ideología que a él le interesa. Pero tal relación es dialéctica, y los dos se construyen mutua y dialécticamente.

También debemos tener muy presente la exigencia de compromiso social que, para Martín Baró, debe tener la psicología social (De la Corte, 1998, 2000b; Montero, 1993; Ovejero, 2000, 2011), especialmente en situaciones de conflicto.

En tales situaciones nadie puede ser neutro y menos los psicólogos sociales, dado que la meta esencial de la psicología es –o debiera ser– la mejora del bienestar de las personas. Más en concreto, para Ignacio Martín Baró, la ciencia psicológica, particularmente la psicología social, «tiene que tomar partido en las cuestiones éticas porque la pretendida neutralidad de algunos no es más que una excusa para no cuestionar los fundamentos del sistema social dominante» (Gondra, 2014, p. 488). Sin embargo, tampoco le convenían las teorías marxistas, dado que olvidaban el importante papel que desempeñan los individuos como hacedores de su propia vida (Martín Baró, 1983; véase Gondra, 2013). Ciertamente, son importantes las condiciones sociales que nos envuelven, pero también el cómo cada individuo haga frente a tales condiciones. Claramente lo dice el propio Martín Baró (1998, pp. 48-49): «A la psicología social corresponde desenmascarar los vínculos que ligan a los actores sociales con los intereses de clase, poner de manifiesto las mediaciones a través de las cuales las necesidades de una clase social concreta se vuelven imperativos interiorizados por las personas, desarticular el entramado de fuerzas objetivadas en un orden social que manipula a los sujetos mediante mecanismos de falsa conciencia. La psicología social como ciencia, y no solo el psicólogo social como científico, debe tomar una postura ante esa realidad, pues presupuestos, principios y conceptos van a estar condicionados por los intereses de clase que el psicólogo, como actor social que es también, va a asumir en su quehacer».

En resumidas cuentas, todo lo anterior muestra que la obra psicosociológica de Martín Baró es de gran utilidad para analizar el tema de la pobreza y la desigualdad, así como sus consecuencias. No olvidemos que la relación entre los efectos de la pobreza y los de la desigualdad es muy estrecha. Claramente lo expresó Marx en *Trabajo asalariado y capital*: «Una casa puede ser grande o pequeña, pero mientras las casas circundantes sean también pequeñas satisfará todas las demandas sociales de una vivienda. Pero si un palacio se levanta junto a la pequeña casa, esta se encoge hasta convertirse en un tugurio y el que habita en ella se sentirá cada vez más y más incómodo, insatisfecho y apretado entre sus paredes». De hecho, «a medida que aumentan las desigualdades, la calidad del entorno social parece deteriorarse: disminuye la confianza, la participación en la vida de la comunidad desciende y la hostilidad y la violencia aumentan. En otras palabras, al fortalecerse el dominio jerárquico, las relaciones sociales

igualitarias se debilitan. La amistad y el estatus social bajo están fuertemente relacionados con la salud, y a su vez (de forma inversa) íntimamente relacionados entre sí, puesto que representan las dos caras de la misma moneda» (Wilkinson, 2000, pp. 96-97). América Latina es una de las regiones con una mayor desigualdad, y aquí es estructural e histórica, como una de las herencias del colonialismo. De hecho, en el *ranking* de los quince países más desiguales diez son latinoamericanos.

Como dicen Gatica *et al* (2017, p. 281), la desigualdad es uno de los mayores escándalos éticos y políticos actuales, de forma que son necesarias políticas públicas que traten de incidir en sus causas estructurales para garantizar los derechos básicos a la población (Kliksberg, 2015), Además, tengamos presente que uno de los pilares que ayudan a mantener la desigualdad es el hecho de que millones de personas la defiendan o al menos la justifiquen (Henry y Saul, 2006). Ello es comprensible psicológicamente, pero políticamente es dramático. Puede que, a nivel psicológico, justificar el sistema sea beneficioso, pues permite ver el mundo como ordenado, justo y controlable (Jost y Hunyady, 2002, 2005), lo que ayuda a reducir la angustia emocional y la indignación moral, a la vez que lleva a una menor preocupación por la injusticia, lo que produce mayor felicidad (Napier y Jost, 2008). No es raro, pues, que incluso muchas personas pobres justifiquen la desigualdad que tanto daño les hace (Jost, 2006; Molina Guzmán, 2013). De hecho, sabemos que es donde existe mayor desigualdad económica donde la ciudadanía percibe menor la desigualdad, lo que se debe a posibles sesgos perceptivos (Castillo *et al.*, 2011). Para entender esta justificación de la injusticia resulta de gran interés el estudio de las atribuciones causales (Cozzarelli, Wilkinson y Tagler, 2001) (véase Ovejero, 2020, Cap. 3). Sin embargo, todo ello tiene un grave riesgo político, dado que ello contribuye a que tal desigualdad se perpetúe.

Otra variable cognitiva peligrosa son los prejuicios o actitudes negativas hacia las personas pobres (Gatica *et al*, 2017), dado que justifican el *statu quo* y perpetúan las diferencias sociales (Jost y Banaji, 1994). Con una muestra argentina, Gatica *et al* (2017) encontraron que quienes más justifican y legitiman las desigualdades son las personas de derechas, en especial las que hacen atribuciones internas o personales de la pobreza y son más autoritarias. Al fin y al cabo, el autoritarismo correlaciona con el conservadurismo político (Ovejero, 1991), que se compone sobre todo de dos dimensiones: la preferencia por el orden es-

tablecido y una predilección por la desigualdad (Jost *et al.*, 2003; Jost, Federico y Napier, 2009; Molina Guzmán y Rottenbacher (2013).

Ahora bien, ¿por qué es tan importante la desigualdad en tantos aspectos? ¿Por qué somos tan sensibles a la desigualdad? Ante todo, porque «la psicología individual y la desigualdad social están íntimamente relacionadas. No haber valorado adecuadamente esta relación es una de las razones por las que se ha tardado más en comprender los efectos negativos de la desigualdad para el conjunto social» (Wilkinson y Pickett (2009, p. 52). Tal vez la principal razón por la que la desigualdad influye mucho en la salud es porque incrementa la ansiedad y la depresión, a causa principalmente del estrés que produce. Y ello se debe sobre todo a estos factores (Wilkinson y Pickett, 2009):

1) *Autoestima*: en las sociedades más desiguales se da una creciente ansiedad producida por una excesiva preocupación por cómo nos ven los demás y qué piensan de nosotros, y eso es muy dañino para las personas que tienen menos riqueza. Además, «las fuentes de estrés más poderosas, que afectan a la salud, pertenecen a tres situaciones sociales bien claras: estatus social bajo, falta de amigos y estrés en las primeras etapas de la vida. Las tres han demostrado, en numerosos estudios fiables, que son extraordinariamente perjudiciales para la salud y acortan la longevidad» (Wilkinson y Pickett, 2009, p. 58). Y las tres se dan más en las sociedades más desiguales. Así, sabemos que en las sociedades igualitarias se tiene más amigos que en las desiguales. Y «la amistad ejerce un efecto protector, porque en compañía de amigos nos sentimos más a gusto y más seguros. Los amigos pueden hacer que nos sintamos apreciados, ya que valoran nuestra compañía, disfrutan con nuestra conversación y, en suma, les gustamos» (Wilkinson y Pickett, 2009, p. 59).

2) *Estatus social*: «en general, cuanto más alto se está en la escala social más parece ayudarnos el mundo a alejar la sensación de inseguridad. Si, como generalmente ocurre, vemos la jerarquía social como una especie de ránking de las capacidades de la especie humana, entonces los signos externos de éxito o fracaso (trabajo, ingresos, educación, vivienda, coche y ropa) son los que marcan las diferencias. Es difícil ignorar el estatus social porque desempeña una función importante en la definición de nuestra valía y en la consideración de los demás. Tener éxito es prácticamente sinónimo de subir peldaños

en la escala social [...] cuanto más arriba estemos en la escala social, más fácil nos resultará sentirnos orgullosos, dignos y seguros» (Wilkinson y Pickett, 2009, pp. 59-60). De ahí que exista una clara relación entre el estatus social y las enfermedades que se padecen, de manera que, por ejemplo, un estatus laboral bajo afecta a la salud física a través del estrés que produce y la influencia de este en el sistema inmune. De hecho, se ha encontrado que «los hombres con puestos más bajos en la jerarquía funcionarial (mensajeros, bedeles, etc.) tenían una tasa de mortalidad tres veces superior a la de los hombres en los puestos más altos (jefes, directivos)» (Wilkinson y Pickett, 2009, p. 96).

3) *Ansiedad*: la ansiedad incrementa los efectos de tener un estatus alto o bajo, pues lleva a la necesidad de ser valorados socialmente, en especial en las sociedades menos igualitarias, de manera que «nuestra necesidad de sentirnos valorados y capaces hace que busquemos la aprobación de los demás y que a menudo reaccionemos con ira ante las críticas más o menos implícitas. El estatus social lleva aparejados potentes mensajes de superioridad o inferioridad, y la movilidad social se suele ver como una señal de aptitud» (Wilkinson y Pickett, 2009, p. 63).

4) *Efecto de Dunning-Kruger* (Kruger y Dunning, 1999): aunque no es tenido en cuenta por Wilkinson y Pickett (2009) y ni siquiera lo mencionan, este efecto se ha generalizado mucho a medida que han aumentado las desigualdades, pues nos preocupa más la posición que ocupamos en la jerarquía social, lo que empuja a muchas personas mediocres a no reconocer sus limitaciones y a creerse mejores intelectualmente y más preparadas que los demás. Se sienten «graduados por Internet», saben todo de todo y no admiten su mediocridad. Ello está facilitando la transmisión de las *fake news* (noticias falsas) en esta época de la posverdad. Y es que «la modestia suele ser la primera víctima de la desigualdad: exteriormente, cuando nos exponemos a la valoración de los demás parece que nos endurecemos, pero interiormente –tal como concluye la literatura científica sobre el narcisismo– probablemente nos volvemos más vulnerables, menos capaces de aceptar las críticas, menos preparados para las relaciones sociales y escasamente predispuestos a reconocer nuestros defectos» (Wilkinson y Pickett, 2009, p. 64).

5) *Deterioro de las relaciones sociales*: una de las cosas que más se deterioran con las desigualdades es la calidad de estas relaciones. «La desigualdad, lógicamente, es una poderosa herramienta de división social, tal vez porque todos tendemos a emplear las diferencias en el nivel de vida como indicador de las diferencias de estatus social. Tendemos a elegir a los amigos entre nuestros iguales y nos relacionamos poco con los que son mucho más ricos o mucho más pobres que nosotros. Y cuanto menos nos relacionamos con otro tipo de personas más difícil nos resulta confiar en ellas» (Wilkinson y Pickett, 2009, p. 71). De hecho, se ha encontrado que las personas que tienen más amigos poseen menos probabilidades de coger un resfriado que quienes tienen menos amigos (Cohen, 2005), o que las heridas cicatrizan antes si quienes las sufren tienen una buena relación de pareja (Kiecolt-Glaser *et al.*, 2005). Y es que, como dicen Wilkinson y Pickett, 2009, p. 98), el estatus y la capacidad de integración social son factores determinantes de la salud de la población. Como nos recuerdan Wilkinson y Pickett, los individuos con menos relaciones de amistad corren mayor riesgo de muerte. Tener amigos, estar casados, pertenecer a asociaciones de diferente tipo o contar con personas que nos apoyen son factores que protegen nuestra salud.

6) *Falta de confianza en los demás*: cuanto menor es la desigualdad, mayor es la confianza en los demás, y al revés. Robert Putnam (2002) demostró que la desigualdad está relacionada con el «capital social», que es la suma total de la participación de los individuos en la vida comunitaria. Escribe Putnam que «la comunidad y la igualdad se refuerzan mutuamente [...] En las décadas de 1950 y 1960, la distribución de riqueza y de renta era más igualitaria de lo que había sido durante un siglo [...] Esas mismas décadas vieron también el auge de la cohesión social y el compromiso civil. Los máximos de igualdad y capital social coincidían [...] A la inversa, el último tercio del siglo XX fue un tiempo de desigualdad al alza y de merma del capital social». Y aunque correlación no significa relación de causa-efecto, Erik Uslaner (2002) muestra que es la desigualdad la que afecta a la confianza, y no al revés, argumentando que, si vivimos en sociedades con más capital social, tendremos más amigos y conocidos, y eso puede mejorar nuestra confianza en la gente que nos rodea. Y al revés: «Cuando la desigualdad es mayor, las personas se preocupan menos las unas de las otras, hay menos reciprocidad en las relaciones y la gente tien-

de a arreglárselas solas y a solventar sus problemas sin preocuparse de cómo repercutirán sobre los demás, lo que provoca, inevitablemente, una caída de la confianza» (Wilkinson y Pickett, 2009, p. 76). Y es que, en definitiva, si la desigualdad nos divide socialmente, mayores índices de igualdad nos unen más y hacen que confiemos más en los otros. De hecho, Uslaner (2002) muestra que en Estados Unidos las personas que confían en los demás tienden a dedicar más tiempo y dinero a ayudar a otros, y cuando la confianza es alta, la gente se siente segura, tiene menos preocupaciones y ve a los demás no como competidores, sino como colaboradores, y hasta vive más tiempo (Barefoot *et al.*, 1998). Como escriben Wilkinson y Pickett (2009, p. 82), «podemos considerar la confianza como un medidor importante de la forma en que una mayor igualdad material puede contribuir a crear una comunidad más cohesionada y colaboradora, en beneficio de todos».

7) *El «virus de la abundancia»:* este «virus», común en las sociedades ricas, ayuda a explicar por qué las personas que viven en sociedades más desiguales tienden más a padecer más enfermedades mentales. Se trata de «un conjunto de valores que nos hace más vulnerables ante los trastornos emocionales» (James, 2007). Tiene que ver con el afán desmedido de ganar dinero y obtener posesiones y con querer aparentar ante los demás de tener un nivel de vida más alto del que en realidad tenemos, lo que nos hace más vulnerables a la depresión, a la ansiedad, al abuso de sustancias estimulantes y a los desórdenes de la personalidad (Wilkinson y Pickett, 2009, p. 91). También el economista Robert Frank (1999) ha observado el mismo fenómeno y lo llama «fiebre del lujo». a medida que aumenta la desigualdad y los muy ricos gastan más y más dinero en artículos de lujo, el deseo de poseer cosas semejantes invade al resto de las personas, que se esforzarán todo lo posible para estar «a la altura» de los tiempos. Y dejarán de comprar cosas esenciales para gastar su dinero en cosas superfluas pero ostentosas, como ya he dicho anteriormente. De forma similar, Richard Layard habla de nuestra «adicción a los ingresos», refiriéndose con ello a que cuanto más tenemos más creemos necesitar y más tiempo dedicamos a trabajar para adquirir riqueza y posesiones materiales, en detrimento de nuestra vida familiar, nuestras relaciones sociales y nuestra calidad de vida. Ello, que está muy relacionado con el grado de igualdad o desigualdad

que haya en una sociedad, perjudica nuestra salud y reduce nuestro nivel de felicidad.

8) *El placer de cooperar y el dolor de sentirse excluido*: está demostrado que la cooperación mejora nuestra satisfacción con la vida, nos hace sentirnos bien y aumenta nuestra felicidad. En cambio, ser individualistas, egoístas y competitivos, como exigen los nuevos tiempos neoliberales, tiene justamente los efectos opuestos. De hecho, como subrayan Wilkinson y Pickett (2009, p. 237), la experiencia de la cooperación mutua estimula los centros de recompensa. Las redes neuronales de recompensa estimulan la reciprocidad y la resistencia a actuar de forma egoísta (Rilling *et al.*, 2002) y la tendencia a excluir a las personas que no cooperan es un poderoso recurso para mantener altas tasas de cooperación (Ouwkerk, Van Lange y Galluci, 2005). En las sociedades igualitarias hay más cooperación que en las desigualitarias. «Somos una especie que disfruta con la amistad, la cooperación y la confianza, con un fuerte sentido de la justicia, equipada con neuronas espejo que nos ayudan a desenvolvernos en la vida identificándonos con los demás, y está claro que las estructuras sociales que generan relaciones basadas en la desigualdad, la inferioridad y la exclusión nos causan graves daños. Si comprendemos esto, tal vez podamos entender por qué las sociedades desiguales son tan disfuncionales, tal vez también empecemos a creer que una sociedad más humanizada puede ser infinitamente más práctica» (Wilkinson y Pickett, 2009, p. 238) [Para entender mejor todo esto, Piotr Kropotkin (2005/2902) nos puede ser de gran ayuda (Ovejero, 2018; 2021b)].

4.7. ¿Qué se puede hacer para reducir las desigualdades?

Como nos recuerdan Wilkinson y Pickett (2009, p. 230), la especie humana ha vivido casi siempre (el 90 por ciento de su historia) en sociedades altamente igualitarias y cooperativas. Y ello nos ha forjado una «naturaleza cooperativa y solidaria». Por eso, tal vez la medida más eficaz para reducir las desigualdades sea el fomento de la cooperación, sobre todo si es solidaria. Y una buena forma de lograrlo es a través del aprendizaje cooperativo en las aulas (Ovejero, 1990, 2018). Los seres humanos podemos convertirnos en lo mejor o en lo peor, podemos ser «los peores rivales de nosotros mismos, también tenemos el potencial para ser la mayor fuente de seguridad y consuelo de nuestros congéneres» (Wi-

lkinson y Pickett, 2009, p. 223). Decía Jean-Paul Sastre que el infierno son los otros. Y tenía razón. Pero los otros son también el cielo. Subraya Sahlins (1993) que para evitar «la guerra de todos contra todos», la vida social y económica se basaba en sistemas de intercambio de regalos, reparto de comida, y en un alto grado de igualdad. Esto servía para minimizar la animosidad y mantener buenas relaciones. Las formas de intercambio que implicaban expresiones directas de interés personal, tales como la compraventa o el trueque, se consideraban socialmente inaceptables y estaban fuera de la ley, siendo la cooperación uno de los rasgos psicológicos seleccionados para el buen funcionamiento de las sociedades igualitarias, junto a la amistad, la solidaridad, la empatía, el sentido de justicia o el de reciprocidad. Y es el fomento de estas cualidades lo que podría mejorar nuestra especie, aunque ello exigiría transitar por caminos radicalmente diferentes a los neoliberales.

Joseph Stiglitz (2020, p. 28), Premio de Economía del Banco de Suecia, propone dos cosas para reducir las desigualdades: mejorar la igualdad de oportunidades educativas para que suba el rendimiento escolar del alumnado de clase baja y elevar los impuestos de sucesiones (lo que, a mi juicio, debería acompañarse de un mayor control del fraude fiscal y una lucha sin cuartel contra los paraísos fiscales). Ello dificultaría la creación de una plutocracia hereditaria, que podría llegar a ser el fin de la democracia. Pero hay también otra vía para reducir la desigualdad y consiste en incrementar la cooperación y el cooperativismo. En esta línea, Thomas Piketty proponía también la creación de un impuesto dirigido precisamente a obtener fondos para reducir las desigualdades. «La solución correcta es un impuesto progresivo anual sobre el capital; así sería posible evitar la interminable espiral de desigualdad y preservar las fuerzas de la competencia y los incentivos para que no deje de haber acumulaciones originarias. Por ejemplo, hemos mencionado la posibilidad de una lista de tasas impositivas al capital con tasas limitadas a 0,1-0,5 % anual sobre los patrimonios de menos de un millón de euros, de 1 % para fortunas entre uno y cinco millones de euros, de 2 a 5 % para aquellas de entre cinco y diez millones de euros, o 10 % anual para las fortunas de varios cientos o miles de millones de euros. Esto permitiría contener el crecimiento sin límites de las desigualdades patrimoniales mundiales que hoy en día crecen a un ritmo insostenible a largo plazo, algo que debería preocupar

incluso a los fervientes defensores del mercado autorregulado. La experiencia histórica indica, además, que fortunas tan desmesuradamente desiguales tienen poco que ver con el espíritu empresarial y carecen de utilidad para el crecimiento» (Piketty, 2014, p. 644).

Por su parte, Walter Scheidel (2018) mantiene la tesis de que a lo largo de la historia han sido siempre –o casi siempre– fenómenos violentos los que han reducido de una forma importante las desigualdades, sobre todo las guerras, las revoluciones y las pandemias. Sin embargo, este mismo autor se pregunta si no ha habido –y podrán seguir existiendo– otras formas más positivas de reducir la desigualdad. Y responde afirmativamente. En efecto, aparte de que ha habido muchas culturas igualitarias, es que fueron medidas democráticas las que en Europa permitieron reducir drásticamente la desigualdad durante los treinta años posteriores a la segunda guerra mundial, durante la llamada sociedad del bienestar, que veremos mejor en el Capítulo 8.

Otra forma de reducir la desigualdad –y la pobreza– pudiera ser la implantación de usos democráticos. Pero ello no está nada claro. Así, basándose en 538 evaluaciones de 184 países desde la independencia o 1960 hasta 2010, Acemoglu y Johnson (2006) no detectaron ningún efecto sistemático de la democracia en la desigualdad del mercado o incluso de los ingresos disponibles. Y es que, como subraya Scheidel (2018), «el papel de la democracia a la hora de condicionar la distribución neta de recursos es complejo y heterogéneo y que la asociación que a menudo se presupone entre democracia y políticas redistributivas igualitarias no está ni mucho menos clara». Ya he dicho que desigualdad y democracia no se llevan bien. Como dijo Louis Brandeis, juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos, «podemos tener democracia en este país o podemos tener grandes riquezas concentradas en las manos de unos pocos, pero no podemos tener ambas cosas al mismo tiempo». Pero no es la democracia en sí misma la que determina si habrá o no una reducción importante de la desigualdad en un país, sino las políticas que se hagan. Por eso, más que la democracia, es el tipo de gobierno que haya lo que determina la posible reducción de la desigualdad: en general, gobiernos de izquierda toman medidas que la reducen, y más cuanto más a la izquierda se posicionen, mientras que los gobiernos de derecha, y más cuando más a la derecha se posicionen, suelen ampliar la desigualdad existente. Basta

con recordar a Reagan en EE. UU. o a Thatcher en el Reino Unido. Sin embargo, lo que acabo de decir es solo con carácter general, pues también intervienen otros factores. Me refiero en especial al grado en que la ideología neoliberal ha sido internalizada por gobiernos de izquierda o socialdemócratas, como fueron los casos de Tony Blair (el gran logro de Margaret Thatcher, según dijo ella misma), Gerhard Schroeder o Felipe González. Así y todo, como indican los datos disponibles, en la época de Felipe González la desigualdad se redujo en España bastante más que en la etapa de los gobiernos del PP.

Ahora bien, si la democracia no implica necesariamente que se produzca una reducción significativa de la desigualdad, la fuerza de los sindicatos sí lo implica. Aunque en los sindicatos –sobre todo en los mayoritarios– hay mucho que corregir, sin embargo, para los trabajadores, mejor son unos malos sindicatos su ausencia. Y mucho mejor, obviamente, si son buenos sindicatos. Pero estos organismos necesitan, a su vez, el apoyo de los trabajadores y, por tanto, que las tasas de sindicación sean altas: ahí está su verdadero poder. Como sostiene Scheidel (2018, p. 389), «la fuerza de los sindicatos se correlaciona negativamente con la desigualdad».

En resumidas cuentas, digamos, para terminar este largo apartado, que, si queremos tener una buena salud y vivir muchos años saludablemente, debemos procurar tener poco estrés y mucho placer y disfrute de la vida. Y ello se consigue más fácilmente en las sociedades igualitarias que en las desigualitarias, pues en ellas hay más confianza en los demás, más empatía, más cooperación y más solidaridad.

4.8. Conclusión

Sostenía Karl Marx que el motor de la historia es la lucha de clases. Sin embargo, a partir de lo dicho en este capítulo, podemos añadir que el motor de la historia es la lucha por la igualdad, que es algo no muy diferente de lo que decía Marx. Como escribe Scheidel (2018, p. 415), miles de años de historia pueden ser resumidos en una sencilla verdad: desde el inicio de la civilización, el desarrollo económico y el surgimiento de los Estados fomentaron una creciente desigualdad, al menos hasta 1914.

Por otra parte, no resulta fácil decidirse por una de las dos partes del binomio igualdad/libertad. No hay nada más importante que la libertad, a no ser la propia vida y la igualdad. Es que no puede haber verdadera libertad sin igualdad. En un sistema de grandes desigualdades, quienes tienen el poder y los recursos tienen mucha libertad, mientras que quienes no tienen más que sus manos y su hambre no pueden ser libres.

Además, como hemos visto en este capítulo, la desigualdad desorbitada tiene otros muchos efectos altamente dañinos. Una de las ideas centrales de la economía moderna es el óptimo de Pareto, que afirma que solo un cambio que no deja a nadie en peores condiciones que antes puede ser considerado «promotor del bienestar». Sin embargo, como señala Amartya Sen, «una sociedad puede lograr el óptimo de Pareto y a pesar de ello ser totalmente vergonzosa», como está ocurriendo en nuestra época: un importante incremento de las desigualdades, incluso en el caso de que se eliminara la pobreza totalmente, sería inaceptable pues, tarde o temprano, produciría malestar social e incluso inseguridad para todos. El crecimiento económico que está produciendo el actual capitalismo neoliberal está reduciendo poco la pobreza, pero está incrementando mucho la desigualdad, siendo evidentes sus consecuencias, como hemos visto en este capítulo.

Lo triste es que, como muestra Walter Scheidel (2018), hayan sido las guerras las que más han contribuido a la reducción de la desigualdad en el siglo XX. En efecto, «la catástrofe de la Primera Guerra Mundial, a causa de su movilización sin precedentes de personas y recursos para la matanza de masas, comprimó la desigualdad de ingresos y riqueza en las principales naciones contendientes. [...] En Rusia, la Primera Guerra Mundial desembocó en la reducción más drástica de la desigualdad. Sin embargo, a diferencia de otros casos, la equiparación no fue propiciada por intervenciones y dislocaciones en tiempos de guerra o por un desmoronamiento económico de posguerra, sino por levantamientos revolucionarios radicales nacidos de la destrucción de la guerra» (Scheidel, 1918, pp. 232-233). En efecto, lo que realmente redujo la desigualdad en Rusia fue la revolución de 1917. Y la desigualdad volvió a subir muchísimo a partir de 1991, tras la desaparición de la Unión Soviética, de tal forma que, en 2014, los 111 multimillonarios rusos poseían una quinta parte de toda la riqueza del país (Scheidel, 1918) y el 10 por ciento más rico controlaba ya un 85 por ciento de la riqueza

za nacional. También en China, la revolución de Mao redujo enormemente la desigualdad, pues las expropiaciones de las tierras afectaron sobre todo a los más ricos. Se redujo mucho el coeficiente de Gini, pero en las dos últimas décadas ha vuelto a subir alarmantemente. En suma, las revoluciones comunistas redujeron mucho la desigualdad allí donde se produjeron. Otra cosa es si mereció la pena tanta violencia y tantas muertes para conseguir algo, sin duda importante, pero que desapareció en cuanto cayeron tales regímenes y fueron sustituidos nuevamente por sistemas capitalistas. Como concluye Scheidel (1918, p. 363), las notables reducciones de la desigualdad de recursos dependieron de desastres violentos, sobre todo de guerras, revoluciones y pandemias, lo que plantea una pregunta esencial: ¿No ha habido, ni hay, rutas pacíficas para reducir la desigualdad? Sí las hay: la mejora sustancial de la educación de las mujeres, la reforma agraria, el aumento del salario mínimo, la implementación de un sistema digno de pensiones, ayudas para la adquisición de la vivienda habitual, etc. Y todo ello, obviamente, necesita del establecimiento de un sistema fiscal progresivo que grave a los más ricos, que establezca un fuerte impuesto a las transmisiones y las herencias y que controle férreamente el fraude y la elusión fiscal.

Ahora bien, para construir una sociedad mejor y más amable necesitamos ante todo dos cosas: saber por qué existen tantas desigualdades económicas y sociales, y tener «un conocimiento más profundo de cómo nos perjudica a todos, en tanto que seres humanos, la desigualdad y de que tenemos capacidad para ser de otra manera. Necesitamos comprender que un mayor grado de igualdad hará posible que emerja una naturaleza humana más sociable, y para ello no hay que esperar ninguna alteración genética» (Wilkinson y Pickett, 2009, p. 221). Eso es lo que he pretendido hacer en este largo capítulo. Por tanto, «si queremos mejorar la salud y el capital social, si queremos liberarnos de los prejuicios antisociales y crear una sociedad más incluyente, la reducción de las desigualdades debe ser un objetivo político prioritario» (Wilkinson, 2000, p. 105). La medida más eficaz para terminar con la pobreza y con el hambre en el mundo pasa por reducir drásticamente el nivel de desigualdad existente. Pero lo que estamos viendo estos últimos años es todo lo contrario: un aumento cada vez mayor de las desigualdades. Por ejemplo, las dos últimas terribles crisis, la financiera de 2008 y la sanitaria de 2020, que podrían haber sido aprovechadas por los poderes públicos y por las instituciones internacionales (ONU, FMI, BM, OMC y OCDE)

para reducir la brecha entre ricos y pobres, se ha utilizado precisamente para lo contrario. La conclusión a que llega Walter Scheidel (2018, p. 447), con respecto a las desigualdades en el mundo actual, es realmente estremecedora: «En todo el planeta, la desigualdad económica es mayor de lo que pueda parecer si recurrimos simplemente a cálculos estándar, pues si pudieran incorporarse los fondos no declarados en paraísos fiscales a las estadísticas de riqueza privada familiar, la desigualdad sería más alta también en esa categoría». Más aún, ese efecto ha sido más marcado todavía en países donde, como es el caso de Estados Unidos, ha habido una distribución de recursos cada vez más desigual y unos mayores índices de crecimiento. Por ejemplo, en China, donde el coeficiente Gini de distribución de ingresos se ha más que duplicado y la producción real media per cápita se ha multiplicado por seis desde 1980, la desigualdad absoluta se ha disparado a cotas inadmisibles. Y algo similar ha ocurrido en casi todo el planeta.

En todo caso, tengamos en cuenta que no es cosa de todo o nada. Soy consciente de que las enormes diferencias existentes entre ricos y pobres a nivel planetario no pueden ser eliminadas en un año ni en diez. Pero lo que sí debería hacerse es que tales diferencias no sigan aumentando. Es imprescindible reducir las desigualdades, aunque sea poco a poco. Como escriben Wilkinson y Pickett (2009), la igualdad es el pilar sobre el que ha de construirse una sociedad mejor, más justa y más solidaria. Y para ello, como mostró Kropotkin, resulta imprescindible la solidaridad y la ayuda mutua, que son precisamente las bases de la especie humana. Si no un viento, al menos una ligera brisa de esperanza se otea ya en el horizonte. En efecto, el actual presidente de China, Xi Jinping, parece haber optado por reducir la desigualdad en su país, redistribuyendo más equitativamente la riqueza. Y, a su manera, algo similar pretende Joe Biden en Estados Unidos, a través de una mejor distribución de la riqueza con el objetivo de conseguir una mayor cohesión social que les permita ser eficaces en la nueva gran guerra fría que se anuncia entre EE. UU. y China. Pero el horizonte se presenta paradójico, y China no ofrece demasiadas seguridades, mientras que en Estados Unidos Donald Trump espera su ocasión en las próximas elecciones presidenciales.

Para terminar, diré que, a mi modo de ver, es la igualdad la columna vertebral de una sociedad justa y solidaria, pero todavía estamos muy lejos de conseguir esa tan necesaria igualdad. Como escribe Pitteky (2021, p. 20), «el final de la

historia no está a la vista. El movimiento hacia la igualdad tiene todavía un largo camino que recorrer, especialmente en un mundo en el que los más pobres (especialmente los más pobres de los países pobres) van a sufrir cada vez con más intensidad los daños climáticos y medioambientales causados por el estilo de vida de los más ricos». No olvidemos que los países que menos contaminan, precisamente porque son pobres y no tienen fábricas ni consumen mucho, serán los primeros en verse afectados por el cambio climático. Además, resulta difícil ser muy optimistas de cara al futuro, al menos mientras no consigamos que el neoliberalismo deje de ser hegemónico y las políticas socialdemócratas –en ausencia de alternativas sin duda mejores, pero de momento poco probables de ser implantadas– pasen a constituir la nueva hegemonía.

CAPÍTULO 5

EXCLUSIÓN SOCIAL

5.1. Introducción

Aunque no es la pobreza el único factor que lleva a la exclusión social, sí es el más importante. De hecho, pobreza y exclusión social están estrechamente relacionados. Pero hay también otros factores que llevan a la exclusión social, como la «raza»¹ o la etnia, pero normalmente las personas ricas de una «raza» o de una etnia excluidas no son discriminadas ni excluidas. El mayor delito del ser humano sigue siendo el ser pobre y es a los pobres a los que más se les excluye, hasta el punto de ser criminalizados. Pero, como escribe Canet (2001, p. 24), «no siempre la falta de recursos es sinónimo de exclusión social y no solo la exclusión social es debida a la falta de trabajo. De todas formas, la falta de recursos económicos inicia un itinerario de exclusión social».

Por otra parte, como señala Félix Tezanos (2001), el análisis de la exclusión social puede seguir una vía descriptiva o una vía explicativa. Lo expresa bien Eduardo López-Aranguren (2005, p. 192): «El “enfoque descriptivo” se concentra en averiguar quiénes son los excluidos, cuáles son sus rasgos característicos, cuáles son sus privaciones y carencias fundamentales, cuántos son, dónde y cómo se encuentran, qué necesitan. Describir, contar y conocer lo más a fondo posible son las metas de los investigadores que siguen este enfoque. Se supone

1 En la especie humana no existen razas, somos una única «raza», con pequeñas diferencias como el color de la piel o el color del pelo. Pero utilizo ese término (entrecomillado), dada la extensión de su uso.

que este conocimiento es imprescindible para estar en condiciones de sugerir formas de ayuda que permitan remediar la situación de los afectados y facilitar su inserción e integración social. En cambio, el «enfoque explicativo» o estructural intenta explicitar las diversas formas de exclusión, determinar cuáles son los factores causales de la exclusión y cómo se combinan unos factores con otros para producir la exclusión. Su meta es comprender el fenómeno de la exclusión de manera que seamos capaces de eliminar ese fenómeno alterando los factores causales y previniendo su presencia». En este capítulo intentaré conjuntar ambos enfoques.

5.2. Definición y concepto de exclusión social

Aunque este libro trata esencialmente de la desigualdad, de la pobreza y del hambre que de ella se deriva, también resulta imprescindible un análisis, siquiera somero, de la exclusión social. Los estudios sobre la pobreza se iniciaron en el mundo anglosajón, ya en el siglo XIX, donde se planteó la cuestión en términos de distribución de los recursos, de manera que todos los individuos o familias tuvieran lo suficiente para sobrevivir dadas las privaciones del mundo capitalista (López-Aranguren, 2005, p. 186). En cambio, la exclusión social fue estudiada principalmente en Francia y después en toda Europa, donde el debate se insertó en la visión socialdemócrata de la sociedad. Por decirlo con palabras de López-Aranguren (2005, p. 185), fue en Francia donde se empezó a hablar, en los años 70 del siglo XX, de «personas excluidas» y de «población excluida» para referirse a las categorías sociales que carecen de protección social: discapacitados, ancianos incapaces de valerse por sí mismos, niños víctimas de abusos, toxicómanos, delincuentes, familias monoparentales, personas marginales y asociales. Como vemos, se ponía el acento en la noción de «inadaptación social», de manera que un excluido sería un inadaptado marginal o asocial. En 1974, René Lenoir calculó que la población excluida así definida representaba una décima parte de la población francesa.

Pero en los años 80 se cambió de orientación, como consecuencia del alto desempleo existente en las sociedades europeas, que llevó a millones de personas a perder sus derechos de ciudadanía propios de la socialdemocracia y pasar a engrosar las tasas de exclusión social. De hecho, «el desempleo estructural y el paro de larga duración eran fenómenos que ponían en cuestión la integración

social asociada a la época de prosperidad económica y de estabilidad social de las décadas de 1950 y 1960. La exclusión social se ve como una ruptura de los lazos que unen al individuo con la sociedad, como una quiebra de la integración social, y por eso los programas sociales que se crean en Francia en los años 80 ponen el énfasis en la integración y en la inserción. Un buen ejemplo de tales acciones sociales es la Renta Mínima de Inserción aprobada por el Parlamento francés el 1 de diciembre de 1988» (López-Aranguren, 2005, pp. 185-186). De ahí que, en su programa *Pobreza 3* para 1990-1994, la UE optara por el término «exclusión social» en lugar de utilizar el de «pobreza», entendiendo que la exclusión social es más que pobreza porque afecta a áreas como empleo, educación, formación, vivienda, asistencia médica, etc. De esta manera, el concepto de exclusión social incluye la noción de «derechos sociales», siendo su principal objetivo la integración económica y social de los grupos más desfavorecidos. En esta línea, la cumbre de Lisboa y Feira de marzo de 2000 oficializó el objetivo de conseguir «una Europa inclusiva», entendiendo que la marginación social era uno de los principales retos con que se enfrentaba la Unión Europea, aunque ello se quedó más en un ejercicio de buenas intenciones que en un intento real de conseguirlo. También en esta línea, el *Diccionario Sociológico* de Giner y cols. (1998, p. 284) define la «exclusión social» como el «proceso social de separación de un individuo o grupo respecto a las posibilidades laborales, económicas, políticas y culturales a las que otros sí tienen acceso y disfrutan». De forma similar, para Canet (2001) la exclusión social más que un proceso es una situación, aquella en que se encuentra una persona, familia o grupo social que, por distintas causas, no participa en el proceso de producción, en el de consumo o en el de bienestar social; o sea, no puede participar en el proceso de ciudadanía.

Como vemos, la mayoría de las concepciones actuales de exclusión social proviene de la propuesta de Thomas H. Marshall, según la cual la exclusión social es el fenómeno opuesto al de «ciudadanía social» (Marshall y Bottomore, 1998) y los excluidos serían los individuos o grupos que, por diferentes razones, principalmente por no tener trabajo, no consiguen el *status* de ciudadanía y no pueden beneficiarse de los derechos sociales que las sociedades avanzadas proporcionan a sus ciudadanos. Pero, aunque se puede excluir a alguien por diferentes motivos, la exclusión social se basa casi siempre en el rasgo de ser pobres, o sea, que la pobreza es un elemento esencial que suele encontrarse casi siempre entre los

«motivos» para excluir socialmente a alguien. Sin embargo, como ya he dicho, la exclusión social tiene un alcance mayor que la pobreza, de forma que, como afirma Eduardo López-Aranguren, los ingresos o los recursos financieros no captan la esencia de la exclusión social. Por eso resulta de utilidad tener en cuenta las cuatro dimensiones que, según Commins (1993), tiene la exclusión social: «ausencia de integración cívica», según la cual las personas excluidas no serían iguales a las demás personas en una sociedad democrática; «ausencia de integración económica», causada principalmente por el hecho de no tener un empleo, lo que hace que tales personas no puedan mantenerse a sí mismas; «ausencia de integración social», lo que supone el no ser capaces de aprovechar los servicios sociales proporcionados por el Estado; y «ausencia de integración interpersonal», por carecer de familia, de amigos o de relaciones con los vecinos, es decir, por no tener el suficiente capital social o redes sociales que les proporcionen cuidados, compañía y apoyo social cuando lo necesiten. Como vemos, pues, la pobreza sería solo una faceta de la exclusión social. «La exclusión social es, pues, insistamos en ello, más que pobreza económica; se distingue de la pobreza por su carácter procesual y por su naturaleza multidimensional. La exclusión social implica una acumulación de privaciones y obstáculos que dificultan o impiden la participación en la vida social de la mayoría de la población» (López-Aranguren, 2005, p. 191). Estas privaciones hacen que sea más difícil para las personas excluidas incorporarse a ámbitos sociales esenciales como son el trabajo, la educación, la salud o la vivienda.

Ahora bien, si la pobreza va asociada a la falta de recursos económicos, «la exclusión social no se puede explicar con arreglo a una única causa o factor, sino que precisamente se define por una acumulación de factores o déficits que se interrelacionan y retroalimentan entre sí. [...]. La exclusión social se define entonces como una situación concreta fruto de un proceso dinámico de acumulación, superposición y/o combinación de diversos factores de desventaja o vulnerabilidad social que pueden afectar a personas o grupos, generando una situación de imposibilidad o dificultad intensa de acceder a los mecanismos de desarrollo personal, de inserción sociocomunitaria y a los sistemas preestablecidos de protección social. Dicho de otra manera: hay personas que viven en unas condiciones de vida materiales y psíquicas que les impide sentirse y desarrollarse plenamente como seres humanos» (Subirats, 2004, p. 19). Más aún, añade

Subirats, la exclusión social se asocia sobre todo a «procesos de vulnerabilidad, de desconexión social, de pérdida de lazos sociales y familiares que, junto con una combinación variable de causas de desigualdad y marginación, acaban generando situaciones que denominamos de exclusión». Por tanto, insisto en ello, la exclusión social no deriva necesariamente de la falta de recursos económicos, aunque ello les da muchas papeletas a los pobres para entrar en la categoría de excluidos sociales. «En este sentido, el término exclusión social resulta útil para expresar un conjunto pluriforme de situaciones de carencia económica, relacional, habitacional, administrativa, etc. que son cada vez más habituales en nuestras sociedades, y que nos hablan de recuperar un sentido integral de la humanidad, de la condición de persona, de ciudadano. Así pues, con el concepto de exclusión social queremos abarcar y recoger aspectos de desigualdad propios de la esfera económica, pero también de muchas otras que pueden ser tan o más importantes que esta en la determinación de los procesos de exclusión observados» (Subirats, 2004, pp. 138-139). Probablemente los cuatro grupos con más exclusión social sean estos: inmigrantes no comunitarios que viven muy aislados y en condiciones de precariedad laboral; mujeres cuyo trabajo en el ámbito doméstico no es reconocido; jóvenes con una enorme fragilidad en sus trayectorias de inserción laboral; y ancianos con problemas de soledad y pobreza.

En definitiva, «aunque los ingresos, y, por lo tanto, las rentas familiares e individuales, continúan siendo una fuente evidente de desigualdad social, la emergencia y la consolidación progresiva de estos nuevos factores han conducido a reflejar mediante el estudio de la exclusión social, la existencia de otras pautas de segregación o marginación de sectores cada vez más significativos de la población. [...] El concepto de exclusión social, en este sentido, se revela como extraordinariamente útil para hablar de todas aquellas situaciones en que, más allá de la privación económica, se sufre una privación de la propia idea de ciudadanía o, dicho de otra manera, de los derechos y libertades básicas de las personas sea cual sea su origen o nacionalidad. Desde esta óptica, la pobreza, a pesar de ser una constante en muchas situaciones de exclusión, puede tomarse como un factor importante de vulnerabilidad social que, unido a otras dificultades como por ejemplo la mala salud, la sobrecarga doméstica y familiar o el desempleo de larga duración, puede conducir a las personas hacia una situación de exclusión social de difícil solución. Así pues, con el concepto de exclusión social queremos

abarcar y recoger aspectos de desigualdad propios de la esfera económica, pero también muchos otros como la precariedad laboral, los déficits de formación, la falta de vivienda digna o el acceso a la misma, las precarias condiciones de salud, la falta de relaciones sociales estables y solidarias, la ruptura de lazos y vínculos familiares, etc.» (Subirats, 2004, pp. 11-12).

5.3. Factores explicativos de la exclusión social

Según Joan Subirats (2004, p. 22), son muchísimos los factores que determinan la exclusión social, factores que podemos agrupar en los siguientes apartados: económicos (pobreza económica, dificultades financieras, dependencia de prestaciones sociales y ausencia de protección social), laborales (desempleo, subocupación y precariedad laboral), formación (no escolarización o sin acceso a la educación obligatoria, analfabetismo o bajo nivel formativo, fracaso escolar y abandono prematuro del sistema educativo), sociosanitario (no acceso al sistema y a los recursos sociosanitarios básicos, adicciones a diferentes drogas, enfermedades infecciosas y trastorno mental), residencial (sin vivienda propia, infravivienda, acceso precario a la vivienda, vivienda en malas condiciones y vivir en un espacio urbano degradado y con deficiencias o carencias básicas), relacional (deterioro de las redes familiares por conflictos o violencia intrafamiliar, escasez o debilidad de las redes familiares, monoparentalidad, soledad, escasez o debilidad de sus redes sociales y rechazo o estigmatización social), ciudadanía y participación (no acceso a la ciudadanía, acceso restringido a la ciudadanía, privación de derechos por proceso penal y no participación política y social). Veamos con más detenimiento tres de los más importantes factores de exclusión social:

1) *Empleo*: «el desempleo, especialmente el paro de larga duración, y la precariedad laboral derivada de la contratación temporal son variables de exclusión social en tanto que el empleo fijo o estable es una variable de integración social. En el ámbito económico, la pobreza indicada por recursos inexistentes o insuficientes y la carencia de vivienda son variables de exclusión en tanto que la percepción de ingresos regulares suficientes y el acceso a una vivienda digna son variables de integración» (López-Aranguren, 2005, p. 193). Es evidente que el no tener empleo es el principal factor de exclusión social. En efecto, «tanto desde una perspectiva teórica como desde una perspectiva

empírica el empleo emerge como la variable crucial en los nuevos procesos de exclusión. El empleo tiene una obvia función económica de fuente de ingresos necesarios para el consumo, para la satisfacción de las necesidades y para la vida en sociedad; por medio de los ingresos ligados a un empleo estable, los trabajadores participan en otras actividades como la educación y la información, la vida asociativa y el ocio. Pero las funciones sociales y psicológicas del empleo tienen también enorme importancia. En el ámbito social, el tener un empleo confiere a la persona el *status* de persona productiva que contribuye a la sociedad con su trabajo y sus impuestos; en cuanto tal, el empleo implica el reconocimiento social del empleado y el trabajo se convierte en el fundamento de la ciudadanía social (Castel, 1996). Y, por otro lado, el tener un empleo aumenta las relaciones sociales del trabajador más allá de las relaciones familiares y vecinales que, por demasiado restringidas y cercanas, pueden ser un tanto agobiantes. En el ámbito de lo psicológico, «el empleo es crucial en la definición de la identidad social de la persona» (López-Aranguren, 2005, pp. 196-197). El carecer de empleo hace muy difícil la integración social de la persona desempleada, sobre todo en el caso de ser inmigrante y tener lejos a la familia y los amigos, y principalmente cuando el desempleo es de larga duración o es recurrente.

Pero la exclusión social producida por la falta de empleo y, por tanto, por factores económicos, puede ser paliada si se toman medidas adecuadas. De hecho, en España, a pesar de que hay unas tasas muy altas de parados de larga duración y contratación temporal, sin embargo, la exclusión social no es muy alta. Ello se debe principalmente a estas cuatro variables (López-Aranguren, 2005, pp. 207-208): 1) *se ha universalizado el sistema sanitario*, que cubre también a los inmigrantes que estén inscritos en el padrón municipal. Si en el año 1978 había cerca de un 82 % de la población que estaba protegida en materia de salud, en el año 2003 el sistema sanitario ya cubría al 98,8 % de la población residente (INE, 2003, pp. 100-101); 2) *se ha extendido el sistema educativo* a la mayor parte de la población, de forma que ya en el curso 2001-2002 se alcanzaron tasas de escolarización del 100 % entre los 4 y los 15 años, del 92 % en el grupo de los 16 años, y del 79 % en de 17 años (INE, 2003, p. 64); 3) *se ha producido una expansión y mejora del sistema de prestaciones sociales*, habiéndose extendido la cobertura a individuos y familias que antes

no las tenían (las comunidades autónomas han creado sistemas de “renta mínimas de integración”, se han establecido pensiones no contributivas a favor de grupos no cubiertos por el sistema de pensiones contributivas y también complementos de las pensiones mínimas); 4) también debemos tener muy en cuenta *el papel que han desempeñado las familias de las personas en riesgo de exclusión*. España es uno de los países donde es más eficaz el colchón protector de la familia (personas mayores que son atendidos por sus hijos y, sobre todo, por sus hijas, jóvenes y no tan jóvenes desempleados que siguen viviendo con sus padres, jubilados que se encargan de mantener con su pensión a sus hijos en paro y a sus familias, etc.); y 5) también debe tenerse en cuenta *el papel desempeñado por la sociedad civil en la lucha contra la exclusión social* a través de organizaciones no gubernamentales y no lucrativas, financiadas en parte por el Estado, pero donde a menudo participan de forma desinteresada miles de personas, especialmente jóvenes, para ayudar a aquellos necesitados que no tienen ni recursos ni familiares que les ayuden. En definitiva, concluye Eduardo López-Aranguren, «la combinación de estos factores es lo que explica que, más que exclusión social, lo que encontramos en España es lo que Laparra y Aguilar (1999) han llamado “precariedad integrada”».

2) *Educación*: el segundo factor que más incide en la exclusión social es el nivel de educación alcanzado, lo que, por otra parte, está muy influido por el origen familiar de los individuos. Será más fácil encontrar empleo si se tiene un nivel educativo alto. El desempleo afecta sobre todo a los que no tienen estudios. Y si se tiene un empleo, es más probable tener una vivienda. Todo ello lleva a una integración económica y social. La lucha contra el riesgo de exclusión educativa debe incluir programas diversos con el fin de intentar resolver los principales problemas en este campo (López-Aranguren, 2005): a) en el nivel más básico, el problema es el del analfabetismo y la carencia de estudios de adultos; b) en el plano de los niños y jóvenes, los problemas son más bien la desescolarización, el absentismo escolar, el fracaso escolar y el abandono de los estudios; c) está también el problema de aquellas familias que no pueden costear los estudios de hijos e hijas; y d) en el ámbito de las instituciones educativas todavía hay problemas relacionados con indicadores de exclusión o vulnerabilidad educativa, como la desequilibrada distribución

de alumnos que tienen con necesidades educativas especiales entre los centros públicos y los privados y concertados.

3) *Inmigración*: la llegada masiva de inmigrantes a España, cuya economía los necesitaba imperiosamente, ha tenido diferentes efectos, unos claramente positivos y otros algo menos, entre los que se encuentra la frecuente situación de exclusión social de muchos de esos inmigrantes. Si el mero hecho de llegar a la vez muchas personas diferentes, étnica y culturalmente, hace que la rigidez y el dogmatismo de los autóctonos más conservadores se oponga a esa llegada, por muy necesarios que nos sean (la subida electoral de Vox lo refleja claramente), no es raro que aumenten los prejuicios y la discriminación hacia ellas, lo que, por otra parte, hace más difícil aún su integración social. A mi juicio, se trata de algo muy grave, pues, dadas las bajas tasas de natalidad en nuestro país y el consiguiente envejecimiento de la población, a los inmigrantes los necesitamos y vamos a seguir necesiéndolos. Por consiguiente, van a seguir viniendo, mientras se mantengan las enormes diferencias de nivel de vida entre los países ricos de Europa y los países pobres y superpoblados de África (y no solo de África). Y si van a seguir viniendo, al futuro de España le conviene mucho más ir construyendo una sociedad inclusiva y pluriétnica que seguir poniendo trabas a la integración de los migrantes y poniendo las bases para construir una sociedad conflictiva donde sea difícil la convivencia y la vida en paz.

Además, quisiera destacar que la situación de las personas excluidas ha empeorado a lo largo de los últimos años como consecuencia del impacto del capitalismo neoliberal. Son muchos los grupos sociales que forman la población perdedora de este nuevo capitalismo (Ovejero, 2014a): trabajadores sin cualificar, inmigrantes, mujeres, jóvenes, nuevos esclavos, etc. Todos ellos tienen muchas probabilidades de caer en la pobreza y la exclusión social, sobre todo en épocas de crisis económica, como la que tenemos ahora, derivada, a la vez, de los efectos conjuntos de la crisis financiera de 2008 y de la reciente pandemia sanitaria. Además, la situación real de las personas excluidas ha empeorado mucho a causa del progresivo y persistente deterioro de la protección social que les proporcionaba el Estado y que el actual neoliberalismo hegemónico ha reducido de una forma sustancial, protección que contribuía eficazmente a paliar los efectos de las desigualdades económicas y sociales. A la vez están aumentando las actitudes

y prejuicios contra los inmigrantes, y la progresiva polarización social y política no hace sino empeorar las cosas.

En cuanto al impacto de la pandemia sanitaria sobre la exclusión social, en un largo informe de 650 páginas, FOESSA y Cáritas (2022) acaban de mostrarnos unos datos alarmantes con respecto al aumento de la exclusión social. De hecho, este informe muestra que la exclusión social es muy alta en todas las comunidades autónomas, pero que es alarmante en algunas de ellas. Así, el porcentaje de población en situación de exclusión es en Cataluña el 29,1 %, en Andalucía el 26,3, en Murcia el 25,4, en Castilla-La Mancha el 23,4, en Madrid el 22,3, en la Comunidad Valenciana el 21,3, en Castilla y León el 17,9, en el País Vasco el 16,3 y en Asturias el 15,9. Con respecto a la población general, en poco más de un año, el porcentaje de personas en situación de pobreza severa creció un 50 %, subiendo de un 4,7 % a un 7 % (FOESSA y Cáritas, 2022). También subió un 50 % la exclusión severa en nuestro país, de un 8,6 % en su última medición en 2018 a un 12,7 % actualmente. Pero a quienes más está perjudicando la pandemia es a los jóvenes de entre 16 y 34 años, cuya situación es muy preocupante tras haber sufrido dos crisis cuyos efectos se han acumulado, de forma que muchos de ellos están ya en situación de exclusión social o a punto de estarlo: 2,7 millones de ellos están afectados por procesos de exclusión social intensa lo que les impide realizar proyectos de vida para transitar hacia la vida adulta y 650.000 se añadieron a esta situación en 2021. A nivel porcentual, los jóvenes de 16 a 34 años que estaban en situación de exclusión subió, entre 2018 y 2021, del 22,1 % al 28,5 %, mientras que quienes estaban en situación de exclusión severa han pasado de un 10 % a un 15,1 % en esas mismas fechas.

Además, la brecha digital, que es un factor cada vez más esencial de exclusión social, se ha agravado con la pandemia, pues casi todo se hace ahora digitalmente. Y son muchos los que no pueden hacerlo, lo que les priva de muchas oportunidades laborales y de otros tipos, afectando sobre todo a quienes ya estaban en situación de exclusión. El 4,5 % de la población española dice haber perdido diferentes oportunidades por no haber podido conectarse a Internet (por no tener ordenador, por no tener servicio de conexión o por no poseer las suficientes habilidades para esas tareas), porcentaje que sube al 17 % entre las personas que ya estaban en situación de exclusión severa.

También quisiera destacar algunos efectos psicosociales de la exclusión social, como son la angustia ante el futuro, la ansiedad, la pérdida de autoestima, la ruptura de los vínculos con la sociedad, la pérdida de confianza en la sociedad, el deterioro físico, pero sobre todo psíquico, la frustración, el sentimiento de inutilidad y las reacciones agresivas y violentas. «Todos estos efectos y eventuales impactos trazan en su conjunto el panorama de una evolución hacia sociedades más dualizadas, más violentas, más inseguras, más policíacas, más desvertebradas moralmente, más deterioradas y más “costosas” para todos» (Tezanos, 1999b, p. 134). Si a todo ello unimos la actual y peligrosa polarización social y política, con la consiguiente crispación, así como la irresponsable utilización de la ansiedad colectiva, de la incertidumbre y del pánico generalizado producidos por la interminable pandemia de la covid-19 para espurios fines electoralistas por parte de ciertos partidos políticos que no dudan en alarmar artificialmente a la ciudadanía ni en usar la mentira como base de sus falsas argumentaciones, todo ello, digo, puede abocarnos a un futuro en el que la convivencia sea muy difícil en este país y los conflictos de todo tipo estén a la orden del día, y sin visos de solución. Ojalá no lleguemos a encontrarnos en tal situación.

5.4. Conclusiones

Como es bien conocido, tras la crisis financiera de 2008, el mundo gastó todo el dinero que hizo falta para rescatar a los bancos que, por su imprudencia, irresponsabilidad y avaricia, se habían hundido. Pero la Ayuda al Desarrollo de los países pobres y a las personas y las familias necesitadas no solo no estuvo a la altura de sus necesidades, sino que incluso descendió considerablemente, mientras que la contribución a reducir el hambre y la exclusión social también bajó mucho. Y, sin embargo, con una pequeña parte del dinero que se regaló a la banca y a los banqueros podría haberse reducido muchísimo la pobreza, el hambre y la exclusión, las tres grandes lacras, estrechamente relacionadas entre sí, que matan y hacen sufrir a cientos de millones de personas.

CAPÍTULO 6

POBREZA EN LOS PAÍSES SIN DESARROLLAR

6.1. Introducción: Qué es el tercer mundo

A menudo se le llama al tercer mundo «países en vías de desarrollo», mero eufemismo para suavizar el lenguaje, suponiendo que el término «tercer mundo» es peyorativo. Y, sin embargo, lo peyorativo e inadmisibile es no querer admitir la realidad: se trata de un tercer mundo que apenas ha avanzado desde hace décadas, habiendo retrocedido muchos de los países que lo componen. Llamarles «países en vías de desarrollo» no hace justicia a la dura realidad que viven tales países, pues no dejan de ser pobres dado que a la mayoría de ellos no les llega nunca el desarrollo, entre otras cosas porque son ellos los que, con sus escasos recursos, financian el desarrollo de los países más ricos.

Fue el economista francés Alfred Sauvy quien acuñó el término «tercer mundo» en 1952, a través de un paralelismo con el término francés «tercer Estado», para designar a los países que no pertenecían a ninguno de los dos bloques que estaban enfrentados en la Guerra Fría, el primer mundo (el bloque capitalista) y el segundo mundo (el bloque comunista). Y durante varias décadas, al unirse, los países del tercer mundo tuvieron una influencia de cierta importancia. Pero otra de las consecuencias de la globalización fue el «debilitamiento del Sur» y, por tanto, la pérdida de la influencia del tercer mundo, que no tiene grandes empresas transnacionales de peso (solo alguna la India o Brasil). Por tanto, como escribe Michelin Rousselet (1996, p. 18), desde finales del siglo XX «el mundo ya no está dividido en tres grupos, con el tercer mundo en tercer lugar, sino en dos:

los países desarrollados, con un crecimiento lento en algunos casos, pero que pueden hacer que las necesidades básicas de su población queden satisfechas, y los países en vías de desarrollo, que no logran asegurarlas». Y añade (p. 20): «Los países que integran este tercer mundo presentan características comunes. Su economía depende sobre todo de las actividades agrícolas, y la industria está dando sus primeros pasos. Su población crece con rapidez, lo cual podría espolpear un desarrollo que resulta tanto más indispensable en la medida en que su nivel de vida es muy inferior al de los países industrializados. Y, para terminar, la casi totalidad de dichos países son antiguas colonias».

El tercer mundo se define por una serie de rasgos: pobreza, alto crecimiento de la población, mucha importancia de la agricultura en la economía, dependencia y desigualdad. La pobreza sería, pues, el primer criterio de pertenencia al tercer mundo. Efectivamente, es en estos países donde se encuentran los mil millones de personas que viven por debajo del umbral de pobreza absoluta que el BM ha fijado en un dólar diario. Se trata de países que, teniendo el 78 % de la población del planeta, no producen más que el 18 % del PIB mundial; mientras que los países desarrollados, con el 20 % de la población, producen el 73 % del PIB (Rousset, 1996, p. 24) (datos de 1994 que no han cambiado mucho). Y mientras, el mundo rico desperdicia lo que podría terminar con el hambre del mundo pobre. De hecho, según la FAO, cada año se tiran a la basura 1.300 millones de toneladas de comida, desperdiciándose el 45 % de la fruta y vegetales recolectados, el 30 % de los cereales y el equivalente en carne de 75 millones de vacas.

Por otra parte, a la hora de explicar el subdesarrollo y la pobreza en el tercer mundo, Rousset (1996, p. 49) distingue tres corrientes teóricas: la estructuralista, la escuela de la dependencia y la neomarxista. Los estructuralistas mostraron cómo el desarrollo de «polos de crecimiento» alrededor de industrias motrices perturbaba a las sociedades tradicionales. Arruinaba las pequeñas empresas artesanales, por lo que, para superar tal efecto desestabilizador, era necesario invertir en sectores con un gran impacto en el resto de la economía. Lo mismo dicen los autores de la CEPAL (Comisión Económica Para América Latina), en el marco de las Naciones Unidas, según quienes, para escapar del subdesarrollo, los países del tercer mundo deberían impulsar una industrialización sostenida por el Estado mediante una planificación y una coordinación de las inversiones, lo que les sitúa en un marco keynesiano, donde el Estado interviene de una

forma importante, a la vez que le dan mucha importancia a la reforma agraria y a la redistribución de las rentas. Por su parte, el marxista Samir Amin (1970), refiriéndose a la dependencia de África, muestra cómo la periferia, en la fase de capitalismo monopolista desarrollado en el siglo XX, representa un doble papel: por una parte, proporciona exportaciones baratas y, por otra, asegura una tasa de beneficio elevada a los capitales expatriados del centro gracias a la explotación de una mano de obra barata. Ambas cosas juntas permiten paliar el descenso de la tasa de beneficio en los países del centro. De esta manera, añade, se mantiene en la periferia un proceso de acumulación desarticulado, dado que la producción no está sostenida por la demanda interior, sino que se orienta a la satisfacción de las necesidades del centro, de los países ricos. Según todos estos autores, pues, lo que más imperiosamente necesitan todos los países del tercer mundo es una mayor industrialización que les permita competir con los países desarrollados. Pero su situación de debilidad económica (y, por tanto, también política), no deriva solo de su escasa industria, sino de que su agricultura ha sido descuidada en exceso; y eso es peor si tenemos en cuenta que la mayoría de su población vive de la agricultura. Y no son las sequías ni los ciclones las grandes amenazas para su agricultura, sino las injustas estructuras de propiedad de la tierra, de forma que, en algunos países, los trabajadores sin tierra aún son más de la cuarta parte de los campesinos. Así, en Brasil menos del 1 % de los propietarios posee el 45 % de las tierras, habiendo 12 millones de familias campesinas sin tierras (Rousselet, 1996).

Otro fenómeno que perjudica la economía y la convivencia en África son los frecuentes conflictos interétnicos, que son la consecuencia de la colonización: los países colonizadores crearon muchos Estados africanos con lápiz y cartabón, con fronteras artificiales y muy inestables que a menudo son fuente de conflictos, dando lugar incluso a largas y sangrientas guerras que hacen ya del todo imposible que esos países se desarrollen mínimamente.

Y luego están las políticas del FMI y el BM que impiden que se desarrolle la industria de los países pobres para que no puedan hacerle la competencia a la de los países ricos. Así, Prasannan Parthasarathi (2011) ha mostrado el papel clave que han desempeñado las políticas proteccionistas contra la India en el surgimiento de la industria textil británica, y en la industria naval (Piketty, 2021, pp. 73-74). Más aún, agrega Piketty, «la combinación de estas medidas proteccio-

nistas, impuestas al resto del mundo *manu militari*, desempeñó un papel importante en el dominio industrial británico y europeo. Según las estimaciones disponibles, el peso de China y la India en la producción manufacturera mundial, que seguía siendo del 53 % en 1800, se redujo a solo el 5 % en 1900». Además, añade (p. 75), «conviene señalar que el proteccionismo ha desempeñado un papel central no solo en el ascenso de Europa, sino en casi todas las experiencias exitosas de desarrollo económico de la historia. [...] Solo tras haber establecido su supremacía en determinados productos, los países que se han convertido en dominantes pasan a adoptar un discurso de libre comercio, que en la práctica suele tener como consecuencia la dependencia a largo plazo de otros países menos avanzados. Las investigaciones de Wallerstein sobre los sistemas-mundo y las relaciones centro-periferia ilustran abundantemente esta realidad en la larga historia del capitalismo» (Wallerstein, 1979; Arrighi, 2014; Harvey, 2010). En resumidas cuentas, «el colonialismo y la dominación militar permitieron a los países occidentales organizar la economía mundial en su propio beneficio y situar al resto del planeta en una posición periférica de manera duradera» (Piketty, 2021, p. 79).

También hay que tener en cuenta la importancia del nivel educativo, un factor estrechamente relacionado con la pobreza y la desigualdad, tanto en los países desarrollados como en especial en los países pobres, pero que su precariedad está teniendo efectos perniciosos en los países pobres. No olvidemos que una de las medidas que exigían los ajustes estructurales impuestos por el FMI y el BM a los países pobres era eliminar la educación gratuita –incluso la primaria–, lo que llevaba a que el nivel educativo de los niños, y sobre todo el de las niñas, fuera particularmente bajo. «Los pobres y quienes tienen poca educación formal no solo mueren más prematuramente, sino que las enfermedades crónicas comunes también les afectan bastante antes, en caso de hacerlo» (Therborn, 2015, p. 202). En efecto, Elo (2009) encontró en EE. UU. que quienes solo tenían ocho años de escolarización sufrían enfermedades cardiovasculares, diabetes y dolencias pulmonares crónicas entre cinco y quince años antes que las personas con al menos dieciséis años de enseñanza. Y en Brasil, en la década de los noventa, un recién nacido tenía diez veces más posibilidades de vivir más de un año si su madre había asistido doce años a la escuela que si era analfabeta (Therborn, 2011). Esa es una de las causas de que la mortalidad infantil, que sin duda ha mejorado en los

últimos años, siga siendo mucho más alta en los países pobres que en los ricos: en el África subsahariana muere 1 de cada 9 niños antes de cumplir los cinco años, mientras que en el mundo rico solo mueren a esa edad 3 de cada 1.000. Todo ello mejoraría si aumentaran los años de escolarización de las mujeres, lo que, entre otras cosas, influiría en la reducción de la natalidad y de la mortalidad infantil. «Una mujer que ha pasado cuatro años en la escuela corre dos veces menos riesgos de ver morir a sus hijos antes de los cinco años. Es más consciente de la importancia de la vacunación, comprende la importancia de la higiene y sabe utilizar los servicios sanitarios. Además, la educación de las chicas es una de las causas principales de la baja de la fecundidad. Las mujeres instruidas conocen la planificación familiar, pueden discutir con su compañero sobre el número de hijos deseados. Se casan y tienen su primer hijo más tardíamente, los nacimientos están más espaciados y son menos numerosos» (Rousselet, 1996, p. 163). Pero el FMI intenta frenar la educación en esos países. Estos son dos de los grandes factores que están impidiendo el desarrollo del tercer mundo, unidos ambos estrechamente a las políticas neoliberales impuestas por el capitalismo internacional: la escasa educación en los países pobres, sobre todo en el caso de las niñas, y el hecho de que exista la más absoluta libertad de circulación de mercancías y capitales, casi sin condiciones, incluso sin fiscalidad ni regulación, mientras que no existe esa libertad de circulación para las personas.

6.2. Los principales focos de pobreza

Afirma Juan Torres (2021, p. 20) que suele decirse que no hay dinero para que los gobiernos financien la provisión de bienes y servicios para todos los habitantes de la tierra. Pero ello es una completa falsedad: hay recursos y alimentos suficientes. Lo que no hay es voluntad política para terminar con la pobreza y el hambre en el mundo. De hecho, añade Torres, para financiar los Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas, es decir, para erradicar la pobreza y el hambre en todo el planeta, implantar una educación primaria universal, acabar con la mortalidad infantil y materna por falta de medios, frenar el avance del sida y detener el deterioro del medio ambiente, harían falta unos seis billones de euros anuales hasta 2030. Pues bien, según Torres, esa cantidad podría obtenerse solo con una pequeña tasa de unos cuatro céntimos por cada cien euros de todas las transacciones financieras que se llevan a cabo en el mundo cada año. Sin embar-

go, si no se hace eso es porque el objetivo que se persigue de verdad es aumentar ilimitadamente los beneficios y los recursos de los más ricos. Lo demás no importa. De hecho, basta con recordar estos dos datos que nos da Torres (2021, pp. 21-22): la concentración progresiva de la riqueza ha hecho que el 50 % de los recursos del planeta hayan pasado de estar en manos de 380 personas en 2009 a solo 26 en 2019. Además, solo de marzo de 2020 a febrero de 2021, en menos de un año y en plena pandemia de la covid-19, cuando más necesaria hubiera sido la solidaridad y la ayuda a los más necesitados, la riqueza de los millonarios aumentó en 3,9 billones de dólares, mientras que la de los trabajadores bajó 3,7 billones en ese mismo periodo.

Según Jean Ziegler (2006, p. 47) el gasto militar mundial en un año es de 780.000 millones de dólares, mientras que eliminar la subalimentación y el hambre solo costaría 19.000 millones, permitir el acceso de toda la población del planeta al agua potable costaría otros 19.000 millones y podría eliminarse el analfabetismo en el mundo con 5.000 millones. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2004) considera que un gasto anual de 80.000 millones de dólares durante un período de diez años permitiría garantizar a todos los seres humanos el acceso a la educación básica, a la asistencia sanitaria básica, a una comida adecuada, al agua potable y a infraestructuras sanitarias, y el acceso de las mujeres a la atención ginecológica y obstétrica. Todo ello se conseguiría con solo un pequeño impuesto a los megarricos.

Por otra parte, el BM define arbitrariamente como «umbral de pobreza» la cantidad de un dólar al día, e identifica como «no pobres» a quienes estén por encima de esa cifra. Así, estima que en Latinoamérica y el Caribe es «pobre» solamente el 19 % de la población.

Es evidente que poner ese punto fijo de un dólar al día es algo arbitrario, pero nada inocente, pues los más ricos pretenden con ello minimizar la importancia de este gran problema que, en gran medida, ellos han creado. Y es arbitrario porque no tiene en cuenta las condiciones de vida y los precios de los productos alimenticios, ni los servicios sociales y la protección social de cada país. Por ejemplo, no es lo mismo vivir con dos dólares al día en Colombia que en Cuba, donde muchos servicios sociales son gratuitos (sanidad, educación, etc.). Tampoco es lo mismo vivir donde un pan cuesta 1 dólar que donde cuesta 10 cen-

tavos. Claro que con ese criterio la pobreza extrema no existe ni en Europa ni en Estados Unidos. Pero es que en estos países es pobre todo el que tiene que vivir con menos de 15, 20 o 30 dólares. Como dice Chossudovsky (2002), en EE. UU., la Administración de la Seguridad Social estableció en los años sesenta un «umbral de pobreza» que consistía en «el costo de una dieta mínima adecuada, multiplicado por tres para incluir gastos adicionales», de forma que en esa época estaban por debajo del límite de pobreza el 13,7 % de la población total y el 19,6 % en las zonas metropolitanas de las principales ciudades (Oficina del Censo de Estados Unidos, 1997).

Por su parte, las Naciones Unidas se hacen eco de las falsedades del BM, de forma que el PNUD afirma, sin aportar pruebas, que «el progreso alcanzado en la reducción de la pobreza durante el siglo XX es excepcional y sin precedentes. Los indicadores claves del desarrollo humano (a fines del siglo XX) han avanzado firmemente» (PNUD, 1998, p. 2). Pero, puntualiza Chossudovsky (2002, p. 40), «la realidad social de un país es fabricada: las mediciones del PNUD señalan logros en la reducción de la pobreza en el África subsahariana, en el Medio Oriente y en la India que son totalmente incongruentes con los datos y cifras nacionales. En realidad, las estimaciones relativas a la pobreza humana que proporciona el PNUD reflejan patrones más distorsionados y equívocos que los del BM. Así, solamente el 10,9 % de la población de México entra en la categoría de “pobres”. Sin embargo, esta cifra no concuerda con la situación que se ha venido observando en México desde hace veinte años».

Ahora bien, como reconoce el PNUD (2016), desglosar y analizar el conjunto de índices de desarrollo humano –el índice de desarrollo humano, el índice de desarrollo humano ajustado por la desigualdad, el índice de desarrollo de género, el índice de desigualdad de género y el índice de pobreza multidimensional– es un primer paso para cuantificar la magnitud de las privaciones a nivel mundial. Y ese primer paso nos muestra que, aunque durante los últimos 25 años han mejorado las cosas en cuanto al desarrollo humano a nivel mundial, sin embargo, no en cuanto a igualdad. «La triste realidad es que millones de personas caen en el lado equivocado del promedio y se enfrentan al hambre, la pobreza, el analfabetismo y la malnutrición, entre otras privaciones. Si se quiere lograr que el desarrollo humano funcione para todos, es necesario entender mejor quiénes son estas personas y dónde viven» (PNUD, 2016, p. 53). Es justo lo que haré a

continuación, analizando lo que está ocurriendo en las tres zonas del planeta en las que existe más pobreza y más hambre.

6.2.1. África

A pesar de que, según el BM, la pobreza extrema a nivel global se ha reducido considerablemente en las últimas décadas, sin embargo «en África subsahariana continúa viviendo en pobreza extrema el 42,6 % de la población, mientras que en el sur de Asia este porcentaje asciende al 18,8 %. Más aún, muchas de las personas que lograron salir de la pobreza continúan siendo muy vulnerables de caer nuevamente en la pobreza (Banco Mundial, 2015), e incluso siguen viviendo con un acceso muy limitado a servicios esenciales y a la protección social» (Mestrum, 2018, p. 95). El hambre en África viene de muy atrás, y sus causas son muchas y muy variadas, desde los efectos del colonialismo hasta las políticas neoliberales, pasando por el comportamiento de los ricos y los gobernantes de ese continente. De hecho, «los riquísimos africanos solo invierten excepcionalmente en la economía de su país de origen. Invierten su dinero allá donde obtengan la máxima rentabilidad. Un millonario de Marruecos, Benin o Zimbaue especulará en la bolsa de Nueva York o en el sector inmobiliario de Ginebra, sin preocuparse en absoluto por las necesidades en inversiones sociales de sus compatriotas» (Ziegler, 2006, p. 39).

Las cosas ya iban mal en África, pero, como escribe Martín Caparrós (2015, pp. 49-50), «todo empeoró a partir de los años ochenta, cuando empezó a imponerse el Consenso de Washington, y el BM y el FMI “convencieron”—a fuerza de amenazas sobre sus deudas externas— a la mayoría de los gobiernos africanos de que redujeran la injerencia de sus Estados en diversos aspectos. Uno de ellos era la agricultura que seguía siendo la actividad económica principal en buena parte del continente —y daba de comer a la gran mayoría de sus habitantes. [...] El Estado debía dejar de subsidiar a los campesinos y de garantizarles una compra mínima de sus productos y regular sus precios [...] Más tarde, el propio BM diría que los subsidios a la agricultura sirven cuatro veces más que cualquier otro para reducir el hambre. Pero entre 1980 y 2010 la proporción de la ayuda internacional a África destinada a la agricultura pasó del 17 al 3 %. Mientras tanto, EE. UU. y Europa subsidiaban a sus granjeros con unos 300.000 millones de dólares anuales. El FMI también presionó para que se abandonaran las explo-

taciones familiares de productos de consumo local y se dedicaran esas tierras a producir para el mercado global –café, té, algodón, soja, maní. Con las divisas que ingresaban por esas exportaciones los países podían pagar sus deudas externas –o los servicios de sus deudas externas. Y quedaban cautivos de los mercados internacionales –manejados por los países y empresas más potentes–. En esos años, en muchos países, la apertura de los mercados hizo que alimentos importados, más baratos, subvencionados por sus gobiernos de origen, reemplazaran a los locales. Fue una de las grandes violencias del mercado mundial: sin salida para sus productos, millones de campesinos de los países más pobres perdieron hasta la camisa que nunca habían tenido. Y sus países abandonaron toda esperanza de producir su propia comida».

Y todo se agrava aún más a causa del trato que se le da a la ganadería, otra de las fuentes de alimentación de esos países. Así, como nos recuerda Martín Caparrós (2015, pp. 51-52), Níger tiene un millón de kilómetros cuadrados, pero de ellos solo son cultivables unos 40.000. En el resto del territorio viven pastores nómadas, que cuidan de unos 20 millones de cabezas de ganado (cabras, ovejas, burros, camellos, cebúes, etc.). Pero el costo de los remedios para las enfermedades de esos animales (antiparásitos, vacunas, vitaminas, et.) se multiplicó desde que el FMI obligó al gobierno a cerrar su Oficina Nacional Veterinaria, abriendo el mercado a las multinacionales. Desde que el FMI intervino, «cada vez más pastores perdieron sus rebaños y tuvieron que escapar a los suburbios de Niamey –o de las capitales circundantes Abiyán, Cotonú. Fue también el FMI el que obligó al gobierno nigerino a cerrar sus depósitos de grano –unas 40.000 toneladas de cereales, sobre todo mijo– que servían para intervenir cuando las sequías, tan frecuentes, o la plaga de langosta o la *soudure* anual llevaban el hambre a los poblados. El Fondo consideró que esas intervenciones distorsionaban el mercado; el gobierno, acogotado por su deuda externa, tuvo que aceptarlo» (Caparrós, 2015, p. 52).

En definitiva, ni en agricultura ni en ganadería pueden los países pobres competir con los países ricos, a causa de la tecnología que poseen estos y de los abonos y nutrientes con que enriquecen sus tierras, pero sobre todo a causa de las grandes subvenciones con que los países ricos ayudan a sus agricultores y ganadores, sobre todo de cara a la exportación. Como dice Caparrós (p. 53), en el Sahel, a principios del siglo XXI, una hectárea produce unos 700 kilos de grano y cada

campesino trabaja en promedio una hectárea: produce 700 kilos. En Estados Unidos, en cambio, una hectárea abonada y regada produce 10.000 kilos de grano y cada campesino trabaja en promedio unas 200 hectáreas, produciendo dos millones de kilos. Por tanto, es imposible que los campesinos del Sahel compitan en los mercados internacionales con los agricultores de EE. UU. o de Europa. En cuanto a la tecnología agrícola, existen en todo el mundo unos 30 millones de tractores, pero los 700 millones de campesinos africanos disponen de menos de 100.000 (y unos 250.000 animales de tiro). La inmensa mayoría todavía trabaja la tierra con sus manos. Más aún, «entre esos 700 millones de campesinos, 500 no tienen semillas seleccionadas ni abonos minerales. Y la gran mayoría no puede vender lo que cosecha fuera de sus lugares: no hay suficientes caminos y camiones. Por eso, muchas veces, cuando tienen suerte y les sobra algún grano, se les pudre en depósitos mal acondicionados» (Caparrós, 2015, p. 53). Pero en la mayoría de los países ricos la agricultura es una actividad garantizada: si un productor no consigue el rendimiento considerado normal (por sequía, pedrisco, heladas, pestes, etc.), el gobierno le compensa. «En esos países –donde el peso de la agricultura en el producto bruto es muy menor– los subsidios son decisivos: en Suiza, por ejemplo, representan el 68 por ciento de todos los ingresos de los productores agrarios. En Japón, más del 50 por ciento, en la Unión Europea, alrededor del 30 por ciento, en Estados Unidos, cerca del 20 por ciento –y, en todos esos países, son los grandes productores los que se llevan las grandes cantidades. El Estado, una vez más, subvenciona a los ricos» (Caparrós, 2015, p. 506).

También en la minería los países africanos salen perdiendo. Por ejemplo, como sigue contando Caparrós (2015, p. 52), Níger es el segundo productor mundial de uranio, uno de los minerales más codiciados hoy día, pero apenas saca beneficio, pues quien se lo lleva es Areva, una empresa estatal francesa que tuvo desde siempre el monopolio de la explotación de tales minas, por el que paga al estado nigerino un precio ridículo. Pero en el año 2007 aparecieron nuevos yacimientos y el presidente de Níger decidió ceder su explotación a una empresa mixta chino-nigerina. Areva protestó, pero sin conseguir nada, de forma que en febrero de 2010 el presidente de Níger, Mamadou Tanja, inició negociaciones con los chinos para explotar el nuevo yacimiento. Pocos días después, un coronel, leal a Francia y a Areva, dio un golpe de Estado que echó al presidente del gobierno. Al año siguiente, unas elecciones llevaron al poder a Mahamadou Is-

soufou, un ingeniero de minas que trabajaba para Areva. Así suelen ser las cosas en los países pobres: están completamente indefensos ante la fuerza y el descaro de los países ricos.

Las consecuencias de todo ello son conocidas: si en 1970 había unos 90 millones de desnutridos en toda África, en 2010 eran ya más de 400 millones. Y la ONU dice que mejoran las cosas. ¡Lo que están haciendo con África los países ricos es un auténtico genocidio! Los empobrecemos y luego les impedimos que vengan a nuestro mundo rico para que mueran de hambre en su tierra.

Luego está el problema del cambio climático y el destrozo del planeta, el principal problema, junto a la desigualdad, a que se enfrenta actualmente la humanidad. Como bien hizo ver el ministro de Consumo, Alberto Garzón, comer mucha carne es un crimen ecológico y un problema para los países pobres. En efecto, la gran cantidad de carne que comemos en los países ricos constituye un problema para la sostenibilidad del planeta, y sobre todo la construcción de macrogranjas industriales que le sigue: los gases de metano que expulsan las vacas con sus ventosidades, los purines de los cerdos que contaminan la tierra y las aguas, etc. Pero también es un problema para los campesinos y ganaderos de los países pobres e incluso para los de los países ricos. De hecho, subraya Caparrós (2015, p. 106), «la ganadería ya usa el 80 por ciento de la superficie agrícola del mundo, el 40 por ciento de la producción mundial de cereales y el 10 por ciento del agua del planeta». Y lo que comen los animales, se le quita a las personas. Por eso, cuanto más ganado (vacas, cerdos, pollos, etc.) existe, más personas pasan hambre. Pero es en el África subsahariana donde más dramáticamente se observa la presencia de la pobreza y sus efectos. Aunque los países más pobres de esta región son Sudán, Burundi, Malawi y Sierra Leona, diré algo de la situación de Somalia y Ruanda, dado que lo que diga es aplicable también a otros muchos países africanos:

1) *Somalia*: lo que a menudo hace la Ayuda al Desarrollo, intencionalmente o no, es destruir las estructuras económicas de los países pobres e incrementar la pobreza, el hambre y las desigualdades entre países. Así, Estados Unidos inició en 1993 en Somalia, bajo los auspicios de la ONU, la “Operación restauremos la esperanza”, cuyo objetivo era rescatar a la población pobre, que estaba sufriendo una hambruna que fue atribuida oficialmente a la sequía, a

la desertificación y a la guerra civil, sin mencionar en ningún momento las reformas económicas impuestas por los acreedores externos durante los años anteriores. Como escribe Chossudovsky (2002, pp. 113-114), «Somalia era una economía pastoril basada en el “intercambio” entre los pastores nómadas y los pequeños agricultores. [...] Los rebaños contribuían con un 80 % a los ingresos por exportaciones hasta 1983. A pesar de las sequías recurrentes, Somalia siguió siendo virtualmente autosuficiente en alimentos hasta los años setenta. Pero la intervención del FMI y del BM a principios de los ochenta contribuyó a exacerbar la crisis de la agricultura somalí. Las reformas económicas socavaron la frágil relación de intercambio entre la “economía nómada” y la “economía sedentaria”, esto es, entre pastores y pequeños agricultores que realizaban transacciones en dinero, así como el tradicional trueque. Se impuso al gobierno un programa de austeridad muy estricto, principalmente con el objeto de liberar los fondos requeridos para pagar el servicio de la deuda de Somalia con el Club de París».

Las consecuencias fueron muy negativas para los somalíes (Chossudovsky, 2002, pp. 113-114): «los salarios bajaron mucho y el país quedó sometido a la camisa de fuerza de la deuda y del ajuste estructural, lo que reforzó la dependencia de Somalia de los granos importados. Desde mediados de los setenta hasta mediados de los ochenta, la ayuda alimentaria aumentó quince veces, a una tasa del 31 % anual. Combinada con el aumento en las importaciones comerciales, esta entrada de excedentes de trigo y arroz baratos, que se vendieron en el mercado nacional, provocó el desplazamiento de los productores locales, así como un cambio de ciento ochenta grados en los patrones de consumo, en detrimento de las cosechas tradicionales (maíz y sorgo). A la devaluación del chelín somalí, impuesta por el FMI en junio de 1981, siguieron otras devaluaciones periódicas, causando alzas en los precios de los combustibles, fertilizantes e insumos agrícolas. El impacto en los productores agrícolas fue inmediato, particularmente en la agricultura. El poder de compra se redujo dramáticamente, los programas de extensión del gobierno fueron recortados, la infraestructura se derrumbó, la desregulación del mercado de granos y la afluencia de la «ayuda alimentaria» llevaron al empobrecimiento de los campesinos. Además, durante ese período, gran parte de las mejores tierras agrícolas fueron expropiadas por burócratas, oficiales del ejército y

comerciantes vinculados al gobierno. En vez de promover la producción de alimentos para el mercado nacional, los donadores estimulaban el cultivo, en las tierras mejor irrigadas, de los frutos, vegetales, oleaginosas y algodón que llamaban “de alto valor agregado” para la exportación». Todo ello provocó la ruina de muchos miles de pequeños y mediados campesinos, que tuvieron que abandonar sus campos y huir a la ciudad, para malvivir. A lo que llevaron las políticas del FMI y del BM fue a la ruina de Somalia y al hambre de los somalíes.

Más aún, añade Chossudovsky (2002, p. 119), «la experiencia de Somalia a finales del siglo XX muestra que el hambre no es consecuencia de “una escasez de alimentos”. Por el contrario, las hambrunas se desataron como resultado de una sobreoferta global de granos. Desde los ochenta, los mercados de grano han sido desregulados bajo la supervisión del BM, y los excedentes de granos de Estados Unidos se han utilizado sistemáticamente (como en el caso de Somalia) para destruir al campesinado y desestabilizar la agricultura nacional. En estas circunstancias, esta última se vuelve mucho más vulnerable a los caprichos de la sequía y la degradación ambiental». De hecho, con el ajuste estructural neoliberal, en Somalia los manantiales y los pozos se secaron a causa de la falta de mantenimiento o fueron privatizados por los comerciantes y agricultores ricos locales. Y luego, para rematar, nos negamos a que los jóvenes de Somalia –y de otros países pobres en circunstancias similares–, vengan a los países occidentales a rehacer sus vidas y buscar un futuro digno para ellos y para sus familias, poniendo en marcha todos los medios y mecanismos posibles para impedir su llegada, incluyendo muros y vallas con cuchillas. Y nosotros nos llamados los civilizados.

2) *Ruanda*: a pesar de su elevado nivel de pobreza, Ruanda era autosuficiente en producción alimentaria, pero la intervención del FMI llevó a la ruina a sus agricultores y el hambre a la mayoría de su población. De hecho, en este país las hambrunas y los conflictos étnicos se reforzaron mutuamente, siempre con los intereses occidentales detrás. En ello tuvo una influencia decisiva el colonialismo belga cuyo principal objetivo era «alimentar las rivalidades interétnicas para obtener el control político, así como para impedir el desarrollo de la solidaridad entre los dos grupos étnicos que, inevitablemente, se habrían vuelto contra el régimen colonial» (Chossudovsky, 2002, p. 123). Ade-

más, añade este autor (p. 124), los belgas consiguieron que «la economía comunal se fuera debilitando y el campesinado se viera forzado a abandonar la agricultura alimentaria para dedicarse a cultivos comerciales para exportar».

Pero lo que llevó al hundimiento de la economía y la sociedad de Ruanda fue la intervención del FMI y el BM en 1988. En efecto, «el índice de precios al consumidor aumentó de 1,0 % en 1980 al 19,2 % en 1991. La situación de la balanza de pagos se deterioró gravemente y la deuda externa, pendiente de pagos, que ya se había duplicado desde 1985, aumentó en un 34 % entre 1989 y 1992. El aparato administrativo del estado estaba en total desorden, las empresas estatales fueron empujadas a la quiebra y los servicios públicos, desmantelados (Banco Mundial, 1994). La salud y la educación se desintegraron bajo el peso de las medidas de austeridad impuestas por el FMI: a pesar del establecimiento de una “red de seguridad social” (destinada por los donadores a programas en los sectores sociales), la incidencia de una severa desnutrición infantil aumentó dramáticamente; el número de casos de malaria registrados aumentó 21 % en el año siguiente a la adopción del programa del FMI, principalmente como resultado de la falta de medicamentos para combatir la enfermedad en los centros de salud pública; y la imposición de cuotas escolares en el nivel de escuela primaria ocasionó una disminución masiva de la asistencia escolar» (Chossudovsky, 2002, pp. 128-129). Pero ello se agravó porque, durante la guerra civil, los gastos militares se financiaron con la deuda externa. «La cruel ironía es que ambas facciones de la guerra civil recibían financiamiento de las mismas instituciones donadoras, cuyo cancerbero era el BM» (Chossudovsky, 2002, p. 135). Las consecuencias de ello son conocidas: casi un millón de tutsis fueron asesinados (el 70 % de la población tutsi). Estados Unidos armaba a los tutsis, Francia a los hutus y el BM prestaba dinero a ambos grupos. Y es que lo que hubo en Ruanda fue «una guerra no declarada entre Francia y Estados Unidos» (Chossudovsky, 2002, p. 145), en la que los muertos los ponía Ruanda.

6.2.2. Asia:

En Asia es donde se encuentra el mayor número de pobres del planeta, sobre todo en India, Vietnam y la propia China, aunque es también en estos países donde más se está reduciendo la pobreza:

1) *India*: este país tiene unos 1.400 millones de habitantes de los que 680 millones no completaron la escuela primaria: 800 millones no tienen televisor; 980 millones no tienen inodoro y casi 200 millones pertenecen a las castas «intocables» (Caparrós, 2015). Además, tanto en la India como en otros países, muchos campesinos se suicidan porque no pueden pagar sus deudas. Curiosamente, hay menos suicidios en otros gremios por ese motivo. Los campesinos que pierden sus tierras pierden su identidad, pierden el legado de sus antepasados, lo pierden todo y la vergüenza les lleva al suicidio. No es raro, pues, que se suiciden más que los endeudados de otros gremios que también pierden su empleo y su casa. Según Caparrós (2015, p. 182), la mayoría de los campesinos endeudados lo son para comprar las semillas de Monsanto. Y, como en todos los países pobres, la intervención del FMI y del BM, no es ajena a esa triste realidad. Su programa económico fue puesto en marcha en la India con la caída del gobierno Janata Dal de V.P. Singh en 1990 y el asesinato de Rajiv Gandhi durante la campaña electoral en Tamil Nadu en 1991. «La “cirugía económica” del FMI, dentro de la nueva política económica de 1991, exigió al gobierno indio recortar los gastos en programas sociales e infraestructuras, eliminar los subsidios estatales y los programas de apoyo a los precios (incluyendo los subsidios alimentarios) y vender las empresas públicas más productivas, a “buen precio”, a las grandes empresas privadas nacionales y al capital extranjero. Otras medidas de reforma fueron el cierre de gran número de las llamadas “empresas públicas enfermas”, la liberalización del comercio, la libre penetración de capital extranjero, así como importantes reformas en la banca, las instituciones financieras y la estructura impositiva» (Chossudovsky, 2002, p. 174).

Todo ello tuvo unos efectos nefastos: «empujó a la economía hacia la estanflación (el precio del arroz aumentó en más de un 50 % en los meses siguientes a las medidas económicas de 1991) y reforzó la crisis de la balanza de pagos (como resultado del aumento en el costo de las materias primas importadas y de la afluencia de importaciones para el consumo suntuario). Además, la liberalización del comercio, combinada con la comprensión del poder de compra interno y la libre entrada de capitales extranjeros, empujaron a la bancarrota a gran número de productores nacionales» (Chossudovsky, 2002, p. 174). También exigieron que, en la industria textil, fueran despedidos aproxima-

damente un tercio de los trabajadores, mientras que una parte importante de la industria automotriz e ingenieril debía ser eliminada con la entrada del capital extranjero y el establecimiento de empresas mixtas. «Las transnacionales occidentales y japonesas deseaban capturar una parte del mercado nacional indio, así como obtener –con ayuda de las normas del GATT sobre los derechos de propiedad intelectual– la abrogación de la Ley de Patentes india de 1970. Esto les permitiría registrar patentes de productos en las manufacturas, así como en la agricultura (a través de los derechos de los productores de semillas), obteniendo así el control virtual de gran parte de la economía de la India» (Chossudovsky, 2002, p. 175). Una de sus consecuencias fue la reducción drástica de los salarios y el consiguiente incremento de la pobreza y el hambre. De ahí que diga Chossudovsky (2002, pp. 179-180) que «el programa del FMI se convirtió en un instrumento de “genocidio económico”: varios cientos de millones de personas (trabajadores agrícolas, artesanos, pequeños comerciantes, etc.) sobrevivían con ingresos per cápita sustancialmente inferiores a los 50 centavos de dólar por día (a la vez que los precios nacionales, en la lógica del FMI, ascendían a niveles mundiales). Un aumento en el precio del arroz y el trigo, de más del 50 %, combinado con una disminución en el número promedio de días trabajados, empujó a grandes sectores de la población rural a una “desnutrición crónica”, proceso sin precedentes desde las grandes hambrunas de los cuarenta de Bengala. En contraste, la caída del consumo alimentario interno se ha visto emparejada por un aumento en las exportaciones de arroz». Esa es una constante en las políticas de las instituciones del Consenso de Washington: aumentar las exportaciones agrícolas a costa del hambre, el sufrimiento y hasta la vida de los más pobres.

Todo esto ocurría en un país en el que, como nos recuerda Caparrós (2015), en los años 60 y 70 las luchas campesinas habían conseguido precios mínimos garantizados para su producción y una redistribución de millones de hectáreas de tierras. En los años 90 y 2000, por el contrario, lo que hay son suicidios masivos de campesinos. ¿Qué pasó para que esas luchas masivas se convirtieran en desesperación masiva? Lo que pasó fue que los neoliberales consiguieron que los recursos del Estado fueran masivamente a manos de las grandes empresas, a las de sus accionistas y a las de los más ricos y poderosos. Ese dinero ya no era utilizado para solucionar los problemas de los pequeños

campesinos ni para dar de comer a quienes pasan hambre. El Estado indio, como tantos otros Estados, ya no puede hacerlo, pues se ha comprometido seriamente con el FMI a no hacerlo. Y el FMI lo tiene muy atados con la soga de la deuda.

2) *Vietnam*: en Vietnam ocurrió algo similar a los casos anteriores. Destacaré ahora solo el dramático impacto que la intervención del FMI y el BM tuvo sobre la salud y la educación. Educación universal y alfabetización fueron un objetivo clave de la lucha contra el dominio colonial francés y, en consecuencia, entre 1954 y 1972 el número de escuelas primarias y secundarias en Vietnam del Norte aumentó de 700.000 a casi cinco millones. Tras la reunificación en 1975, se puso en marcha una campaña en el sur de Vietnam que, según la UNESCO, llevó a unas tasas tanto de alfabetización como de escolarización que estaban entre las más elevadas del sudeste asiático. Pero la intervención del FMI y del BM destruyó «deliberada y conscientemente el sistema educativo al recortar en gran medida el presupuesto para educación, bajar los salarios de los profesores y “comercializar” la educación secundaria, la vocacional y la universitaria por medio de la exacción de matrículas. Este movimiento tiende a la transformación de la educación en una mercancía. En el lenguaje oficial de las agencias de las Naciones Unidas, se requiere que los consumidores de servicios (educativos) paguen cuotas mayores, que se aliente a las instituciones a autofinanciarse y que se usen incentivos para privatizar la educación y el entrenamiento en donde esto sea apropiado» (Chossudovsky, 2002, p. 214). Las consecuencias fueron dramáticas: las tasas de escolarización cayeron vertiginosamente y unos 700.000 niños y niñas fueron expulsados de la escuela secundaria durante los tres primeros años de las reformas del FMI. Tengamos en cuenta que en la región del delta del río Romo, el costo para los padres de los materiales y libros escolares, antes pagados por el Estado, equivalía a 100 kg de arroz por niño y año, una cantidad enorme para la economía de una familia pobre.

Algo similar habría que decir del sistema de salud. Según Chossudovsky, el consumo de medicamentos esenciales descendió en un 89 %, empujando a la industria farmacéutica y de suministros médicos a la bancarrota y un gran número de compañías farmacéuticas cerró. «Con la completa desregulación de la industria farmacéutica, incluyendo la liberalización de los precios de los

medicamentos, las medicinas importadas (vendidas ahora exclusivamente en el mercado “libre” a precios muy altos) desplazaron a las marcas nacionales. [...] El consumo promedio anual de medicamentos comprados en el mercado “libre” fue del orden de un dólar por año (1993), que incluso el BM considera demasiado bajo. El impacto sobre el grado de salud de la población fue dramático. [...] Con la caída de los salarios estatales y el surgimiento de un pequeño sector de práctica privada, cientos de miles de médicos y trabajadores de la salud abandonaron la salud pública. [...] Desde las reformas, también ha habido un marcado descenso en la admisión de estudiantes a las principales escuelas de medicina del país, que actualmente sufren masivos recortes en sus presupuestos» (Chossudovsky, 2002, pp. 216-217). El resultado de todo ello fue la reaparición de enfermedades infecciosas que se daban ya por desaparecidas, como la malaria o la tuberculosis.

3) *China:*¹ como dice Caparrós (2015, p. 573), China es un punto clave en el hambre y la pobreza en el mundo actual, pues si es el país que más ha reducido la pobreza y el hambre en las últimas décadas, también sigue siendo, junto a India, el país que más pobres y más hambrientos tiene: más de 150 millones no comen lo suficiente. Además, añade Caparrós (p. 575), China se ha convertido en una amenaza para la nutrición en el resto del mundo dado que, de seguir su desarrollo al ritmo actual, en 2030 acaparará el 70 por ciento de la producción mundial de trigo y el 75 por ciento de la producción mundial de carne, después de que ya importa actualmente un 25 por ciento de la soja para alimentar a sus 500 millones de cerdos y sus 5.000 millones de pollos. Además, se trata de un país muy especial: por un lado, es un país comunista, aunque de comunista ya solo le queda la hegemonía absoluta del Partido Comunista controlándolo todo; y por otro lado, es un país capitalista que saca de la pobreza a millones de trabajadores y trabajadoras, pero haciéndoles trabajar doce o catorce horas al día por un salario miserable, aunque en este aspecto ha mejorado mucho durante los últimos quince o veinte años. Además, si China ha conseguido reducir la pobreza en un espacio relativamente corto de tiempo, sacando del umbral de extrema pobreza a unos 600 millones de

1 Resulta difícil incluir hoy día a China entre los países del tercer mundo, pero a nivel de pobreza y desigualdades resulta más difícil aún incluirla entre los países desarrollados.

chinos, ello no se ha debido a las políticas del FMI o de la ONU, sino a su acelerado desarrollo económico. «O sea: que casi toda la reducción de la pobreza sucedió en el país donde los organismos internacionales no tuvieron la menor influencia, donde no los dejaron aplicar sus políticas. Lo cual no impide que sean esos organismos los que ahora se jactan de sus logros: la reducción de la pobreza extrema» (Caparrós, 2015, p. 448). Algo similar podríamos decir de Vietnam o de la India.

6.2.3. América Latina

La tercera zona del planeta con una mayor incidencia de la pobreza es América Latina, donde buena parte de la población es pobre. En efecto, CEPAL (2017) calcula que, en 2016, en América Latina había 186 millones de pobres, es decir, el 30,7 % de su población, mientras que la pobreza extrema afectaba a 61 millones (el 10 % de la población). Además, como es de esperar, la pobreza (y las consiguientes tasas de enfermedad y mortalidad) afecta sobre todo a las personas con más bajos niveles de educación. Así, Acosta (2016, p. 99) observó que, en Colombia, entre 1998 y 2014, el 78,4 % de los fallecidos a causa de alguna enfermedad asociada a la pobreza tenían niveles de educación muy bajos (el 24,2 % no tenía ningún nivel educativo, el 35,0 % solo tenía la primaria completa; el 15,6 % la primaria incompleta; y solo el 3,0 % tenía educación universitaria completa y el 8,8 % la secundaria completa). Diré algo de tres países, que no son precisamente los más pobres de ese continente:

1) Brasil: a pesar de que, los gobiernos del PT redujeron mucho la desigualdad, «junto con Sudáfrica, Brasil es todavía hoy el país menos igualitario de la tierra» (Ziegler, 2006, p. 149). De hecho, con la democracia no cambiaron mucho las cosas en este aspecto, pues, como escribe Chossudovsky (2002), Brasil dejó de estar controlada por los militares para estarlo por «los acreedores y las instituciones financieras internacionales de Washington, es decir, no se transitó de la dictadura a la democracia, sino más bien de una dictadura militar a una dictadura económica y financiera, marcada por la intervención del FMI y el BM, intervención que tuvo los mismos efectos que había tenido en otros países: subida de los precios –con una inflación de más del 20 % al mes–, bajada de los salarios, recortes en sanidad y en educación, incremento de la deuda interna, llegada de mucho dinero “sucio” y de «capital golondri-

no», etc. «Unas 300 empresas financieras e industriales grandes obtuvieron inmensas ganancias. Estos grupos eran los responsables mayores de “esa inflación beneficiosa”; la participación del capital en el PIB aumentó de 45 % en 1980 a 66 % a principios de los noventa. La “democracia” había asegurado a las élites económicas (en alianza con los acreedores internacionales) lo que los regímenes militares nacionalistas no fueron capaces de lograr plenamente. La “agenda secreta” del FMI consistía en apoyar a los acreedores debilitando al mismo tiempo al estado central. Noventa mil millones de dólares de intereses habían sido pagados ya durante los ochenta, casi tanto como el total de la deuda misma (120.000 millones de dólares). Cobrar la deuda, sin embargo, no era el objetivo principal. Los acreedores internacionales de Brasil querían asegurarse de que el país permaneciera endeudado indefinidamente en el futuro y que la economía nacional y el estado fuesen reestructurados en su beneficio, para el pillaje continuo de los recursos naturales y el medio ambiente, la consolidación de la economía de exportación de mano de obra barata y el acaparamiento de las empresas estatales más rentables por el capital extranjero. [...] La pobreza no fue solo “el resultado” de las reformas, sino también “una condición explícita” del acuerdo con el FMI» (Chossudovsky, 2002, pp. 224-225).

Pero tengamos en cuenta, como dice Chossudovsky (p. 226), que la autonomía del FMI y del BM es muy limitada pues no son sino «simples “burocracias financieras” responsables de llevar a cabo las reformas económicas en los países endeudados, en nombre de los acreedores». Quienes realmente mandan en el nuevo orden mundial no son los gobiernos salidos de las urnas, sino los acreedores, la gran banca –sobre todo la de inversión– y las grandes empresas transnacionales (petroleras, farmacéuticas, armamentísticas, etc.). Y luego está la deuda externa que ahora es el verdadero motor de la historia, tras haber sustituido en ese papel a la vieja lucha de clases. De hecho, las negociaciones de Brasil con el FMI, que terminaron a finales de 1991, obligaban al gobierno brasileño a reducir en un 65 % el gasto corriente y a hacer nuevos recortes del gasto social para pagar la deuda y los intereses de esta.

Es más, tras repetidas negociaciones del gobierno brasileño con el FMI, «las medidas impuestas por los acreedores constituyeron un último y mortífero golpe a los programas sociales de Brasil, ya en un estado avanzado de descom-

posición como resultado de sucesivas “terapias de choque”. [...] El desmantelamiento y destrucción de los programas sociales del estado y la desaparición de parte del plan de pensiones del gobierno (Providencia Social) eran “precondiciones” para la firma del acuerdo. Además, las reformas preveían también un recorte de los salarios reales al establecer un “tope salarial” en el sector público» (Chossudovsky, 2002, p. 234). Y el FMI exigió también, añade este autor, «enmiendas constitucionales que permitieran una rápida privatización de Petrobras y Relebras, las paraestatales del petróleo y las telecomunicaciones». Esa situación cambió bastante con Lula como presidente, entre 2003 y 2011, de forma que, según dice John Gledhill (2016, p. 16 y ss), durante esos años se redujo la pobreza del 37,5 % al 20,9 %. Y con la pobreza, se redujo también la desigualdad, de forma que el coeficiente Gini no dejó de bajar durante esos años. «Bajo la administración de Lula, el paro se redujo, los salarios reales aumentaron y la movilidad social se reanudó (Pchman, 2009). Este proceso se prolongó durante la primera administración de Rousseff. [...] Casi 24 millones de brasileños, sobre todo jóvenes y muchos negros, ascendieron a personas de clase “C”, con ingresos situados entre cuatro y diez veces el salario mínimo. Pero resulta sociológicamente engañoso describir a este grupo como una “nueva clase media” diferenciada de una clase obrera en movilidad ascendente. La incorporación al mundo del consumo masivo a través de la extensión generalizada del crédito al consumo, o incluso el acceso a créditos hipotecarios subvencionados por el estado, no eliminan las ventajas sociales acumuladas que las “viejas” clases medias han adquirido a través de la educación primaria y secundaria privada, un acceso más fácil a la enseñanza superior pública gratuita, y la pertenencia a unas redes sociales que facilitan la incorporación a carreras profesionales (Souza, 2009). [...] La desigualdad se redujo en términos de rentas del trabajo, pero no en términos de capital, que en todas partes tiene importantes dimensiones no económicas (Bourdieu, 1989)» (Gledhill, 2016, p. 18).

Sin embargo, en el Brasil de Lula se observó una curiosa y preocupante paradoja. Tanto el desempleo como la pobreza se redujeron mucho y el estilo de vida de muchos trabajadores mejoró a consecuencia del aumento real de su salario. Pero los índices nacionales de delincuencia y violencia aumentaron. Así, el número de homicidios en el estado de Bahía subió un 242 % entre 2010

y 2012. Y ello fue, a mi juicio, uno de los factores que ayudan a entender la pérdida de apoyo popular del PT: los millones de brasileños que el PT sacó de la pobreza empezaron a sentirse de «clase media» y fueron acercándose a partidos más conservadores (ahora querían conservar lo que tenían) y preferirían alejarse del PT como forma de convencerse de que lo que tenían era gracias a sus propios méritos y no a la ayuda de las políticas de Lula, lo que explica también el hecho, demostrado repetidamente, de que quienes han salido de la pobreza gracias a la ayuda estatal, suelen oponerse a que el Estado ayude a otros. Finalmente, esos millones de personas que salieron de la pobreza comenzaron a desarrollar unos sentimientos de inseguridad que antes no tenían. Todo ello, a mi juicio, facilitó la victoria de Bolsonaro, tras el *lawfare* (golpe de Estado mediático-judicial) contra Lula cuando, según las encuestas, era quien ganaría las elecciones.

Pero no olvidemos que también los gobiernos del PT decidieron resolver el problema de la delincuencia mediante el encarcelamiento masivo en prisiones cada vez más privatizadas (Leahy, 2013), con lo que el número de encarcelados, casi siempre pobres y sobre todo negros, aumentó mucho. Gledhill (2016, pp. 58-59) nos presenta una curiosa anécdota de Bahía que hace referencia a dos mujeres jóvenes, de 19 y 21 años, a las que en un control policial pillaron conduciendo un coche robado. Las dos residían en un edificio de pisos de alto nivel y una de ellas era hija de un funcionario del Ministerio de Justicia Federal. Pues bien, fueron puestas en libertad bajo fianza, con el argumento de que tenían dinero y carecían de antecedentes penales. Como dice Gledhill (2016, p. 59), «con toda seguridad su destino habría sido muy distinto si el caso fuera el de dos mujeres pobres de color que hubieran robado leche para sus bebés».

2) *Perú*: aunque el «tratamiento de choque» del FMI se aplicó en muchos países, el alcance de la «ingeniería económica» en Perú no tiene precedentes. Y, como es de suponer, las consecuencias sociales fueron devastadoras. «Los ingresos promedio de los empleados del gobierno habían disminuido un 63 % durante el primer año del gobierno de Fujimori y un 92 % en relación con 1980, [...] entre 1980 y 1983, los niveles de desnutrición infantil aumentaron drásticamente. En 1985, el consumo de alimentos estimado había caído en un 25 % en relación con su nivel de 1975. En el período de cinco años de la presidencia de Balaúnde (1980-1985), los ingresos reales del salario mínimo

disminuyeron en más del 45 %. Todas las categorías de la fuerza laboral se vieron afectadas: la disminución promedio de los ingresos reales para los trabajadores tanto de cuello blanco como de cuello azul fueron, respectivamente, de 39,5 % y 20,5 %. En el período de diez años desde el final del gobierno de Velasco (1975) hasta el final de la presidencia de Belaúnde (1985), el salario mínimo descendió (según los datos oficiales) en un 58,2 %, el salario medio en un 55 % (obreros) y los sueldos promedio de los oficinistas de ingresos medios, en un 51,7 %» (Chossudovsky, 2002, p. 240 y 244).

El caso del Perú es sorprendente. En la campaña electoral, el candidato Mario Vargas Llosa proponía un «plan económico de choque» en línea con el exigido por el FMI, mientras que Fujimori proponía una serie de medidas económicas opuestas al «plan de choque». El pueblo peruano votó por Fujimori precisamente para evitar el plan de choque propuesto por Vargas Llosa. Pero Fujimori mintió, y una vez ganadas las elecciones, aprobó un plan de choque similar al propuesto por Llosa,² con los efectos consabidos: incremento de las enfermedades, como la malaria, el dengue o la epidemia de cólera en 1991, cierre de las escuelas públicas, las universidades y los hospitales a causa de una huelga indefinida de maestros y sanitarios por la reducción de sus salarios, etc. Sin embargo, Fujimori fue apoyado y elogiado por la comunidad financiera internacional por su «exitosa política económica», por implantar la «terapia económica de choque» que gustaba al FMI, que, como subraya Chossudovsky (p. 2), fue mucho más devastadora que la aplicadas en Chile o Argentina por las dictaduras militares. Pero para imponer esas medidas económicas (conocidas como *Fujishock*), Fujimori tuvo que echar mano del ejército, que reprimió con extremada dureza las protestas de la población. Pero los países democráticos ricos no emitieron la más mínima protesta: Fujimori se había puesto al servicio de los intereses de los accionistas mundiales y de los más ricos y poderosos.

3) *Chile*: resulta difícil hablar de Chile como un país pobre, pero sí de un país con muchos pobres y grandes desigualdades. Las políticas neoliberales puestas

2 Es un caso muy claro de las maniobras antidemocráticas de los actuales amos del mundo: a menudo es igual quien gane las elecciones, pues se aplicará el mismo programa económico.

en marcha con el golpe de Estado de Pinochet, el 11 de septiembre de 1973, han dejado un país muy dividido a nivel económico, con grandes desigualdades y un gran número de pobres. Para verlo, basta con subir al cerro de San Cristóbal, en Santiago, y contemplar en un lado los rascacielos modernos, sedes de las grandes empresas, y, en el otro, los miles y miles de chamizos en los que malviven muchas docenas de miles de chilenos pobres. Podemos decir que la implantación del neoliberalismo y de sus políticas empezó en Chile. Allí fue donde, tal vez por primera vez, se pusieron en práctica las medidas económicas, profundamente ideológicas, del neoliberalismo, de la mano de los Chicago Boys. La Escuela de Chicago tuvo por primera vez la oportunidad de poner en práctica, sobre los cadáveres de miles de muertos y de torturados, lo que ellos no dejaban de llamar la «libertad». consideraban que por encima de la vida de las personas estaban los beneficios económicos de los más ricos y de las grandes empresas. Aquel 11 de septiembre de 1973 se comenzó a poner en práctica la *Teoría del shock* (Klein, 2007). En efecto, pocas semanas después del sangriento golpe militar que derrocó al gobierno electo del presidente Salvador Allende, la junta militar, encabezada por el general Augusto Pinochet, decretó un aumento del precio del pan de 11 a 40 escudos (¡un 264 %!). Y apenas una semana después del golpe se formó un gobierno militar en el que ocuparon cargos importantes varios miembros del muy neoliberal Instituto de Economía de la Universidad Católica de Chile, instituto plagado de Chicago Boys. Además, a la vez que los precios se disparaban, los salarios eran congelados para asegurar «la estabilidad económica y detener las presiones inflacionarias», siguiendo uno de los más esenciales principios neoliberales. De la noche a la mañana el país entero se vio arrojado a la extrema pobreza. Por dar un solo dato: los salarios bajaron mucho mientras, en menos de un año, el precio del pan aumentó treinta y seis veces. Así pues, en Santiago el neoliberalismo comenzó a implantar sus devastadoras recetas, y no por azar lo hizo sobre miles de víctimas de un golpe de Estado militar. Ninguna imagen más clara que esta para entender cabalmente qué significa el término «libertad» en boca de los neoliberales. Esperemos que, si el neoliberalismo comenzó en Chile con un sangriento golpe de Estado militar, sea también en Chile donde haya empezado a declinar en unas elecciones libres ganadas por una coalición de izquierdas encabezadas por Gabriel Boric en diciembre de 2021 y que se instalará en el Palacio de la Moneda el próximo 11 de marzo.

6.3. El nuevo colonialismo

Uno de los factores responsables de la pobreza actual en el mundo sigue siendo el colonialismo. Como escribe Caparrós (2015, p. 212), entre 1875 y 1914, las potencias europeas se repartieron un cuarto de la superficie de la Tierra; Gran Bretaña se llevó diez millones de kilómetros cuadrados, más que toda la superficie de Europa; Francia, nueve millones. Esos territorios ocupados les servían para matar dos pájaros de un tiro: ofrecían nuevos espacios para que sus desempleados encontraran ocupación y proveían recursos para las metrópolis. Pero tuvo efectos dramáticos para los trabajadores y los pobres de esas zonas. Millones de campesinos que habían vivido siempre en economías de subsistencia fueron forzados a producir para el mercado mundial –materia prima para las fábricas inglesas y comida para sus obreros– lo que les llevó a perder sus tierras y sus formas de vida. Todo ello, añade Caparrós, produjo muchos millones de muertos (algunos historiadores hablan de 25 millones, mientras que otros lo elevan a 150). Ello fue la consecuencia más grave y más evidente del colonialismo (Ferro, 2005).

El colonialismo clásico terminó hace poco más de cincuenta años tras la independencia de los países que antes fueron colonias. Pero, antes de salir de sus antiguas colonias, las potencias europeas se llevaron cuanto pudieron, dejando esos países como un erial. Aunque, para su desgracia, poco después de su independencia se instaló la hegemonía neoliberal, con lo que, en cierta medida, han vuelto a ser colonias de los países ricos. Las antiguas potencias han vuelto a sus antiguas colonias, con el poder que les da ahora el ser los prestamistas de gran parte de su deuda, lo que está teniendo unos efectos muy negativos para la población de los países pobres. Y es que hacia 1980 comenzó un nuevo colonialismo, más sutil pero no menos depredador que el del siglo XIX. Los nuevos amos del mundo eran los dueños de todo. De hecho, como subraya Caparrós (2015, pp. 275-276), «en los años noventa, tras la caída del Muro de Berlín y el fin de la historia, ya nada se interpuso en su camino. El cuento es conocido: aprovechando las deudas que los países pobres contrajeron con los grandes bancos internacionales en los años setenta –cuando los grandes bancos tenían demasiada liquidez y convencieron a los países pobres a aceptar esos préstamos–, el FMI y el BM les impusieron sus programas neoliberales. Sus funcionarios, con el poder de coerción de las deudas, se transformaron en los nuevos administradores coloniales, que desembarcaban en las capitales de un centenar de países con la potestad

de imponer sistemas económicos completos. Reagan y Bush en Estados Unidos, Thatcher en Gran Bretaña, Kohl en Alemania eran los líderes político-militares que respaldaban el ataque. La mayoría de los medios colaboraron con el hambre: la devaluación de las monedas nacionales encareció la compra de cualquier alimento importado o exportable, la reducción de los aparatos estatales dejó a millones de empleados en la calle, las privatizaciones aumentaron los precios de los servicios públicos y dejaron a los pobres con menos dinero para comprar comida, la destrucción de la salud pública impidió que los malnutridos, sujetos a más enfermedades, pudieran curárselas. [...] En la ronda Uruguay (1986-1993) la OMC obligó a muchos países pobres a rebajar sus barreras aduaneras y sus incentivos a la producción agraria, mientras que Estados Unidos, Europa y Japón aumentaban más todavía los subsidios a sus productores, que podían producir más barato y copar esos mercados» (Caparrós, 2015, pp. 275-276). Esa sí fue una importante fuente de hambre y de muerte. Lo llamaron el Consenso de Washington y mató a millones de personas.

Más aún, añade Caparrós (2015, pp. 276-277), la ofensiva capitalista neoliberal durante los 80 y 90 produjo también un fenómeno general muy significativo: las decisiones básicas de la economía del país se tomaban en el FMI y el BM –en Washington– y, por lo tanto, las autoridades nacionales perdieron casi todo su poder, de manera que las elecciones de esas nuevas democracias parecieron cada vez más a una farsa: el poder real estaba fuera del país. Además, fue el comienzo de una escalada en el deterioro del planeta. De hecho, en China y en India lo que comenzó a reflejar que se había accedido ya a la clase media era tener coche y comer carne, con el aumento de la contaminación atmosférica a que llevan ambas cosas. Tengamos presente que en ambos países vive casi la mitad de la población mundial. En China, el consumo de carne pasó de 14 kilos por persona y año en 1980 a 55 en 2014 (ahora es aún superior). La situación del planeta se hace más y más insostenible, pues no olvidemos que en los países ricos de Occidente la media sigue siendo, desde hace décadas, superior a los 80 kilos por persona y año (en España, según la FAO, es de 98,76 kg). Y tengamos muy en cuenta que cuanta más carne comamos algunos, menos podrán comer otros, sobre todo después de que el FMI y el BM forzaran a los Estados de los países pobres a «no interferir en el mercado», para lo que les obligaron a no ayudar a sus pobres, y por lo que no pudieron mantener reservas de alimentos para estos fines.

Un ejemplo evidente de cinismo por parte de los países ricos y de su responsabilidad en las hambrunas de los países pobres está en el Bangladesh de hace 80 años. Como dice Caparrós (2015, p. 515), en 1943 estalló en ese país una hambruna que mató a tres millones de personas, como consecuencia del envío de miles de toneladas de grano a Inglaterra, que estaba en guerra. Aun así, quedaba suficiente comida en Bangladesh para alimentar a la población, pero los precios habían subido tanto que los pobres no podían pagarla, y morían a miles. Pero a Winston Churchill le preocupaba poco la situación, hasta el punto que llegó a decir que no había de qué preocuparse pues «los indios se reproducen como conejos». Es un ejemplo claro de que las hambrunas no son la consecuencia de que no haya comida para todos, sino de que los pobres no puedan pagarla, porque hay para todos. Además, tengamos en cuenta que el hambre no solo mata, sino que también produce una malnutrición crónica que hace que millones de personas mueran por enfermedades que serían fáciles de curar.

Pero tal vez sea este nuevo colonialismo el fenómeno que más amenaza hoy día a los pobres del mundo. El movimiento de apropiación de tierras del tercer mundo empezó a tomar fuerza a principios del presente siglo XXI, pero el incremento de los precios de los alimentos a partir de 2007 le dio el empujón definitivo.³ En esos quince años, subraya Martín Caparrós (2015, p. 541), distintas empresas estatales y privadas compraron o alquilaron enormes extensiones de terreno. Y aunque las cifras varían mucho, estamos hablando de unos cien millones de hectáreas (la suma del territorio de Francia y Alemania). Oxfam habla incluso de 200 millones. Y más de dos tercios de esas tierras están en el África subsahariana, en países donde la tierra es muy barata o se consigue casi gratis, y donde hay muchas personas que pasan hambre. Así, añade Caparrós, los diez países donde los extranjeros se apropiaron de más tierras son estos: Sudán del Sur (más de cuatro millones de hectáreas cultivables), Papúa Nueva Guinea (casi otros cuatro millones), Indonesia (2.700.000), Congo (2.600.000), Mozambique (2.000.000), Sudán (2.000.000), Etiopía (1.400.000), Sierra Leona (1.400.000), Liberia (1.100.000) y Madagascar (1.000.000). El resto de las tierras apropiadas se re-

3 Con toda seguridad, todo esto está empeorando en estos primeros meses de 2022 a causa del desorbitado aumento de los precios de los alimentos, sobre todo del trigo, el arroz y el maíz, alimentos básicos en la dieta de miles de millones de personas pobres.

parte entre el sudeste asiático –Camboya, Laos, Filipinas, etc.– y América Latina, aunque ahora la región más deseada es la Sabana Guineana, un territorio de cuatro millones de kilómetros cuadrados (400 millones de hectáreas) –casi el doble que Argentina–, que se extiende desde el Atlántico hasta el Índico, justo por debajo del Sahel, a través de más de 20 países. Se trata, como nos recuerda Caparrós (2015, p. 542), de lo que el propio BM llama «la última gran reserva mundial de tierra subempleada». Repárese en que eso es justamente lo que solían decir los colonos que ocuparon África en el siglo XIX. En la Sabana Guineana, donde viven y trabajan más de 600 millones de africanos, la mayoría de ellos entre los más pobres y desnutridos del planeta, se dedica un tercio del territorio a la producción de alimentos, otro tercio para agro-combustibles y el otro tercio se reparte entre maderas, flores y conservación de bosques, para generar bonos de carbono, o sea, para compensar la contaminación de las fábricas de los países ricos. «Esta ola de apropiación de tierras parece el último paso del capitalismo de origen occidental para completar su ocupación de la Tierra. El movimiento que empezó con Colón y los demás navegantes, que se aceleró en la segunda mitad del siglo XIX, está por terminar» (Caparrós, 2015, p. 543).

Ello está mostrando cómo el capitalismo y su idea de la propiedad se enfrentan «con otras formas de pensar el uso de los recursos. Alrededor del 90 por ciento de la tierra africana no tiene registros legales de posesión: los modos de considerar y registrar la propiedad siempre fueron otros. Ahora funcionarios nacionales y compradores extranjeros invocan el derecho occidental para irrumpir violentos, se aprovechan de ese desfase para pretender que esas tierras no son de nadie y están, por lo tanto, a su disposición. Y entonces los gobiernos se encargan de vaciar los territorios que entregan a sus nuevos beneficiarios. Para eso desplazan poblaciones enteras; a veces incluso dicen que lo hacen para mejorar sus condiciones de vida. Pero –por citar solo un ejemplo– el contrato que firmó el Estado etíope con un multimillonario indio, Sai Ramakhrishna Kuruturi, al que prometió 300.000 hectáreas a un dólar por hectárea y por año durante 50 años en el sur del país, dice muy claro que la tierra “debe ser entregada vacía” y que el gobierno “debe asegurar que el arrendatario disfrutará de una posesión pacífica y sin dificultades y proveerle sin costo una adecuada seguridad contra revueltas, disturbios o cualquier otra turbulencia como y cuando el arrendatario lo requiera”. Son condiciones que el inversor exige» (Caparrós, 2015, p. 546).

Pero no es probable que haya revueltas contra los «usurpadores» de las tierras africanas, al menos no por parte de las personas hambrientas, pues estas están perfectamente controladas a nivel ideológico, dado que también ellas han internalizado el valor sagrado de la propiedad privada, internalización que sirve para justificar y legitimar las desigualdades sociales. Como concluye Caparrós (2015, p. 572), «no hay mayor logro ideológico que el respeto a la propiedad privada. La base milagrosa de todo el edificio. El hecho sorprendente de que, en general, los dueños no necesitan usar violencia para impedir que alguien que necesita mucho algo y lo ve ahí delante de sus narices se lo lleve».

Por otra parte, este nuevo colonialismo se basa en gran medida en la mano de obra barata. Si la economía del capitalismo colonial se basó en la esclavitud y el expolio de las materias primas de las colonias, la nueva economía se basa en la mano de obra barata y el control de las economías y las políticas de los países pobres sobre todo a través del FMI, la OMC, el BM y la deuda pública. «La globalización de la pobreza va acompañada de la remodelación de la economía nacional de los países en vías de desarrollo y de la redefinición de su papel en el nuevo orden económico mundial. El nivel nacional de las reformas macroeconómicas, aplicadas simultáneamente en gran número de países individuales, juega un papel clave en la regulación de los salarios y costos de mano de obra en el plano mundial» (Chossudovsky, 2002, p. 83). Y ello lo consiguen principalmente de estas tres maneras: 1) incrementando el desempleo en todos los países, sobre todo en los desarrollados; 2) con la llegada masiva de migrantes desde los países pobres a los países ricos. Por eso hay interés en que aumente la pobreza en los países pobres, pues es una forma eficaz de tener mano de obra barata en los países ricos; y 3) deslocalización de las empresas que se van de los países con sindicatos fuertes y, por ello, los salarios son altos y los derechos laborales dignos, a países donde no hay sindicatos o son muy débiles y donde, por tanto, los salarios son bajos y los derechos laborales nulos. No olvidemos que, por decirlo en términos marxistas, el salario de los trabajadores de los países desarrollados depende, en gran medida, de los «ejércitos de reserva» de mano de obra que haya en los países pobres. Por eso no interesa terminar con la pobreza, pues es esta la que regula los salarios: cuantos más pobres haya en cualquier parte del mundo, más bajos serán los salarios en los países desarrollados, en especial en el caso de los trabajadores sin cualificar. Tengamos presente, con Piketty (2021, p. 243),

que «la organización económica actual, basada en la circulación incontrolada de capitales, sin objetivos sociales ni medioambientales, es a menudo una forma de neocolonialismo en beneficio de los más ricos».

6.4. Consecuencias psicológicas y psicosociales de la pobreza⁴

Es evidente que la psicología y la psicología social pueden ayudar mucho a entender los efectos de la pobreza, la desigualdad y la exclusión, así como a tomar medidas para paliar tales efectos, aunque no debemos olvidar que la forma más eficaz de mitigar tales efectos consiste en reducir drásticamente tanto la pobreza como la desigualdad. Pero ello depende también –aunque mucho menos que las medidas políticas y económicas– de los propios pobres. De ahí la importancia en estos temas de aspectos psicosociológicos como el poder de la situación, la irracionalidad humana, las atribuciones causales, el fatalismo o la resiliencia (Ovejero, 2020). La pobreza tendrá efectos psicológicos diferentes según a qué la atribuyan sus víctimas. Así, si la contemplan como un fatalismo inevitable poco harán por combatirla. Como dice Rubén Ardila (2011), la pobreza es un concepto económico, pero también es un concepto psicológico y de interacción social, y es precisamente en estos terrenos poco estudiados donde podemos encontrar respuestas para tratar de explicar la ineficacia mostrada por las estrategias implementadas hasta el momento en el mundo en la lucha contra la pobreza. Pero yo creo que eso no es del todo así. Por el contrario, los aspectos psicológicos que ayudan a que la pobreza se mantenga no son la causa de esta sino la consecuencia de estar prolongadamente en situación de pobreza y de las estrategias que utilizan los poderosos para que no mejore la situación de los pobres, con la frecuente ayuda de la religión, como ocurre en el cristianismo, que insta a los pobres a conformarse con su situación y a esperar que mejore su suerte después de la muerte (Teresa de Calcuta es un caso paradigmático), pero más aún en el hinduismo, que le echa la culpa directamente al pobre de su pobreza, a causa de sus pecados en vidas anteriores. En ambos casos poco puede hacerse por mejorar la pobreza. De hecho, Galindo y Ardila (2012) encontraron en sus

4 Estas consecuencias son similares se produzcan por la pobreza, por la desigualdad o por la exclusión social, con matices propios en cada una de tales situaciones. De ahí que, aunque las incluyo en este, podría haberlas incluido también en los otros capítulos.

sujetos que la fe o creencia en Dios determinaba conductas casi siempre pasivas en lo referente a actuar con respecto a sus problemas, ilusionados, eso sí, con que Dios mejorará su situación algún día, al menos en el más allá.

La psicología comunitaria, en cambio, intenta relacionar la psicología con las políticas públicas (Alfaro, 2013) y subrayar, sobre todo en América Latina, la necesidad de superar las condiciones de pobreza de amplios sectores poblacionales, a la vez que fomenta la participación social como una vía eficaz para hacer frente a la pobreza (Wiesenfeld y Sánchez, 2012), atacando los factores materiales y simbólicos que interfieren en la constitución subjetiva de los pobres y que contribuyen a perpetuar la pobreza (Ximenes, Cidade y Nepomuceno, 2015). Así, y dado que la pobreza se expresa a través de cuestiones materiales y simbólicas, estos autores mantienen que la psicología comunitaria, como campo teórico, práctico y ético, es capaz de proporcionar ayuda para el fortalecimiento de la actuación de las políticas públicas y de las redes comunitarias de apoyo, a partir de la consideración de las expresiones subjetivas en contextos de pobreza. Y ellos pretenden, desde esta óptica, analizar las expresiones psicosociales de la pobreza y su contribución a la intervención en políticas públicas. De hecho, añaden que uno de los efectos de la culpabilización del pobre, tan propio del actual momento neoliberal, es el refuerzo en el imaginario social del pobre como alguien subalterno, servicial, incapaz, dependiente, ignorante y violento. En una dirección similar, Góis (2008) habla de la existencia de una «ideología de sumisión y resignación» que define las condiciones y el modo colectivo de vivir de la población pobre que puede modelar sus condiciones de vida y actuar en su estructura psíquica. De esta manera, la pobreza, en sus dimensiones psicosociales, contribuye a la producción de fenómenos como el fatalismo (Martín Baró, 1998), la vivencia de vergüenza y humillación (Zavaleta, 2007) y el no establecimiento de una red de apoyo social de afrontamiento (Valla, 2000). Más aún, valorar a los ricos por su capacidad de triunfar y culpar a los pobres por su fracaso, algo propio de la ideología neoliberal que ha sido internalizada por la mayoría de la gente incluidos los pobres, son estrategias ideológicas sutiles de legitimación de la exclusión (Guareschi, 2001), que están al servicio del mantenimiento de la desigualdad y de la propia pobreza (véase Blanco, 1998).

En resumidas cuentas, «la psicología comunitaria puede proporcionar “importantes contribuciones al análisis de la pobreza, por la lectura psicosocial que

hace del modo de vida de las clases populares. Más allá de una atención a las condiciones de vida inherentes a este contexto, se dedica a los procesos culturales y simbólicos que constituyen y mantienen las realidades sociales, resaltando los modos simbólicos de constitución de la pobreza y sus impactos en las formas de estructuración del psiquismo” (Cidade, Moura y Ximenes, 2012). En este sentido, la pobreza implica un tipo de existencia, tejido desde relaciones macro y microsociales, establecidas a partir de precondiciones estructurales, simbólicas, sociales y económicas» (Ximenes, Cidade y Nepomuceno, 2015, 1.414). No olvidemos que, como escribía Vygotsky (2000, p. 33), siguiendo aquí a Marx, el ser humano es «un conjunto de relaciones sociales encarnadas en un individuo». Por tanto, la vida en contextos marcados por la pobreza y la opresión dejará necesariamente marcas subjetivas e intersubjetivas. Así, Lachman y Weaver (1998) encontraron que, en general, el locus de control interno es algo beneficioso en todos los niveles socioeconómicos y que, a pesar de las adversidades propias de la situación de pobreza, hay personas que logran un alto nivel de motivación de logro y una fuerte sensación de control, lo que mejora su calidad de vida. Pero también observaron una relación positiva entre el nivel socioeconómico y el locus de control. También Vera *et al* (2009) encontraron una relación directa del nivel socioeconómico tanto con el locus de control interno como con la motivación de logro. Igualmente, Palomar y Valdés (2004) observaron en sus sujetos mexicanos, que los «no pobres» y los «pobres moderados» presentaban un mayor locus de control interno, mientras que los «pobres extremos» tenían un mayor locus de control externo. Y Palomar y Lanzagorta (2005) hallaron que el no estar deprimido, tener un locus de control interno, estar satisfecho con la propia situación económica y ser crítico con la situación del país, predecían su movilidad social ascendente.

En todo caso, para entender mejor los efectos psicológicos de la pobreza habría que tener en cuenta estas dos distinciones: cuando la pobreza produce un hambre persistente que a menudo lleva a la muerte, sobre todo de los niños pequeños, y cuando no es tan severa y sus efectos no son tan dañinos; y cuando el pobre está rodeado de personas tan pobres como él, como suele ocurrir en los países pobres, y cuando el pobre está rodeado de personas mucho más ricas, como suele ser frecuente en los países ricos. Es en este segundo caso cuando los pobres experimentan sentimientos de «vergüenza y humillación» (Zabaleta, 2007). Para este

autor, ello tiene graves efectos en la salud mental, como una baja autoestima, problemas escolares, fobias sociales, ansiedad, depresión, paranoia, conflictos de pareja, violencia doméstica, asesinatos en serie y hasta suicidio. Por su parte, Santacruz y Ardila (2003) encontraron que las situaciones de pobreza conllevan efectos psicológicos como afecciones psicósomáticas y estados de sumisión que incluso pueden ser transmitidos a la siguiente generación.

También Ricaute (2016) halló que, en situación de pobreza, las personas suelen confiar menos en los demás, lo que perjudica a sus relaciones interpersonales, y tienen más sentimientos de soledad, una menor motivación intrínseca y menos actitudes pro sociales, lo que afecta negativamente a su salud emocional. También los datos de Becerra (2016) mostraban que las personas en condición de pobreza confían menos en sus propias capacidades y en sí mismos como agentes de cambio, lo que disminuye sus sentimientos de autoeficacia. De manera similar, Páez de la Cruz (2017) encontró que el fatalismo era algo fundamental en adolescentes pobres pertenecientes a pandillas en la ciudad colombiana de Barranquilla, lo que también reducía sus sentimientos de autoeficacia e incrementaba su fatalismo y sus sentimientos de indefensión aprendida, conceptos realmente cruciales para profundizar en la «psicología de la pobreza». De hecho, se ha observado a menudo que la pobreza lleva a la apatía política y dificulta la participación y la organización de los pobres, así como al fatalismo y a los sentimientos derrotistas y de indefensión aprendida (Camacho Salcedo, 2019). También se ha constatado que el hecho de ser pobre se relaciona con una menor participación política y comunitaria, como consecuencia precisamente de su mayor nivel de fatalismo y de indefensión aprendida y más bajos sentimientos de autoeficacia: la vida ha ido mostrándoles que todo está organizado para que no hagan uso de sus derechos de participación política y para que, si los usan, su acción resulte inútil. A pesar de ello, Díaz (2011, p. 51) insiste en que se debe «trabajar en una cultura de lo público que empodere a los ciudadanos para que participen activamente en aquellos asuntos que incumben a todos». Si se entabla una batalla, puede perderse o puede ganarse; pero si se renuncia a luchar, la batalla ya está perdida de antemano. De ahí la importancia de que la ciudadanía tenga más autoeficacia y menos indefensión aprendida. La «autoeficacia» es definida por Albert Bandura como una sensación personal de confianza en la propia capacidad para manejar adecuadamente ciertos estresores de la vida diaria. Se trata de

un concepto esencial para superar la pobreza, aunque el hecho de que se trate de un concepto muy individualista le quita mucho del poder que se le atribuye. En efecto, no le servirá de mucho a una persona tener sentimientos de autoeficacia si las fuerzas del entorno se le ponen completamente en contra, como es el caso de la mayoría de los hambrientos de los países pobres. Si cuando quienes tienen sentimientos de autoeficacia y luchan denodadamente por salir de la pobreza constatan que las fuerzas del entorno se lo hacen imposible, terminan frustrándose y perdiendo tales sentimientos. Se hace necesaria la acción colectiva.

Algo similar habría que decir del concepto de indefensión aprendida, al que muchos psicólogos consideran una de las piezas clave para entender los mecanismos que explican las dificultades que tienen muchas personas en situación de pobreza para lograr una movilidad social ascendente. Entender cómo funciona este concepto es sin duda muy importante, pero de ninguna manera debe servir para ocultar las verdaderas causas de la pobreza, que no son psicológicas, sino políticas y económicas. La indefensión aprendida es el hecho de haber aprendido que no existe relación alguna entre nuestros esfuerzos por conseguir una meta y el alcanzarla realmente. Las personas aprenden que no pueden controlar su ambiente, lo que suele llevarlos a no utilizar las opciones de control que tienen disponibles. Así, Martin Seligman (1975) encontró que los animales que eran expuestos a choques eléctricos inevitables aprendían que no podían escapar, de tal manera que después, cuando la huida sí era posible, ni siquiera lo intentaban: habían aprendido a ser indefensos. También las personas pobres aprenden a ser indefensas ya en la primera infancia, con lo que se perpetúa el ciclo de la pobreza (Ardila, 2011). La indefensión se aprende dentro de la familia, pero también viviendo en barrios en los que la mayoría de la población no tiene trabajo, ni está ni ha estado escolarizada, ni tiene acceso al sistema sanitario. No es la indefensión lo que lleva a la pobreza, sino la pobreza la que lleva a la indefensión: el pobre aprende a ser indefenso a causa de las pésimas condiciones de vida que tiene que soportar (Pick y Sirkin, 2010; Smith, 2010). Ello lleva a la mayoría de los pobres a tener esquemas de pensamiento derrotista y a asumir posturas de control externo (Galindo y Ardila, 2012), como el atribuir las causas de su pobreza a la suerte, al destino o a Dios (entre quienes pasan hambre no suele haber ateos). No olvidemos que el conformismo y la sumisión forman parte esencial del fatalismo, por lo que los pobres suelen tener una mayor tendencia

a mostrarse pasivos ante los problemas, centrándose demasiado en el presente y demasiado poco en la planificación del futuro. A resultados similares llega Natalia Camacho Salcedo (2019), a partir de una revisión bibliográfica de los trabajos publicados en Colombia entre 2000 y 2018, añadiendo que las condiciones de pobreza favorecen el surgimiento de violencia psicológica dentro de las familias. Y lo grave es que, con frecuencia, tanto los ricos como los pobres creen que cada uno tiene lo que se merece, aunque los ricos están más convencidos de que sus logros son la consecuencia de su propio esfuerzo y no la consecuencia de la posición social que han heredado o de la suerte (haber estado en el sitio adecuado en el momento oportuno) (Markovitz, 2019). Como subraya César Rendueles (2020), la «ideología meritocrática», absolutamente falsa, ha crecido en paralelo a los procesos de mercantilización que se generalizaron a partir de la década de los 80 del siglo XX. Por eso el crecimiento de la desigualdad ha ido acompañado de un rápido aumento de la creencia en los valores meritocráticos (Mijis, 2018).

En suma, los estudios sobre psicología y pobreza sirven para apoyar el *statu quo* si no tienen en cuenta las condiciones reales de existencia de las personas pobres y de las excluidas. Por eso lo que pretendo en este libro es unir los aspectos psicológicos, sociológicos, económicos y políticos que tanto afectan a esos colectivos.

6.5. ¿Es posible terminar con la pobreza y la desigualdad?

Propuestas de solución

Estoy de acuerdo con Villareal y Osorio (2010, p. 137) cuando, refiriéndose a la solución del hambre y la pobreza, escriben que «a corto plazo es preciso tomar medidas directas para mejorar el acceso a los alimentos por parte de aquellas personas que se encuentran sumidas en una pobreza extrema y que sus capacidades para producir y generar ingresos se han visto menoscabadas [...] A medio y largo plazo, se debe robustecer la capacidad del sector agrícola con medidas encauzadas a incrementar la productividad, teniendo particularmente en cuenta las limitaciones que enfrentan los pequeños productores, hombres y mujeres, en materia de la tierra y el agua, la tecnología, los mercados, la infraestructura, la extensión y el crédito. Este proceso debe basarse en un modelo de desarrollo agrícola y rural de base amplia y participativo en el que se tengan en cuenta las necesidades, los intereses y las problemáticas diferenciadas de los hombres y las mujeres. Estas iniciativas y políticas deberán permitir mejorar el potencial pro-

ductivo, el empleo y los ingresos no solo para encontrar solución a las crisis actuales y evitar su repetición en el futuro, sino también para crear las condiciones para enfrentar los importantes desafíos que se perfilan para el próximo futuro, tales como alimentar a una población que, según estimaciones de las Naciones Unidas, en el 2050 será un 50 % más numerosa que en la actualidad, dentro de un contexto de cambios sociales, económicos y demográficos importantes, una creciente escasez de tierra y agua y de mayores riesgos asociados con los procesos de cambio climático». Entre las propuestas para reducir tanto la desigualdad como la pobreza están las siguientes:

1) *Fiscalidad progresiva*: las medidas más eficaces para combatir la desigualdad, como ya he dicho más de una vez en este libro, son las fiscales, y en concreto, la aprobación de una fiscalidad progresiva que grave más al que más tiene, principalmente a las grandes fortunas y a las multinacionales con más beneficios. Además, estas medidas serían de gran utilidad también para reducir la pobreza, pues servirían para recaudar suficientes fondos con que financiar las medidas necesarias.

2) *Medidas de protección social o de garantía social*: tanto la pobreza extrema como incluso la moderada podrían desaparecer, o al menos reducirse drásticamente, si se adoptaran medidas de «política de garantía de recursos». Son numerosos los investigadores que afirman que el factor que funciona como principal freno que impide que la gente caiga en la pobreza es la disponibilidad y el acceso a la protección que proporciona el sistema (Berghman, 1995). Son políticas de protección social las pensiones no contributivas o la renta mínima de inserción. Las pensiones no contributivas fueron creadas en España en 1990 con el propósito de reducir la pobreza grave que afectaba especialmente a la tercera edad y a personas discapacitadas. Su cuantía equivale al 75 % del salario mínimo interprofesional. La Renta Mínima de Inserción se aplica en España desde hace ya unos años y afecta a personas sin los suficientes recursos para su subsistencia. Su cuantía depende del número de miembros de la unidad familiar y de los recursos económicos de que dispongan: para una persona sin ingresos es de 400 euros mensuales, para dos personas de 512,67 y para tres personas de 587,78 euros.

3) *Renta básica universal* (RBU): consiste en dar una renta a todas las personas mayores de edad del planeta. Se trataría de una cantidad fija de dinero que se le daría a toda persona por el mero hecho de vivir, independientemente de su condición profesional o económica. Los ricos también la recibirían, aunque en su declaración de la renta tendrían que devolver buena parte de ella o toda. Como escribe César Rendueles (2020, p. 128), «la renta básica consiste, por encima de todo, en una herramienta para universalizar realmente los derechos sociales desvinculándolos del mercado de trabajo». Se trata de una propuesta dirigida a paliar los efectos del desempleo generalizado. Según Joseph Stiglitz (2020, p. 253), esta medida «no debería descartarse, pero no termina de convencerme que resuelva los problemas económicos inherentes al asunto, por los déficits en cuanto a dignidad que supone el desempleo generalizado. El empleo continúa siendo la columna vertebral de una economía sana». Y añade (p. 252): «La RBU tiene algunas ventajas claras. Podría incrementar la igualdad y respaldar a quienes fracasan en la obtención de empleo. Podría eliminar los procedimientos burocráticos implicados en lograr acceso a cada uno de los muchos programas de la red de seguridad y protección social, como los cupones de alimentos y Medicaid. Pero no creo que simplemente proveer de un ingreso a la ciudadanía sea el enfoque apropiado: para la mayoría de las personas, el trabajo es una parte importante de su vida». Además, la renta básica universal tiene al menos tres posibles problemas: el de concretar la cantidad de la renta básica; la dificultad para financiarlo, sobre todo en el caso de que se haga compatible con la protección del estado de bienestar; y el riesgo de que, en esta sociedad de capitalismo neoliberal, «fácilmente podría llevar a un desmantelamiento total de los estados de bienestar y abrir la puerta a los miniempleos, sin protección o casi sin ella, para poder complementar el monto ínfimo de la renta básica universal, dejando a las personas muy vulnerables e incluso más dependientes del capitalismo de lo que son hoy» (Mestrum, 2018, p. 105).

4) *Garantía de empleo*: como subraya Stiglitz (2020, pp. 254-255), «ninguna política es más relevante para la equidad, el crecimiento y la eficiencia que la de mantener el pleno empleo. Y el elemento más importante en una vida de clase media es el de contar con un puesto de trabajo decente. Esto requiere, a su vez, que los haya, un marco macroeconómico que asegure el pleno em-

pleo». Esa sería la mejor solución, pero mientras no exista, la RBU podría ser de gran utilidad. Una herramienta esencial que podría aplicarse como complemento a la renta mínima es el sistema de garantía de empleo propuesto recientemente en el contexto del llamado Green New Deal (véase Atkinson, 2016), consistente en dar a todas las personas que lo deseen un puesto de trabajo a tiempo completo con un salario digno, cuya financiación correría a cargo del Estado, y los puestos de trabajo serían ofertados por las agencias de empleo público, como son los ayuntamientos.

5) *Creación de un «fondo salarial»*: se trata de una propuesta que se está volviendo a barajar ahora y que fue ideada hace 50 años por Rudolf Meidner y sus compañeros del sindicato sueco LO. Afectaría sobre todo a las grandes empresas que estarían obligadas a abonar cada año una parte de sus beneficios a un fondo salarial que permitiera a los trabajadores hacerse gradualmente con el control del 52 % del capital de la empresa al cabo de veinte años. Ello permitiría «sentar las bases de una nueva forma de socialismo democrático, autogestionado y descentralizado, a partir de la circulación permanente del poder y de la propiedad. Este sistema se opone al socialismo de Estado centralizado y autoritario experimentado por el bloque soviético en el siglo XX. En gran medida, está en consonancia con las transformaciones sociales, fiscales y jurídicas que han tenido lugar en muchos países durante el último siglo, sin olvidar que dichas transformaciones se han logrado a partir de luchas de poder, movilizaciones populares y múltiples crisis y momentos de tensión» (Piketty, 2021, pp. 200-201).

6) *Establecer una herencia universal*: dado que mientras unos pocos tienen demasiado y la mitad de la población mundial no tiene prácticamente nada, «la solución más natural al estado actual de las cosas sería concebir un sistema de distribución de las sucesiones que permitiera a toda la población recibir una herencia mínima. Como referencia, para fijar conceptos, esta herencia mínima podría ser igual al 60 % del patrimonio medio por adulto (aproximadamente 120.000 euros si la media se sitúa en torno a los 200.000 euros, en el caso actual de Francia), pagadera a todos los adultos a la edad de 25 años. Esta dotación de capital podría financiarse mediante una combinación de impuestos progresivos sobre el patrimonio y sucesiones, que supondrían alrededor del 5 % de la renta nacional, mientras que la financiación del Estado social y

ecológico (incluida la renta mínima y la garantía de empleo) se financiaría mediante un sistema unificado de impuesto progresivo sobre la renta [...] El primer objetivo de una herencia universal de este tipo es aumentar el poder de negociación de quienes no poseen prácticamente nada (aproximadamente la mitad de la población). Si no tienes nada, o peor aún, si solo tienes deudas, estás obligado a aceptar cualquier salario y cualesquiera condiciones de trabajo, o casi. La renta mínima y el salario mínimo garantizado son herramientas valiosas para transformar dicha situación y reequilibrar las relaciones de poder, aunque desgraciadamente no sean suficientes [...] Cualquiera podría permitirse rechazar ciertas ofertas de trabajo, adquirir una vivienda, embarcarse en un proyecto personal o crear una pequeña empresa. Esa libertad tiene todo para asustar a empresarios y propietarios, cuyos trabajadores perderían su docilidad» (Piketty, 2021, pp. 194-196).

7) *Establecer unas leyes laborales justas*: ello significaría, entre otras cosas, mejoras salariales, protección al empleo, etc. Por ejemplo, España es uno de los países europeos con mayor desigualdad, que se mantiene en épocas tanto de recesión como de crecimiento y expansión económica, lo que se debe principalmente a que aquí, como señala Inmaculada Cebrián (2018, p. 184), en ambos tiempos tenemos mucho empleo precario y de poca calidad, una baja productividad y bajos salarios, un elevado nivel de inestabilidad laboral –con demasiados contratos temporales y a tiempo parcial– y una baja tasa de empleos indefinidos. Y como añade Cebrián (2018, p. 188), las últimas reformas laborales han llevado a un incremento de la inseguridad y de la incertidumbre laboral, que afecta tanto a los trabajadores empleados como a los que buscan un empleo, lo que –añade Cebrián– incuestionablemente aumenta la precarización de las condiciones laborales y lleva a más altos niveles de pobreza, lo que hace crecer las desigualdades. De hecho, la reforma laboral de Mariano Rajoy de 2012, «ha causado un formidable incremento de la precariedad y de la desigualdad entre los trabajadores ocupados» (Cebrián, 2018, p. 188). Esperemos que la nueva reforma laboral, recientemente aprobada, enderece esta situación.

8) *Condonación de la deuda del tercer mundo*: se trata de una medida fundamental y necesaria, aunque no suficiente, que ayudaría mucho a las economías de los países pobres y apenas afectaría negativamente a las de los países

desarrollados. En todo caso, deberían ser condonadas al menos las llamadas «deudas odiosas», como es el caso de Ruanda, donde entre abril y junio de 1994 fueron asesinados entre 800.000 y un millón de tutsis (hombres, mujeres y niños) ante la mirada impasible de los cascos azules de las Naciones Unidas, que se negaron a prestar ayuda, siguiendo las órdenes del Consejo de Seguridad, a través del subsecretario general para el mantenimiento de la paz, Kofi Annan (Ziegler, 2006, p. 96). Los genocidas fueron finalmente derrotados, a pesar de que la Francia de François Mitterrand no dejó de ayudarles en ningún momento. Ahora bien, subraya Ziegler, «el nuevo gobierno heredó una deuda externa de cerca de mil millones de dólares. Cuando llegó al poder en un país completamente devastado, y considerando que no tenían ninguna obligación moral de reembolsar los créditos que habían servido para financiar los machetes con los que habían descuartizado a sus madres, hermanos e hijos, los nuevos gobernadores solicitaron a los acreedores que suspendieran, o incluso anularan, los vencimientos. Sin embargo, el cártel de acreedores, conducido por el FMI y el BM, se negó a cualquier acuerdo, amenazando con bloquear los créditos de cooperación y aislar financieramente a Ruanda en el mundo. Así es como los campesinos ruandeses, pobres como Job, y los escasos supervivientes del genocidio, se matan para devolver, un mes tras otro, a las potencias extranjeras las sumas que sirvieron para las matanzas». En definitiva, concluye Ziegler (p. 99), «en mi opinión, deben considerarse “deudas odiosas” todas las deudas externas de los países del tercer mundo que inducen el subdesarrollo económico, reducen las poblaciones a la esclavitud y destruyen a los seres humanos a través del hambre». Parece evidente, por tanto, que estas «deudas odiosas» sean condonadas.

9) *Los comunes sociales*:⁵ en mi opinión, resulta imprescindible terminar con el capitalismo, o al menos reformarlo en profundidad, para reducir significativamente tanto la pobreza como la desigualdad. Y una forma eficaz de poner las bases para conseguirlo es potenciar algo que constituyó una de las señas

5 Para un análisis de las diferentes formas de organización desarrolladas a lo largo de la historia para hacer un uso común de los recursos naturales, materiales o cognitivos véase Cole y Olstrom, 2012; Bauwens, Bellivier, Benhamon *et al.*, 2015; Boccon-Gibod y Crétois, 2015; Ovejero, 2017a.

de identidad de la especie humana: la recuperación de lo común. «Se trata del cambio necesario en las relaciones de poder. [...] Los comunes sociales incluyen nuestros principales derechos económicos y sociales, desde los derechos laborales hasta los cuidados de salud, educación, dotaciones familiares e infantiles, pensiones, etc., nuestros servicios públicos y también los derechos ambientales, tales como el derecho al agua y el aire limpio» (Mestrum, 2018, p. 107). Más aún, añade esta autora, «desde una perspectiva estratégica, los comunes sociales permiten dejar atrás las viejas dicotomías y desarrollar un lenguaje de resistencia al neoliberalismo y la privatización. Los comunes sociales son transformadores en tanto que la justicia social no puede alcanzarse dentro del actual sistema económico y político. Lo más importante en términos prácticos es que no necesitamos esperar a que haya cambiado el sistema económico para empezar a introducir un nuevo sistema de protección social. Por el contrario, comenzando desde ahora podemos contribuir a la transformación de nuestro sistema económico. Los comunes sociales tratan, antes que otra cosa, del cambio sistémico». Un claro ejemplo es la economía de intercambio.

10) Potenciar el tercer sector: otra medida eficaz para reducir el hambre y la pobreza es el fomento del tercer sector, que es «por el que fluye la ayuda mutua, la cooperación, el altruismo o la defensa de los derechos humanos y sociales, mientras por los otros fluye la frialdad de las normas y su aplicación burocrática o los intereses económicos. Es una parte de la estructura social que contrapesa la hegemonía de los otros dos sectores. Es un sector que complementa y perfecciona a los otros dos, pues trata de suplir algunas de sus deficiencias y de ayudar a mejorar parte de los objetivos de ambos» (Pérez Yruela, 2018, p. 66). Si el primer sector son las empresas privadas no controladas por el Estado y el segundo es el sector público, el tercer sector engloba a las entidades sin ánimo de lucro como son las asociaciones no públicas que se ocupan de realizar proyectos de acción social o de la defensa de colectivos de cualquier tipo (sindicatos, asociaciones culturales, deportivas, etc.).

Dentro del tercer sector sobresale el Tercer Sector de Acción Social, que está formado por las organizaciones que trabajan para la promoción de las personas y para la inclusión de los colectivos más vulnerables. Según datos de Pérez Yruela (2018), en España este sector está formado por casi 30.000 organiza-

ciones que en 2013 realizaron unos 53 millones de intervenciones directas de acción social, empleaban a 645.000 trabajadores, casi la mitad del total de trabajadores del sector, contaban con la colaboración de 1,27 millones de voluntarios y gestionaron casi 14.000 millones de euros. Aunque el 54 % de estas entidades tienen menos de diez trabajadores y el 30 % entre 10 y 49, destacan tres que engloban el 12 % del empleo y el 27 % del voluntariado (Cáritas, Cruz Roja y ONCE).

11) *Fomentar un comercio internacional justo*: Oxfam Intermon considera que para acabar con la pobreza es más importante un cambio en la política comercial internacional que la propia Ayuda Oficial al Desarrollo. Mejor que regalarles a los pobres un pez para comer es permitirles que pesquen, al menos en igualdad de condiciones que los pescadores ricos, pues «el modelo de comercio con países pobres basado en subsidios de los países ricos a sus exportaciones de productos agrarios hunde las estructuras productivas locales y empobrece a los campesinos» (Díaz-Salazar, 2011, p. 47). Los países ricos, con la UE y EE. UU. a la cabeza, deberían eliminar los subsidios a la producción y a las exportaciones agrícolas para que pudieran competir también los campesinos del Sur, pues las citadas subvenciones están hundiendo la economía de los países pobres. Así, añade Díaz-Salazar, los campesinos de Burkina Faso tienen que competir en el mercado internacional con los productores de algodón de EE. UU., que reciben más de 4.000 millones de dólares al año en subsidios, una suma superior al ingreso nacional total de ese país africano. En 2001 los países ricos destinaron 311.000 millones de dólares a subsidios agrarios y solo 52.000 millones de dólares a la Ayuda Oficial al Desarrollo (PNUD, 2003).

12) *Mejorar el acceso de las exportaciones de los países del Sur a los mercados de los países del Norte*: según Oxfam Intermon (2002), con un aumento del 5 % de las exportaciones, los países del Sur ingresarían 350.000 millones de dólares, el triple de lo que reciben por la AOD. También el PNUD (2005, p. 132) dice que si África hubiera logrado mantener la misma participación en las exportaciones mundiales que tenía en 1980, hoy sumarían unos 119.000 millones más (en dólares de 2000), cifra equivalente a unas cinco veces lo que reciben de la AOD.

13) *Aplicación de nuevos impuestos internacionales*: «actualmente el debate más interesante en el ámbito del diseño de políticas contra la pobreza en el mundo es el que se centra en la propuesta de nuevos impuestos internacionales» (Díaz-Salazar, 2011, p. 54). Así, el PNUD (2005a) mostró que un pequeño impuesto en los ingresos de los más ricos del mundo bastaría para terminar con la pobreza absoluta. De ahí que impulsara este debate a mediados de los noventa, cuando encargó a James Tobin un texto en el que propusiera un impuesto sobre las transacciones financieras internacionales y calculara la cantidad que se podría recaudar. Pues bien, Tobin, premio del Banco de Suecia, propuso un impuesto del 0,5 % sobre las transacciones cambiarias, con el que se podría recaudar más de 1,5 billones de dólares por año (PNUD, 1994, p. 79). Pero Tobin proponía este impuesto no para reducir la pobreza en el mundo, sino para conseguir una mejor autorregulación del sistema económico internacional y prevenir así crisis financieras como la que se produjo en 2008. El PNUD quería ir más lejos y que el dinero recaudado por ese impuesto se utilizara para el desarrollo de los países del Sur y, por tanto, para reducir la pobreza. Sin embargo, nadie le hizo mucho caso hasta que, comenzado ya el siglo XXI, lo retomó ATTAC (Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana), organización promovida por *Le Monde Diplomatique* y centrada en conseguir nuevas formas de redistribución de la riqueza mundial a través precisamente de la tasa Tobin. ATTAC propugna gravar con un 0,1 % las transacciones financieras, porcentaje muy bajo, pero que conseguiría recaudar gran cantidad de dinero. De hecho, ATTAC y otras ONGs como Oxfam o CIDSE, van más allá de la pretensión de James Tobin y proponen destinar los fondos conseguidos con esta tasa a programas de lucha contra la pobreza. Tengamos presente que, según un cálculo del PNUD (1998), satisfacer las necesidades básicas de los pobres de todo el mundo equivale solo al 4 % de las fortunas acumuladas por las 225 personas más ricas del planeta (hoy día podríamos reducir esa cifra a solo 20 fortunas o menos).

También Piketty hace una propuesta similar: el establecimiento de un impuesto global especial que, por ejemplo, gravara con un 2 % a las fortunas superiores a diez millones de euros, impuesto que afectaría a menos del 0,1 % de la población mundial y que recaudaría un billón de euros al año, que podría asignarse a cada país en proporción a su población. Con ello habría dinero

más que suficiente «para reemplazar por completo todas las ayudas públicas actuales y proporcionar recursos adicionales para invertir masivamente en sanidad, educación e infraestructuras en los países más pobres» (Piketty, 2021, p. 257). Y no sería solo cuestión de solidaridad, pues no olvidemos, como ya he dicho, que «el enriquecimiento de Occidente desde la Revolución Industrial en adelante no habría podido tener lugar sin la división global del trabajo y la explotación desenfrenada de los recursos naturales y humanos del planeta. En general, los países ricos no existirían sin los países pobres ni los recursos del resto del mundo: esto es de aplicación tanto para las antiguas potencias occidentales como para las nuevas potencias asiáticas (Japón y China)» (Piketty, 2021, pp. 258-259). Y tampoco serían tan ricos los países desarrollados si no hubieran contado, incluso recientemente, con la mano de obra barata procedente de los países pobres.

14) *Desarme para el desarrollo*: «la contradicción entre el inmenso gasto militar en el mundo y la incapacidad de la comunidad internacional para financiar políticas contra la pobreza se mantiene a pesar de que el fin de la bipolaridad entre la OTAN y los ejércitos del Pacto de Varsovia parecía presagiar una nueva era de desarme. Se creía que una parte importante del gasto militar podría reorientarse al desarrollo de los países empobrecidos. En este sentido, el PNUD propuso a mediados de los noventa la creación de un dividendo de paz basado en una reducción anual del 3 % del gasto militar para destinarlo a un fondo de desarme para el desarrollo» (Díaz-Salazar, 2011, p. 71). Pero tal plan no se llevó a cabo, a pesar de que solo con la mitad de lo que EE. UU. gastó en la guerra de Irak hubiera bastado para conseguir los ODM (Objetivos de Desarrollo del Milenio) sobre pobreza, hambre, mortalidad infantil y materna, educación, acceso al agua potable y saneamiento. Según el PNUD, una intervención básica en salud que podría evitar la muerte de tres millones de niños al año solo costaría 4.000 millones de dólares, o sea, alrededor del 3 % del aumento del gasto militar entre 2000 y 2003.

15) *Potenciar la cooperación solidaria*: si dije que una de las señas de identidad de nuestra especie fue durante miles de años «lo común» (se cazaba en común, se trabajaba en común, se vivía en común), la otra seña de identidad, tal vez más fuerte y profunda aún que la anterior, fue, como muestra Piotr Kropotkin (2005/1902) con toda claridad, la ayuda mutua, o sea, la «cooperación

solidaria» (Ovejero, 2021b). Si las dificultades para solucionar los tres problemas esenciales que ahora mismo tiene planteados la humanidad (desigualdad, pobreza y destrucción del planeta) provienen principalmente de la ideología del neoliberalismo hegemónico (individualismo, egoísmo, competencia, fatalismo y la convicción de que el beneficio material a corto plazo es lo único que cuenta) y de los consiguientes valores que fomenta (interés por lo material, desconfianza básica en los demás, frialdad en las relaciones interpersonales, miedo e incertidumbre por el futuro, mirar solo por uno mismo, despreocupación por los otros, etc.), la solución de tales problemas pasa, inexorablemente, por la superación de esa ideología y de esos valores y sustituirlos justamente por los opuestos, que, no lo olvidemos, son los que permitieron a la especie humana la supervivencia a pesar de no ser ni la especie más fuerte, ni la más veloz, ni la más fiera. Es más, cuando nacemos somos el animal más indefenso y más vulnerable de todos los existentes. ¿Cómo es posible que, en esas circunstancias, pudiéramos sobrevivir en la jungla y llegar a dominar, para bien y para mal, el planeta entero? La respuesta es evidente: por nuestra capacidad de ayuda mutua, que es precisamente lo que el Estado primero, el capitalismo después y sobre todo el actual neoliberalismo, se han encargado de ir eliminando. Pues bien, una vía eficaz para comenzar a enderezar esta situación consiste en implementar en el aula métodos de aprendizaje cooperativo, que serán más eficaces para esta finalidad si se trata de un aprendizaje cooperativo crítico que persiga la enseñanza y el fomento de la solidaridad y la ayuda mutua (Ovejero, 2018).

En cuanto al caso español, Luis Ayala Cañón (2018) propone tres vías para reducir nuestra desigualdad: avanzar hacia una redistribución más equitativa de las rentas del trabajo; hacer una drástica mejora de las prestaciones familiares; y aumentar el gasto público en educación y sanidad, lo cual contribuiría a recuperar la labor protectora del Estado, muy erosionada por las políticas de austeridad. Evidentemente, ello exigiría «la revisión también del sistema fiscal, no solo desde la perspectiva de la generación de ingresos suficientes, sino también desde su consideración como un instrumento redistributivo de gran capacidad, especialmente en la vertiente de la imposición directa. [...] La moderación de la inequidad en el trato que reciben las distintas fuentes de renta y la disminución del fraude fiscal hasta niveles equiparables a los de otros países europeos

deberían ser componentes básicos de cualquier plan integral de reducción de la desigualdad» (Ayala Cañón, 2018, p. 161).

Pero la pobreza de tantos millones de personas en el tercer mundo no es culpa solo de los países ricos, sino también del fraude, la corrupción y el latrocinio de las élites de los propios países pobres, buena parte de ellos dictaduras (a menudo con la complicidad de los países más poderosos). Según Susan George, «en 2004 las élites económicas y políticas africanas robaron por lo menos 420.000 millones de dólares que, con los intereses, ascienden a 607.000 millones de dólares rapiñados al erario público. Buena parte del botín correspondía a préstamos exteriores: por cada dólar prestado destinado teóricamente a fomentar el desarrollo africano, 60 centavos abandonaban el país y acababan en uno de nuestros bancos [...] Los “activos externos” del África subsahariana, es decir, el dinero de africanos en el extranjero, casi triplicaba la deuda externa del continente» (2010, pp. 101-102). Un estudio de la ONG Integridad Financiera Global afirma que la fuga de capitales en los países del Sur ronda el billón de dólares al año, dinero que sale de los países pobres para producir riqueza en los países ricos. Por eso se mantienen las dictaduras elitistas en buena parte de los países pobres: porque interesa y beneficia a los países más ricos. «Las elecciones en Palestina y en Iraq han dejado claro que Occidente solo aprueba la democracia en la medida en que los pobres elijan a los políticos aprobados por Occidente. El presidente democráticamente elegido de Venezuela se ve repudiado por los gobiernos que se identifican con el Consenso de Washington» (Reinert, 2007, p. 267). Bien claro lo deja Vargas-Llosa: lo importante en las elecciones no es que haya libertad, sino que la gente «vote bien». Y los poderosos utilizan todos los instrumentos a su alcance para conseguirlo.

6.6. Conclusión

Malthus se equivocó estrepitosamente. El problema del hambre no es la falta de alimentos sino el hecho de que los pobres no tienen dinero para comprarlos. Y se prefiere tirar los que sobran antes que darlos a los hambrientos. Como dice un informe de la Institution of Mechanical Engineers (2013), «hoy producimos alrededor de 4.000 millones de toneladas de comida por año. Y, sin embargo, a causa de malas prácticas de cosecha, almacenamiento y transporte, así como de desperdicio en la venta y consumo, se calcula que entre el 30 y el 50 por ciento

de esa comida –entre 1.200 y 2.000 millones de toneladas– nunca llega a un estómago humano». Y según la FAO, los ciudadanos de los 20 países más ricos del mundo desperdiciamos cada año una cantidad de comida igual a toda la producción del África subsahariana –unos 220 millones de toneladas. La ciencia, pues, está sirviendo de muy poco para reducir la pobreza y el hambre en el mundo; solo está sirviendo para que los habitantes de los países ricos –y no todos– vivamos mejor y derrochemos más. «Todo el proceso (científico) es una síntesis del funcionamiento del capitalismo: los científicos consiguen un avance técnico que puede beneficiar a millones de personas. Pero trabajan para una compañía privada, así que la compañía se queda con los beneficios. Y, detrás, los Estados sirven para garantizar que los recauden: con las leyes de patentes se aseguran de que todos les paguen. En ese esquema, el progreso técnico no es un intento de mejorar vidas sino la busca de que algunos acumulen más riqueza» (Caparrós, 2015, p. 177). El ejemplo más sangrante y obscuro es el de las vacunas anti-covid: se consiguieron con dinero público, pero están proporcionando gigantescos beneficios a dos o tres farmacéuticas. Y mientras, miles de millones de personas siguen sin tener acceso a la vacuna.

Inmediatamente antes de la crisis financiera, la OCDE (2008) ofreció evidencia comparada que demostraba que tanto la desigualdad de ingresos como la pobreza relativa –y con ellas, obviamente, también la exclusión social– habían crecido en la mayoría de los países –al menos en alrededor del 65 % de los que formaban parte de la organización– durante las dos décadas anteriores. Según esta organización, en casi todos los casos, el incremento de la desigualdad se había producido más por subir las rentas más altas que por reducirse las bajas, lo que significa que ello no se debe al deterioro de la actividad económica, sino a una injusta distribución de la riqueza creada (OCDE, 2011). Más en concreto, puntualiza Luis Ayala Cañón (2018, p. 136), tras la crisis económica, puede afirmarse que, en general, los problemas de desigualdad han aumentado todavía más en algunos países (Jenkins *et al.*, 2012). Ello está empeorando la calidad de nuestras democracias (Acemoglu *et al.*, 2015; Stiglitz, 2012). Pero es que la desigualdad perjudica incluso al propio crecimiento económico (Ostry *et al.*, 2014). Y tengamos presente que «España es en la actualidad uno de los países de la UE donde la desigualdad es mayor» (Ayala Cañón, 2018, p. 136). Según los datos de Eurostat, en 2016 solo había tres países con más desigualdad que España: Rumanía, Búlg-

ria y Lituania. La desigualdad en España aumentó mucho con la crisis financiera de 2008-2010, empeorando la situación sobre todo de los sectores con menos ingresos (OCDE, 2015) y más todavía con la actual pandemia. Y la pobreza en España afecta incluso al 13 por ciento de las personas que tienen trabajo, tasa que solo es superada por Grecia y Rumanía. Además, como ya he dicho, el aumento de la desigualdad y de la pobreza incrementa también la exclusión social y la discriminación de los excluidos.

Por otra parte, y en conclusión, como sostiene Rodríguez Ramos (2010, p. 39), «nadie se atreve a decir que el hambre es consecuencia de la falta de alimentos. El hambre del siglo XXI hunde sus raíces en la discriminación y marginación en la que viven millones de personas y en la supremacía de los intereses comerciales y económicos frente a los derechos humanos». Y tampoco puede atribuirse el hambre a las tesis obsoletas de Malthus, o sea, al crecimiento demográfico. Claro que tal crecimiento es un problema para erradicar el hambre en el planeta, pero menor de lo que se cree, pues el hambre no deriva del tal crecimiento demográfico, sino de la mala distribución de los alimentos existentes. Hoy día tenemos recursos suficientes para alimentar a todos los habitantes del planeta. «La impedimenta principal se encuentra en una economía que se rige básicamente por el beneficio y el lucro, en la que el mercado se ha instalado como la principal guía de acción» (Berzosa, 2010, p. 52). Ni siquiera en épocas de hambrunas el hambre se explica solo por la falta de alimentos. Por ejemplo, como nos cuenta Muñoz de Bustillo (2010, pp. 69-70), en 1845 la cosecha de patatas en Irlanda se vio atacada por el hongo *Phytophthora infestans*, conocido como mildiu o tizón tardío. La patata era la fuente principal del sustento de una parte importante de los irlandeses, cubriendo alrededor del 60 % de las necesidades alimenticias de la isla. Como efecto de la plaga, un tercio de la población se vio privada durante cuatro o cinco años de su base de subsistencia. Pero la plaga no afectó a otras fuentes de alimentación (aunque sí, indirectamente, al ganado mantenido por los campesinos que se alimentaba de tubérculos) y al menos desde 1847 las importaciones de grano posibilitaron alcanzar un nivel de suficiencia alimentaria que habría permitido evitar la hambruna masiva. Sin embargo, «en 1846, en plena hambruna, se exportaba a Inglaterra grano y casi medio millón de cerdos» (Muñoz de Bustillo, 2010, p. 70). Además, Irlanda formaba parte del Reino Unido, el país más industrializado del mundo. No había ninguna excusa para

aquella hambruna. La explicación está en el egoísmo del incipiente capitalismo británico: no ayudaron a los irlandeses, de forma que cientos de miles murieron de hambre y millón y medio tuvieron que emigrar, sobre todo a Estados Unidos. «Esta tragedia afectó al futuro de Irlanda de una forma radical, convirtiéndolo en un país de inmigración masiva, pasando su población en pocos años de 8 a 5 millones. A principios del siglo XX, la población irlandesa había caído a 3,2 millones, con una tendencia a disminuir que no se invertirá hasta la década de los años sesenta del siglo XX cuando alcanza un mínimo de 2,8 millones. Por el contrario, se estima en más de 40 millones los estadounidenses de origen irlandés» (Muñoz de Bustillo, 2010, pp. 70-71).

En todo caso, y a pesar del optimismo de Thomas Piketty (2021) cuando habla de una progresiva reducción de la desigualdad durante los últimos siglos y a pesar de los avances que, según el Banco Mundial (2015), se han conseguido durante los últimos 25 años, todavía en 2013 vivían con menos de 1,90 dólares 766 millones de personas, de las que 385 millones eran niños y niñas, de forma que la nutrición deficiente seguía produciendo el 45 % de las muertes de menores de 5 años (PNUD, 2015). Y no olvidemos que anualmente siguen muriendo unos 70 millones de niños y niñas menores de 5 años por causas evitables. Pero, como subraya un informe del PNUD (2016), cada año se desperdicia un tercio de los alimentos del planeta, con los que se podría alimentar a 870 millones de personas. Sin embargo, deben importarnos más las personas que las estadísticas. Estas son importantes solo en la medida en que reflejan la situación de las personas, pero, a la vez, reflejan también el hecho de que las personas siguen sufriendo, pasando hambre y muriendo. Y lo primero que hay que decir es que la prosperidad o la pobreza, el mayor o menor nivel educativo, la mejor o peor salud, la mayor o menor esperanza de vida, etc., dependen en gran medida del lugar donde se nace: no es lo mismo nacer en Noruega, Finlandia o Suecia que en Kenia, Sudán o Angola. Importa mucho también el grupo social en el que se nace. No es lo mismo ser autóctono que inmigrante, ser payo que ser gitano, ser blanco o negro en Estados Unidos, ni ser hombre o ser mujer en casi cualquier parte. Las características individuales, incluso el esfuerzo personal, teniendo sin duda su importancia, son factores secundarios.

Además, «a nivel internacional, el hecho de que la riqueza no esté aumentando en la magnitud necesaria allí donde reside la gran mayoría de la población va

a dar lugar a un fenómeno migratorio de una magnitud y unas consecuencias como nunca antes se había conocido. Si la riqueza no va allí donde está la población, lo lógico es que la población intente ir allí donde está la riqueza. Y esto será inevitable y posiblemente se producirá en las próximas décadas de manera verdaderamente masiva e imparable, acompañado de tensiones y fenómenos sociológicamente dislocadores y económicamente perturbadores. Es decir, con un grado notable de “disfuncionalidad”. En realidad, en nuestros días estamos solamente ante el principio de esta tendencia hacia un gran éxodo internacional reequilibrador» (Tezanos, 2010, pp. 28-29). Todo ello producirá, sin duda, perturbaciones políticas y polarización social, como ya se está observando, tanto en Estados Unidos como en España. Tengamos presente que, aunque perdió las elecciones, Donald Trump obtuvo 74 millones de votos. Y en España, Vox no deja de subir electoralmente. A mi juicio, son claros avisos. Por eso, y para evitar el peligro que ya nos acecha, debemos volver al pilar fundamental de nuestra especie: la cooperación y la solidaridad. Si a nivel de la actual pandemia no estaremos libres del virus mientras no esté vacunada la mayoría de población de todo el planeta, tampoco dejará de estar en peligro la especie humana mientras no haya en el planeta un nivel suficiente de igualdad, y la pobreza y el hambre hayan sido reducidas drásticamente.

CAPÍTULO 7

LA AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO Y SUS TRAMPAS

7.1. Introducción

Una de las principales características de nuestra época es el cinismo, incluso en las instancias encargadas de llevar a cabo objetivos altruistas y de ayuda a las personas y los países más necesitados. Es el caso de la ONU que, más allá de sus acciones positivas, cumple también una función ideológica de ocultar las contradicciones del sistema capitalista. Al fin y al cabo, son los países más ricos los que la financian. De ahí que los datos que da sobre la pobreza sean demasiado optimistas y de ahí también que sus promesas –plasmadas, por ejemplo, en los Objetivos del Milenio (OD)– sean a menudo un brindis al sol. Una de las razones que facilitan el que esto sea así es la forma de medir la pobreza o el desarrollo humano. Como señala el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2016, p. 3), el índice de desarrollo humano (IDH) se centra en tres dimensiones básicas: la esperanza de vida al nacer, los años promedio de escolaridad y el ingreso nacional bruto per cápita. Estamos, pues, ante un índice muy complejo que, por tanto, es fácil de manipular, como se observa en los informes de la propia ONU con respecto a la consecución de los ODM. Así, recientemente el PNUD (2016) decía que «los progresos realizados en el ámbito del desarrollo humano han sido impresionantes en los últimos 25 años. Hoy en día, la población es más longeva, hay más niños y niñas que van a la escuela, y un mayor número de personas tiene acceso a servicios sociales básicos», añadiendo que la Declaración del Milenio y los ODM –compromisos mundiales asumidos

para poner fin a las privaciones humanas básicas en un plazo de 15 años– han sido muy positivos. Pero, a renglón seguido, agrega que «el desarrollo humano ha sido desigual y las privaciones humanas persisten. El progreso ha pasado por alto a grupos, comunidades y sociedades, y hay personas que se han quedado al margen. Algunas solo han logrado lo básico del desarrollo humano y otras ni siquiera eso. Además, han aparecido nuevos problemas para el desarrollo, que van de las desigualdades al cambio climático, pasando por las epidemias, la migración desesperada, los conflictos y el extremismo violento». ¿En qué quedamos? Francine Mestrum lo deja muy claro «A nivel global, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó los Objetivos de Desarrollo Sostenible en septiembre de 2015 (Naciones Unidas, 2015). Estos objetivos han de ser alcanzados para el año 2030 y pretenden erradicar la pobreza extrema y “compartir la prosperidad”, es decir, aumentar los ingresos del 40 por ciento más pobre de la población mundial más rápido que los del resto del planeta. La protección social y la mayor parte de sus elementos se mencionan a lo largo de los objetivos, y la lucha contra la desigualdad tiene su propio objetivo número 10. [...] El BM tomó nota de estos objetivos, pero no ha cambiado sus políticas. Junto con su organización hermana, el FMI, continúa imponiendo políticas de austeridad, incluyendo recortes en el gasto social público (Ortiz y Cummings, 2013)» (Mestrum, 2018, p. 101). Las políticas del FMI y del BM, que son las hegemónicas en el mundo actual, hacen muy difícil, por no decir imposible, el que se alcancen los ODM, aunque, como ya he dicho, estos organismos están cambiando últimamente sus objetivos. Pero antes de analizar los ODM veamos las políticas de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).

7.2. Ayuda al Desarrollo

Ciertamente, los países ricos están ayudando a los países pobres, aunque menos de lo que estos necesitan, mucho menos aún de lo que aquellos podrían ayudar y no siempre lo hacen desinteresadamente. Según Homi Kharas (2010) hay 263 agencias de ayuda multilateral, que abarcan desde organismos importantes y muy conocidos, como es la AID (Asociación Internacional para el Desarrollo), que funciona en 80 de los países más pobres, hasta organizaciones pequeñas y con objetivos muy concretos como la Red Internacional para el Bambú y el Rátán. «Aunque hay grandes diferencias de unos a otros países por lo que respecta

a la ayuda por dólar del PIB en los países donantes, la mayor parte de la ayuda sigue proviniendo de los países más grandes del mundo: la economía del G7. Entre ellos, estos organismos representaron el total de la ayuda de los CAD en 2007. No obstante, dentro de este grupo se ha producido un desplazamiento a lo largo del tiempo. Los europeos se han convertido en el mayor proveedor de ayuda, y con la promesa formal de aumentar la ayuda al nivel del 0,7 % del PIB, Europa proporcionará la mayor parte del incremento en ayuda en los próximos años. [...] Al mismo tiempo que Europa ha ido expandiendo su ayuda, el sistema de Naciones Unidas se ha ido adelgazando. En 2007, las agencias de la ONU proporcionaron menos del 4 % de la AOD total. AID, otros bancos multilaterales de desarrollo y el FMI a través de su servicio para la reducción de la pobreza y para el crecimiento contribuyeron con otro 10 por ciento» (Kharas, 2010, p. 303).

Pero la AOD tiene sus trampas. Como señala Micheline Rousselet (1996, p. 188), que el 70 % de tal ayuda es una ayuda bilateral, lo que tiene al menos estos dos inconvenientes: «el primero es que los donantes la utilizan como instrumento de política exterior. Así, la ayuda francesa está reservada prioritariamente a sus antiguas colonias del África negra y al Magreb. Estados Unidos, hasta la caída del muro de Berlín, privilegiaba a los países en que existía una amenaza de avance comunista (Corea del sur, Taiwan, Filipinas), así como Egipto e Israel; hoy en día reserva lo esencial de su ayuda a América Latina. Japón se dedica especialmente al sudeste asiático. El segundo inconveniente de la ayuda bilateral es que se trata de una ayuda en gran parte “comprometida”, es decir, que sus beneficios tienen la obligación de utilizarla para comprar bienes a los donantes. Puede tratarse de bienes de equipo, pero también de asistencia técnica. La financiación de proyectos gigantescos (construcción de pantanos, de carreteras, de fábricas) ha constituido un buen negocio para las empresas del país donante, sin que la rentabilidad económica de estas realizaciones se haya tenido demasiado en cuenta. En cuanto a la ayuda alimentaria, menos del 10 por ciento se dedica a la ayuda de urgencia a las poblaciones víctimas de la guerra o la sequía. El resto es una ayuda institucional distribuida automáticamente en el marco de actuaciones plurianuales. Esta ayuda permite a EE. UU. y a la UE dar salida a excedentes cuyo almacenaje resulta caro, pero que suponen una competencia desleal para los agricultores del Sur» (Rousselet, 1996, pp. 189-192). Sin embargo, concluye Rousselet (p. 192), «a pesar de sus defectos, la ayuda al desarrollo es necesaria

en numerosos países, particularmente en los más pobres, que por esta razón se muestran inquietos ante su eventual reducción». Pero también es cierto que con la ayuda se coloca a los países pobres entre la espada y la pared: sin esa ayuda no pueden subsistir, y con ella quedan atados a los países ricos.

Además, como subraya Reinert, habría que hacer como se hizo en Europa con el plan Marshall: «la transferencia de fondos debe acompañarse de la creación de un sector industrial y de servicios que pueda absorber las inversiones físicas y humanas. La diversificación, postergando la producción de materias primas, es necesaria para crear las bases para una estabilidad democrática y un mayor bienestar, aunque los nuevos sectores sean en un primer momento incapaces de participar competitivamente en el mercado mundial. Esa industrialización incipiente necesitará un trato especial del tipo del que proporcionó el plan Marshall, y requiere interpretar los acuerdos de Bretton Woods del mismo modo que se hizo inmediatamente después de la segunda guerra mundial» (2007, p. 252).

Por otra parte, la Ayuda al Desarrollo proviene tanto de organismos privados como de países y organismos públicos, siendo cada vez mayor la primera –el origen privado– que la segunda:

1) *La ayuda privada*: como nos recuerda Kharas (2010, p. 304), desde que Ted Turner, el magnate de la televisión por cable, entregó 1.000 millones de dólares a las Naciones Unidas en 1997, se produjo un resurgimiento de la filantropía global. Hoy día la mayor fundación filantrópica es la de Bill Gates (aunque el crecimiento más espectacular en Estados Unidos se ha producido entre las fundaciones pequeñas), siendo las ONGs internacionales, como Oxfam, CARE y Save the Children, el segundo grupo de distribuidores de ayuda privada y sus fondos provienen el 70 % de fuentes privadas y el 30 % de públicas. Actualmente, las ONG internacionales reúnen más dinero para la Ayuda al Desarrollo que el sistema de Naciones Unidas en su conjunto.

2) *La ayuda oficial o pública*: esta ayuda experimentó un aumento constante hasta 1991, año en que terminó la Guerra Fría. En ese momento empezó a declinar, hasta el punto de que en 1997 se había reducido en un 22 %, aunque la llegada del milenio alentó nuevamente tal ayuda. Más en concreto, en una conferencia internacional celebrada en 2002 en Monterrey se incrementó esa ayuda a fin de conseguir recursos para alcanzar los ODM. Los países ri-

cos coincidieron en que había que elevar sustancialmente la AOD. Pero no se comprometieron a alcanzar objetivos concretos hasta tres años después, en la cumbre del G8, celebrada en Gleneagles en 2005. Allí, empujados por una manifestación de 250.000 personas, se llegó al acuerdo de dedicar 50.000 millones de dólares a la AOD antes del 2010, así como dar una ayuda adicional de otros 25.000 millones al África subsahariana. Sin embargo, la AOD fue en 2008 de 120.000 millones, 10.000 menos que los establecidos como meta en Gleneagles para 2010. O sea, «el aumento desde 2005 ha sido significativo. Sin embargo, una mirada más minuciosa a los detalles muestra que la AOD tal vez no haya estado orientada hacia la reducción de la pobreza extrema, como se pretendía» (Kharas, 2010, p. 308).

También hay que tener en cuenta que existen diferencias considerables entre la ayuda oficial al desarrollo (AOD) y la ayuda privada al desarrollo (APD). En efecto, «mientras que la AOD brinda apoyo a los países en vías de desarrollo, la APD está orientada a dar apoyo a la gente y a las comunidades pobres. [...] La AOD trabaja a través de gobiernos receptores, la APD lo hace a través de organizaciones locales de la sociedad civil» (Kharas, 2010, pp. 304-305). En esta línea, la propia ONU hizo una nueva propuesta para el desarrollo de los países del Sur basada en el concepto de seguridad humana, proponiendo un cambio de enfoque que pasara de los Estados y sus intereses a las personas y sus necesidades (PNUD, 1994). Este nuevo concepto ampliaba mucho los objetivos de la Ayuda al Desarrollo. En efecto, «el potencial radicalismo del concepto del PNUD reside en su insistencia en el hecho de que la seguridad de las personas no solo se ve amenazada por los conflictos civiles y la violencia, sino también por la degradación medioambiental, la discriminación racial y de género, el paro o el empleo precario, la pobreza y el hambre. [...] Al vincular los temas de la violencia y el conflicto a la privación producida por la pobreza, el paradigma de la seguridad humana propone un enfoque holístico de la búsqueda de soluciones, argumentando que las personas solo pueden realizar su potencial como seres humanos si se las libera tanto del temor como de la necesidad. No es posible resolver los problemas de seguridad personal dándole a una persona un puesto de trabajo si esa persona va a morir prematuramente por desnutrición o de una enfermedad que no puede curarse por falta de hospitales, o si es probable que esa persona sea asesinada en su camino del trabajo a casa por criminales, por paramilitares o

por un miembro de la policía local o del ejército. Desde esta perspectiva, la seguridad humana se ve amenazada por estructuras políticas, económicas y sociales injustas, por intervenciones militares patrocinadas desde el exterior que causan “daños colaterales” entre la población civil, y por conflictos nacionales vinculados a la lucha por el poder y el control de los recursos económicos. Aunque lo más inmediato es hacer hincapié en garantizar la seguridad física y las denominadas necesidades “básicas” de todo el mundo, la seguridad humana subraya la necesidad de que todos alcancen la “dignidad” como condición previa para el bienestar» (Gledhill, 2016, pp. 23-24).

Pero el BM ha ido por otro camino bien distinto. En efecto, todavía en 2011 se centró más en la perspectiva de la «seguridad ciudadana» que en la de la «seguridad humana» (Banco Mundial, 2011). «La seguridad ciudadana tiene que ver con los derechos que normalmente los ciudadanos de una sociedad deberían esperar que les garantice el estado nacional –y, por definición, no aborda explícitamente los derechos que los no-ciudadanos de categorías problemáticas como los inmigrantes indocumentados podrían esperar que les garantizaran un estado que no es el suyo–. Los derechos ciudadanos incluyen la protección frente a las amenazas a la seguridad personal y el derecho a vivir libre de temor; también incluyen los derechos civiles y políticos, y el derecho al uso y disfrute de la propiedad. Este último es importante porque asigna al estado el deber de proteger el derecho a la propiedad privada de un modo que, por ejemplo, podría justificar formas violentas de acción policial en el caso de que dicha acción se mantuviera dentro de los límites de lo legalmente defendible. Eso significa, por ejemplo, que cuando la policía brasileña emplea lo que algunos considerarían una violencia excesiva al desalojar a familias sin hogar con hijos de un edificio vacío en nombre de los derechos de su propietario, está actuando dentro de los parámetros de la seguridad ciudadana. La cuestión –más amplia– del derecho a la vivienda, que podría formar parte de una agenda de seguridad humana, no es aquí relevante. [...] El énfasis en la seguridad ciudadana retoma, pues, al estado como garante del orden público» (Gledhill, 2016, pp. 28-29). De hecho, un problema serio para el actual sistema capitalista es qué hacer con las personas que no le dan beneficios (Bauman, 2005). La solución a este problema es evidente: hacer que tanto los jubilados, enfermos e incluso los presos den beneficios. Y para ello lo que están haciendo es ir privatizando todos esos servicios y encarcelando a los so-

brantes, que son siempre los pobres, como ocurre en Estados Unidos, donde hay 737 presos por 100.000 habitantes o en Brasil con 193 por 100.000 –en Rusia hay 615 por 100.000 (BBC, 2014)–. Como vemos, la violencia represiva se aplica con frecuencia sobre los pobres.

7.3. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio

En el año 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas constituyó la Cumbre del Milenio con el fin de acordar una serie de objetivos de desarrollo, que vinieron a llamarse Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que deberían alcanzarse en las primeras décadas del siglo XXI. Resulta interesante analizar este tema y su desarrollo, ya que los objetivos aprobados por la cumbre coinciden casi textualmente con los que el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) había planteado en 1996 y que, evidentemente, fueron definidos por los países donantes. Por tanto, la fijación de tales objetivos no fue el resultado de un diálogo entre países ricos y países pobres, sino que fue la aceptación por estos últimos de lo que habían acordado los primeros. De ahí que la cooperación tenga como finalidad solo reducir la pobreza extrema, mejorar la educación y salud básicas y algunas cuestiones, no muy precisas, para la preservación del entorno. «Pero otros objetivos, como la igualdad, la potenciación de los recursos humanos, avanzar en la igualdad de oportunidades, etc., no se plantean como meta de la cooperación. Es verdad que el Pacto del Milenio reconoce la necesidad de modificar las reglas de juego por parte de los países ricos. El objetivo 8 del Pacto afirma que resulta imprescindible que se produzcan cambios en las políticas de los países ricos en materia de ayuda al desarrollo, reducción de la deuda externa, reglas internacionales del comercio y transferencia de tecnologías si se quieren alcanzar los OM. Pero no se establecen compromisos precisos ni objetivos definidos, lo que no es de extrañar cuando ni siquiera se han estimado cuáles son los recursos necesarios para alcanzar los objetivos básicos» (Dubois, 2005, pp. 22-23). Más en concreto, la Declaración del Milenio compromete a los líderes mundiales a luchar contra la pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la degradación medioambiental y la discriminación de la mujer. Y tal juicio de intenciones fue plasmado en unos compromisos concretos que deberían ser alcanzados en 2015. Los ODM son los siguientes: 1) erradicar la pobreza extrema y el hambre; 2) lograr la enseñanza primaria universal; 3) promover la igualdad

entre los sexos y el empoderamiento de la mujer; 4) reducir la mortalidad de los niños; 5) mejorar la salud materna; 6) combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades; 7) garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; y 8) conseguir una alianza mundial para el desarrollo.

Esta declaración tiene una gran importancia porque, con el apoyo de la ONU, pretendió convertirse en el nuevo paradigma de las políticas de cooperación para el desarrollo, sustituyendo al Consenso de Washington. Podemos llamarle «Consenso de Monterrey» o «Consenso del Milenio». Sin embargo, tengamos en cuenta que para que los ODM se hagan realidad es necesario cambiar muchas cosas y cambiarlas radicalmente, cambios que suponen un viraje en la dirección de la globalización que la lleve a ser más cooperativa y más solidaria, dejando de ser neoliberal. No olvidemos que, incluso cuando la economía va bien, la cooperación internacional mejora poco, y cuando va mal, tal cooperación empeora mucho. De hecho, sigue siendo cierta la afirmación del PNUD (2005c, p. 19) según la cual «de mantenerse las actuales tendencias, la humanidad estará muy lejos de cumplir los ODM. En lugar de aprovechar el momento, los gobiernos del mundo avanzan a tropezones hacia un fracaso en desarrollo humano ampliamente anunciado y fácilmente evitable, con profundas repercusiones no solo para los pobres del mundo, sino para la paz, la prosperidad y la seguridad». De hecho, según este informe, durante los últimos diez años está aumentando la tasa de mortalidad infantil en muchos países pobres,¹ está disminuyendo el número de niños escolarizados y sobre todo de niñas,² están muriendo cada vez más personas por enfermedades fácilmente curables, aumenta la mortalidad materna³ y los índices de desigualdad, etc.

1 Si en 1980 era doce veces más alta en África subsahariana que en los países ricos, ahora es veinte veces más (PNUD, 2005c, p. 30).

2 «La mayoría de los niños no matriculados en la escuela viven en África subsahariana y Asia meridional. En promedio, para un niño que hoy nace en Mozambique se puede esperar una asistencia de cuatro años a la educación formal, mientras que uno que nace en Francia asistirá 15 años» (PNUD, 2005c, p. 27).

3 El PNUD (2005c, p. 33) calcula que cada año mueren unas 530.000 mujeres durante el embarazo o el parto y al menos ocho millones se ven aquejadas cada año de graves complicaciones durante el embarazo o el parto. La gran mayoría de estas muertes tienen lugar en Asia meridional y, especialmente, en África.

Los ODM no parece que estén siendo alcanzados. Sin embargo, cuando se produjo el derrumbamiento inesperado de la Unión Soviética se nos dijo que, aunque había que atravesar un período de austeridad, al otro lado del túnel estaba el paraíso para todos los habitantes del planeta: mejoraría la economía en todos los países, se extendería la sociedad del bienestar occidental y sus derechos laborales y de ciudadanía a todos los demás países, desaparecería la pobreza extrema, etc. Libertad, democracia y riqueza para todos. Pero nos engañaron. Nada de ello fue verdad y hoy día, a 33 años de la caída del Muro de Berlín, la situación de los países pobres está peor que entonces. Solo los más ricos han mejorado su situación. Porque las políticas neoliberales tienen una consecuencia irrefutable: los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, incrementándose mucho las desigualdades. Teníamos un ejemplo exitoso en el Plan Marshall, pero durante la crisis de 2008 no se siguió ese ejemplo. «A juzgar por el número de países que salieron de la pobreza, el plan de reindustrialización concebido por Marshall fue probablemente el proyecto de desarrollo con más éxito de la historia humana» (Reinert, 2007, p. 244). No obstante, parece que los organismos internacionales están cambiando de rumbo para intentar salir de la crisis económica producida por la actual pandemia sanitaria (Piketty, 2021). Como hace unos años reconociera la propia ONU (PNUD, 2005c, pág. 38) «la pobreza está disminuyendo, pero solo lentamente, desde mediados los años noventa y, entre tanto, la desigualdad mundial se mantiene a niveles extraordinariamente altos».

Pero a pesar de ello, la ONU estaba entusiasmada con la DM: «el nuevo siglo ha comenzado con una declaración de solidaridad sin precedentes y con el firme propósito de acabar con la pobreza en el mundo» (PNUD, 2003, pág. 1). Tal declaración, que fue aprobada por la mayor concentración de jefes de Estado de la historia, comprometía tanto a los países ricos como a los pobres a que hicieran todo lo posible para erradicar la pobreza, promover la paz, la democracia y la sostenibilidad ambiental, exigiendo que, en 2015 o antes, se cumpliesen unos objetivos concretos de avance en el desarrollo y reducción de la pobreza. Pero, añadía este informe, «a pesar de estos compromisos de reducir la pobreza y avanzar en otras áreas del desarrollo humano, en la práctica –como queda demostrado en este informe– su implementación en el mundo se está retrasando [...]. Durante la pasada década, más de 50 países se han empobrecido y muchos de ellos ven ahora cómo sus tasas de esperanza de vida caen en picado a causa del

VIH-SIDA. En algunos de los más retrasados –a menudo desgarrados por conflictos– se reducen de forma importante las tasas de matriculación y el acceso a la atención sanitaria básica. Además, el medio ambiente se está deteriorando en casi todo el mundo», reconociendo (p. 3) que la situación en el mundo ha empeorado durante la década de los 90 tanto en la pobreza (que aumentó en 37 de los 67 países de los que se tienen datos), como en el hambre (que aumentó en 21 países) o la mortalidad infantil (que aumentó en 14 países).

Todo ello empeoró a causa, entre otras, de la llegada de George W. Bush a la Casa Blanca, pues su política fue más neoliberal aún que la de su predecesor. Y no olvidemos que el Consenso de Washington y la Declaración del Milenio son incompatibles. De hecho, la política del FMI exige reducción de impuestos, privatización generalizada de los bienes estatales y la consiguiente merma de los poderes públicos. Pero ni Jeffrey Sachs (2005a, 2005b) ni la ONU (PNUD, 2003), tan dignos de elogios en otros aspectos, denuncian esta incompatibilidad, que, en última instancia, es la responsable del gran retraso que existe en la consecución de los ODM, retraso que se está produciendo más allá donde es más urgente su reducción: en la «desigualdad», que es obscuramente desmedida (PNUD, 2002), como vimos en el Capítulo 4.

Ahora bien, si la situación de la pobreza en el mundo es grave, más grave aún son las tendencias, pues no se avanza en absoluto hacia los objetivos propuestos, y menos aún tras la actual pandemia. Un análisis de las tendencias a largo plazo de la distribución del ingreso mundial entre países indica que la distancia entre el país más rico y el país más pobres era de alrededor de tres a uno en 1820, de once a uno en 1913, de treinta y cinco a uno en 1950, de cuarenta y cuatro a uno en 1973 y de setenta y dos a uno en 1992. Y esa distancia no ha dejado de crecer desde entonces. Por su parte, el historiador económico Davis Landes ha demostrado que la relación entre la renta per cápita de la nación industrializada más rica, digamos Suiza, y la del país no industrializado más pobre, por ejemplo, Mozambique, es de cuatrocientos a uno, mientras que hace 250 años tal relación entre la nación más rica y la más pobre era de cinco a uno. Como vemos, la situación es dramática y eso que, por no alargarme en exceso, no he hablado de la explotación infantil (véanse algunos esclarecedores datos en OIT, 1996, y en Castells, 2001b), ni de la terrible esclavitud actual, que además de tener unas condiciones de vida muchísimo peores que en siglos anteriores, afec-

ta a un número de personas superior al número de esclavos que existía en el Imperio romano (véase Bales, 2000).

7.4. Crítica a la Declaración del Milenio y a la Ayuda Oficial al Desarrollo

Es cierto que la APD (Ayuda Privada al Desarrollo) aumentó durante los Treinta Gloriosos. Sin embargo, como dice Piketty (2021, p. 246), conviene no idealizar demasiado esa época, pues si es cierto que supuso una mejora enorme en la vida de los trabajadores de Europa occidental, también lo es que se hizo muy poco por mejorar la vida de la población del tercer mundo. Por el contrario, fueron los años en que se fueron independizando las antiguas colonias de los imperios europeos y estos no se lo pusieron precisamente fácil. Además, como ya he dicho repetidamente, todo empeoró para los países pobres (y para los pobres y los trabajadores de los países ricos) con la hegemonía del neoliberalismo hacia 1980. «La revolución conservadora de la década de 1980, con sus ataques a toda regla a la progresividad fiscal en los países anglosajones y su obsesión por la libre circulación de capitales (nueva consigna tanto de Europa occidental como de Estados Unidos), también contribuyó a redefinir la actitud de los países ricos y de las organizaciones internacionales hacia los países del Sur» (Piketty, 2021, p. 248). Ello dejaba a los países pobres completamente desarmados ante la avaricia de los países ricos y sobre todo la de los más ricos y de las grandes multinacionales. Más aún, añade Piketty, «dadas las relaciones de poder asimétricas en juego, no es exagerado decir que dichas políticas fueron más impuestas que aconsejadas, y pueden verse como una forma de neocolonialismo». Además, la capacidad de recaudación fiscal de los países pobres es tan baja, que pocas inversiones pueden hacer en educación, sanidad, pensiones o protección social. A los grandes inversores extranjeros les interesa que los países pobres dediquen todos sus recursos a pagar las inmensas deudas que tienen contraídas con los inversores extranjeros, sobre todo con la gran banca de inversión internacional que, por otra parte, actualmente es la que dirige el mundo. En Europa, en cambio, fue posible el Estado social precisamente porque contaron con un sistema fiscal potente y progresivo que les proporcionaba unos ingresos que pasaron de menos del 10 % de la renta nacional en 1914 a más del 40 % en 1980. A partir de 1980 volvió a bajar ese porcentaje, lo que tuvo efectos negativos en las familias más necesitadas y en la población trabajadora.

Ahora bien, viendo la política fiscal llevada a cabo en los países ricos durante los Treinta Gloriosos, cabría preguntarse por qué a los países pobres les impusieron una política fiscal totalmente opuesta. Ello se debió tal vez a que «los países ricos se han preocupado principalmente de liberalizar el comercio para abrir mercados a sus empresas y han visto poco interés en ayudar a los países pobres a gravar los beneficios de las multinacionales o a regular la fuga de capitales del Sur, sobre todo porque estos últimos suelen ir a parar a bancos y capitales del Norte. [...] Según las estimaciones disponibles, los activos financieros depositados en paraísos fiscales representan entre el 10 y el 20 % del total de carteras financieras de Europa y América Latina (lo que ya es considerable), y ese porcentaje se sitúa entre el 30 y el 50 % en el caso de África, el sur de Asia y los países petroleros (Rusia, petromonarquías). Si hablamos de las grandes carteras, todo indica que el uso de los paraísos fiscales es incluso mayor. [...] En estas condiciones, es casi imposible que los países pobres se embarquen en un proceso viable de construcción del Estado» (Piketty, 2021, pp. 251-252).

Y como señala el propio Piketty (2020, p. 253), «es necesario destacar también la extrema hipocresía que rodea a la propia noción de ayuda internacional. Para empezar, la AOD es mucho más limitada de lo que a veces se piensa: en total representa menos del 0,2 % del PIB mundial (apenas el 0,03 % en el caso de la ayuda humanitaria de emergencia) (Micheletti, 2020). Por comparar, solamente el daño climático causado a los países pobres por las emisiones de los países ricos representa varios puntos porcentuales del PIB mundial. El segundo problema, no insignificante, es que en la mayoría de los países supuestamente “ayudados” de África, Asia meridional y otros lugares, los flujos de salida en forma de beneficios de empresas multinacionales y fuga de capitales son en realidad varias veces mayores que el flujo entrante de ayuda oficial (incluso si nos limitamos a las salidas registradas en las cuentas nacionales oficiales, las cuales, según todo parece indicar, subestiman los verdaderos flujos).⁴ Es un punto clave en las relaciones globales entre el centro y la periferia, y que no deja de sorprender a los observadores: los países ricos fingen ayudar a quienes realmente los ayudan».

4 «Durante el período 1970-2012, el flujo de salida oficial de rentas del capital en África fue en promedio tres veces mayor que el flujo de entrada de ayuda internacional» (Piketty, 2021, p. 253).

Por otra parte, la Declaración del Milenio y la Ayuda al Desarrollo son dos temas estrechamente relacionados. Comencemos recordando que la cooperación al desarrollo ha venido reduciéndose mucho desde los años noventa del siglo XX y más aún durante la última crisis financiera. Es más, un análisis detenido del contenido de la Declaración del Milenio nos hace recordar aquellas palabras de John F. Kennedy cuando, sin tapujos, dijo en 1960, en un discurso sobre la «Alianza para el Progreso»: «La ayuda al extranjero es un método por el cual Estados Unidos mantiene una posición de influencia y de control sobre el mundo entero y sostiene a algunos países que de otro modo se pasarían al campo soviético». De forma parecida, el 30 de septiembre de 1968 y ante los gobernadores del BM, su entonces presidente, Robert McNamara, declaró: «La parte de los fondos aportados por la ayuda que queda en los países en desarrollo es muy poca. Prácticamente todo el dinero otorgado vuelve rápidamente a los países ricos bajo la forma de productos comprados a ellos». De forma similar, el socialista François Mitterrand dijo en Génova, en julio de 1994, tras la reunión del G7: «Pese a las sumas considerables dedicadas a las ayudas bilaterales y multilaterales, los flujos de capitales que van de África hacia los países industriales son más importantes que el flujo de aquellos hacia los países en desarrollo». En esta línea parece colocarse la Declaración del Milenio, pero con un cambio sustancial: que el mundo soviético ya no existe y por lo tanto ya no es necesario ayudar como antes al mundo pobre. Además, desaparecida la URSS, la ONU está muy controlada por los países capitalistas.

Como decía Rafael Sanchís, director general de Oxfam Intermon, en una carta a *El País* (17/06/2012), alrededor de 800.000 millones de euros salen cada año de los países pobres hacia los países ricos, principalmente con rumbo a los paraísos fiscales. Solo esa cantidad sería suficiente para lograr los ODM. No haría falta ni siquiera ayuda al desarrollo. Es más, esta es una de las razones de que los países poderosos mantengan esos vergonzosos paraísos fiscales (otra razón es ayudar a los defraudadores fiscales a sacar su dinero de los países donde podrían ser perseguidos por la justicia por delito fiscal). Por tanto, la Ayuda al Desarrollo no es sino una gran mentira y una falsedad tras la que se esconde una realidad bien distinta. En efecto, subraya Sanchís, por cada dólar que reciben los países pobres en concepto de Ayuda al Desarrollo pierden 10 dólares por evasión fiscal. Esta es, además, una de las principales razones de que las desigualdades entre

los países ricos y los pobres sean cada vez mayores. De hecho, Oxfam dice que de todos los países del G20 solo cuatro han conseguido reducir la desigualdad en las últimas décadas. Por tanto, la conclusión que deberíamos extraer de todo ello es realmente preocupante: «la única cooperación al desarrollo que realmente ha existido es la que indica el sentido gramatical de la frase: es decir la de que los trabajadores y trabajadoras de los países subdesarrollados han prestado a los capitales de los países que llamamos desarrollados, y no al revés. Y esto ha venido siendo así desde los inicios del capitalismo, con el establecimiento de un sistema de saqueo que ha utilizado siempre la guerra y el comercio, y también la presencia directa de empresas y capitales. Un sistema que se inició con el colonialismo, continuó con el imperialismo y que se mantiene e incrementa en la globalización neoliberal» (Rodríguez Gil, 2005, p. 155). De hecho, son muchas las fórmulas, a veces manifiestas y a veces sutiles, que tiene el Norte rico para despojar al Sur pobre, entre las que destacan estas (Rodríguez Gil, 2005, p. 156):

- 1) El pago de los intereses y el capital de la deuda externa a los gobiernos, instituciones y bancos de los países desarrollados.
- 2) La fuga de capitales hacia el Norte.
- 3) Los beneficios repatriados por las multinacionales que operan en el Sur.
- 4) Los inmensos beneficios que las multinacionales del Norte obtienen por la gestión del comercio de los productos del Sur.
- 5) El descarado y unilateral sistema de cobro de patentes, *royalties* y derechos de propiedad intelectual que se les impone a los países pobres.
- 6) La diferencia de los tipos de interés entre el Norte y el Sur (desfavorables a estos últimos).
- 7) La compra por las multinacionales a precios de saldo de empresas públicas privatizadas en el Sur.
- 8) La transferencia de los recursos humanos más productivos y la «fuga de cerebros» desde el Sur al Norte.

Sin embargo, esto no es algo nuevo. Por el contrario, la AOD ha sido desde su mismo nacimiento un complemento a las estrategias de dominación del capital.

«La política exterior fue el factor determinante en la puesta en marcha del sistema de AOD, tras la Segunda Guerra Mundial. Esta política nació íntimamente ligada a la “guerra fría” y fue impulsada fundamentalmente por Estados Unidos, con el objetivo de disputar espacios de influencia a la URSS y, tras la primera ola de revoluciones en los países subdesarrollados (China, Cuba, Vietnam, Corea...), de servir de complemento “civil” en la lucha contra los movimientos revolucionarios, es decir, como política contrainsurgente. Pero también la cooperación al desarrollo jugó un papel importante en el reparto de influencias entre el llamado bloque occidental. Estados Unidos impulsó planes para la reconstrucción en Europa y Asia, que le permitió dar salida a su gigantesca industria militar en reconversión y asentar su influencia política y económica. También, este país que emergía como la potencia dominante en la posguerra, pero que carecía de un imperio colonial, impulsó la descolonización, en la medida en que esta le abría el camino a ampliar su presencia política y económica en las antiguas colonias, y la “ayuda” fue un instrumento de la extensión de esta influencia. Mientras, los países europeos situados en el campo de los vencedores, impulsaron también la “ayuda”, como fórmula para atenuar la pérdida de control que podía suponer la descolonización» (Rodríguez Gil, 2005, pp. 152-153). Por otro lado, añade este autor, la política económica, especialmente en su lado comercial, de inversiones de capital y de promoción de la industria y de la tecnología del Norte, impulsó también la AOD e hizo que esta desplegara, entre otros, instrumentos crediticios y de ayuda ligados a la compra de productos y servicios en el país donante, lo que sirvió, además para mejorar las exportaciones de los países industrializados.

Pero hay otro aspecto preocupante. Me refiero a la falsificación de los datos de la AOD. Tengamos presente, como afirma Rodríguez Gil (2005, pp. 158-159), que «la contabilidad es realizada por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE, en base a las cifras facilitadas por cada uno de los países donantes, sin ser supervisados por ningún organismo externo, ni cotejados con los países receptores. También existen evidencias de que muchos gobiernos miembros del CAD, probablemente todos, contabilizan varias veces los mismos recursos». Además, es el propio CAD quien establece las normas que definen qué gastos pueden considerarse AOD y cuáles no.

Además, la ayuda humanitaria que los países ricos les dan a los países pobres a menudo es pura hipocresía. Por ejemplo, en julio de 1954 el Congreso de los

Estados Unidos aprobó la Public Law 480 –Food for Peace Law–, que autorizaba la venta de alimentos a los «países en vías de desarrollo» a precios casi simbólicos. Con ello se pretendía, en primer lugar, que esos países pobres no cayeran en brazos del comunismo y de la Unión Soviética. Además, se pretendía con ello dar salida a los productos agrícolas sobrantes en Estados Unidos, donde «la tecnificación del campo había mejorado mucho los rendimientos y la mecanización de los transportes había reducido al mínimo la demanda de alimento para bestias de carga; los países beneficiarios del Plan Marshall ya estaban recuperados y cultivaban los suyos. Los granjeros –y sobre todo las grandes cerealeras– no sabían qué hacer con sus granos. Y sus lobbies presionaron todo lo que pudieron para que la ley de Comida para la Paz los beneficiara» (Caparrós, 2015, p. 440). Y, añade Caparrós, se hizo de varias maneras: «Para empezar, el Estado les compraría caros los alimentos que mandaría a los países pobres a precios muy subsidiados. Para seguir, según dijo entonces el presidente Eisenhower, la ley permitiría “sentar las bases para una expansión permanente de nuestras exportaciones de productos agrícolas con beneficios duraderos para nosotros y para los demás pueblos”. O sea: desarrollar nuevos mercados. O dicho más bruto: volverlos dependientes de los alimentos que les mandaban. Por un lado, porque los productores locales no podían competir con esos granos baratos y quedaban fuera de juego: millones de campesinos se arruinaron, millones emigraron hacia las ciudades. Y por otro, porque esos envíos les cambiarían los hábitos alimentarios» (Caparrós, 2015, p. 440). Y cuando dejaran recibir esos alimentos, tendrían que comprarlos al precio que les pidieran.

En suma, concluye Caparrós (p. 441), «se puede pensar la ayuda humanitaria como la mecánica de un sistema clientelar global. Así, por lo menos, parece haberlo pensado EE. UU. en la segunda mitad del siglo XX: un modo extremo de establecer dependencias entre un patrón y sus clientes». Por eso, algunas personas con mente lúcida, llevan años proponiendo que, al menos una parte de la ayuda alimentaria se compre en los mercados locales o cercanos. Pero eso no interesa a los países ricos. Además, hacia 1990 hubo dos hechos esenciales en este campo: la desaparición de la URSS, dejándose de prestar ayuda a los países pobres de su bloque, como eran Cuba o Nicaragua, y la consolidación de la hegemonía neoliberal, que estaba menos interesada aún en contribuir a la AOD. Ello tuvo tres importantes consecuencias extremadamente negativas:

1) *Reducción de la ayuda*: la AOD de los países del CAD cayó a casi la mitad de su máximo histórico. Así, si en 1967 la ayuda alcanzó el 0,41 del PNB de los países del CAD, en lo que llevamos de este siglo la media de la ayuda ronda el 0,23. Estados Unidos, por ejemplo, destinó en 1997 únicamente el 0,08 de su PNB, el 0,1 en 1998, 1999 y 2000, el 0,13 en 2002 y el 0,14 en 2003, pero tengamos en cuenta además que ese pequeño repunte de esos últimos dos años se debió principalmente a la inclusión en la AOD de los fondos para la «reconstrucción» de Afganistán e Irak. A la vista de estos datos, ¿son creíbles las promesas de la Declaración del Milenio y son fiables los Objetivos del Milenio? Todo parece indicar que no. De hecho, desde que se lleva aplicando está fracasando. Pero sigue cumpliendo su principal objetivo: dar la sensación de que se está haciendo mucho contra la pobreza. Se trata más de una campaña de propaganda que de una campaña contra la pobreza.

2) *Sentimiento de fracaso*: no es de extrañar, tras lo que llevamos dicho, que la población se vaya frustrando. «La Ayuda al Desarrollo es ahora considerada una política fracasada por sus anteriores defensores. Es ahora cuando se señala la muy limitada eficacia que la Ayuda ha tenido como instrumento al servicio del desarrollo. Los gobiernos de los países desarrollados y algunas instituciones internacionales y especialistas comenzaron hace más de diez años a desvelar, con prudencia o con escándalo, ese secreto, que sin embargo era conocido por las poblaciones de los países subdesarrollados desde hacía muchos más años» (Rodríguez Gil, 2005, p. 162). Y el factor clave del fracaso de la AOD estriba en que no ha impulsado realmente el desarrollo, entre otras cosas porque ese no era realmente su objetivo. «Cómo van a pretender los gobiernos de los principales países capitalistas impulsar el desarrollo cuando el subdesarrollo es, en lo fundamental, una situación de dependencia muy rentable para los grandes capitales» (Rodríguez Gil, 2005, p. 164).

3) *Puesta de la AOD al servicio del capitalismo neoliberal*: además de la brusca reducción de la ayuda, esta se ha ido adaptando a los nuevos tiempos y, por tanto, a las nuevas necesidades del capitalismo neoliberal, siendo destinada principalmente a financiar proyectos asistencialistas cuya misión es servir de paliativo frente a los planes de ajuste estructural impuestos en la mayoría de esos países (Rodríguez Gil, 2005, p. 165). Y ello sobre todo porque aun conviene hacer como que se ayuda a los países pobres, dado que todavía hay

presiones a favor de la cooperación al desarrollo en los países del Norte: hay que mantener el mito de la solidaridad de nuestras «democracias». De ahí que a medida que se destinan menos recursos a tal ayuda, más se la publicita (véase en Rodríguez Gil, 2005 una crítica al funcionamiento de las ONGs).

7.5. Los Informes del Milenio

Estos informes suelen ser muy optimistas y llenos de autocomplacencia. Uno de ellos empezaba así: «El próximo decenio nos brinda la oportunidad de reducir en un 50 % la pobreza en el mundo. Miles de millones más de personas podrán aprovechar los beneficios de la economía mundial. Pueden salvarse decenas de millones de vidas. Las soluciones prácticas existen. El marco político está establecido. Y por primera vez el costo es verdaderamente asequible. Sean cuales fueran los motivos que puedan impulsar a cada uno a resolver la crisis que plantea la pobreza extrema –derechos humanos, valores religiosos, seguridad, prudencia fiscal, ideología–, las soluciones son las mismas. Lo único que se precisa es pasar a la acción». El gran problema es que algo similar decía ya la Cumbre del Milenio de 2000, pero los frutos no llegaron y los objetivos no se cumplieron. ¿No será que la Declaración del Milenio no es sino una pomposa campaña de distracción hasta que, cuando nuevamente se constate su fracaso, se proponga otra declaración que –se dirá– esta vez sí resolverá todos los problemas, repitiendo lo mismo la siguiente campaña? De hecho, en tal declaración no existe ninguna crítica seria al neoliberalismo y sus políticas ni se contempla ninguna medida que pueda obligar a los países ricos a ayudar a los pobres: todo es voluntarismo. Y, sin embargo, es importante tener en cuenta que el actual crecimiento de la pobreza es «el producto directo de la lógica de la acumulación del capital en su desarrollo desigual y combinado. Las dos décadas de globalización neoliberal que hemos padecido no solo no han roto esta tendencia histórica, sino que le han dado un carácter mundial, poniendo las bases de su expansión en la medida en que los ciclos de la acumulación capitalista hoy afectan a todas las economías nacionales» (Búster, 2005, pág. 148). El error del reformista Jeffrey Sachs es creer que es posible conseguir los ODM dentro de este capitalismo neoliberal, esté en la Casa Blanca Bush u Obama, Trump o Biden, con lo que no quiero decir que sea indiferente el que esté uno u otro. Olvida Sachs que el capitalismo compasivo de Obama o Biden es insuficiente para solucionar los graves problemas que tienen

varios miles de millones de personas y para reducir de forma importante las galopantes desigualdades que se están instalando –y parece que para quedarse durante mucho tiempo– en nuestro planeta.

Para entender mejor el fracaso de la Declaración del Milenio resulta útil tener presente el balance del acuerdo internacional que le precedió, el Consenso de Washington, que perseguía los mismos objetivos y se basaba en la misma premisa: el libre mercado solucionará todos los problemas. Pues bien, tras años de aplicación no consiguió ni siquiera su objetivo central, el crecimiento económico sostenido de los países ricos. Y tampoco mejoró, sino todo lo contrario, la situación de los países pobres. Las consecuencias del Consenso de Washington son bien conocidas: una desaceleración de la reducción de la pobreza y un fuerte aumento de las desigualdades (Dubois, 2005). Y ello fue así principalmente porque se centran en la «ayuda» y no en la superación de las causas reales que subyacen a la pobreza y el hambre. Además, como subraya Rodríguez Gil (2005), la primera meta que se establece en ese objetivo es plenamente coincidente con la tesis teórica central del capitalismo neoliberal, que no es otra que «desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, previsibles y no discriminatorio». En efecto, los ODM establecen que la primera y la principal fórmula para impulsar el desarrollo es la apertura comercial, lo que, como demuestra la experiencia histórica, a quien beneficia es justamente a los países ya desarrollados y a sus grandes empresas. Y en su cuarto objetivo se pretende «encarar de manera general los problemas de la deuda de los países en desarrollo con medidas nacionales e internacionales con el fin de hacer la deuda sostenible a largo plazo», es decir, que lo que se intenta aquí es que los países pobres estén en condiciones de pagar la deuda, al precio que sea para su población.

Y tampoco podemos dejar de mencionar el cinismo de la ONU ante los gastos suntuosos que lleva a cabo para estudiar el grado de cumplimiento de los Objetivos del Milenio: cientos de invitados (presidentes de gobierno, ministros, expertos, etc.) son invitados a pasar por Nueva York, pernoctando en hoteles de lujo y en restaurantes de precios prohibitivos, solo para constatar que no se ha avanzado lo previsto. Solo en dos de los objetivos se avanzó suficientemente: en la reducción de la mortalidad infantil y en la del hambre en el mundo. Sin duda, ambas cosas son muy positivas, pero no olvidemos que las dos mejoras se deben sobre todo a los datos de China e India, justamente los dos países que no aplican

las medidas del FMI y del Consenso de Washington. Además, los avances en la reducción del hambre son muy limitados y tienen muchas lagunas: hay países en los que ha mejorado mucho la situación y hay países en los que incluso ha empeorado (Chen y Ravallion, 2008). Más aún, como concluye Tezanos (2010, p. 22): «¿Cuántos años se van a necesitar por esta vía y con estos enfoques y recursos para erradicar el problema del hambre y la pobreza en el mundo? ¿Podrán esperar tantos años los pobres y los hambrientos?».

La primera prueba del fracaso de la Cumbre del Milenio llegó ya en la cumbre de Monterrey, celebrada en 2002. Su principal objetivo consistía en que los países ricos comprometieran los fondos para cumplir los ODM, pero terminó en un rotundo fracaso, además de que se aprovechó para adaptar todavía más la AOD al discurso y a la práctica neoliberal. Es más, allí se dio ya por enterrada la vieja aspiración de alcanzar el 0,7 % del PNB o del PIB a la Ayuda al Desarrollo. No era la primera vez que ocurría algo similar. Así, en 1974, los países de la ONU dieron su apoyo a la llamada revolución verde en la Primera Cumbre Mundial de la Alimentación «para acabar con el hambre en el mundo en una década». El resultado fue otro fracaso. «Además de crecer el hambre, arrasó las distintas agriculturas y ecologías existentes en el planeta, produjo una mayor dependencia económica, tecnológica y alimentaria de los países pobres y propició el aumento de su deuda externa. Para pagar los intereses de la deuda, estos países se vieron obligados a producir cultivos de exportación para el mercado internacional y a importar los alimentos básicos y más baratos para su población. La revolución verde consiguió el desarrollo del mercado mundial de alimentos, a costa de la soberanía y la seguridad alimentaria de cientos de millones de personas en el mundo» (Galindo, 2006, p. 36). Lo que hizo esa llamada revolución verde fue incrementar mucho el hambre, aunque sí produjo pingües beneficios a los países ricos y a sus grandes empresas. Como siempre.

En suma, la Declaración del Milenio ha sido una nueva estrategia para conseguir lo mismo que el Consenso de Washington: poner a los países pobres al servicio de los más ricos y de las grandes multinacionales. Por eso Sachs habla mucho de pobreza, pero critica poco la verdadera causa de tal pobreza, que es el modelo neoliberal dominante.

Por otra parte, «los Objetivos del Milenio olvidan los aspectos no materiales: las

cuestiones políticas y socioculturales. Sin embargo, hay que afirmar enfáticamente que los derechos, la libertad, la dignidad, etc., son componentes básicos del bienestar y por ello forman parte de la buena vida exigible. Merecen atención por sí mismos. Su introducción en la estrategia contra la pobreza no es una cuestión teórica, sino que implica proceder a elaborar otro tipo de políticas y a plantearse otros resultados e indicadores» (Dubois, 2005, p. 23). Y es que, como puntualiza Sousa Santos (2003) hay que pasar de un paradigma de la regulación a un paradigma de la emancipación, lo que supone pasar de intentar erradicar la pobreza a intentar mejorar el bienestar de todas las personas del mundo. La pregunta más importante del siglo XXI, señala Kapuscinski, es qué hacer con la gente: no cómo alimentarla ni cómo construir escuelas y hospitales, sino qué hacer con ella, pues no sirve de mucho darle algo material desde fuera si esa persona no ha participado en decidir qué quiere. No podemos arrebatarle la libertad de ser lo que quiera ser.

Antes de seguir, veamos qué entiende Sachs por «fin de la pobreza» y el análisis, a mi juicio lúcido, que hace. Y me parece interesante hacerlo porque su posición condicionó en gran medida la Declaración del Milenio. Sachs lo deja muy claro (2005a, pp. 56-57): «Cuando hablo del “fin de la pobreza”, por lo tanto, estaré hablando de dos objetivos estrechamente relacionados. El primero es acabar con la grave situación de la sexta parte de la humanidad que vive en la pobreza extrema y lucha a diario por la supervivencia. Todas las personas de la Tierra pueden y deben disfrutar de niveles básicos de nutrición, asistencia sanitaria, servicios de agua y saneamiento, alojamiento y otras necesidades mínimas para la supervivencia, el bienestar y la participación en la sociedad. El segundo objetivo consiste en garantizar que todos los pobres del mundo, incluidos los que se encuentran en situación de pobreza moderada, tengan la oportunidad de subir la escalera del desarrollo». Pero no son suficientes las palabras. Esta postura de Sachs, en principio irreproachable, tiene un flanco sumamente endeble: el de las medidas a tomar para hacerla realidad. Sachs acierta en el diagnóstico, pero evita criticar lo más mínimo al capitalismo, al que ni siquiera menciona, lo que le lleva a no proponer las medidas más eficaces para terminar con la pobreza. Así, señala con claridad el aumento de las desigualdades, pero no lo atribuye a la propia lógica del capitalismo. Él le echa la culpa al desarrollo de la tecnología y no a la explotación, sin tener en cuenta que ambas cosas están estrechamente re-

lacionadas, como señala perspicazmente Manuel Castells (2000, 2001a, 2001b): quien detenta más altos niveles de tecnología tiene el poder de explotar más y mejor a los países más pobres y sobre todo esa tecnología le concede el suficiente poder (económico, militar, cultural y político) como para imponer sus intereses a quienes no poseen tal poder. La contradicción de la postura de Sachs estriba en que detecta con clarividencia los principales problemas mundiales de hoy día, pero al no querer ver sus verdaderas causas, difícilmente puede proponer soluciones correctas y verdaderamente eficaces. Sachs critica al colonialismo por su responsabilidad en la pobreza de los países colonizados, pero se niega a ver que, a un nivel más profundo y más despiadado, se sigue haciendo ahora lo mismo. «La confrontación entre ricos y pobres fue muy dura debido a que la gran diferencia de riqueza significaba también una gran diferencia de poder, y este podía usarse para la explotación. El mayor poder de Europa se usó reiteradamente para obligar a las sociedades pobres a actuar en beneficio de los señores ricos. Las potencias imperiales europeas forzaron a los africanos a cultivar productos comercializables según su elección. Las autoridades coloniales impusieron la capitación y obligaron a los africanos a trabajar en minas y plantaciones, a menudo a cientos de kilómetros de sus familias y sus hogares. Inversores y gobiernos europeos se apropiaron de los recursos naturales, incluidas las riquezas minerales y los extensos bosques y selvas de África y Asia. Empresas europeas mantenían ejércitos privados en las colonias para garantizar la sumisión a sus propias “leyes”, al tiempo que sabían que, en caso extremo, sus gobiernos las apoyarían con la fuerza militar» (Sachs, 2005a, pág. 78). ¿Por qué Sachs hace un análisis tan lúcido del colonialismo y de su responsabilidad en la pobreza de la África de aquel momento y no lo hace del actual capitalismo, que está haciendo exactamente lo mismo y tal vez de forma más despiadada y más generalizada? La razón de ello estriba en que, en el fondo, su objetivo es exonerar de responsabilidad a los grandes poderes actuales en la pobreza y la miseria que están produciendo.

Pero Sachs es un economista inteligente que, como en su día Keynes, sabe que, para salvar al capitalismo, este debe hacer las cosas de otra manera, y tiene que ayudar a erradicar la pobreza extrema. Por ello no se conforma con las explicaciones habituales y afirma, acertadamente, que la pobreza es un fenómeno complejo causado al menos por estos ocho factores (2005a, 2005b):

1) *La trampa de la pobreza*: la propia pobreza como causa del estancamiento económico. Los pobres son demasiado pobres para salir de la pobreza solos, sin ayuda externa, ya que no tienen una base industrial, ni suficientes buenas escuelas y su sistema sanitario es deficiente o inexistente; no tienen carreteras, ni camiones, ni ferrocarriles; no pueden ahorrar ni, por tanto, crear fondos donde invertir. A corto plazo, solo la ayuda exterior puede darles el impulso para luego poder valerse por sí mismos.

2) *Geografía física*: algunos aspectos de la geografía son fundamentales para explicar la pobreza, como tener salida al mar, poseer suficientes recursos naturales y agua, etc. Pero ello, añade Sachs, no es un impedimento insalvable, sino solo son adversidades que exigen inversiones adicionales que hay que realizar, como construir carreteras que lleven a puertos de otro país cuando no se tiene salida al mar. Sin embargo, ello requiere inversión que solo puede venirles de la ayuda externa.

3) *La trampa fiscal*: afirma Sachs que los gobiernos son fundamentales para la inversión en bienes y servicios públicos como la educación, la sanidad, la red eléctrica, las infraestructuras, etc., pero –añade– difícilmente un gobierno de un país pobre puede conseguir fondos para tal inversión a través de unos impuestos a unos ciudadanos que no pueden pagarlos. Si a ello añadimos –sigue argumentando Sachs– el peso de la deuda externa, entonces podremos entender que a un gobierno en tales circunstancias le resulte imposible salir del atolladero sin ayuda externa, y sin la condonación de la deuda.

4) *Fallos de la acción del gobierno*: otra causa de la pobreza son los errores o la corrupción de los gobiernos de los países pobres, aunque no dice que tal corrupción suele ser apoyada por los países ricos y por las grandes empresas transnacionales.

5) *Barreras culturales*: hay también algunos factores culturales que les impide salir de la pobreza como es el hecho de que las familias, por pobres que sean, suelen tener muchos hijos, lo que en gran medida se solucionaría mejorando el nivel cultural de las mujeres de esos países. Las familias pobres siguen teniendo seis o siete hijos porque las mujeres aceptan su papel tradicional en la reproducción.

6) *Geopolítica*: a veces existen barreras comerciales decretadas por países extranjeros que dificultan el desarrollo económico de un país pobre, barreras que intentan sancionar a un gobierno que no es de su agrado, pero que lo que consiguen es empobrecer a la población del país, sobre todo a la más vulnerable.

7) *Ausencia de innovación*: si un país pobre tiene un mal sistema educativo, será más difícil que surjan inventores. Pero, además, los que surjan no podrán llevar a cabo sus ideas por falta de fondos y por ausencia de inversión, de manera que la innovación será menos probable, lo que es algo muy serio dado que, en plena revolución tecnológica, la innovación es un elemento esencial para el crecimiento y el desarrollo. Una de las razones que explican las desigualdades en riqueza entre países es la inversión en I+D: los países pobres no tienen ni dinero, ni inventores, ni tecnología para tal inversión, con lo que la distancia que les separa de los países ricos es cada vez mayor. No olvidemos que solo en Manhattan hay más líneas telefónicas que en toda África subsahariana.

8) *La trampa demográfica*: esta variable es tan importante que le dedicaremos un poco más de espacio. Un factor esencial de la pobreza y el subdesarrollo de muchos países son sus altas tasas demográficas: cuanto más pobre es un país, más nacimientos hay, y cuanto más nazcan, más difícil será que salgan de la pobreza. Pues bien, como ya he apuntado, el elemento clave para que estos países salgan de este círculo vicioso es la mejora de la educación de las mujeres, lo que les facilitaría la inserción laboral, lo que, a su vez, las llevaría a tener menos hijos, con lo que podrían criarlos con mejor salud, mejor educación y una más adecuada preparación profesional. Eso es lo que ha ocurrido en Irán, donde, tras la Revolución Islámica de 1979, la tasa de natalidad bajó de 6,7 niños por mujer a 2,6 en solo veinte años. La razón es evidente: la Revolución iraní llevó a las escuelas a toda una generación de niñas y ese notable aumento de la alfabetización femenina se tradujo pronto en el deseo de tener menos hijos, y eso tuvo lugar en un ambiente social, cultural y religioso muy conservador y tradicionalista!

Ahora bien, aunque consolidar las capacidades de la mujer en el ámbito de la salud y la educación es algo ciertamente muy importante, también se hace imprescindible actuar para reforzar su papel en la sociedad como agentes del cam-

bio social, dentro de una dinámica más extensa de democratización real de la sociedad que impulse los movimientos sociales y la participación popular. No olvidemos que aquí todo está relacionado y la pobreza y las desigualdades son más fáciles de reducir con sistemas políticos realmente democráticos que impulsen la participación popular. Pero tampoco podemos olvidar la ayuda externa, tan necesaria para los países pobres.

Sin embargo, como dice Martínez Osés (2010, pp. 516-417), parece muy difícil predecir cuál será el comportamiento de la AOD en los próximos años, puesto que sigue constituyendo un sistema de enorme volatilidad que mantiene su carácter voluntario y discrecional (Sanahuja, 2009). No en vano, coincidiendo con el estallido de la crisis financiera se sucedieron informes que mostraban datos inquietantes para algunos de los indicadores del progreso de los ODM. En agosto de 2008, el BM consideraba necesario revisar el umbral de pobreza extrema internacional pasando de 1,08 dólares a 1,25 USD-PPA (Banco Mundial, 2008). Esta modificación introducía en la estadística de los más empobrecidos a unos 400 millones de personas, según estimaba ese informe. Por su parte, la FAO advertía en septiembre de ese mismo año del aumento de personas en situación de desnutrición o padecimiento de hambre hasta superar los 1.000 millones de personas, lo que suponía un récord histórico (FAO, 2008). Y todo parece indicar que la desigualdad y la pobreza aumentarán aún más con la actual pandemia de la covid-19, lo que hará más difícil aún que se puedan cumplir los ODM. Hay al menos otros cinco factores que apuntan a que en los próximos años habrá serias dificultades para reducir la pobreza (Muñoz de Bustillo, 2010, p. 77 y ss.):

- 1) El gran crecimiento económico de India, y sobre todo de China, está conllevando un importante cambio de dieta, sobre todo un importante aumento del consumo de carne y cereales, lo que llevará a un alza de los precios y a más dificultades para los pobres, en especial para los de los países pobres.
- 2) El uso de los productos agrícolas para agrocombustibles, lo que afecta a la superficie agraria utilizada para la producción de alimentos. Un informe de la FAO (2008) avisaba ya del fuerte impacto que eso podía tener a medio y largo plazo sobre los precios agrícolas y la seguridad alimentaria de los más pobres en el futuro.

3) También se están produciendo algunos cambios en la dieta de millones de personas en los países desarrollados, lo que ha dado lugar a un cambio global en favor de dietas ricas en grasas y azúcares, pero bajas en vitaminas, minerales y otros micronutrientes. Si a ello añadimos el aumento del sedentarismo y una reducción de la actividad física, no es raro que se hayan visto muy incrementadas las tasas de sobrepeso, lo que se traduce en alrededor de mil millones de personas con problemas de obesidad, en un mundo con otros mil millones de personas malnutridas.

4) La vuelta a políticas de neocolonialismo, como vimos en el Capítulo 6.

5) La crisis financiera y de la pandemia sanitaria, como ya he dicho, están empeorando la situación de los más pobres y más necesitados.

Todo ello apunta a un preocupante aumento del hambre y la desigualdad en el mundo durante los próximos años, lo que, a su vez, exigiría un mayor esfuerzo en la ayuda a los países más necesitados y a las personas más vulnerables.

En conclusión, durante las tres últimas décadas las cosas no han mejorado mucho e incluso han empeorado en algunos aspectos, a causa de la crisis económica y de la pandemia sanitaria, pero también por las medidas que se han estado tomando, tanto desde la ONU como sobre todo desde el BM y el FMI, que no eran las adecuadas para mejorar sustancialmente la situación de los pobres del mundo, sino que eran precisamente las que le convenían a los ricos de los países más desarrollados. En efecto, ya en 2010 los informes tanto de la ONU (PNUD, 2010) como del Banco Mundial (2010) no mostraban cambios apreciables en estos aspectos. Las cosas seguían mal tanto para los países pobres como, sobre todo, para las personas pobres de los países pobres. Y, sin embargo, la ONU siguió aferrándose a los objetivos de la Declaración del Milenio, que no se estaban cumpliendo. Lo que sí se cumplió fue su objetivo principal: disponer de una gran propaganda para tranquilizar conciencias, a sabiendas de que los objetivos no se cumplirían en absoluto. Pero a pesar de ello la ONU siguió sin criticar el modelo económico y político responsable de tal situación. De forma similar, también el BM siguió haciendo alarde de un optimismo desmedido y totalmente infundado, subrayando una y otra vez argumentos meramente propagandísticos de su labor en los países sin desarrollar.

Finalmente, antes de terminar este apartado quisiera recordar el fracaso del reverendo Malthus, aunque, al parecer, son muchas las personas que aún no se han enterado de tal fracaso. Como es bien conocido, Malthus relacionaba el hambre con la superpoblación y afirmaba que mientras que los alimentos crecen en proporción aritmética, la población lo hace en proporción geométrica, lo que producirá necesariamente un desajuste tal que por fuerza llevará a una hambruna generalizada. Sin embargo, actualmente son muchos los países europeos con una gran densidad de población por kilómetro cuadrado (Países Bajos, 393; Bélgica, 352; Reino Unido, 257; Alemania, 229; Italia, 203; España, 92) y no hay hambre generalizada, mientras que sí la hay en muchos países que tienen densidades mucho más bajas. Más aún, como señala F.M. Lappé (2006, p. 11), actualmente la humanidad tiene un 23 % más de alimentos por persona que hace cuarenta años. Como ya dije, hay alimentos para alimentar a todos los habitantes del planeta, pero también hay millones de personas que no tienen dinero para comprar esos alimentos. El problema estriba en que los alimentos existentes se distribuyen muy desigualmente. Hay abundancia de alimentos incluso en algunos países africanos en los que el hambre extrema está muy extendida, pero tales alimentos se dan a los animales para surtir de carne a la oligarquía local y para enviarla, a bajo precio, a países ricos. En definitiva, podemos decir que si todavía hay hambre en el mundo es porque el «nuevo orden mundial» neoliberal así lo quiere. Por tanto, será difícil terminar con el hambre, con la pobreza y con las desigualdades si no se corrige en profundidad la trayectoria de la hegemonía neoliberal.

7.6. Algunas propuestas de solución

Son muchas las medidas que pueden tomarse para intentar paliar esta situación. Algunas de ellas se están tomando ya, y no siempre las más aconsejables:

7.6.1. Medidas generales.

Entre las medidas generales destacaré estas cinco:

- 1) *Fomentar los productos transgénicos*: se trata de una medida que se vende como un buen instrumento para terminar con el hambre, pero está demostrado que, por el contrario, lo incrementa aún más. De hecho, además de enriquecer a las empresas transnacionales que los comercializan y que detentan

sus patentes, conlleva un fuerte aumento de la pobreza y el hambre en los países pobres, a causa principalmente de que cientos de miles de campesinos no tienen dinero para comprar las caras y estériles semillas transgénicas y no les queda más remedio que abandonar sus tierras y emigrar a las ciudades, donde les espera el desempleo, el hacinamiento y el hambre.

2) *Libertad total de mercado*: está muy generalizada la idea de que desaparecería la pobreza y el hambre si los mercados internacionales se liberalizaran totalmente. También es falsa esa teoría. Un efecto de ello es la peligrosísima proliferación de las granjas industriales donde miles y miles de animales (vacas, cerdos, pollos, etc.) son maltratados durante toda su vida, aunque solo sea con el hacinamiento y la inmovilidad a que suelen someterlos, produciendo una enorme contaminación atmosférica y del terreno, una peor calidad de la carne y una sobreutilización de antibióticos y otros medicamentos. A nadie se le debería ocultar la peligrosidad a medio y largo plazo de estas granjas industriales, aunque por razones políticas y económicas se ocultan estos efectos a la población.

3) *Impulso y desarrollo de la agroecología*: esta sí me parece una medida eficaz, pero entendiendo la agroecología «como una herramienta para construir alternativas locales a la globalización y a su expresión territorial, iniciativas sociales y económicas de muy diversa índole que plantean diversas formas de integrar economías, territorios y medio ambiente. Se pretende así volver a poner la economía al servicio de las comunidades locales o de lo colectivo, así como “relocalizar” los flujos de materiales y energías en nuestras sociedades hacia sistemas productivos ecológica y socialmente» (Pijuán y López García, 2006, p. 30). De entre las muchas definiciones que existen sobre la agroecología, Eduardo Sevilla Guzmán la entiende como «el manejo ecológico de los recursos naturales a través de formas de acción colectiva que presentan alternativas a la actual crisis civilizatoria. Y ello mediante propuestas participativas, desde los ámbitos de la producción y la circulación alternativa de sus productos..., que contribuyan a encarar el deterioro social y ecológico generado por el capitalismo global, a través de estrategias de naturaleza sistémica» (citado en Pijuán y López García, 2006, p. 30).

4) *Movilizarse para ser capaces de pasar de la actual «democracia inerte» a una «democracia activa y participativa»*: lo que pasa necesariamente por el abandono de las «leyes del mercado» y por el incremento del cooperativismo (Lappé, 2006) y la autogestión (Ovejero, 2021a). Así, frente a la miseria que el actual sistema está produciendo en muchas zonas del planeta, en aquellos lugares en los que, como es el caso de Bangladesh, sus habitantes están implantando una «democracia activa», el hambre va desapareciendo. Este tipo de democracia «emerge cuando las poblaciones tienen acceso al crédito y lo usan para crear empresas que han sacado de la pobreza al doble de familias de las que están empleadas por un penique la hora en las empresas de exportación de ropa allí radicadas. O consideremos la India. Los medios de comunicación corporativos que nos informan de que las cooperativas lácteas dirigidas por mujeres han incrementado durante varias décadas los ingresos de más de once millones de hogares. Compárese esto con el millón de trabajos creados por la industria de alta tecnología, de la que tanto oímos hablar. En el estado indio de Kerala, el hambre está siendo dominado mediante aproximaciones participativas que han conseguido un acceso igualitario a la tierra y a la educación. Gracias a una pequeña fracción de sus recursos, Kerala ha alcanzado tasas de longevidad comparables a las de los países industrializados. Y esa campaña estatal de planificación descentralizada ha formado a miles de ciudadanos en la administración y planificación de mejoras rurales. De la misma manera, el Movimiento Brasileño de los Trabajadores Sin Tierra ha obtenido los títulos legales de más de veinte millones de acres para un cuarto de millón de familias sin tierra, creándose comunidades autogobernadas cuyas empresas y granjas sustentan valores comunitarios. La mortalidad infantil ha caído y los salarios de los miembros son muy superiores a los jornales diarios que recibían anteriormente» (Lappé, 2006, pp. 13-14). Y es que la solución al hambre, a la pobreza y a la desigualdad no está en la liberalización de los mercados, sino donde siempre estuvo: en la participación democrática de los ciudadanos, en la cooperación y en la solidaridad.

5) *Consumir menos*: estamos embarcados en una cultura del despilfarro sin fin que solo puede llevar a la catástrofe para todos, y tenemos, a la vez, una psicología económica de perpetua e intrínseca insatisfacción, por la cual, cuando satisfacemos una necesidad, abrimos la puerta a otras muchas. La consecuen-

cia paradójica es que cuanto más tenemos y más gastamos más insatisfechos e infelices quedamos. Una respuesta a esta situación nos la ofrece Schumacher (2014) en su conocido libro *Lo pequeño es hermoso*, al hablar de una economía budista consistente en obtener no el máximo beneficio con el mínimo coste, como es la principal premisa del capitalismo, sino «el máximo bienestar con el mínimo consumo», como ya hacían las culturas llamadas primitivas, que realmente fueron las primeras «sociedades de la abundancia» porque en ellas todos tenían sus necesidades cubiertas (véase Clastres, 1978, 1981, 1986). Ello implica frenar el crecimiento para mejorar la calidad de vida, que no depende de consumir más sino de otros aspectos más intangibles como la amistad, la serenidad, el sosiego, la sociabilidad, la medida, etc. Es más, para que las personas del tercer mundo puedan satisfacer sus necesidades más primarias (comida, vivienda, educación, sanidad, etc.) es necesario que los del primer mundo dejemos de despilfarrar.

7.6.2. Medidas concretas

Otras medidas más concretas a tomar provienen de las demandas de los países pobres para lo que, ya en 1984, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) propuso las siguientes:⁵

- 1) Destinar el 0,7 % del PIB para ayudar al desarrollo de los países pobres.
- 2) Renegociar la deuda externa de los países pobres, deuda que no pueden asumir más que al precio de quedar asfixiados.
- 3) Acelerar el desarme nuclear y dedicar los fondos liberados a la Ayuda al Desarrollo.
- 4) Modificar el acceso a los mercados del Norte para los productos del Sur.

5 Estas medidas, además de servir para reducir mucho la pobreza y, por tanto, para ir haciendo un planeta más justo y seguro, serían de gran utilidad también para salir de la profunda crisis económica en que nos encontramos precisamente, entre otras razones, por no haberlas tomado antes.

- 5) Reformar el FMI y del BM, incrementando el peso de los países del Sur en dichas instituciones y asegurando una financiación estable y creciente al desarrollo de los países del tercer mundo.
- 6) Ceder una parte de la capacidad productiva industrial a los países en vías de desarrollo, facilitando su acceso a la tecnología.
- 7) Garantizar una cierta soberanía económica a todos los Estados.

A estas medidas habría que añadir, cuando menos, otras dos relativas a las políticas agrícolas de los países ricos, pues no olvidemos que buena parte de la población del tercer mundo vive de la agricultura (PNUD, 2005b, p. 12): 8) reducir las subvenciones de los países ricos a su agricultura y prohibir los subsidios a las exportaciones; y 9) terminar con las barreras a las exportaciones de los países en desarrollo.

La existencia de una pobreza extrema en este comienzo del siglo XXI es una bomba de relojería que «amenaza con una explosión social de características y alcances insospechados para los que nacimos en el siglo XX» (Sebastián, 2021). Las pateras que cada día llegan a Canarias nos lo recuerdan a diario. Por tanto, cada vez se hace más necesario, como señala Alonso (1999), crear una comunidad global donde exista la posibilidad de hacer respetar valores y derechos humanos universales y establecer una ética sin fronteras que garantice la equidad, la integridad, la solidaridad y el respeto al medio ambiente, en el marco de un derecho horizontal y recíproco. Aunque la tarea es difícil, aún podemos hacer algo. Ante todo, ir cambiando la competitividad por la cooperación y el individualismo por la solidaridad. No olvidemos que ha sido la cooperación la característica humana más responsable de nuestra supervivencia como especie. Como han mostrado autores como Kropotkin, Malinowski o Clastres, el ser humano siempre ha sido, ante todo, un «animal cooperativo». Y han sido los Estados, y sus necesidades de control de las personas, los que han ido minando paulatinamente nuestra cooperación solidaria y convirtiéndonos poco a poco en seres individualistas, competitivos y egoístas, incluso con medidas realmente crueles y violentas, como perfectamente muestra Kropotkin en su espléndido y siempre actual libro *El apoyo mutuo* (1988/1902). Ello facilitó el impresionante éxito del capitalismo. Por ello, «la historia de la sociedad capitalista no ha podido ser sino la historia de la desigualdad» (Torres, 1999, p. 80).

A las medidas vistas habría que añadir otras como la abolición de la deuda externa pública de los países pobres, imponer un impuesto a las transacciones financieras, decretar la desaparición de los paraísos fiscales, establecer un impuesto proporcional a la tenencia de capital, especialmente elevado en el caso de las grandes fortunas, así como un impuesto universal sobre los beneficios de las empresas multinacionales (Martínez, 2002, p. 54). Habría que conseguir, finalmente, que el estado de bienestar se mantenga, pero haciéndolo más participativo a través, sobre todo, de la construcción de nuevos movimientos sociales como respuesta solidaria a los actuales movimientos neoliberales, regresivos e insolidarios. Lo que necesitamos, en definitiva, es cambiar este sistema por otro que se base no en la competitividad sino en la solidaridad y en la ayuda mutua, para lo que habría que cambiar muchas cosas. Volver a la época prehistórica, en la que el trabajo no existía, ya no es posible –y tal vez ni deseable–. Pero tampoco podemos caer en la desesperación y la indefensión aprendida. Otra sociedad es posible. Sabemos de su enorme dificultad, pero, como los manifestantes del Mayo del 68, seamos realistas y pidamos lo imposible.

En suma, la solución no solo es posible, sino que es perfectamente compatible con el actual nivel de vida de la población de los países ricos. Así, según la ONU, para que toda la población del globo tenga acceso a las necesidades básicas (alimentación, agua potable, educación y salud) bastaría con menos del 4 % de la riqueza que acumulan las 225 mayores fortunas del mundo. También decía la ONU hace ya unos años, la satisfacción universal de las necesidades sanitarias y nutricionales esenciales solo costaría 13.000 millones de dólares, apenas lo que los habitantes de Estados Unidos y de la Unión Europea gastamos al año en perfumes. Es decir, lo que falta no son medios y riqueza, sino ganas y voluntad de distribuirlos equitativamente. Lo que falta, en definitiva, es cooperación y solidaridad en un mundo cada vez más egoísta, individualista y competitivo.

No obstante, tengo que seguir diciendo que no solo es posible cambiar las cosas, es que nos interesa a todos cambiarlas. A menudo la ayuda a los países pobres es vista por la población de los países ricos como un derroche o, en el mejor de los casos, como una caridad unidireccional. Nada más falso, pues «en un mundo donde tanto las amenazas como las oportunidades están interconectadas, la ayuda es una inversión y un imperativo moral: una inversión en la prosperidad compartida, la seguridad colectiva y el futuro común. No invertir a una escala

suficiente hoy implicará costos mañana. [...] Los países en desarrollo tienen la responsabilidad de generar un ambiente donde la ayuda pueda rendir resultados óptimos y los países ricos tienen la obligación de cumplir sus compromisos» (PNUD, 2005b, p. 8). Eso se está observando perfectamente en la actual pandemia de la covid-19: mientras los países ricos no ayuden a que se vacune a todos los habitantes de los países pobres, su propia población estará a merced del virus.

7.7. Conclusión

Según la ONU, el desarrollo humano es un proceso encaminado a ampliar las oportunidades de las personas, de forma que consigan influir en los procesos que determinan sus vidas. Ahora bien, si eso es así, el desarrollo humano es completamente inexistente en los países pobres. Los cientos de millones de hambrientos, los pobres del mundo, los trabajadores y trabajadoras del tercer mundo, tienen muy poca o ninguna capacidad para influir en su entorno y para controlar su futuro: están muy lejos de ser los dueños de su destino. Y, sin embargo, «todos los países y todos los ciudadanos del mundo deberían tener derecho a una parte de los ingresos recaudados a las multinacionales y los multimillonarios de todo el mundo: en primer lugar, porque todo ser humano debería tener un derecho mínimo igualitario a la salud, la educación y el desarrollo; y, en segundo lugar, porque la prosperidad de los países ricos no existiría sin los países pobres. El enriquecimiento occidental, al igual que el japonés y el chino, siempre ha estado basado en la división internacional del trabajo y en la explotación desenfrenada de los recursos naturales y humanos del planeta» (Piketty, 2021, p. 114).

Pero las conclusiones que podemos sacar de este capítulo son bastante pesimistas: la Ayuda al Desarrollo tiene muchas trampas, los pobres no tienen futuro y los países ricos tienen suficiente poder como para seguir explotando a los países pobres. ¿Qué nos queda, entonces? Nos queda aquello con lo que empezamos y con lo que vivimos como especie más del 90 por ciento del tiempo de nuestra ya larga historia: la cooperación solidaria (véase Ovejero, 2018). «En Atapuerca se han encontrado restos de un ser humano de hace más de 530.000 años que tuvo deformidades que requirieron los cuidados del grupo para poder vivir. En otros yacimientos se han encontrado también restos fósiles de primates que habían sufrido roturas de huesos que precisaron de inmovilidad durante largos períodos de tiempo para poder soldar. Lo cual, en comunidades tan primitivas,

que sobrevivían de la caza y de la recolección y que, por lo tanto, tenían que desplazarse continuamente por diversos territorios en busca de nuevas fuentes de nutrición, suponía un gran sacrificio para el grupo y hasta un riesgo de supervivencia. Pero lo cierto es que los restos fósiles indican claramente que nuestros antepasados primitivos eran capaces de una solidaridad básica de especie, incluso en condiciones difíciles. Por eso, y por esa vía, fue posible el desarrollo de un espíritu de humanidad y un impulso civilizador y solidario. ¿A qué podemos quedar reducidos los seres humanos si se prescinde de este principio esencial? ¿Qué somos –o seremos– realmente? ¿Cómo se podría ver alterado por una vía de regresividad social nuestro propio sentido social, de seres que viven en común, de acuerdo con determinados criterios civilizadores? Sabemos que nuestros ancestros primitivos eran capaces de atender a quienes lo necesitaban y no dejaban tirados en la cuneta a los que quedaban heridos o lesionados, o a los que nacían con problemas. Pero en nuestras orgullosas y supertecnificadas sociedades avanzadas esto no siempre es así, y el riesgo de deslizarse por una espiral de prácticas desocializadas y desolidarias no es pequeño. ¿Hasta dónde se puede evolucionar por ese camino?» (Tezanos, 2010, p. 30). Como concluye Tezanos (2010, pp. 32-33), «los éxitos y los fracasos de las políticas internacionales de lucha contra el hambre y la pobreza extrema van a ser el espejo en el que vamos a quedar reflejados como civilización». De momento, los hechos no nos permiten ser muy optimistas. Pero habrá que llevar a cabo las acciones colectivas necesarias para hacer posible el optimismo. Ni el hambre ni la pobreza ni la desigualdad son fatalidades: tienen solución y de nosotros depende que esa solución se haga realidad. Miles y miles de personas están trabajando duramente y desde hace tiempo en muy diferentes ámbitos y circunstancias para que eso sea así. Mi admiración hacia ellas.

CAPÍTULO 8

POBREZA EN LOS PAÍSES DESARROLLADOS: EL CUARTO MUNDO¹

8.1. Introducción

En este capítulo daré una visión de conjunto, sin detallar país por país, pues la situación es similar en muchos aspectos en todas las naciones desarrolladas, de forma que solo veremos algunos datos específicos de Estados Unidos y Reino Unido, como ejemplos paradigmáticos de los efectos de las políticas neoliberales, y de España, por ser nuestro país. Lo primero que tengo que decir es que hoy día la pobreza ya no es un problema exclusivo de los países pobres, sino que también está aumentando en los países desarrollados. El PNUD (2016, p. 30) calcula que en 2012 más de 300 millones de personas vivían en situación de pobreza en los países desarrollados y que el 36 % de los niños y niñas de esos países estaban por debajo del umbral de pobreza relativa. De hecho, en los dos países desarrollados más neoliberales, la atención educativa a las personas pobres es muy deficiente, hasta el punto de que «en los Estados Unidos 32 millones de personas adultas son analfabetas funcionales, y en el Reino Unido la cifra asciende a 8 millones» (PNUD, 2016, p. 30).

Gunnar Myrdal afirmaba en 1975 que una de las consecuencias más graves de la Segunda Guerra Mundial fue la de forzar a la población de los países occidenta-

1 Entendemos por «cuarto mundo» las bolsas de pobreza y hasta de miseria que existen en medio de la opulencia y el despilfarro en el primer mundo, especialmente dentro de sus grandes ciudades.

les a ser conscientes del enorme abismo de renta que existía entre los ricos y los pobres. Y ante la percepción de esa enorme desigualdad, la población aceptó de buen grado un cambio social radical, comenzando lo que se ha llamado Estado social o estado del bienestar. Sin embargo, durante la primera mitad de los años 70 los ricos comenzaron una auténtica contrarrevolución para cambiar las cosas en este aspecto y recuperar todo lo que, ante el miedo al avance del comunismo, habían cedido a la clase trabajadora, de forma que hoy día, casi cincuenta años después, nos volvemos a encontrar con una desigualdad en aumento y con una pobreza al alza, sobre todo en los países más neoliberales, como son el Reino Unido y Estados Unidos. En efecto, en el Reino Unido, como escribían Martin y Schumann (2001, pág. 256), «el sistema educativo y social se está acercando al nivel de un país en desarrollo. Uno de cada tres niños británicos crece hoy en la pobreza, y 1,5 millones de niños menores de dieciséis años tienen que trabajar por falta de apoyo social. Mientras en el continente cuatro quintas partes de las personas de 18 años prosiguen su formación, en Gran Bretaña menos de la mitad de los jóvenes de esa edad aprende algo más. Al mismo tiempo, el porcentaje de analfabetos asciende en vertical». Y Estados Unidos es el país más rico del mundo y el de mayores desigualdades entre los países desarrollados, donde un 40 % de sus habitantes «no puede cubrir un gasto imprevisto por encima de los 400 dólares, ya sea que un hijo enferme o el coche se estropee» (Stiglitz, 2020, pp. 35-36).

Sin embargo, hoy día el tema de la desigualdad interesa a muy pocos y apenas aparece en los medios de comunicación. A pocos les escandaliza el que en una empresa alguien gane mil veces más que el sueldo medio. Se ha sembrado con gran éxito la falsa idea de que los que ganan mucho es porque lo merecen, siendo bueno que ganen mucho, pues eso beneficia al sistema económico y, por consiguiente, termina beneficiando a todos. Tampoco escandalizan a la mayoría de la población las medidas fiscales que se están tomando y que llevan a que los impuestos los paguen cada vez más los trabajadores y la clase media. ¿Por qué se acepta esto? Porque los más ricos consiguieron inculcar en la gente la idea de que los impuestos son injustos e ineficaces para el crecimiento económico. Para ello, el trabajo de los *think tanks*, bien engrasados con dólares, fue realmente esencial, así como el de los *lobbies*, cargados de maletines para sobornar a políticos y gobiernos. Además, compraron la mayoría de los más influyentes medios

de comunicación, manipulando persistentemente la información e inculcando la ideología neoliberal en la mayoría de la población. Con todo ello están consiguiendo imponer sus intereses casi sin resistencia de la ciudadanía, ni siquiera de los más perjudicados.

Ciertamente, no es lo mismo ser pobre en la India, donde muchos mueren de hambre cada día, que en los países ricos, donde casi nadie muere de hambre, pero donde los efectos de ser pobre son enormes (ansiedad, angustia, depresión, etc.). «En las sociedades opulentas, la fisonomía de la pobreza adquiere unas características especiales. Ya no es un problema de miseria, como se plantea en el tercer mundo. Los «pobres» son grupos de población que quedan al margen y están excluidos de los beneficios de la sociedad actual. Son colectivos que generan animadversión por parte de la gente normalizada. A este grupo lo denominamos “Cuarto Mundo” [...] (donde) la pobreza se vive como una situación de fracaso, una incapacidad para conseguir que las capacidades básicas de los individuos les permitan satisfacer unos niveles de vida mínimos aceptables» (Canet, 2001, p. 14). Y ese cuarto mundo está creciendo en estas últimas décadas, pues, como ya he dicho, el neoliberalismo está produciendo más desigualdad, a la vez que está haciendo que el crecimiento económico sea menor que durante el período keynesiano. En efecto, «para casi todos los indicadores el progreso conseguido en las dos décadas de globalización ha sido considerablemente menor que en el período que va de 1960 a 1980. [...] En cualquier caso, los datos que aquí presentamos contradicen ciertamente todas las declaraciones de que las dos últimas décadas del siglo XX hayan sido un tiempo de extraordinario progreso para la gente que vive en los países menos ricos del mundo: no lo fueron» (Weisbrot y cols., 2004, p. 55). Ni tampoco para la mayoría de la población de los países ricos. Y, tras proporcionarnos numerosos datos, concluyen estos autores (p. 79): «Nuestro trabajo ha utilizado indicadores clásicos de progreso en las categorías del crecimiento económico, así como los logros relativos a la salud y a la educación, con el fin de evaluar lo sucedido en los últimos veinte años. Los resultados son aplastantes en una dirección: en todas las categorías, las comparaciones muestran una disminución del progreso en conjunto en el período de globalización comparado con el período correspondiente a las dos décadas anteriores». Pero es la devastación del trabajo que está provocando el neoliberalismo el factor que más está haciendo crecer el cuarto mundo (Ovejero 2914a).

8.2. Desigualdad, pobreza y crisis de la sociedad del bienestar y del Estado social

Si a partir de 1945/1950 se produjo en Europa la que tal vez haya sido la reducción de la desigualdad más importante de la historia humana junto con una alta dosis de libertad y protección social de los trabajadores, ello fue consecuencia de la implantación en países como Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Bélgica, Suecia, Finlandia, Noruega o Dinamarca, de la llamada sociedad del bienestar. Sin embargo, sobre 1980 comenzó a ir la historia europea nuevamente hacia atrás y empezó otra vez a aumentar la desigualdad, de tal manera que la concentración del dinero y las propiedades en pocas manos alcanza hoy día niveles nunca vistos en muchos años. La causa está en la implementación de las políticas neoliberales y la paulatina desaparición de la sociedad del bienestar. Así, en 2012, la desigualdad en Estados Unidos «batió varios récords: ese año, el 1 % de los ingresos más elevados (con y sin rentas de capital) y el porcentaje de riqueza en manos del 0,01 % de las familias más adineradas superó por primera vez la marca de 1929. [...] entre 1970 y 2010, los coeficientes Ginis oficiales pasaron de 0,4 a 0,48, pero es posible que rondaran 0,41 a 0,45 en 1970 y llegaran a 0,52 en 2010» (Scheidel, 2018, p. 433). Pero el incremento de la desigualdad durante las últimas cuatro décadas no se ha dado solo en Estados Unidos y la Unión Europea, sino también en China, donde el coeficiente Gini pasó de 0,23 en 1984 a 0,55 en 2014; y en Rusia, donde el Gini pasó de 0,27 en los años 80 a más de 0,50 en 2008. Algo similar puede decirse de otras naciones como India, Pakistán o Indonesia. Y en los países en vías de desarrollo «es posible que el cambio tecnológico haya tenido consecuencias desigualadoras aún mayores» (Scheidel, 2018, p. 436).

Ahora bien, para entender bien el fenómeno de la pobreza en los países ricos es de gran utilidad tener en cuenta en qué consistió el estado del bienestar, que en gran medida se basaba en las teorías de John Maynard Keynes. «Las aportaciones realizadas por Keynes a la teoría económica colaboraron sin duda a la extensión y aplicación de lo que se ha dado en llamar la economía del bienestar. Y así, antes de que termine la Segunda Guerra Mundial, en 1942, William Beveridge, miembro del Partido Liberal, presenta al Parlamento británico el informe que lleva su nombre en el que se plantea un sistema completo de seguridad y asistencia social, distinguiendo la una de la otra, y en él se recomienda la implantación de la

asistencia sanitaria con carácter general y gratuito. En pocos años se aprobaron en Inglaterra la Education Act, la National Insurance Act y la National Health Service Act, normas que situaron la legislación social de este país a la cabeza de la sociedad occidental» (Martín Seco, 1995, pp. 80-81). Terminada la guerra, los demás países de Europa occidental siguieron el ejemplo del Reino Unido.

Uno de los elementos esenciales del estado del bienestar o Estado social es el concepto de «ciudadanía social» que significa que «el ciudadano no es solo sujeto de derechos civiles (como la libertad de expresión o la libertad religiosa) y de derechos políticos (como el derecho de asociación y el derecho a participar en la vida democrática de la comunidad) sino también de derechos sociales como el derecho al trabajo, a la salud, a la asistencia social o a la educación. El «estado de bienestar (*welfare state*) es el resultado institucional del consenso por el cual la sociedad asume la responsabilidad legal y explícita de asegurar el bienestar básico de todos sus miembros por medio de determinadas políticas públicas» (López-Aranguren, 2005, p. 66). Más en concreto, podemos definir el estado del bienestar como «un conjunto de instituciones estatales proveedoras de políticas sociales dirigidas a la mejora de las condiciones de vida y a promocionar la igualdad de los ciudadanos. Las políticas sociales son intervenciones que afectan a las oportunidades de los ciudadanos y cubren sus riesgos vitales» (Moreno y Conversi, 2018, p. 77). Sin embargo, añaden estos autores, «el declive del estado de bienestar en los últimos lustros ha ido acompañado por la introducción de un tipo de consumismo de masas favorecido por la globalización neoliberal, la cual se ha convertido en una suerte de pensamiento único que promociona la asociabilidad (Moreno, 2012). Ello ha inculcado en la población una ideología difícilmente compatible con el estado del bienestar, sobre todo con su pilar esencial: la existencia de unos impuestos fuertes y progresivos que graven más a quienes más tienen.

Sin embargo, existen diferencias entre el estado del bienestar y el Estado social, que supone toda una nueva concepción de la organización política contrapuesta al estado liberal burgués del siglo XIX. Tampoco debe identificarse «Estado social» con «políticas keynesianas», aunque es cierto que sin tales políticas no se hubiera construido el Estado social (Martín Seco, 1995). «La clásica afirmación de que “es preciso aumentar la tarta antes de repartirla” es un planteamiento de la derecha, nunca de la izquierda. [...] Gran parte de los argumentos que en estos

momentos blande la nueva derecha en contra del Estado social y la economía del bienestar surgen de esta confusión y de estos presupuestos. No existen recursos económicos para mantenerlo, se dice. En realidad, lo que se está afirmando es que no es viable sin reducir el confort de las clases económicamente privilegiadas» (Martín Seco, 1995, pp. 78-79).

Según Thomas Marshall, lo que hizo el Estado social fue poner a disposición de la mayoría de las personas lo que antes era privativo de unos pocos, de forma que los derechos sociales fueron incorporados al estatus de ciudadanía, lo que implica la conquista de un «derecho universal a unas rentas mínimas», que no esté vinculado necesariamente a la lógica del mercado. Pero, matiza Tezanos (1999b, pp. 107-108), «lo importante es que la conquista de esta nueva experiencia social se basaba en un compromiso del Estado para con la sociedad en su conjunto. Para Marshall, una de las principales conclusiones del enriquecimiento de la noción de ciudadanía era la solidificación de un área de “cultura común y de experiencia compartida”, que en aquellos años se nucleaba en torno al consenso keynesiano. La nueva ciudadanía democrática aceptaba ciertas manifestaciones moderadas de desigualdad, porque estas se producían en el marco de una “sociedad fundamentalmente democrática y equitativa” [...] Pero no se trataba solamente de acuerdos particulares de gobierno para períodos temporales acotados, sino de una nueva etapa en la forma de entender la democracia que implicaba garantías jurídicas precisas para los nuevos derechos sociales, que llegaron a ser reconocidos en los textos constitucionales. De esta manera, los derechos al trabajo, a disfrutar del bienestar social, a la protección pública frente a los riesgos del infortunio, a la educación, a la vivienda, etc., pasaron a adquirir un rango similar a los derechos de libertad de expresión, de creencias, etc.».

Como señaló Marshall (1950), un ciudadano no es realmente «ciudadano» si no lo es plenamente, o sea, si no lo es en estos tres sentidos: ciudadanía política (elegir a sus representantes o ser elegido si quiere presentarse a unas elecciones), ciudadanía civil (poseer los derechos más esenciales, como son la libertad de expresión y de reunión) y ciudadanía socioeconómica (tener un mínimo de seguridad económica y poder vivir según los estándares medios de vida de su época). «Mientras que la ciudadanía política y la ciudadanía civil se desarrollaron plenamente en las democracias surgidas después de las dos guerras mundiales, la ciudadanía social quedó como en una especie de limbo, como el elemento de la

ciudadanía más endeble, más desatendido. Pero un ciudadano no lo puede ser a medias. Con la crisis económica que se inició en la primera década del siglo XXI, el elemento social se encogió aún más: el estado de bienestar, que representa algo así como las vitaminas para ponerse al mismo nivel que los otros dos elementos de ciudadanía, se debilitó, hay menos protección social, y se multiplicó la desigualdad entre los seres humanos de una misma zona, de una misma nación. Se hizo más visible que nunca la existencia de ciudadanos de primera, de segunda y hasta de tercera» (Estefanía, 2017, pp. 90-91). Y es que, como he dicho varias veces, durante las cuatro últimas décadas hemos retrocedido en los asuntos sociales: en igualdad, en justicia, en solidaridad y en condiciones laborales. Estamos, pues, ante una auténtica y exitosa contrarrevolución. Pero, ¿cómo hemos llegado a esta situación? Y, sobre todo: ¿por qué está situación es aceptada con sumisión incluso por quienes más la están padeciendo? Porque los ricos han conseguido que la mayoría de la población, y en especial los jóvenes, hayan internalizado los valores esenciales de la ideología neoliberal. Lo aceptan porque, al compartir la ideología neoliberal (individualismo, egoísmo, competencia, darwinismo social y fatalismo), les parece normal este estado de cosas, les parece normal que los ricos no paguen más impuestos que los demás, que el mercado fije el precio de las cosas o que sea el mercado laboral el que diga quién tendrá un buen empleo, quién tendrá uno precario y quién no tendrá ninguno. Según ellos, así es la lucha por la vida, y lo que tenemos no es más que su consecuencia.

El paso del Estado social y el estado del bienestar a un inhumano neoliberalismo se debió sobre todo al egoísmo de los más ricos, es decir, a su deseo de no seguir siendo solidarios con el resto de la población y a negarse, por tanto, a pagar los impuestos que el Estado social les exigía. «Como suele ocurrir, las razones de teoría económica no fueron las determinantes, sino las posturas ideológicas tras de las cuales se encontraban intereses concretos. Fueron las oligarquías financieras y las clases medias altas las que no estaban dispuestas a soportar, entre otras cosas, una presión fiscal que les resultaba enormemente gravosa, sobre todo en momentos de crisis económica. Las construcciones teóricas se aprestaron a justificar y legitimar desde la óptica de la racionalidad económica las aspiraciones y los deseos de las clases dominantes. A estas, manteniendo la mayoría de poder en sus manos, no les fue difícil imponer las nuevas ideas, y la nueva derecha y el liberalismo económico fueron adquiriendo en todos los países occidentales –en

unos antes, en otros después, pero finalmente en todos— una hegemonía total» (Martín Seco, 1995, p. 93). Su control de casi todos los medios de comunicación les facilitó mucho la tarea. Y añade Martín Seco que poco importa que las ideas neoliberales no sean coherentes, «dado que se emplean teorías y argumentos heterogéneos e incluso a menudo contradictorios e incompatibles entre sí. La lógica interna es sustituida por el poder de propaganda y manipulación que poseen los interesados en que estas ideas prosperen. La verdad depende del número de veces que las aseveraciones se repiten. Poco importa que sea contraria al sentido común, o que se haya extrapolado a ley general lo que resulta solo aplicable a circunstancias muy particulares. Lo esencial es que todos los altavoces repitan machaconamente las mismas consignas hasta que sea lugar común, algo tan fijo e inmutable como cualquier otra creencia popular. El discrepante será objeto de conmiseración y tildado de ignorante» (1995, pp. 96-97). Esta nueva derecha esgrime lo que de positivo nos ha dado el capitalismo para justificar los cambios que están introduciendo y para que la población los acepte. Pero no dice que todo lo positivo que sin duda se consiguió durante los Treinta Gloriosos no lo dio el capitalismo, sino que fueron correcciones del capitalismo que fue consiguiendo la movilización social y sindical.

En suma, después de la Segunda Guerra Mundial «se fraguó un amplio consenso social en la mayor parte de los países occidentales. Uno de los principales elementos en los que se fundó el nuevo consenso de inspiración keynesiana fue un conjunto de derechos que garantizaban a toda la población servicios sociales gratuitos, tales como sanidad y educación y, a su vez, establecían mecanismos de prevención frente a las incertidumbres laborales y de la vida, con prestaciones públicas garantizadas por desempleo, enfermedad y jubilación. El reconocimiento de tales derechos acabó conformando un modelo de ciudadanía social avanzada, en un contexto socioeconómico en el que se garantizaba un nivel muy alto de empleo a la población (“pleno empleo”). Aunque este modelo social fue cuestionado desde el principio por sectores conservadores y neoliberales, lo cierto es que no entró en crisis hasta mediados de la década de los años setenta del siglo XX. Por ello, las décadas anteriores han podido ser presentadas como uno de los períodos en los que tuvo lugar, sobre todo en los países europeos, uno de los procesos más dilatados de crecimiento económico y de aumento de la prosperidad y el bienestar, en un clima de paz social y estabilidad política»

(Tezanos, 1999b, pp. 110-111). Pero ¿qué ocurrió hacia 1973 para que las cosas cambiaran tanto y lo hicieran en tan poco tiempo? Lo que ocurrió fue la conjunción de una serie de factores políticos, sociales e ideológicos muy distintos. No se debió solo, ni principalmente, como tantas veces se dice, a la inflación producida por la crisis del petróleo. La inflación, que sin duda fue un problema real, funcionó más como excusa que como causa. Fueron los empresarios quienes optaron por abandonar el pacto social que permitía un reparto más justo de los beneficios de las empresas y de la riqueza nacional, en aras de la paz social, aunque tampoco se debe quitar toda la responsabilidad a los sindicatos que midieron mal sus exigencias salariales: los sindicatos exigían subidas salariales acordes con la inflación y a continuación los empresarios repercutían automáticamente esas subidas en los precios, para mantener así su tasa de beneficios, lo que fue generando una gran inflación, que les sirvió de excusa para romper la baraja y dejar de jugar en la mesa del pacto social. Además, esa dinámica llevó a un importante aumento del desempleo lo que tuvo dos efectos muy dañinos para la economía y para las arcas públicas: una disminución de las cotizaciones sociales y un aumento del gasto por seguro del desempleo. Ello les dio a los más ricos y a los empresarios la excusa perfecta: Estado social era inviable. Todo ello, unido al hecho de que los medios de comunicación –en su mayoría en manos del poder económico y financiero– presentaban continuamente a los sindicatos como los culpables tanto de la inflación como del desempleo, les debilitó mucho, perdiendo mucha afiliación,² lo que aumentó el poder del empresariado, y con lo que pudieron llevar a cabo sus planes exitosamente, sobre todo tras alcanzar también el poder político, después de que Thatcher y Reagan ganaran sus respectivas elecciones y se embarcaran en políticas ferozmente neoliberales.

Sin embargo, «el balance que puede hacerse de la evolución del estado del bienestar en los últimos años, en España y otros países europeos que hemos elegido para comparar, es ambivalente. Por un lado, pese a todas las dificultades, entre 1980 y 2016 el gasto social de los países europeos ha crecido y representa una

2 Por ejemplo, en EE. UU. la afiliación sindical masculina se redujo del 34 al 8 % entre 1973 y 2007 en el caso de los hombres y del 16 al 6 % en el de las mujeres, lo que, no por azar, coincidió con un aumento de la desigualdad en los salarios por horas de más del 49 %, (Scheidel, 2018).

proporción apreciable del PIB de cada país (28,4 % en la eurozona en 2014). Es una cifra significativamente mayor que la de países como Australia, Estados Unidos o Canadá, que no llegan al 20 por ciento. [...] Esto se debe, principalmente, a dos tendencias subyacentes. Una, el envejecimiento de la población, que repercute en el gasto en pensiones, tercera edad y sanidad. Otra, el aumento del desempleo, del involuntario empleo a tiempo parcial y de la devaluación salarial que repercute en el descenso de los ingresos por cotizaciones y en el aumento del gasto en protección al desempleo. El escenario que componen estas tendencias da lugar a una imagen que induce a la reflexión: la UE representa el 7 % de la población mundial, aporta el 25 % de la riqueza mundial y supone el 50 % del gasto social mundial» (Pérez Yruela, 2018, pp. 51-52). Por su parte, España aumentó mucho su gasto social desde 1980 a 2016 (nueve puntos del PIB, del 15,5 % al 24,6 %, aunque hay que matizar que creció de 2007 a 2011, con el gobierno de Zapatero, y se redujo entre 2011 y 2014, con el gobierno de Rajoy). Y ello a pesar de que la presión fiscal en este país es la más baja de la eurozona, después de la irlandesa (6,8 % menos que la media de la eurozona, 13,4 % menos que Francia, 9 menos que Italia, 5,8 menos que Alemania, 4,9 menos que Grecia y 2,6 menos que Portugal). A pesar de que Pérez Yruela (2018, p. 51) concluya «que, en la mayor parte de los países de Europa, el estado del bienestar está razonablemente bien asentado, pese a las turbulencias que ha sufrido desde 1973 y las amenazas que aún lo rodean», los datos son mucho más pesimistas.

8.3. Pobreza y desigualdad en los países desarrollados

Son varios los factores que explican el crecimiento del cuarto mundo. El primero es el descenso de la igualdad de oportunidades educativas, sobre todo en los países más neoliberales. «El problema es que existe un abismo monumental entre el discurso oficial sobre la igualdad de oportunidades y la realidad de las desigualdades educativas a las que se enfrentan las clases desfavorecidas. Es cierto que el acceso a la educación primaria y luego a la secundaria se generalizó a toda la población durante el siglo XX, al menos en los países del Norte, lo que constituye un progreso considerable. Sin embargo, las desigualdades en el acceso a los itinerarios de estudios y a las instituciones más prometedoras siguen siendo abismales, particularmente en la enseñanza superior. En Estados Unidos, distintos investigadores han podido relacionar la información fiscal de

los padres con las carreras escolares y universitarias de sus hijos. Los resultados son deprimentes: la renta familiar predice casi perfectamente las posibilidades de ir a la universidad. [...] Asimismo, conviene tener en cuenta que ambos grupos no acceden a la misma educación superior: los primeros suelen tener que conformarse con carreras cortas en universidades públicas y *community colleges* mal financiados, mientras que los segundos tienen acceso a itinerarios de estudios hiperpunteros en universidades privadas extraordinariamente ricas. Estas últimas se caracterizan por un alto grado de opacidad en sus procedimientos de admisión y una ausencia virtual de regulación pública. [...] En otras palabras, no solo las elevadísimas tasas de matrícula hacen que las mejores universidades sean inasequibles para los menos pudientes (salvo en el caso de calificaciones excepcionales que dan derecho a becas), sino que es posible que los más ricos paguen lo que en la práctica equivale a un suplemento para compensar las malas calificaciones de sus hijos» (Piketty, 2021, pp. 212-214). Al parecer, añade Piketty, la compra de plazas está más extendida de lo que afirman las universidades.

Un segundo factor que explica ese aumento del cuarto mundo es la precariedad en el empleo y la bajada de los salarios de los trabajadores, sobre todo de los que tienen poca cualificación. «Gracias al poder acumulado por los defensores de estas políticas, estas medidas se generalizaron y así, con el fin aparente de combatir la inflación, se han venido aplicando políticas deflacionistas basadas en la contención salarial, así como reformas laborales que han permitido disponer de la mano de obra en condiciones cada vez más precarias. La consecuencia fue que la participación de los salarios en la renta prácticamente no ha dejado de bajar desde los primeros años setenta, lo cual ha permitido aumentar extraordinariamente la tasa de beneficio, pero a costa de deteriorar enormemente el mercado de bienes y servicios» (Gálvez y Torres, 2010, p. 50).

El tercer factor es la reducción fiscal a los más ricos y a las grandes empresas, la sustitución de una parte de los impuestos directos por impuestos indirectos y la eliminación paulatina de la progresividad. Y no olvidemos que los impuestos son la principal vía para reducir la pobreza y la desigualdad y para construir una sociedad justa, igualitaria y solidaria.

Un cuarto factor que habría que tener en cuenta son las políticas económicas de la Unión Europea. Si comparamos los países ricos con los pobres, dentro de

la propia UE, vemos que no es cierto que, al entrar en ella, los países pobres (España, Portugal y Grecia primero, Polonia, República Checa o Hungría después) recibieran mucha ayuda. No es así. En efecto, según Piketty (2021) países como Polonia, Hungría, República Checa o Eslovaquia recibieron transferencias públicas netas de entre el 2 y el 4 % de su PIB entre 2010 y 2018. Pero los flujos de salida privados, en forma de beneficios, dividendos y otras rentas de la propiedad, fueron casi el doble durante el mismo período, entre el 4 y el 8 % de su PIB. «En la Europa del Este se señala, con razón, que los inversores de Occidente (sobre todo los alemanes y franceses) han utilizado los nuevos Estados miembros como una reserva de mano de obra barata de la que han obtenido enormes beneficios, al tiempo que han colocado a estos territorios en un estado de subordinación económica permanente» (Piketty, 2021, p. 254).

En suma, la principal causa del aumento del cuarto mundo es la desigualdad, y los cuatro factores anteriores la incrementan. Veamos algunos datos extraídos de Piketty (2021). La igualdad aumentó mucho en Europa entre el final de la Primera Guerra Mundial y la victoria del neoliberalismo hacia 1980. Así, en Francia, el 1 % más rico pasó de tener el 55 % del PIB en 1914 a tener menos del 20 % en 1980, antes de iniciar una nueva subida, de forma que en 2020 tenía el 25 %. Más en concreto, el 1 % más rico posee actualmente el 50 % de toda la propiedad privada, mientras que el 50 % más pobre tiene solo el 5 %. Ciertamente, algo ha mejorado la situación de este sector, pues a primeros del siglo XX tenía un 2 % de la propiedad total, pero, como vemos, su avance ha sido mínimo. Los factores que más influyeron en la reducción de la desigualdad fueron los siguientes: el establecimiento de un sistema fiscal progresivo según el cual el que más tiene más paga, con impuestos realmente muy altos para los más ricos; una importante disminución de las tasas de desempleo;³ el establecimiento de un salario mínimo satisfactorio y la mejora de la protección social (cobertura de desempleo, pensiones dignas, ayuda a las familias más necesitadas, subvención para la compra de la vivienda habitual, etc.). Así, pues, en casi toda Europa, entre 1950 y 1980, los ricos fueron menos ricos, los pobres fueron menos pobres, aumentando

3 Como dice Atkinson (2016, p. 201), «el empleo es la ruta principal de los individuos y sus familias para escapar de la pobreza y para que las sociedades retornen a niveles más bajos de desigualdad».

mucho el tamaño de la clase media y, consiguientemente, su poder. Todo ello fue posible, entre otras cosas, por las movilizaciones sociales y por la fortaleza de los sindicatos. De hecho, entre 1966 y 1980, el índice de Gini bajó en Finlandia un 31 % y en Suecia, Francia, Holanda e Italia bajó unos ocho puntos. Pero la pobreza y la desigualdad volvieron a aumentar a partir de 1980: ¿a qué se debió? La respuesta es evidente: las élites económicas comenzaron una auténtica guerra contra los trabajadores y contra las clases medias, para lo que llevaron a cabo una dura batalla para imponer su propia ideología y, de esa manera, conseguir que la población aceptara las medidas económicas que pondrían en marcha y que tanto iban a perjudicar a la población. Entre esas medidas estaba el establecimiento de un sistema fiscal cada vez más regresivo –con una reducción muy sustancial de los impuestos a los más ricos y a las grandes empresas–, la disminución de la cobertura de desempleo, unas reformas laborales y de las pensiones perjudiciales para los trabajadores, la reducción del gasto social del Estado y la limitación del poder de los sindicatos. Donde más claramente se vio todo esto fue en Reino Unido y en EE. UU., pero después fue ocurriendo lo mismo en los demás países europeos. Además, todas esas medidas regresivas fueron apoyadas muy activamente por los dirigentes máximos de la Unión Europea, como se vio en el trato que dieron a Grecia (Varoufakis, 2017). Veamos un poco mejor esos dos casos pioneros:

8.3.1. Reino Unido

Si la situación de la clase trabajadora mejoró mucho gracias al poder de los sindicatos, no es extraño, en consecuencia, que uno de los objetivos esenciales de las élites económicas del Reino Unido fuera debilitar al máximo el poder sindical, cosa que obtuvo Margaret Thatcher en su batalla contra los mineros, aunque probablemente no lo hubiera conseguido sin la guerra de las Malvinas. Derrotados los sindicatos, le fue ya más fácil a Thatcher imponer sus políticas neoliberales, políticas que fueron tan irreversibles que apenas cambiaron en la época del «socialdemócrata» Toni Blair. Por ejemplo, en ese país la pobreza infantil sigue siendo hoy día del 20 %. Esas políticas supusieron un brutal aumento tanto de la pobreza como de la desigualdad. Así, según Oxfam Intermon (2014), el 1 % más rico tenía 20 veces más patrimonio que el 20 % más pobre en 2014, y las cinco familias británicas más adineradas concentraban más riqueza que un quinto de

toda la población del país, o sea, esas cinco familias tenían más dinero que el conjunto de casi trece millones de británicos. De hecho, tal vez el principal efecto que tuvo el neoliberalismo fue la reducción drástica del estado del bienestar y el consiguiente incremento de la desigualdad que llevó incluso a un aumento no solo de la pobreza infantil sino también de las tasas de mortalidad de niños y niñas pobres. Más en concreto, el incremento de la pobreza infantil creció del 7 % en 1979 al 24 % en 1992. Entre 1979 y 1992, el índice de Gini subió nueve puntos. En cuanto a la tasa de pobreza en el Reino Unido, hoy día sigue estando por encima de la que había en los años 60 y 70, que ya entonces era considerada abominable, aunque también ha crecido en los últimos años en la Unión Europea, donde entre 2008 y 2012 aumentó en 6,7 millones el número de personas que viven en pobreza o exclusión social. Entre las medidas que utilizó Thatcher para conseguir todo esto hay que destacar las fiscales: redujo la tasa más alta sobre el ingreso de un 83 a un 60 % nada más llegar al gobierno y después la bajó aún más, hasta un 40 %; también redujo mucho el impuesto a las herencias, de forma que la recaudación por este tributo pasó de representar un 9 % de todo lo recaudado en los años 60 a solo un 2 % en 2014.

En definitiva, lo que hizo Margaret Thatcher fue liquidar cuanto pudo el estado del bienestar. No olvidemos que «el estado del bienestar ha jugado un gran papel en la reducción de la desigualdad en el pasado. Es un vehículo primordial por medio del cual las sociedades procuran asegurar un nivel mínimo de recursos para todos sus miembros» (Atkinson, 2016, p. 285). De hecho, añade este autor, el drástico aumento de la desigualdad en el Reino Unido en la segunda mitad de los años 80 coincidió con un importante recorte de los subsidios de la seguridad social.

8.3.2. Estados Unidos

Más paradigmático aún es el caso de EE. UU., donde se ha disparado la desigualdad y la pobreza, sobre todo en los trabajadores sin cualificar, en la población hispana y más aún en la afroamericana, a la que incluso se está criminalizando de una manera obscena, como veremos en el próximo capítulo. Por otra parte, al igual que Thatcher, las dos primeras cosas que hizo Ronald Reagan cuando llegó a la presidencia en 1981 fue atacar a los sindicatos (en este caso a los controladores aéreos) y reducir mucho los impuestos a los más ricos, bajando la tasa

más alta del 70 % en 1981 al 35 % en 2013. A partir de ahí comenzó a crecer la desigualdad. Qué lejos quedaba la declaración que, en 1919, hizo Irving Fisher, presidente de la American Economic Association, diciendo en su discurso presidencial que el principal problema de Estados Unidos era que el «2 % de la población posee más del 50 % de la riqueza» y que «dos tercios de la población no poseen casi nada». Ello le parecía una distribución antidemocrática de la riqueza. Y añadía que la mejor forma de solucionar ese problema era gravar fuertemente las herencias más grandes, proponiendo una tasa igual a dos terceras partes de la herencia e incluso la totalidad si la sucesión tenía ya tres generaciones (Fisher, 2019). Tengamos en cuenta que en el siglo XIX «los impuestos sucesorios eran sumamente bajos: solo el 1-2 % sobre las transmisiones de padres a hijos. Desde luego, semejante impuesto no tenía ningún efecto sensible sobre el proceso de acumulación de los patrimonios: se trataba más de un derecho de registro destinado a proteger el derecho de propiedad. El impuesto sucesorio francés se hizo progresivo en 1901, pero la tasa más elevada aplicable en línea directa no rebasaba el 5 % (y solo se aplicaba a algunas decenas de herencias cada año). Semejante tasa, cobrada una vez por generación, no podía tener mucho efecto en la concentración patrimonial, sin importar lo que hubieran podido pensar los dueños de patrimonios de esa época. Sucedió algo diferente con las tasas de 20-30 %, a veces hasta mucho más, que se aplicaron tras los choques militares, económicos y políticos de 1914-1945 a las herencias más altas en la mayoría de los países ricos» (Piketty, 2014, p. 412). La propuesta de Fisher fue recogida por el presidente Roosevelt, quien, nada más tomar posesión de su cargo, decidió elevar fuertemente los impuestos de los más pudientes a través de una fiscalidad muy progresiva. Ello permitió, a la vez, un fuerte debilitamiento patrimonial de las élites económicas y un fortalecimiento económico de la clase media.

No es de extrañar, entonces, que de 1950 a 1970, los Estados Unidos conocieran la fase más igualitaria de toda su historia. Pero a partir de 1973 comenzó a producirse una explosión sin precedentes de la desigualdad de ingresos, de forma que superó el récord que había alcanzado en 1910. Y si fue la fiscalidad el factor que más había contribuido a reducir la desigualdad tanto en Europa como en EE. UU. a partir de 1914, ahora es ese mismo factor el que más está contribuyendo a que haya vuelto a subir la desigualdad hasta límites desconocidos desde hace más de un siglo. En contra de lo que dicen algunos, ello no se ha debido a

la crisis financiera de 2008. Por el contrario, como muestra Piketty, ocurrió lo contrario, o sea, fue la desigualdad existente en 2007 la que facilitó la llegada de la crisis financiera. No olvidemos que la participación del 10 % más rico en el ingreso nacional estadounidense tuvo dos cimas absolutas a lo largo del siglo pasado, una en 1928 (en vísperas de la crisis de 1929) y la segunda en 2007 (en vísperas de la crisis de 2008). De ahí que Piketty diga que «no hay duda de que el alza de la desigualdad contribuyó a debilitar el sistema financiero estadounidense. Por una simple razón: el alza de la desigualdad tuvo como consecuencia un casi estancamiento del poder adquisitivo de las clases populares y medias en los Estados Unidos, lo que solo incrementó la tendencia a un creciente endeudamiento de los hogares modestos; tanto más porque al mismo tiempo les eran propuestos créditos cada vez más fáciles y desregulados por los bancos e intermediarios financieros poco escrupulosos y deseosos de encontrar buenos rendimientos para el enorme ahorro financiero inyectado al sistema por las clases más elevadas» (2014, p. 324). El crecimiento de la desigualdad tanto en Europa como, sobre todo, en Estados Unidos durante las tres últimas décadas se ha debido principalmente a tres factores: la paulatina sustitución de una fiscalidad progresiva por otra regresiva, la cada vez mayor preponderancia del sector financiero y la consiguiente y exorbitante subida de los salarios de los altos ejecutivos de las grandes empresas, especialmente de las financieras,⁴ mientras los trabajadores seguían cobrando igual o menos. De hecho, «en la actualidad los impuestos han llegado a ser regresivos en la cima de la jerarquía de los ingresos en la mayor parte de los países, o están a punto de serlo» (Piketty, 2014, p. 549) (véase Landais, Piketty y Saez, 2011). No es de extrañar, pues, que hayan subido la desigualdad y la pobreza, hasta el punto de que hoy día unos 50 millones de estadounidenses viven por debajo del umbral de pobreza.

Veamos algunos datos más: los salarios de los trabajadores sin cualificar son hoy día más bajos que en 1973 (Castells, 2001b); el 99 % de la riqueza creada por la recuperación económica durante la primera legislatura de Obama fue a parar a manos del 1 % más rico (Stiglitz, 2012); los ingresos de las clases medias solo han

4 Hasta los años 90, los trabajadores del sector financiero en EE. UU. ganaban los mismos salarios que los de otros sectores, pero en 2006 ganaban el 50 % más llegando al 250 % o al 300 % en el caso de los directivos, algo que no tiene explicación (Scheidel, 2018, p. 442).

aumentado un 6 % desde 1980, el del 1 % más rico un 229 %. A lo largo de la década de los 80, como señala Susan George, el 1 % de las familias norteamericanas más ricas incrementaron sus rentas en un 50 %, pasando de 270.000 a 405.000 dólares, mientras que el 10 % más pobre perdió el 15 % de las suyas, pasando de 4.113 dólares anuales (70 veces menos que los del 1 % más ricos) a 3.504 (120 veces menos). Más aún, según los datos del *United for a Fair Economy, Economic Apartheid Data Center* de octubre de 2001 (tomados de Beaudet, 2003, pág. 157), el 1 % más rico de los norteamericanos tiene más que el conjunto del 95 %, y las 400 personas más ricas disponen del 12 % del PIB, tanto como cien millones de sus compatriotas; 44,2 millones de personas viven sin seguro médico (un 13,6 % más que en 1989). Según datos del propio gobierno, en 2006 el 1 % de la población más rica acaparó el 22 % de la riqueza nacional, lo que constituye el mayor porcentaje registrado en ese país desde 1929. Pero son las personas vinculadas a las finanzas las que más dinero ganan. Según Paul Krugman (2012), en 2006, los 25 gestores de fondos de alto riesgo (*hedge funds*) mejor pagados de Wall Street ganaron 14.000 millones de dólares, tres veces más que la suma de los 80.000 profesores de escuela de la ciudad de Nueva York, de forma que cada uno de ellos ganó, como media, igual que 3.280 de esos profesores. Y en 2007, John Paulson, gestor de fondos de alto riesgo, ganó 3.700 millones de dólares, es decir, unas 74.000 veces la renta media familiar en Estados Unidos. Mientras, el salario mínimo se ha reducido alarmantemente, contribuyendo mucho al aumento de la desigualdad, lo que se ha visto favorecido por los buenos salarios, a veces astronómicos, de muchísimos profesionales. Así, la remuneración anual media de los psiquiatras era de 216.000 dólares en 2010, el socio de un bufete de abogados puede ganar más de un millón de dólares y un consejero delegado de una gran empresa puede embolsarse más de 20 millones de dólares (Hacker, 2012). Suben sus sueldos, pero bajan sus impuestos. En efecto, entre 1980 y 2013, la tasa fiscal media sobre la renta para el 0,1 % de los más ricos pasó del 42 % al 27 %, y la de la riqueza bajó del 54 % al 40 % (Scheidel, 2018, pp. 438-439).

Lo anterior ha estado muy relacionado con la evolución política del país, pues, apunta Scheidel, en EE. UU. los dos partidos dominantes han girado hacia el neoliberalismo. Y, aunque desplazándose los republicanos más a la derecha que los demócratas a la izquierda, fueron estos los que pusieron en práctica la desregulación económica en los años noventa y centrándose cada vez más en aspectos

culturales como el género, la raza y la identidad sexual, y menos en políticas sociales tradicionales, como las laborales. Todo ello ayuda a explicar la victoria electoral de Donald Trump en 2016 y tal vez la de 2024. Los 63 millones de votos que obtuvo Trump en 2020 (Biden consiguió 74 millones) son el reflejo de la enorme irritación de gran parte de los norteamericanos contra el *establishment* y contra sus políticas económicas que, al no haber sido rectificadas de forma importante, podrían llevar a la tragedia en ese país. La desigualdad, la irritación contra las élites y la ignorancia llevan a muchos millones de estadounidenses a votar a Trump y a creer sus mentiras –como si él no perteneciera a la élite– y sin querer enterarse de que sus políticas les arruinan aún más.

Pero lo que más llama la atención «es la limitada igualdad de oportunidades que existe en Estados Unidos. Esta discrepancia demuestra la extraordinaria falsedad del mito del rico que se hace a sí mismo de la nada. Los hijos de los individuos que ocupan el quintil más pobre de la población estadounidense tienen muchas probabilidades de quedar estancados en la parte baja de la jerarquía de renta, bastantes más, incluso, que los británicos (OCDE, 2008)» (Therborn, 2015, p. 127). El «sueño americano» es simplemente eso: un sueño. Es algo que realmente no existió y que si –solo en parte– existió, ha llegado a su fin (véase Chomsky, 2017; y Sandel, 2020). Y lo que es peor: los más ricos no sienten remordimiento alguno. Han perdido toda moral, lo que no es de extrañar dado el principal principio ético que ha instaurado el neoliberalismo: el beneficio es lo único que cuenta.

En suma, Estados Unidos, «la nación que fue una vez ejemplo para las democracias incipientes del mundo se ha convertido ahora en un modelo de disfunción en el que el dinero dicta y compra elecciones; los lobistas escriben las leyes; las infraestructuras se desmoronan; la brecha entre los ricos y los pobres se agranda a un ritmo asombroso (los tres norteamericanos más ricos tienen tanta riqueza como la mitad de la población, de igual forma que las ocho personas más ricas del mundo poseen más riqueza que los tres mil seiscientos millones de personas más pobres); los votantes de las minorías se enfrentan a la privación de derechos; candidatos con menos votos que sus oponentes ganan una y otra vez las elecciones; millones no tienen acceso a la seguridad social y otros servicios básicos; la vigilancia asfixia e inhibe; la contaminación y la polución destruyen el medio ambiente; la intolerancia lo impregna y lo degrada todo; los escolares son ma-

sacrados una y otra vez; abundan los opioides; el espacio público compartido se reduce y las escuelas fracasan a la hora de educar» (Stone y Kuznick, 2020, p. 163). Y la situación de las minorías –sobre todo de la afroamericana– sigue siendo deplorable, como veremos en el próximo capítulo.

Otro factor que ha incrementado la desigualdad en los países ricos –y no solo en ellos– ha sido el despilfarro en gasto militar, sobre todo cuando tal despilfarro se combina con un sistema fiscal regresivo, como suele ocurrir actualmente, dado que, en este caso, es la población general la que paga esos gastos. El caso más claro es Grecia, uno de los países con mayor gasto militar del mundo: en 2021 el 3,4 % de su PIB (Francia el 2,07 en 2020, e Italia, el 1,57 en ese mismo año). El colmo de la hipocresía fue que, en la crisis de Grecia, con el objetivo de que los griegos pudieran pagar la deuda externa, la Unión Europea exigió a ese país eliminar la leche de los niños en las escuelas, lo que suponía un gasto ridículo, pero no le exigió reducir su gasto militar.

En síntesis, el fenómeno más sobresaliente en los Estados Unidos durante los últimos 40 años ha sido el incremento de la desigualdad, como consecuencia primordial de la implementación de políticas neoliberales, sobre todo en los sectores fiscal, financiero y laboral. Y la consecuencia fue casi inmediata: los ricos se hicieron más ricos (sobre todo los más ricos) y los pobres más pobres (sobre todo los más pobres). En efecto, «desde finales de la década de 1970 hasta 2012, el porcentaje de riqueza privada en manos del 1 % prácticamente se duplicó, pero se triplicó en el 0,1 % más rico y se quintuplicó en el 0,01 % [...] El incremento más espectacular corresponde al porcentaje de todos los intereses obtenidos por el 0,01 % de familias más ricas en esta categoría, que se multiplicó por trece, del 2,1 % en 1977 al 27,3 % en 2012» (Scheidel, 2018, p. 444). Ahora bien, concluye Walter Scheidel, aunque Estados Unidos es un ejemplo destacado, la creciente concentración de riqueza es un fenómeno global. En la Unión Europea las cosas no son muy diferentes: la desigualdad y el número de pobres no han dejado de crecer desde que los gobiernos y, sobre todo, las propias instituciones de la UE se han implicado en el neoliberalismo y sus políticas. Por ejemplo, casi la mitad de los pensionistas alemanes –un 47,5 %– tenía en 2016 un *minijob*, fijado en 450 euros al mes, para poder completar su pensión y vivir con una cierta dignidad.

8.4. Desigualdad y pobreza en España

A pesar de que el estado del bienestar se ha visto atacado desde 1973, sin embargo el gasto social «se sigue manteniendo en niveles comparativamente altos. Europa sigue siendo un ejemplo de modelo social. Los gobiernos no se atreven a hacer reducciones más drásticas en política social porque los ciudadanos no las aceptarían. Pero las resistencias para el mantenimiento y el aumento del gasto necesario no desaparecen, como se viene viendo en las reformas y en los presupuestos introducidos por muchos países, incluido el nuestro. [...] El ascenso del neoliberalismo, del individualismo posesivo, del menosprecio de lo público y la alabanza de lo privado no es ajeno a este cambio de relato» (Pérez Yruela, 2018, pp. 70-71). Algo peor han ido las cosas en los países que, como el nuestro, adoptaron tarde, y con muchas limitaciones, el estado de bienestar. Alonso Torrés (1999) estima que tenemos 8.509.000 personas en situación de pobreza, de las que más de medio millón vive en situación de pobreza extrema. A poca distancia de Grecia, son España y Portugal los países europeos con más personas en riesgo de pobreza (Eurostat, 2002). Y en abandono escolar también estamos solo por detrás de Portugal (Eurostat, 2002). Igualmente, después de Grecia y Portugal, España es el país europeo con mayor coeficiente de Gini (Portugal, 0,36; Grecia, 0,34; España, 0,33; Reino Unido, 0,32; Italia, 0,30; Alemania, 0,25; Suecia, 0,23).

En España, la conjunción de la reducción salarial y de los recortes del gasto social ha llevado a un aumento de la población trabajadora en situación de pobreza y al incremento de las tasas de pobreza, tanto relativa como severa. Cada vez hay más personas que, a pesar de tener trabajo, son pobres. El indicador AROPE, que mide la situación de riesgo de pobreza y exclusión social, se incrementó entre 2009 (el 24,7 % de los hogares) y 2014 (29,2 %) año en el que alcanza su máximo para bajar algo en 2016 (27,9 %), aunque sigue siendo de los más altos de la UE. De hecho, la tasa de riesgo de pobreza no ha dejado de crecer (20,4 % en 2009 y 22,3 % en 2016) y la de pobreza infantil sigue siendo una de las más elevadas de la UE, casi el 30 % (Rodríguez Cabrero, 2018, pp. 21-22). En cuanto a las tasas de pobreza y exclusión infantil, también tenemos una de las más altas de Europa (indicador AROPE, 34,4 %) y unas políticas poco eficaces en este terreno, superándonos solo Hungría, Rumanía y Grecia (Rodríguez Cabrero, 2018, p. 33). También FOESSA (2016) nos proporciona datos muy preocupantes en este terreno. Y en la misma línea, la ONG Prosalus dice que España era en 2013 el

quinto país europeo más desigual, solo por delante de Bulgaria, Grecia, Rumanía y Letonia. Como bien puntualiza Rodríguez Cabrero (2018, p. 35), «si para el futuro de un país la inversión en infancia es determinante, España aún está lejos de una intensa reducción de la pobreza y la exclusión infantil, verdadero obstáculo para avanzar en el bienestar y a reducir la desigualdad».

Además, en nuestro país la desigualdad de oportunidades educativas es un factor crucial en el mantenimiento de las altas tasas de desigualdad, que vienen del franquismo e incluso de antes, No olvidemos que gran parte de las diferencias en rendimiento escolar tienen que ver con el origen social de la familia (Ovejero, 2020b). Se mida como se mida la clase social, el origen socioeconómico y cultural de la familia influye decisivamente en el rendimiento escolar de sus hijos e hijas (tanto en la carrera que eligen cursar como en las notas que obtendrán, en el nivel académico al que llegarán y, sobre todo, en el tipo de empleo que conseguirán). Pero ello no es una fatalidad. Puede hacerse mucho por corregirlo. Los adolescentes y jóvenes de clase trabajadora, al contrario que los de clase más alta, valoran más el trabajo que los estudios. Lo que les lleva a abandonar la escuela con más probabilidad. Por ejemplo, el 55 por ciento de los hijos de padres sin título de bachillerato tampoco alcanzan ese nivel educativo.

Algo similar ocurre en los demás países que tienen altos índices de desigualdad. Pero aquí tenemos un factor que empeora más esta situación: el sistema de conciertos educativos. La educación concertada es controlada por grupos privados, pero financiada con dinero público. «El sistema de conciertos educativos ha sido la forma en que el Estado ha asegurado a la clase media la transmisión de su patrimonio social y cultural. [...] A menudo se señala que, una vez igualadas las condiciones socioeconómicas, la enseñanza concertada española no ofrece mejores resultados académicos. Es cierto, ofrece algo mucho más importante: la reproducción de las condiciones socio económicas» (Rendueles, 2020, p. 281). Por ejemplo, la educación pública escolariza en nuestro país al 85 % de los inmigrantes, mientras que la concertada y la privada solo escolarizan al 15 % y lo hacen con una selección previa. Y el que eso ocurra en un país con altos índices de desigualdad contribuye más aún a que esa desigualdad aumente más todavía y, lo que casi es peor, quede justificada y legitimada (véase Ovejero, 2020b). Ahora bien, «si la educación es importante para un proyecto igualitarista es porque la educación pública universal desempeña un papel irremplazable como instru-

mento de socialización democrática. En nuestras sociedades el único espacio en el que los niños, los jóvenes y sus madres y padres tienen la oportunidad de mezclarse cotidiana, prolongada y masivamente con personas procedentes de otros grupos son los centros educativos obligatorios» (Rendueles, 2020, p. 283). Sin embargo, añade Rendueles (p. 284), «lo cierto es que desde el primer momento de la educación universitaria, posobligatoria, los sesgos de clase se manifiestan con una violencia asombrosa. Afecta mucho, por ejemplo, a la vocación: los hijos de los padres sin estudios tienen quince veces menos probabilidades de titularse en ingenierías que los hijos con padres con estudios universitarios. El sistema educativo español está diseñado cuidadosamente para evitar las potencialidades igualitaristas de la enseñanza obligatoria. Un alumno de la enseñanza concertada obligatoria, religiosa o no, de una ciudad como Madrid puede perfectamente llegar a la universidad sin haber compartido aula ni una sola vez en los quince años de educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato con el hijo de unos trabajadores inmigrantes». La escuela debería ser uno de los principales pilares de una sociedad igualitaria. En España no lo es tanto.

Recientemente, el relator de la ONU, Philip Alston, visitó nuestro país y llegó a estas conclusiones (*Informe de relator de la ONU, 2020*): el país tiene una alta tasa de desempleo, una situación de desempleo juvenil crónico, una crisis de vivienda de enormes proporciones, altas tasas de pobreza severa, programas de protección social muy insuficientes, un sistema educativo segregado y cada vez más anacrónico y políticas fiscales que favorecen mucho más a las clases acomodadas que a las pobres. La recuperación económica ha beneficiado mayoritariamente a las grandes empresas y a las personas más adineradas, mientras que muchos de los servicios públicos y la protección social sufrieron graves recortes después de 2008 y no se han restablecido. El crecimiento de las rentas ha beneficiado principalmente a quienes están arriba: entre 2007 y 2017, las rentas del 1 % más rico crecieron un 24 % mientras que el 90 % solo creció un 2 % (Gethin *et al.*, 2019). En gran medida, los beneficios empresariales se han recuperado desde la crisis, pero los impuestos que deben pagar han pasado entre 2007 y 2019 del 22,3 % al 11,9 %. Además, España no hace lo suficiente por reducir la pobreza y sus dramáticos efectos. Así, en 2017 solo dedicó a protección social el 16,6 % del PIB, por debajo de la media europea del 18,8 %. Más en concreto, el gasto por habitante fue de 5.439,72 euros en 2017, frente a los 7.808,61 de la UE. Y en la

Comunidad de Madrid, la más rica de España (tiene el mayor PIB del país), el índice de pobreza severa creció más del doble en diez años, pasando del 3 % en 2008 al 7,8 % en 2017, esto dedicando muy poco dinero a protección social.

En cuanto a la relación entre educación y pobreza, el relator de la ONU (2020) dice que aquí el 33,7 % de las personas con el nivel más bajo de educación (enseñanza primaria como máximo) corrían riesgo de pobreza o exclusión social en 2018, en comparación con el 12,6 % de las personas con educación superior (INE, 2019); sin embargo, la inversión pública absoluta en educación se redujo significativamente entre 2009 y 2017, de forma que estaba en el 4,24 % del PIB en 2017 (49.458 millones de euros) frente al 4,99 % (53.895 millones de euros) en 2009 (European Anti-Poverty Network, 2019). No es raro, pues, que seamos el país de la Unión Europea con la mayor tasa de abandono escolar temprano (17,9 %) (Eurostat, 2018). Ahora bien, la pobreza y la desigualdad afectan en España sobre todo a estos dos colectivos:

1) *Gitanos*: según el *Informe del relator de la ONU* (2020), aunque España tiene una de las mayores comunidades romaníes de la Unión Europea –unas 750.000 personas (el 1,6 % de la población) –, no se publican estadísticas sobre su situación, por lo que es una población que se mantiene en la invisibilidad. Pero este informe señala que más del 80 % de la población romaní vive en situación de pobreza o exclusión social, y el 46 % es extremadamente pobre, con una renta mensual inferior a 310 euros. La tasa de pobreza infantil es del 89 %, y la de desempleo del 52 %. Las mujeres romaníes sufren una clara desventaja en todos los ámbitos, con una tasa de empleo de solo el 16 %; además, un gran número de niñas y niños romaníes asisten a escuelas que, a efectos prácticos, pueden calificarse de segregadas, y solo el 17 % de los mayores de 16 años terminan la enseñanza secundaria o superior (Fundación Secretariado Gitano, 2019).

2) *Migrantes*: según el relator de la ONU (2020), recogiendo datos del INE, en España había unos 6 millones de migrantes. La población migrante que procede de fuera de la Unión Europea es la que corre un mayor riesgo de pobreza y exclusión social (56 %), seguida de las personas con nacionalidad de otro país de la Unión Europea (47,7 %), ambas cifras significativamente más altas que la de la población española (23,1 %).

Según Sánchez (2001, 2007) a principios del siglo XXI, 1.400 españoles (el 0,0035 %) tenían tantos recursos como los 38 millones menos ricos (el 80,5 %). Y desde entonces la desigualdad no ha dejado de crecer. Por aportar un solo dato (tomado de Bauman, 2014): Amancio Ortega ganó en 2011, en plena crisis económica, más de 66 millones de dólares cada día, y, según el diario *Público* (1/11/21), cobraría el 2 de noviembre de 2021, en plena pandemia sanitaria, 646,8 millones de euros en concepto de dividendos por sus acciones en Inditex.

8.5. Conclusión

En resumidas cuentas, el llamado «estado o sociedad del bienestar» se creó en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, con la doble finalidad de rehacer un continente destrozado por la guerra e impedir que el comunismo se extendiera por todo su territorio. Para ello se produjo un acuerdo entre gobierno, empresarios y sindicatos con el fin de crear una nueva sociedad donde a las libertades políticas y de ciudadanía se añadiera un reparto entre las clases trabajadoras de los beneficios generados por el crecimiento económico. Tal fenómeno duró treinta años (los Treinta Gloriosos), aunque se alargó hasta 1990 y una parte aún se mantiene hoy día aunque no con la fortaleza que tenía en los primeros años 70. «Podríamos decir que en 1945 se construyó un sistema socialmente más justo, y económicamente desarrollista, en el que todos aparentemente ganaban» (Subirats, 2018, p. 321). Por tanto, no es raro que el primer paso que dieron los más ricos fuera terminar con el estado del bienestar, con el argumento, absolutamente falso, de que era insostenible. Claro que es insostenible, si los impuestos los pagan casi exclusivamente quienes tienen una nómina y los consumidores, mientras que los más ricos pagan muy poco. El fraude fiscal es cada vez mayor y la evasión y elusión fiscales son enormes, siempre con los paraísos fiscales dispuestos a aceptar todo el dinero que les llegue. Y con una Unión Europea que baja brutalmente los impuestos a las empresas para que se trasladen a su territorio, perjudicando con ello a los demás países, como hizo Junkers en Luxemburgo (o como en España hace la Comunidad Autónoma de Madrid).

Los efectos de todo ello son bien conocidos: desempleo, trabajo precario y aumento de la desigualdad. En estas circunstancias deberíamos preguntarnos, con Joan Subirats, ¿cómo avanzar hacia un mundo en el que los ideales de libertad e igualdad puedan cumplirse satisfactoriamente, reforzando la capacidad

colectiva de decidir, aceptando la diversidad y mejorando la integración entre individuo y naturaleza, como nuevos valores globales? La respuesta sigue siendo: con democracia. «Una democracia que recupere el sentido transformador, igualitario y participativo que tenía hace años. [...] Una democracia como respuesta a los nuevos retos económicos, sociales y políticos a los que nos enfrentamos. Recordemos que capitalismo y democracia no han sido nunca términos que convivieran con facilidad» (Subirats, 2018, p. 322). Pero debe tratarse de una democracia de nuevo cuño, tal como exigía el movimiento 15M, una democracia que vuelva a la época socialdemócrata, pero que vaya más allá. No olvidemos las conclusiones a que no hace mucho llegó la OCDE (2011): la desigualdad interna del mundo rico, a lo largo de las últimas décadas, ha sido producida esencialmente por la crisis de los sindicatos, los cambios en la legislación laboral, la reducción de las prestaciones por desempleo, la baja redistribución fiscal y la desregulación de los mercados. Justo lo contrario de lo que se hizo en el siglo XX: «los trabajadores organizados fueron la columna vertebral de las luchas por la democracia y el derecho al voto (Therborn, 1977), por los derechos sociales y la redistribución económica (Korpi, 1983). Las décadas relativamente igualitarias del capitalismo coincidieron con el apogeo de la mano de obra organizada, con índices de participación sindical y de votos electorales muy elevados (Therborn, 1984) [...] En la actualidad, la clase obrera industrial está en decadencia en los principales centros del capitalismo y el movimiento obrero se encuentra en crisis en casi todas partes» (Therborn, 2015, pp. 167-168). Debo insistir, pues, en que «la igualdad avanza básicamente a partir de las reivindicaciones. Pero como la igualdad social es una fuerza de cohesión social, de combate tanto como de desarrollo, necesita el apoyo de otras fuerzas, que actúan principalmente motivadas por el temor, el miedo a los desiguales, a su ira, a sus posibles protestas y a su rebelión» (Therborn, 2015, p. 170). Y no olvidemos, como escribe Anthony Atkinson (2016, p. 77), que la desigualdad económica «es menos preocupante ahí donde el Estado provee servicios como educación y salud gratuitos para todos, y donde la vivienda y el transporte están subsidiados».

Pero tal vez el fenómeno creado por los países ricos que más pobreza y exclusión social ha producido ha sido el de la esclavitud, que, a mi juicio, es el genocidio –me atrevería a decir incluso el holocausto– más feroz y sangriento que se ha llevado a cabo en la historia, dada su larga duración (cuatro siglos) y dado que

aún hoy día son muy visibles algunos de sus efectos más dramáticos. De ahí que le dediquemos todo el siguiente capítulo. La realidad actual de los países desarrollados, sobre todo de Estados Unidos, no se entendería bien sin tener en cuenta la esclavitud y sus consecuencias.

CAPÍTULO 9

LA ESCLAVITUD, UN FENÓMENO DRAMÁTICO

9.1. Introducción

En contra de lo que todavía creen muchos, «el esclavismo no es un residuo del mundo antiguo, sino un elemento central del desarrollo capitalista. En los inicios de la modernidad, el tráfico de esclavos no ocupaba un lugar central en las economías occidentales. Fue la economía industrial la que produjo una expansión sin precedentes del comercio de seres humanos. Entre el siglo XVII y finales del siglo XIX unos catorce millones de personas fueron esclavizadas y trasladadas a otros lugares del mundo donde se vieron obligadas a trabajar en condiciones atroces» (Rendueles, 2016, p. 124). Gran parte de ellas eran africanos llevados a América. Aún perduran sus efectos. Una parte nada despreciable de la desigualdad y el sufrimiento de millones de personas de color en América, en especial en Estados Unidos, proviene de lo que les hicieron a sus antepasados muchos años atrás. Al fin y al cabo, los tres pilares esenciales sobre los que se construyó el país fueron la exterminación de los indígenas, la inmigración y la esclavitud. Lo mismo habría que decir de las potencias europeas, con Inglaterra a la cabeza, aunque sustituyendo la exterminación de los indígenas por el colonialismo.

En cuanto al fenómeno migratorio, tengo que recordar que EE. UU. fue ante todo un país de inmigrantes, sobre todo europeos. La inmigración sigue siendo fuerte allí y son los inmigrantes quienes ocupan, junto a los afroamericanos, los puestos más bajos en la escala social. La mayoría de ellos (por ejemplo, los hispanos) suelen carecer de un buen nivel educativo y profesional por lo que, en

el mejor de los casos, encuentran trabajo en empleos mal pagados y con malas condiciones laborales y a menudo tienen que trabajar en la economía sumergida (sin papeles, sin legalidad y sin dignidad). Es justamente a este sector social al que más daño está haciendo la covid-19.

Con respecto al colonialismo, como observa Piketty (2021, pp. 63-64), «es imposible escribir una historia de la igualdad y la desigualdad a escala mundial sin comenzar por tomar la medida de la herencia colonial. [...] Sería ingenuo pensar que sus efectos pueden borrarse en unas pocas décadas. Los que nacen hoy en el planeta no son responsables individualmente de esa pesada herencia, pero cada uno de nosotros es responsable de cómo decide tenerlo en cuenta en su propio análisis del sistema económico mundial, de sus injusticias y de cómo debería cambiarse». Ken Pomeranz (2000) muestra cómo la Revolución Industrial de finales de los siglos XVIII y XIX, primero en Inglaterra y luego en toda Europa, se basó especialmente en la extracción masiva de materias primas (sobre todo algodón) y fuentes de energía (particularmente madera) del resto del mundo. Es más, el poderío militar de los Estados europeos les permitió, por un lado, la extracción de materias primas y, por otra, imponer una división internacional del trabajo y de los suministros muy rentable para ellos (Pomeranz, 2000).

En cuanto a la esclavitud, tengo que comenzar denunciando el abuso atroz y sin paliativos de millones de seres humanos para que trabajen gratuitamente y en condiciones atroces, en pro del desarrollo de los países «civilizados». De hecho, «la mitad de los esclavos africanos transportados a través del Atlántico entre 1492 y 1888 lo fueron durante el periodo 1780-1860. Esta última fase de crecimiento acelerado de la esclavitud y de las plantaciones de algodón desempeñó un papel fundamental en el auge de los textiles británicos. Hasta los años 1780-1790, las Antillas y especialmente Santo Domingo fueron los principales productores de algodón. Tras el colapso de las plantaciones de Santo Domingo a raíz de la revuelta de los esclavos de 1791, los Estados del sur de Estados Unidos tomaron el relevo y llevaron la acumulación del número de esclavos y la capacidad de producción de algodón a niveles sin precedentes. La trata de esclavos se abolió oficialmente en 1810, aunque en realidad continuó de forma clandestina durante algunas décadas (sobre todo en dirección a Brasil) sin olvidar que los propietarios de las plantaciones se dieron cuenta de que la reproducción natural de esclavos era mucho más rápida y eficaz que la trata. Entre 1800 y 1860, el

número de esclavos en el sur de Estados Unidos se cuadruplicó, pasando de uno a cuatro millones» (Piketty, 2021, pp. 71-72). Es decir que, si el colonialismo fue crucial para el desarrollo de la Revolución Industrial en Europa, la esclavitud lo fue para el desarrollo de EE. UU.

Además, para entender la situación actual del colectivo afroamericano en Estados Unidos merece la pena analizar el fenómeno de la esclavitud, y de paso, ver algo que se sigue ocultando a los españoles: el papel central desempeñado por nuestro país en la trata de esclavos, tanto indios como africanos. Empezaré por aquí.

9.2. La esclavitud: El papel desempeñado por España

Según Fernández Cháves y Pérez García (2010), en 1565 había 6.327 esclavos en la ciudad de Sevilla y 44.670 en el arzobispado (un 7,4 % y un 9,7 % respectivamente de la población total) (en Canarias había aún más, entre un 10 y un 12 %). En Sevilla, añaden estos autores, se vendían anualmente unos 1.100 esclavos, la inmensa mayoría de ellos negros subsaharianos, siendo y comprados por vecinos de la ciudad el 85 %. Y es que «España es el país europeo que ha contado con más esclavos y esclavas de origen subsahariano entre su población. Además, España ha sido, desafortunadamente, el último país occidental en abolir la esclavitud» (Martín Casares y García Barranco, 2010, p. 1). Además, en el pasado, el dueño de esclavos gozaba en España de un poder casi ilimitado sobre su esclavo y le trataba como un mero objeto de su propiedad, pagando con él deudas, empeñándolo, dándolo como regalo o dote. «La consideración de los propietarios nos demuestra que el negro se instaló en todas las capas sociales cumpliendo diversas funciones. Esto nos obliga a considerar al negro no como simple anécdota, sino como algo propio de la sociedad del siglo XVI que debe ser considerada, desde cualquier punto que se la mire, como una sociedad esclavista ya que no solo admite este, sino que lo practica en todos sus estamentos» (Cortés, 1989, p. 237).

Por otra parte, España fue el primer país en trasladar negros de África a América para trabajar como esclavos, principalmente en las minas, tras el decreto que Fernando el Católico firmó en Valladolid el 22 de enero de 1510, decreto que supuso el inicio del comercio transatlántico de esclavos a gran escala. Ahora bien, la introducción de esclavos negros en las colonias americanas no supuso el fin de

la trata de indígenas nativos, pues un nuevo decreto de junio de 1510, firmado también por el Rey Católico, permitía la captura de más indios para trabajar en Santo Domingo y Cuba. Casi tres siglos después, Carlos III incrementó el uso de esclavos africanos en las colonias españolas de América, sobre todo en Cuba, a través de un decreto que fue firmado por su sucesor, Carlos IV, en 1789, pues él falleció en 1788. Tal decreto contenía estas disposiciones (Thomas, 1998, p. 499): los dueños estaban obligados a instruir a sus esclavos en la religión católica y no solo a bautizarlos y dejar lo demás al azar; debían alimentarlos de acuerdo con normas fijadas por un «protector de esclavos» designado por las autoridades; si maltrataba a sus esclavos, el dueño podía tener que pagar multas e incluso se arriesgaba a que se los confiscaran; en un año habría 270 días laborales y 126 días festivos, pero en los días laborales se les podía obligar a trabajar de sol a sol, a menos que tuvieran menos de diecisiete años o más de sesenta; se podía castigar al esclavo recalcitrante con 25 latigazos o poniéndolo en un cepo y encadenándolo. Sin embargo, añade Thomas, estas disposiciones se respetaron muy poco. Pero, a pesar de que la esclavitud es un hecho histórico incuestionable en España, «por razones de diversa índole, ha sido muy poco abordado por historiadores y sociólogos. [...] Si de la esclavitud en general pasamos a considerar la del negro en particular, la pobreza de publicaciones es casi absoluta» (Cortés, 1989, p. 236).

Pero también hay que dejar claro que el monopolio del comercio con África lo tenían los portugueses desde los tratados de Alcaçovas (4-IX-1479) y Tordesillas (5-VI-1494), patrocinados por el papa. De hecho, Portugal tuvo el visto bueno de tres papas para ejercer la esclavitud, por lo que fue «el lugar de suministro de esclavos más fuerte en el siglo XVI. Era natural ya que, por el mencionado tratado de Alcaçovas, los portugueses tenían el monopolio de la trata en Guinea y la red de distribución de negros en España estaba, en cierta medida, controlada por ellos» (Cortés, 1989, p. 45). Como nos recuerda José Luis Cortés (2010, p. 155), los tratados de Alcaçovas y Tordesillas, refrendados por sendas bulas papales, según la costumbre de la época, le dieron a Portugal el control del reino de Fez y la totalidad del África negra, por lo que el aprovisionamiento de esclavos negros debería hacerse con su consentimiento. No es raro que, como dice Hugh Thomas (1998, p. 118), «había más esclavos africanos en Portugal que en cualquier otro país europeo». Así, mientras que en 1565 había en Sevilla 6.000 esclavos para unos 85.000 habitantes, más negros que bereberes, en Lisboa había 10.000 en

1550 para una población de 100.000 habitantes. También es lógico que, por su cercanía a Portugal, fueran Sevilla o Zafra las ciudades con más esclavos negros (Periáñez, 2010, p. 50).

En suma, escribe Piqueras (2011, p. 28), «la esclavitud ha formado parte de la vida social en la historia de España de forma más extensa y prolongada que en la mayoría de los países europeos». Así, «en el siglo XI, después de la conquista de Ávila, las murallas de la ciudad son construidas por 200 esclavos musulmanes encadenados». Y no solo fue esclavista el reino de Castilla; también lo fue el de Aragón. Así, cuando en 1238 Jaume I conquistó Valencia, envió como regalo unos 2.000 esclavos al papa, a reyes, a cardenales y a nobles en señal de triunfo y poder. Después siguió haciendo esclavos para dedicarlos a obras y al servicio doméstico (Phillips, 1989, pp. 162-165). Es más, pronto el tener esclavos fue un signo de riqueza en España, de forma que, en 1460, «uno de los primeros gastos que simbolizan el acceso a una prosperidad discreta se manifiesta en la compra de uno o dos esclavos. La familiaridad con la institución explica la posterior predisposición a adquirir africanos desde el último tercio del Cuatrocientos, cuando Valencia, después de Sevilla, se convierte en el segundo mercado peninsular de negros y los labradores compran uno o dos para emplearlos de fuerza auxiliar de sus pequeñas explotaciones agrícolas (Furió, 2000, 2002). La demanda local y, sobre todo, la internacional, conduce a que hacia 1500 se contabilicen 363 mercaderes dedicados en Valencia a este negocio. De 1487 a 1516 son desembarcados más de 11.000 africanos, en su inmensa mayoría *walof* originarios de Guinea (Cortés, 1964). El boom dura unas décadas, pero la esclavitud negra y mora se mantiene hasta mediados el XVII» (Piqueras, 2011, p. 36). Todavía en 1790 el lector del *Diario de Valencia* encontrará en sus páginas anuncios como el que sigue, publicado el 4 de julio: «Se vende un Negro de edad de 13 a 14 años. Criollo Inglés, cuyo idioma habla con regular propiedad y el Castellano igualmente. Está instruido en la Religión Christiana; tiene bastante talento para aprender cualquier oficio que sea».

¿Y quiénes eran los principales propietarios? Piqueras estima que la cifra de africanos desembarcados en el puerto de Sevilla durante dos siglos pudo llegar a los 95.000, al menos una décima parte para ser destinados a América, pues durante el siglo XVI el negocio de la trata se organiza y dirige desde aquí. En el siglo XVI en Sevilla se consideraba a los esclavos artículos más lujosos. Por eso

«muchos los compran por ostentación y vanidad, la mayoría para dedicarlos al servicio doméstico (Méndez, 2010, p. 101). [...] Después del obispo, los arcedianos, canónigos y racioneros eran los que los poseían con mayor frecuencia y número, signo de estatus. La abundancia de siervas y la proporción en que quedan embarazadas, sobre un 60 %, remite al uso oculto que les dan sus dueños. Los eclesiásticos son los más reacios a reconocer a sus hijos (Franco Silva, 1992, p. 149). También esta es una tradición doble: la de los clérigos dueños de esclavos y la afición a darles un destino sexual» (Piqueras, 2011, p. 38). Los esclavos eran adquiridos sobre todo por el rey, los clérigos, los aristócratas y los comerciantes. «La Corona debía ser, a tenor de la documentación, una de las mayores propietarias de esclavos, no porque ella se dedicara a obtenerlos para comerciar con ellos, sino porque el ordenamiento legal preveía que pasaran bajo la autoridad real muchos esclavos que no presentaban un marco jurídico preciso, los de dueños indeterminados o sancionados y la mayoría de los obtenidos en campañas militares. Precisamente el “quinto” correspondiente al Rey en cualquier despojo bélico aumentaba considerablemente el patrimonio esclavista de la monarquía» (Cortés, 1989, p. 64).

En cuanto a la Iglesia, hay que decir que «tanto a nivel privado como institucional es otra de las grandes potencias esclavistas. A finales del XV era, sin duda, la primera, pero abandonó este puesto en el XVI cuando se extiende este comercio y la especulación coordina intereses peninsulares con coloniales americanos. Pero, aun así, hay hombres de iglesia metidos en este negocio [...]. Por razones obvias, el clero secular es el que mayor número de esclavos tiene, apareciendo constantemente la persona del “clérigo” como agente de operaciones relacionadas con esclavos» (Cortés, 1989, p. 66). Pero no solo el rey y los clérigos tenían esclavos, los tenían todos los estamentos sociales. «La extensión del esclavo en las diversas capas de este estamento social es enorme. A juzgar por el abanico tan variado de profesionales que tienen esclavos, se diría que estos han invadido toda la gama social sin considerar circunstancias de privilegio, aspectos económicos o situación personal. Desde gente cercana a la nobleza hasta el más humilde de los oficios pasando por el simple criado o estudiante ha habido numerosos casos de posesión esclavista. Sobresalen los mercaderes con gran diferencia. Es lógico, puesto que debemos pensar que no solamente guardarían los esclavos para su utilidad propia, sino que los considerarían como otra mercancía

más dentro de su actividad comercial, comprándolos y vendiéndolos en busca de beneficio» (Cortés, 1989, p. 67). Además, tenían esclavos también algunas instituciones como hospitales y ayuntamientos, que los utilizaban en diversas tareas.

En resumidas cuentas, «España ha sido la nación europea que con más continuidad ha sostenido en el último milenio esa institución tan peculiar que responde al nombre de esclavitud» (Piqueras, 2011, p. 11). Pero eso no aparece ni en los libros escolares, ni en las enciclopedias, ni en el cine, ni siquiera en los libros de historia. De hecho, afirma Piqueras (2011, p. 12), «de las diversas formas de afrontar el pasado, la relación más frecuente con un pasado incómodo consiste en ignorarlo si se puede, en modificarlo si se deja, en reducirlo a la menor expresión y significado si no hay más remedio que mencionarlo». Y lo que se ha hecho en España ha sido ignorarlo, de tal manera que no se habla nunca de la trata de esclavos negros llevada a cabo por nuestro país durante varios siglos. Tampoco se habla de la esclavización de los indígenas americanos. Pero, añade Piqueras, entre 40 y 50 millones de personas desaparecieron sin dejar rastro ni descendencia en el Nuevo Mundo. Y más de doce millones de personas negras fueron transportadas por el Atlántico en condiciones de hacinamiento, enfermedades, sed, hambre y terror psicológico, para ser vendidos en las Indias. España no fue el país que más participó en ese traslado, pero colaboró cuanto pudo. De hecho, subraya Piqueras, el imperio español se caracterizó por su inequívoca impronta esclavista, saltándose los tratados internacionales que había firmado por los que se prohibía el comercio de africanos a partir de 1820. En ese momento, concluye Piqueras (2011, p. 16), comenzó el periodo de trata clandestina, que hasta su cese regular en 1867 llevó a las Antillas a muchos miles de africanos, entre 468.000 según unos cálculos (Eltis, 1987, p. 245) y 875.000 según otros (Pérez de la Riva, 1976, pp. 129-130), contraviniendo tanto los acuerdos internacionales suscritos como la propia legislación penal española.

Por otra parte, merece la pena destacar el papel desempeñado por las iglesias cristianas en la esclavitud. Al igual que hicieron los intelectuales ilustrados, tan amantes de la igualdad entre todos los seres humanos, tampoco los obispos y clérigos cristianos criticaron lo más mínimo las prácticas esclavistas, a pesar de no cansarse de pregonar que todos somos hermanos. «En la Iglesia católica había, desde hacía algún tiempo, cierta incomodidad sobre el tema, pero los documentos de la corona y del pontificado continuaban denunciando más bien la

esclavitud de los apacibles indios que la de los competentes africanos [...] El papa Urbano VII (Barberini), en una carta de 1639 a su representante en Portugal, condenaba de modo absoluto la esclavitud y amenazaba con la excomunión a quienes la practicaran, denuncia derivada explícitamente de la visita de jesuitas españoles a Roma para protestar contra la esclavitud de miles de indios brasileños por los *bandeirantes* de São Paulo. La declaración del papa Urbano provocó una gran conmoción en Brasil [...] pero, una vez más, la controversia se refería solamente a los esclavos indios» (Thomas, 1998, p. 445). Es más, «todas las tendencias cristianas participaron en la trata. Habitualmente la iglesia que dominaba en el puerto decidía la posición religiosa de los mercaderes del mismo. En Liverpool, Londres y Bristol la mayoría de los tratantes eran anglicanos; en Nantes, Burdeos, Lisboa, Sevilla y, desde luego, Bahía y Luanda, la mayoría eran católicos. Pero en La Rochelle casi todos eran hugonotes, del mismo modo que en Middelburgo eran calvinistas» (Thomas, 1998, p. 295). Y, según Thomas, también los cuáqueros participaron en la trata de esclavos africanos, sobre todo en Nueva Inglaterra. Puede que el obispo del Algarbe fuera «el único príncipe de la Iglesia que enviara una carabela a África, en 1446. Pero otros dignatarios espirituales eran accionistas de los viajes de la trata. El cardenal Enrique, hermano del rey Felipe III de España, fue, a través de sus secretarios, un formidable tratante con destino a Buenos Aires, a comienzos del siglo XVII. Tanto los jesuitas como sus enemigos tradicionales también participaban» (Thomas, 1998, p. 297).

Pero los papas no solo apoyaron la trata de esclavos de los portugueses, es que nunca condenaron las inhumanas prácticas esclavistas. Pío II sí lo hizo, pero solo con respecto a los que se habían convertido al cristianismo. Es más, aunque, como consecuencia de las denuncias que, desde el púlpito, hizo en La Española el dominico fray Antonio de Montesinos, comenzó una duradera controversia sobre el trato que debía darse a los indios, pero del trato a los negros no se dijo nada. Es más, como dice Thomas (1998, p. 121), «la tendencia a declarar fuera de la ley la esclavitud de los indios en el imperio español, como resultado de la campaña de fray Bartolomé de las Casas y otros dominicos, estimuló, naturalmente, el comercio de esclavos negros», de manera que, entre 1575 y 1592, solo de Angola se sacaron tal vez más de 50.000. «Los sacerdotes se aseguraban de que los esclavos fuesen bautizados al nacer o cuando los capturaban, y le daban la absolución a la hora de la muerte, pero en ningún otro momento la Iglesia les

prestaba la menor atención. A pesar de las dudas grandilocuentes del Vaticano sobre la cuestión, expresadas más o menos cada medio siglo en lenguaje muy claro, no parece que ningún sacerdote dirigiera admoniciones a su rebaño, en Cuba, por comprar y ni siquiera por vender esclavos. De hecho, a veces en la misa se anunciaban las ventas de esclavos del domingo siguiente» (Thomas, 1998, p. 630).

Además, «la cultura española del Renacimiento llevó a cabo un esfuerzo extraordinario de legitimación intelectual de la esclavitud sobre bárbaros, infieles y negros. Teólogos, canonistas y juristas rescataron los textos de Aristóteles, de San Agustín y de Santo Tomás para ilustrar que el sometimiento del esclavo era justo conforme al derecho natural, de genes y eclesiástico» (Piqueras, 2011, p. 212). Ciertamente, hubo clérigos, empezando por Bartolomé de las Casas y otros como Francisco de Vitoria o Ginés de Sepúlveda, que criticaron duramente la injusticia que suponía la esclavización de los indios. Pero nunca se dijo lo mismo con respecto a la de los negros, excepto en dos casos: los frailes Francisco José de Jaca (español) y Epifanio de Moirans (francés), que coincidieron en La Habana, escribieron sendos libros contra la esclavitud de los africanos y fueron expulsados de Cuba en 1682, precisamente por sus prédicas en contra la esclavitud de los negros y a favor de su libertad.

Pero los españoles no solo ofendían la dignidad de miles de personas esclavizándolas, es que, además, trataban muy mal a sus esclavos negros. Una prueba evidente es su esperanza de vida que, evaluada por sus propios dueños, era de entre 15 y 20 años de trabajo. Otra prueba es la baja natalidad entre ellos, lo que se debía, además de a la gran desproporción existente entre hombres y mujeres, a que, como forma de protesta, se resistían a tener hijos para no procrear esclavos, de forma que, con esa finalidad, provocaban muchos abortos e incluso se implicaban en infanticidios. «Sin duda, los comerciantes y sus financieros entran en la moderna categoría de genocidas, no porque buscaran la destrucción física de un grupo étnico, sino porque para obtener beneficios y minimizar riesgos no tuvieron inconvenientes en sacrificar la vida de una parte de la mercancía humana, integrada en exclusiva por africanos, y condenar al resto a una vida sin libertad y jalonada de sufrimiento. Probablemente hablar de “holocausto africano” sea inadecuado, porque cuestiona la singularidad de la masacre perpetrada con el pueblo judío por el nazismo y la finalidad exterminadora de aquel. El

comercio transatlántico no buscaba el exterminio de la población negra, sino su utilización como mano de obra, sin reparar en los costes humanos y las pérdidas tan elevadas que ocasionaba. Fue, en cambio, un “africanicidio” [...], previa deshumanización de su naturaleza para reducirlo a un valor de uso y a un valor de cambio, que por las circunstancias en las que desarrollaría su existencia, si sobrevivía a la travesía intermedia, suponía una corta esperanza de vida y el despojo, para la mayoría, de las experiencias vitales propias de la condición humana. Si los negreros que hicieron posible el comercio fueron encumbrados a posición elevada, admitidos por la buena sociedad de la época que sospechaba, pero no quería saber, y distinguidos por la Corona, no por ello la huella de su riqueza se hace más respetable. De nada sirve afirmar, como es habitual escuchar, que eran personas de su tiempo, pues la ley, la moral y la opinión condenaban en la mayoría de los países, España entre ellos, ese comercio infame» (Piqueras, 2011, pp. 210-211). De hecho, después de la abolición de la esclavitud, España siguió con la trata de esclavos africanos durante años, hasta 1886, con el apoyo de la monarquía y sin que ningún armador negrero fuera nunca condenado por la justicia española. Por el contrario, numerosos negreros «escalaban en la alta sociedad insular y recibieron títulos nobiliarios de la Corona. Sus descendientes inmediatos enlazaron fácilmente con la vieja aristocracia española. Comerciantes, factores y capitanes de barco, después de retirarse del negocio, se instalaron en Barcelona y los pueblos de la Costa Brava, en Santander, Cádiz y Valencia, donde, rodeados de leyendas y sospechas, fueron recibidos a título de indios con fortuna. [...] En general, un discreto silencio literario ha acompañado la contra-epopeya de quienes, a su modo, de un modo ignominioso, hicieron las Américas y proporcionaron uno de los yacimientos de capital sobre el que se edificó la sociedad española del siglo XIX» (Piqueras, 2011, pp. 117-118).

9.3. Cifras y beneficios

En cuanto a las cifras de africanos llevados a América, Thomas (1998) calcula que en el primer cuarto del siglo XVII fueron unos 200.000, de los que la mitad fueron a Brasil, más de 75.000 a la América española, 12.500 a Santo Tomé y unos pocos centenares a Europa. Esas cifras aumentaron mucho con la entrada de Inglaterra en el negocio de la trata. Así, solo entre 1740 y 1750, los buques ingleses transportaron a América más de 200.000, buena parte de ellos

para trabajar en las plantaciones de Virginia y las Carolinas, muchos más de lo que ningún otro país había transportado en una década. Y entre 1761 y 1770 otros 250.000. A lo largo de los últimos veinte años del siglo XVIII y los ocho primeros del XIX, a pesar de que por entonces ya se estaba discutiendo en el Parlamento inglés la abolición de la esclavitud, se introdujeron, solo en Estados Unidos, tantos africanos como en todos los años anteriores desde el siglo XVII. En el XVIII los franceses abolieron la esclavitud en sus colonias, pero en 1802 Napoleón volvió a legalizarla. No era fácil terminar con la trata de esclavos africanos. Había muchos intereses por medio y eran muchas las personas, a menudo poderosas, que sacaban beneficio de ello. Y es que el asunto de las cifras tenemos que relacionarlo con los beneficios, el negocio y el proceso de industrialización. De hecho, son numerosas las grandes fortunas, muchas españolas, que tienen su origen en la trata de esclavos, en especial en Cuba, durante el siglo XIX (Piqueras, 2011). De hecho, «el capitalismo español, entre otras raíces, hunde una, vigorosa y profunda, en el limo de la esclavitud americana» (Piqueras, 2011, p. 21). José Antonio Piqueras nos muestra un ejemplo: Leopoldo O'Donnell, conde de Lucena y después duque de Tetuán, ministro y presidente del Gobierno durante más de seis años, fue capitán general de Cuba entre 1843 y 1848 y ordenó una cruel represión contra los esclavos. Habaneros ilustres, buenos conocedores del negocio porque sus familias lo practicaban, explicaron al cónsul británico en La Habana que, por cada africano desembarcado, O'Donnell percibía de los negreros 51 pesos. Los ingleses calcularon que así acumuló unos 500.000 pesos (Franco, 1980, p. 233), unos diez millones de reales en moneda de la Península.

Además, «por la complejidad del negocio, el de los esclavos africanos pronto se convierte en uno de los exponentes más adelantados de la moderna empresa mercantil capitalista» (Piqueras, 2011, p. 38). Por eso, añade Piqueras, «la conquista y colonización del Nuevo Mundo brinda un giro más que sobresaliente a la trata» (p. 39). Desde 1518, los españoles introdujeron en sus colonias americanas negros africanos y no dejarían de hacerlo hasta tres siglos y medio después. Antes habían hecho lo mismo con los indígenas. Aunque resulta difícil dar cifras precisas, probablemente fueron cientos de miles los indios sacados de América Central para utilizarlos o venderlos como esclavos. Por ejemplo, unos 90.000 esclavos indios fueron destinados a las minas de oro de Nueva España (Piqueras, 2011, pp. 62). «Los esclavos indios fueron ocupados en las minas, las pesquerías

de perlas, los trabajos portuarios, las primeras haciendas y en una proporción destacada se destinaron al servicio personal en calidad de criados. Todos los españoles, hasta los más miserables, los tenían. Las indias jóvenes eran para su disfrute» (Piqueras, 2011, p. 62). Posteriormente, para esos mismos trabajos los indios fueron sustituidos por africanos. Se calcula que solo entre 1821 y 1867, fueron llevados a las colonias españolas entre 500.000 y 700.000, y tal vez más de un millón a Cuba (Piqueras, 2011).

Por tanto, no debe extrañarnos que «la esclavitud temprana y masiva de indígenas y, a continuación, la esclavitud de los africanos, estuvo en el origen del éxito de la empresa colonial española en América. Portugal transportó a América más africanos aún que España. Con los precedentes de los dos imperios ibéricos, otras naciones europeas –Holanda, Inglaterra, Francia, Dinamarca– se apresuraron a promover en el siglo XVII sus respectivas factorías en el área del Caribe y en las colonias de América del Norte, pronto convertidas en prósperas plantaciones de frutos tropicales, para las que demandaron suministros ingentes de esclavos» (Piqueras, 2011, pp. 60). La esclavitud de los siglos XVII y XVIII fue un poderoso coadyuvante de la Revolución Industrial de Inglaterra dado que proporcionó capitales para la industria y los mercados africanos en una etapa crucial de creación del mercado, cuando la demanda local hubiera sido insuficiente para consolidarlos. El «comercio triangular» entre Europa, África y América, facilitado y fomentado por la trata de esclavos, constituyó uno de los pilares del nacimiento del capitalismo. El comercio ilegal fue la principal actividad económica de la época, constituyendo el primer ejemplo de economía global. De hecho, se calcula que el número de africanos extraídos de su tierra y transportados durante casi cuatro siglos a las colonias españolas de América fue de entre 1.295.000 (Eltis *et al*, 2008) y 1.552.000 (Curtin, 1969, p. 46): representan en torno al 12 por ciento del total de los africanos llevados al Nuevo Mundo, el tercer gran colectivo después del portugués y el inglés. «La experiencia del africano encerrado en la barriga de un barco y conducido a alta mar era de auténtico terror psicológico. Encerrados y aglomerados, sin apenas ventilación, los respiraderos y las escotillas eran precintados durante las tormentas. El calor excesivo, el aire enrarecido, las defecaciones de los disentéricos, la convivencia con enfermos extendía las infecciones. Cuando no podían ser tratados por algún tripulante que hacía las funciones de enfermero, el capitán ordenaba que fueran

arrojados, todavía con vida, por la borda. Fue una práctica corriente. Más adelante, después de 1820, cuando el comercio se convirtió en ilegal y las sanciones fueron haciéndose más severas, con penas de presidio y amenaza de horca, las embarcaciones que se veían perseguidas a distancia por los cruceros británicos lanzaban al mar los cargamentos y procuraban deshacerse de los hierros que delataban el negocio que se llevaba a cabo. Los informes elevados a las autoridades inglesas y los testimonios incluyen numerosos casos. A lo anterior se suman los naufragios que se llevaron al fondo del océano no pocos navíos» (Piqueras, 2011, pp. 126-127). Además, añade Piqueras (pp. 130-131), «disentería, dengue, fiebres (fiebre amarilla), escorbuto, neumonía, viruela, gangrena, hemorragias, son las causas más frecuentes de muerte identificada en los diarios de navegación. Las rozaduras de los hierros y las tablas ocasionaban grandes llagas y afecciones. [...] La merma durante la travesía de uno de cada cinco esclavos de media de los embarcados en África se mantuvo durante la práctica totalidad del período del que se dispone de datos. Representa la muerte de un mínimo de 280.000 personas (hasta 350.000 si tomamos un monto más alto de comercio de africanos) en alta mar para la trata hispana. Los armadores eran conscientes de esta pérdida tan elevada y, aunque amenazaba el beneficio, la asumieron en sus cálculos al establecer los costes de cada expedición, e hicieron muy poco por reducirla», pues el beneficio seguía siendo más valioso que la vida y el sufrimiento de tantas personas cuyo único delito había sido haber nacido en el África negra.

9.4. El traslado de africanos negros a América

Aunque ya hemos visto algo de este tema, creo que resulta de utilidad insistir algo más. El calvario a que se sometía a los esclavos negros comenzaba ya con su captura, cuando era por secuestro (aunque no era frecuente), y seguía a lo largo del peligroso camino que tenían que hacer hasta llegar a América. Muchos morían, por unas causas u otras, antes de llegar al mar, y después tal vez perecían entre el 20 y el 50 % de los que llegaban al barco. Así, en 1625, de 1.211 esclavos llevados por cinco buques enviados a Brasil por el gobernador de Angola murieron 583 en la travesía y otros 68 poco después de desembarcar, lo que supuso una pérdida de más del 50 %. Y, evidentemente, quienes tenían que hacer un viaje más largo, por ejemplo, desde el África oriental, tenían más tasas de mortalidad, como le ocurrió al capitán del George que, en la travesía que hizo en 1717, de

los 594 esclavos que transportaba solo consiguió desembarcar en América a 98. Además, como ya he dicho, las condiciones de vida en los barcos eran tan duras que a veces se rebelaban los africanos, siendo reprimidos ferozmente, aumentando así el número de muertos. Y una vez que desembarcaban, les esperaba un trabajo tan duro que reducía mucho su esperanza de vida. Por ejemplo, la de un esclavo dedicado a cortar caña de azúcar o a recoger granos de café, en Brasil, era de unos ocho años de trabajo.

Por una serie de razones, entre las que no estaba la dignidad de las personas africanas, se inició un largo proceso de abolición de la esclavitud. Más en concreto, la ley británica de 1833 emancipó a 750.000 esclavos, quedando libres el 1 de agosto de 1834 los niños menores de seis años (curiosamente, los que no trabajaban), mientras los mayores de esa edad y los adultos tendrían que seguir trabajando como aprendices durante seis años, antes de ser emancipados. Pero esta propuesta fue aceptada por los propietarios de los esclavos gracias a la indemnización de veinte millones de libras que les dieron, cifra astronómica para aquella época. No es raro, pues, que los propietarios quedaran muy satisfechos, pero los esclavos no. Además, ello «no condujo a la abolición definitiva de la trata internacional [...] parece que incluso en la tercera década del siglo XIX el número de esclavos transportados de África al Nuevo Mundo fue de entre 60.000 y 70.000 por año, es decir, más de 500.000 en ese decenio, más que en los momentos culminantes de la trata a finales del siglo XVIII. Las ganancias por esclavo entregado eran superiores a las del siglo XVIII, acaso de tres a cinco veces mayores. En África los precios bajaron y al parecer lo que se veía como interferencia de los británicos hizo subir los precios en las Américas» (Thomas, 1998, p. 643). De hecho, añade Thomas (1998, p. 718) «las ganancias fueron mayores en el siglo XIX que en el anterior [...] Lord John Russell, primer ministro británico a finales de los cuarenta, al examinar las cifras presentadas a una comisión de la Cámara de los Comunes, constató que un cargamento de esclavos que en la costa africana costaba cinco mil dólares, se vendía en Brasil por veinticinco mil, con un beneficio del 400 por ciento». Como era de esperar, después de la prohibición internacional de la esclavitud, los precios de los esclavos subieron, lo que hizo que se mantuviera la trata de africanos.

Si Inglaterra abolió la esclavitud en los años treinta del siglo XIX, Portugal lo hizo en 1869, más tarde que en cualquier otro país europeo y solo en la metrópoli.

De hecho, siguió extrayendo esclavos de sus colonias de Mozambique y Angola. Entre 1876 y 1900 hizo lo mismo que Francia en Senegal: liberó a los esclavos, pero les obligó a trabajar unos años más de forma que seguían siendo esclavos de hecho. Portugal no abolió definitivamente la esclavitud en todo su imperio hasta 1875. Pero en 1879 todavía había en Brasil millón y medio de esclavos, muchos más que en 1800. Y es que, tras la abolición oficial, en África continuó la trata, obviamente con unos precios mucho más elevados que antes. La abolición de la esclavitud fue generalizándose, pero nunca desapareció del todo.

Si he dicho que en la trata de esclavos africanos y su traslado forzado a América destacaron Portugal, España e Inglaterra, también Francia tuvo su protagonismo. En efecto, Francia «no tuvo ningún problema en expoliar Haití durante décadas y prolongar hasta 1950 el tributo impuesto por el Estado monárquico en 1825.» (Piketty, 2021, p. 110). En la década de 1780, la proporción de esclavos alcanzaba el 90 % de la población total en la colonia francesa de Santo Domingo (la actual Haití), el 95 % si incluimos los mestizos, los mulatos y los negros libres. A finales de esa década, la colonia contaba con más de 470.000 esclavos y solo 28.000 blancos. Es más, «las Antillas británicas y francesas en el siglo XVIII y principios del XIX constituyen el ejemplo histórico mejor documentado de sociedades en las que los esclavos constituían casi la totalidad de la población» (Piketty, 2021, p. 87). No es extraño, pues, que fuera en esa isla donde se produjo una de las mayores y más exitosas rebeliones de los esclavos negros (1791-1804), siendo el primer movimiento revolucionario de América Latina (Merman, 2010), y que supuso la abolición de la esclavitud en esa colonia francesa y su independencia, de forma que Santo Domingo pasó de ser una colonia regida por un sistema esclavista a ser el lugar donde se produjo la única rebelión de esclavos exitosa de la historia (Martínez Peria, 2016). La sublevación comenzó en agosto de 1791, no por azar poco después de la Revolución francesa y empujados por esta, con la participación de miles de «esclavos fugitivos» que se habían refugiado durante décadas en las montañas, haciéndose pronto con el control de las plantaciones, mientras sus dueños huían del país. Francia no tuvo más remedio que decretar la emancipación de los esclavos en agosto de 1793, pero indemnizando fuertemente a los propietarios, cosa que hicieron luego también los ingleses y los estadounidenses cuando abolieron la esclavitud. Al fin y al cabo, una de las cosas que hizo la Revolución francesa fue reforzar el derecho supremo de la propiedad. Pero no

se indemnizó a los esclavos por todo lo que habían trabajado y habían sufrido. Solo recientemente se están haciendo algunas propuestas en tal sentido (véase Darity y Mullen, 2020). En lugar de recibir indemnización alguna, los negros fueron discriminados de diferentes maneras hasta la actualidad, sobre todo en Estados Unidos. El éxito de esta rebelión repercutió enormemente en otras colonias americanas, por lo que Haití, el nuevo país independiente y abolicionista, se granjeó la enemistad de las potencias europeas implicadas en la esclavitud, así como la de los propietarios de esclavos de todas las colonias americanas, incluido el presidente de EE. UU., Thomas Jefferson, propietario de más de 600 esclavos, a pesar de que había afirmado que «todos los hombres nacen iguales». Pero, al parecer, consideraba que los negros no eran hombres e hizo todo lo posible para que la esclavitud no fuera abolida.

El éxito de la rebelión de los esclavos negros en Santo Domingo tuvo tres efectos importantes: la abolición de la esclavitud en la isla, la expulsión del gobierno colonial francés –de forma que el 1 de enero de 1804 la colonia se independizó de Francia con el nombre de Haití, siendo la segunda nación americana independiente, después de EE. UU.– y su influencia sobre la abolición de la esclavitud en otros territorios. Así, el 23 de agosto de 1833 se aprobó la *Slavery Abolition Act* (Ley de abolición de la esclavitud) por la que desde el 1 de agosto de 1834 se abolía la esclavitud en las colonias británicas. Pero España siguió practicando la esclavitud en sus colonias durante 32 años más.

Las consecuencias que para el continente africano tuvo la trata fueron dramáticas. Según Piqueras (2011, p. 121), entre 20 y 30 millones de africanos fueron arrancados del continente. El impacto demográfico a largo plazo se ha estimado en 200 millones de habitantes sobre la población total que el continente hubiera podido tener en el año 2000. Sus consecuencias para la vida social y el desarrollo han sido inequívocas, al frustrar una revolución pacífica de las actividades del continente africano. Otra consecuencia fue el incremento de los prejuicios contra los negros, con la ayuda de los propios científicos, sobresaliendo los psicólogos, que repitieron una y otra vez su menor capacidad mental. «La actitud hacia el negro africano comprendió siempre, desde el siglo XV, una valoración racial y racista que lo situaba en un plano de inferioridad moral e intelectual» (Piqueras, 2011, p. 122). Era el mecanismo psicosocial para justificar y legitimar las prácticas esclavistas.

Pero la esclavitud tuvo también importantes efectos para América. «Las consecuencias para las Américas fueron notables. En los primeros tres siglos y cuarto de la actividad negrera europea, entre 1492 y 1820, en el Nuevo Mundo entraron cinco veces más africanos que europeos blancos, y en los cincuenta años siguientes, hasta 1870, la importación de negros en Cuba y Brasil probablemente igualó a la inmigración de blancos en el continente entero. La mayoría de las grandes empresas de los primeros cuatrocientos años de colonización debían mucho a los esclavos: el azúcar en Brasil y luego en el Caribe; el arroz y el índigo en Carolina del Sur y Virginia; el oro en Brasil, y, en menor medida, la plata en México; el algodón en las Guayanas y luego en Norteamérica; el cacao en lo que es ahora Venezuela y, sobre todo, en todas partes, el desbroce de tierras para la agricultura. La única gran empresa americana que no usó mucha mano de obra negra fue la minería de plata en Potosí, en Perú, y eso solo porque los africanos no podían trabajar con su habitual energía a tal altitud. Durante cuatro siglos los criados de las Américas, entre Buenos Aires y Maryland, fueron casi todos esclavos negros» (Thomas, 1998, p. 787).

En definitiva, entre 11 y 13 millones de africanos negros fueron trasladados a la fuerza y con violencia a América para hacer los trabajos más duros y en las condiciones más perversas. Muchos de ellos perdieron la vida en origen, en África, como consecuencia de la operación de captura, en los casos en los que así se hizo; muchos más perdieron la vida en la travesía, dadas las nefastas condiciones en que tuvieron que hacerla, sobre todo a causa de enfermedades contagiosas de todo tipo; y luego, casi todos los demás perdieron la vida a causa del trabajo duro, la alimentación escasa y el trato denigrante que recibían. Su esperanza de vida fue muy baja. Este, uno de los legados –tal vez el más vergonzoso y denigrante– de nuestros países europeos, tan civilizados, tan cultos y tan cristianos. Lo que nunca nos faltó –ni nos falta ahora– es la soberbia, el engreimiento y el mirar continuamente a los miembros de las demás culturas por encima del hombro, sintiéndonos superiores. Los europeos fuimos y seguimos siendo supremacistas. Se habla mucho, y con razón, del nazismo y del holocausto infame que provocó, pero ello no ha sido sino un solo capítulo –particularmente atroz– de nuestra historia. No tenemos de qué estar orgullosos ni los españoles, que empezamos la horrorosa «hazaña» de llevar esclavos negros a América después de arrancarlos con violencia de su tierra, de su cultura, de sus costumbres y de su familia; ni

pueden estar orgullosos los portugueses, que monopolizaron la trata de esclavos; ni los ingleses que sobrepasaron con creces a españoles y portugueses en cuanto al número de esclavos negros llevados con violencia a tierras americanas. Deberíamos estar avergonzados, y no lo estamos.

La trata de esclavos africanos llevada a cabo por las potencias que a sí mismas se consideraban civilizadas y cristianas (principalmente España, Portugal e Inglaterra) tuvo un inicio y tuvo un final, pero duró cuatro siglos que fueron larguísimos para millones de africanos. Su final tuvo mucho que ver con la Revolución estadounidense, aunque no solo con ella. «En los años treinta del siglo XIX, Gran Bretaña llevó a cabo la completa emancipación de los esclavos de su imperio, como lo hicieron muchos de los Estados Unidos, y los nuevos países latinoamericanos. Esto fue en parte resultado de la renovada agitación del movimiento antiesclavista, encabezado por el Parlamento por Thomas Fowell Buxton; en parte se debió al efecto de la destructora rebelión de los esclavos de Jamaica en diciembre de 1831, y en parte a que el gobierno *whig* (liberal) estaba dispuesto, después de aprobarse en 1832 la ley de reforma del sistema electoral (la llamada Gran Reforma), a prestar atención preferente a algo nuevo» (Thomas, 1998, p. 642). El 7 de octubre de 1886 accedieron a la libertad los últimos 25.000 africanos y descendientes de africanos, los últimos esclavos de Cuba y de los dominios españoles. «Se cerraban cuatro siglos de esclavitud negra en América. Desaparecía una institución milenaria de la realidad social española. Después... después quedaba en América una herencia de segregación y, salvo excepciones contadas, una cultura sazónada de racismo que llevaría tiempo superar» (Piqueras, 2011, p. 252), y que en Estados Unidos está muy lejos aún de ser superada, como veremos enseguida.

Antes de terminar este apartado quisiera insistir más en la abolición de la esclavitud. Como escribe Scheidel (2018, p. 382), «la abolición de la esclavitud podría parecer una fuerza prometedora de igualitarismo». Pero no lo fue, primero porque, tras la abolición, la población negra siguió siendo calificada de *infrahumana*, y segundo, porque fue la consecuencia de las revueltas sangrientas de los esclavos. En efecto, en las colonias francesas fue la exitosa rebelión de los esclavos de Santo Domingo la que consiguió la emancipación. Y en el ámbito anglosajón, «la abolición fue el resultado de grandes revueltas de esclavos en Demerara en 1823 y especialmente en Jamaica en 1931 y 1932, La Ley de Emancipación llegó en

1833 y obligaba a los esclavos liberados a trabajar gratis para sus antiguos dueños durante varios años y ofrecía compensación a los propietarios.» (Scheidel, 2018, p. 383). De manera parecida, la abolición de la esclavitud durante la guerra civil en Estados Unidos fue violenta y no compensó a los propietarios de los esclavos, aunque posteriormente se les indemnizó por daños colaterales, lo que redujo mucho la potencial reducción de las desigualdades. También la abolición de la esclavitud en Cuba se vio empujada por la Revolución cubana de 1868.

En suma, «en términos generales, cuanta más violencia había, ya fuese por una guerra o una revolución, más eficaz podía ser el igualitarismo (como en Haití, gran parte de América Latina y Estados Unidos), mientras que, cuanto más pacífico era el proceso, más compensación se ofrecía y más posibilidades de negociación tenían los propietarios en la transición (como en las colonias británicas y francesas). Solo Brasil constituye una excepción parcial. Por tanto, las emancipaciones que redujeron la desigualdad de riqueza normalmente estuvieron asociadas a fuerzas igualadoras violentas. Por el contrario, las emancipaciones que fueron a la vez pacíficas y significativamente igualadoras (en términos materiales) eran infrecuentes, puede que incluso inexistentes. De manera más general, las aboliciones tuvieron un efecto aún más débil en la desigualdad de ingresos, teniendo en cuenta que los propietarios solían conservar el control de la tierra y podían beneficiarse de otras explotaciones de la mano de obra, como el trabajo de mediero en el sur de posguerra» (Scheidel, 2018, p. 384).

Pero finalmente se consiguió abolir la esclavitud, por fin. Pero costó mucho, y además, ni siquiera conllevó a castigo alguno para los esclavistas, ni pagaron ningún precio quienes se habían enriquecido con la trata de seres humanos: siguieron viviendo muy bien, ellos y sus descendientes, con el dinero obtenido con el maltrato a millones de africanos. Los esclavistas no solo no fueron castigados, sino que fueron recompensados: se abolió la esclavitud, pero se hizo con una fuerte indemnización por cada uno de los esclavos emancipados. Y, en contra de lo que suele creerse, buena parte de los esclavos no ganaron mucho con la emancipación, unos porque tuvieron que seguir trabajando «como aprendices» para sus antiguos amos durante cinco o seis años, y otros porque no encontraron un nuevo trabajo para poder seguir alimentando a su familia. Y en todos los casos, los negros siguieron siendo estigmatizados, despreciados, humillados y excluidos en los países donde teóricamente ya eran libres, sobre todo en Estados

Unidos, hasta el punto de que, en ese país, aún mantienen hoy día una condición de subordinación a todos los niveles. Se consiguió la abolición de la esclavitud y la emancipación de los esclavos negros, pero no se les restituyó la dignidad que se les había robado ni sirvió la abolición para reducir ni los prejuicios contra ellos ni las desigualdades económicas y sociales entre blancos y negros, como veremos en el próximo apartado.

9.5. La situación de los afroamericanos en Estados Unidos

Como nos recuerda Therborn (2015, p. 248), en Estados Unidos, la mayor parte del racismo institucional permaneció intacto al acabar la Segunda Guerra Mundial, de manera oficial en el Sur y *de facto* en el Norte. A pesar de que en el Ejército se había eliminado la segregación racial en 1948, sin embargo, en teatros, cines, hoteles y restaurantes se mantuvo. Me extenderé en este tema no solo para ver la situación real que todavía hoy día viven millones de personas de color en Estados Unidos, sino también para mostrar las raíces, excusas y justificaciones de las políticas racistas, y cómo las personas racistas necesitan sentirse superiores a las minorías para así superar sus complejos de inferioridad: esa es la esencia del supremacismo blanco. Y ello es utilizado por el nuevo capitalismo para el que los pobres sobran. Y sobran porque no son ni productores ni consumidores. Por eso son considerados pura escoria, desechos de los que hay que deshacerse, para lo que se utiliza sobre todo el sistema penal. El caso más paradigmático es la criminalización de la población negra en EE. UU., que veremos con cierto detenimiento siguiendo principalmente el libro de Michelle Alexander (2014), libro cuya lectura recomiendo encarecidamente.

Durante los años ochenta y los noventa se dio un fenómeno extraño en EE. UU., y es que a medida que disminuía la delincuencia aumentaba enormemente el número de reclusos, de manera que, en 2005, la proporción de personas que decían haber sido víctimas de un delito (robo, ataque personal, etc.) bajó al 42,7 % y en 2009 al 38,7 %. Tanto los robos de coches o en viviendas, como las agresiones sexuales o las agresiones físicas habían bajado. Por ejemplo, los robos con violencia e intimidación bajaron de un 9,2 % en 1989 a un 5,6 % en 2009. Y, sin embargo, los encarcelamientos no dejaron de aumentar, sobre todo de personas de color. De hecho, EE. UU. cuenta con el 25 % de todos los presos del mundo, cuando

solo tiene el 5 % de la población mundial, y una parte desproporcionada de esos presos son afroamericanos (Stiglitz, 2020, p. 266).

Además, comparados con los blancos, los afroamericanos tienen una menor esperanza de vida, más desempleo, peores empleos y peor pagados, menor nivel educativo, etc. Las razones de todo ello «son complejas, pero están ligadas a una larga historia de discriminación jurídica y social» (PNUD, 2016, p. 61), lo que hace que sigan discriminados, en especial en el ámbito penal. Según Lois Wacquant (2010), la criminalización de la exclusión social y de la marginalidad urbana, así como la ruptura con los anteriores modelos de asistencia social, son una consecuencia directa del programa político neoliberal. El desorbitado crecimiento de la población penitenciaria en Estados Unidos y la falta de relación entre ese dato y la evolución de los delitos, llevan a Wacquant a afirmar que a partir de los años setenta se produjo una ruptura radical en la relación entre criminalidad y penalidad en ese país. Mientras que los delitos se mantienen estables desde 1970, los reclusos han pasado de los 93 por cada 100.000 habitantes en 1972 a los 751 en 2008 (Wacquant, 2010): lo que ha cambiado ha sido la visión que tiene la sociedad estadounidense de la criminalidad por culpa del miedo que les ha sido inculcado premeditadamente desde los medios de comunicación y la gestión que hizo el Estado de la delincuencia.

La ONG Human Rights Watch dice que en Estados Unidos los procedimientos para sentenciar son desproporcionados, cruelmente excesivos y claramente discriminatorios contra las personas de color, sobre todo contra los jóvenes negros varones y pobres, como ocurre, tal cual nos recuerda Noam Chomsky, con las leyes que consideran la posesión de 28 gramos de droga o una venta callejera por un valor superior a los 20 dólares como un delito más grave que violar a una persona mayor de diez años, que incendiar un edificio habitado o que causar la muerte a otro ser humano cuando se tiene la intención de infligirle heridas graves. El 84 % de los ingresos en la cárcel corresponde a delinquentes no violentos, la mayor parte relacionados con la droga (incluida la posesión), que constituyeron el 22 % de los ingresos en prisiones federales en 1980, el 42 % en 1990 y el 58 % en 1992. Lo que ha cambiado es que el estado neoliberal ha roto el consenso socialdemócrata de cohesión social, y las bolsas de pobreza en medio de la opulencia de las sociedades de consumo han dejado de ser gestionadas desde los ser-

vicios sociales para serlo desde los servicios penales. Ya no les interesa ayudar a los pobres, sino criminalizarlos, y que ello sirva de advertencia a los trabajadores sin cualificar para que acepten cualquier empleo que se les ofrezca por nefastas que sean sus condiciones laborales y salariales.

Cientos de años después de su fundación, «Estados Unidos sigue sin ser una democracia igualitaria. Los argumentos y racionalizaciones que se han sacado a relucir en apoyo de la exclusión racial y la discriminación en sus distintas formas han ido cambiando y evolucionando, pero el resultado se ha mantenido invariable en gran medida. En la actualidad, un elevado porcentaje de hombres negros en Estados Unidos tiene vedado legalmente el derecho al voto, al igual que ha sucedido durante la mayor parte de la historia del país. Esos hombres también están sujetos a una discriminación legalizada en cuanto a empleo, vivienda, educación, acceso a los servicios sociales y participación en jurados, al igual que les pasó a sus padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos» (Alexander, 2014, p. 18). Lo único que ha cambiado para la población negra pobre, en especial para la masculina, «tiene menos que ver con la estructura fundamental de nuestra sociedad que con el lenguaje que se usa para justificar esa segregación. En una época donde el color racial es en apariencia invisible, ya no resulta aceptable socialmente usar la raza, de forma explícita, para justificar la discriminación, exclusión y el desprecio social. Así que no la usamos. Mejor que aludir a la raza, usamos nuestros sistemas de justicia penal para etiquetar a la gente de color como “delincuentes” y de esa forma mantenemos todas las prácticas que supuestamente habíamos dejado atrás. Hoy es perfectamente legal discriminar a los delincuentes de casi todas las formas en que antes era legal discriminar a los afroamericanos. Una vez se etiqueta a una persona como delincuente convicto, las antiguas formas de discriminación (en el empleo, en la vivienda, en la privación del derecho al voto, en la negación de las oportunidades educativas, de los cupones de alimentación y de otros subsidios públicos y en la exclusión de formar parte de jurados) de repente se vuelven legales. Como delincuente, apenas se tienen más derechos, y se podría decir que se recibe menos respeto, que cualquier negro que viviera en Alabama en el momento de la segregación racial. No es que hayamos acabado con el sistema de castas por razón de raza, solo lo hemos rediseñado» (Alexander, 2014, p. 18).

En Estados Unidos existe realmente «algo similar a una estructura de castas racial» (Alexander, 2014, p. 19) potenciado por la alianza entre la «Guerra contra las Drogas» y el sistema judicial-penitenciario. Tengamos en cuenta, subraya Alexander (2014, pp. 21-22), que «a la gente que ha estado en la cárcel raramente le cuesta identificar los paralelismos entre estas dos formas de control social. Cuando son puestos en libertad, a menudo se les niega el derecho a votar, se les excluye de los jurados y se les relega a una existencia racialmente segregada y subordinada. Por medio de una red de leyes, regulaciones y normas informales, todas las cuales se ven poderosamente reforzadas por el estigma social, esas personas se ven confinadas a los márgenes de la sociedad y contemplan cómo se les veda el acceso a la economía general. Se les niega de forma legal la capacidad de obtener un trabajo, acceder a una vivienda y a subsidios públicos, del mismo modo en que a los afroamericanos se les obligó a ser ciudadanos de segunda clase en la era de las leyes segregadoras Jim Crow». Y no olvidemos, añade Alexander (p. 22), que «la Guerra contra la Droga pudiera ser una conspiración racista para devolver a los negros a su sitio», el contragolpe de los blancos supremacistas contra los logros conseguidos por el Movimiento de Derechos Civiles. La Guerra contra las Drogas, pues, no es sino un capítulo más de la guerra contra los pobres. De hecho, en EE. UU. la respuesta penal al consumo de drogas de los negros es muy diferente de la que da al consumo de drogas de los blancos, de forma que llega a decir Alexander (2014, p. 23) que «la Guerra contra la Droga forma parte de un plan genocida del Gobierno para acabar con la gente negra».

En Estados Unidos los negros son considerados una casta inferior. Por eso se les encarcela, sobre todo si son pobres. Y cuando salen de la cárcel, pasan a formar parte de una nueva clase inferior: la de los delincuentes. Ello adquiere una gravedad inusitada si tenemos en cuenta que «más de la mitad de los jóvenes negros en muchas grandes ciudades está actualmente bajo el control del sistema penal (o lastrados con antecedentes penales)» (Alexander, 2014, p. 39). Los jóvenes varones negros están hoy día peor que en la época de Jim Crow. En efecto, durante ese periodo, «los negros estaban profundamente estigmatizados y segregados sobre la base de la raza, pero en sus propias comunidades encontraban apoyo, solidaridad, aceptación..., amor. Actualmente, cuando las personas a las que se les pone la etiqueta de delincuentes vuelven a sus comunidades, a menudo se les recibe con burla y desprecio, no solo por parte de los empresarios, los trabaja-

dores sociales y los funcionarios de la vivienda, sino también por sus propios vecinos, profesores e incluso miembros de sus propias familias. Esto es así, incluso si han sido encarcelados por faltas menores tales como la posesión y venta de pequeñas dosis de droga» (Alexander, 2014, p. 256). En algunos Estados, el 90 % de los condenados por delitos de drogas son negros. Además, con la globalización y la deslocalización de miles de empresas, la situación de la población negra ha empeorado mucho más aún que la de la población blanca. Los negros trabajaban en grandes empresas industriales, que son las que han desaparecido, y sobre todo en empleos que no exigían cualificación académica o profesional, de forma que, en 1954, el desempleo juvenil de blancos y negros era similar, e incluso ligeramente mayor el de los blancos entre los 16 y los 19 años. Pero ya en 1984 el desempleo de los negros cuadruplicaba al de los blancos, lo que los llevó a implicarse en pequeños delitos de trapicheo de droga, con lo que facilitaron la política de encarcelamiento masivo diseñada contra ellos. En definitiva, «en Estados Unidos hemos sido testigos del paso de un sistema de castas racial basado enteramente en la explotación (la esclavitud), a uno basado fundamentalmente en la subordinación (Jim Crow), y finalmente a uno definido por la marginalización (la encarcelación masiva)» (Alexander, 2014, p. 330).

Como dice Loïs Wacquant (2000, p. 380), «la división racial fue una consecuencia, no una condición previa a la esclavitud, pero una vez se instituyó, se fue separando de su función inicial y adquirió una potencia social propia». Por eso, después de desaparecer la esclavitud, la idea de raza siguió viva y, lo que es peor, también las actitudes racistas y las ideas supremacistas. Y también por eso tuvo que inventarse algo en EE. UU. que reemplazara a la esclavitud, que tuviera sus mismos efectos, pero donde no se hiciera visible el racismo: su criminalización a través de la llamada Guerra contra la Droga, de manera que cuando encarcelan a los negros, la gente percibe que estos solo tienen lo que se merecen.

Demos una ojeada a la historia: la respuesta que dieron los supremacistas blancos a la abolición de la esclavitud por la Decimotercera Enmienda, aprobada en 1865, fueron las leyes Jim Crow («iguales, pero separados», que constituyeron la base de la segregación racial en el Sur desde 1876 hasta 1965 y que en algunos aspectos se adelantó a las leyes segregacionistas nazis. Tales leyes hicieron obligatoria la segregación de la población negra: ya no eran esclavos, pero no podían aspirar a tener los mismos derechos que los blancos; constituían una raza infe-

rior a la blanca y, por tanto, no debían mezclarse con los blancos (segregación en el trabajo, en los transportes públicos, en los barrios, etc.). Además, aunque la esclavitud había sido abolida, seguía siendo apropiada como castigo por un delito. Por eso para los blancos era muy importante multiplicar los delitos de los negros, aunque fuera artificialmente. En ello se basó un siglo después la Guerra Contra la Droga, cuyo objetivo último era mantener a los negros segregados y encarcelados por cometer unos delitos que previamente habían sido fabricados intencionalmente por las leyes penales. De hecho, durante la década que siguió a la abolición de la esclavitud, los reclusos aumentaron diez veces más rápido que la población en general, y además eran desproporcionalmente negros. Y luego, a medida que los negros se implicaron en el Movimiento de los Derechos Civiles y fueron consiguiendo sus derechos en la década de los 60, los blancos acudieron a una nueva estrategia con la que consiguieron que no cambiaran las cosas: el encarcelamiento masivo de la población afroamericana, esta vez por consumo de drogas. En efecto, los blancos conservadores, racistas y supremacistas, sobre todo en el Sur, reaccionaron, una vez más, contra la nueva etapa de igualdad que se abrió gracias al Movimiento de los Derechos Civiles, y buscaron el establecimiento de un nuevo orden racial que, sin parecerlo, restableciera la segregación racial y el no reconocimiento a los negros de los derechos humanos y de ciudadanía. Así nació la nueva etapa del encarcelamiento masivo, con la «Guerra contra la Droga» como instrumento primordial. Esa «guerra» fue decretada por Nixon a primeros de los 70 y después, ya con más fuerza aún, por Reagan a partir de 1980. Más tarde, Bush padre, más aún Bush hijo e incluso Clinton¹ siguieron por la misma senda.² Solo comenzaron a cambiar las cosas con Obama en la Casa Blanca, aunque tal cambio se paralizó con la llegada a la presidencia

1 Clinton consiguió que el tema de la «lucha contra la delincuencia» ya no fuera solo de los republicanos, sino también de los demócratas. «Lejos de resistirse al surgimiento de un nuevo sistema de castas, Clinton llevó la Guerra contra las Drogas bastante más lejos de lo que los republicanos habrían creído posible una década antes» (Alexander, 2014, pp. 97-98). Fue como si ambos partidos se hubieran implicado en una carrera cruel por ver quién era más duro con los «delincuentes», pero entendiendo por tales sobre todo a los jóvenes varones negros y pobres.

2 Sorprendentemente, «en EE. UU. una condena de cadena perpetua se considera perfectamente apropiada para un delincuente de drogas sin antecedentes» (Alexander, 2014, p. 146), en especial si es joven, pobre y negro.

de Donald Trump. La consecuencia de todo ello fue que entre 1980 y 2000 el número de reclusos en Estados Unidos subió de unos 300.000 a más de 2 millones. A finales de 2007, más de 7 millones estaban entre rejas o en libertad provisional o condicional (PCS, 2009). Y en 2020 había casi 700 reclusos por 100.000 habitantes (en España, 120; en China, 118; en Irán, 284; en Rusia, 392). Los presos que cumplen su condena en una cárcel privada aumentaron un 94,5 % entre 1999 y 2014 (*El País*, 18 de agosto, 2016). Un efecto de tal política penal fue que los fondos que antes se habían usado para vivienda pública se estaban redirigiendo a la construcción de prisiones. Mal negocio para un país democrático.

Y uno de los trucos utilizados en esa Guerra contra la Droga consistió en castigar más la posesión de *crack* (utilizada principalmente por jóvenes negros) que la de cocaína (utilizada principalmente por blancos), de forma que, por ejemplo en San Luis, los delitos con *crack* son castigados cien veces más duramente que los delitos con cocaína en polvo: ser condenado por la venta de medio kilo de cocaína en polvo conlleva una sentencia de cinco años de cárcel, mientras que solo cinco gramos de *crack* conllevan la misma sentencia (Alexander, 2014, p. 180). Pero la mayor parte de los acusados de delitos relacionados con el *crack* son negros (un 93 % frente a un 5 % de blancos), mientras que los involucrados en casos de cocaína en polvo son predominantemente blancos. No es extraño, pues, que en 2001, hubiera casi 20.000 varones negros más en el sistema carcelario del estado de Illinois que matriculados en las universidades públicas (Street, 2002, p. 3); también había más varones negros en las cárceles de ese estado solo por delitos de drogas que matriculados en la universidad (Street, 2002, p. 3). Como dicen los sociólogos Craig Reinerman y Harry Levine (1995, p. 154), «el *crack* fue un regalo del cielo para la derecha [...] Políticamente hablando, no podría haber aparecido en un momento más oportuno». Así, «en el condado de Volusia (Florida), un periodista obtuvo 148 horas de grabación en vídeo en las que se documentaban más de mil paradas de tráfico llevadas a cabo por la policía estatal. Solo el 5 % de los conductores en la carretera eran afroamericanos o latinos, pero más del 80 % de las personas a las que se paró y se registró pertenecían a esas dos minorías» (Alexander, 2014, pp. 211-212).

Pero no es solo el número de encarcelados lo que debe preocupar. Son millones los negros estadounidenses que cuando salen de la cárcel siguen bajo control penal y, por tanto, sin sus derechos de ciudadanía, hasta el punto de que hoy en

día hay más adultos afroamericanos bajo control penal (en cárcel o en libertad condicional) que los que estaban esclavizados en 1850 (PCS, 2009): 2,4 millones frente a 1,7 mayores de 15 años. Y es que «cuando una persona está etiquetada como delincuente, se la traslada a un universo paralelo en el que la discriminación, el estigma y la exclusión son perfectamente legales, y en el que privilegios de ciudadanía como votar y servir como jurado en un tribunal están fuera de su alcance. No importa si verdaderamente se ha llegado a pasar tiempo en prisión, la condición de ciudadano de segunda clase comienza en el momento mismo en que a una persona se le pone la etiqueta de delincuente grave. En realidad, la mayor parte de la gente considerada delincuente grave no es condenada a una pena de privación de libertad. En 2008 había aproximadamente 2,3 millones de personas en cárceles y prisiones y una mareante cifra de 5,1 millones más de personas bajo “supervisión correccional comunitaria”, es decir en libertad condicional o bajo palabra. [...] Es la etiqueta de inferioridad, el hecho de tener antecedentes penales, lo que relega a la gente para el resto de su vida a un estatus de segunda clase» (Alexander, 2014, pp. 151-152). Y ese fue justamente el objetivo de quienes planificaron los cambios en la legislación penal, de cara principalmente a excluir y discriminar a la población negra, como siempre se hizo en Estados Unidos, sobre todo en el Sur.

Además, «prácticamente todas las libertades civiles protegidas por la Constitución se han visto minadas por la Guerra contra las Drogas» (Alexander, 2014, p. 104). Por ejemplo, ni la policía ni los tribunales de justicia tienen ya en cuenta la Cuarta Enmienda en su Guerra contra la Droga, según la cual la policía no podía dar el alto y registrar a alguien sin una orden judicial, a menos que existiera causa probable que llevara a pensar que ese individuo estaba envuelto en una actividad delictiva. Pero eso dejó de ser así. Como en una ocasión dijo el juez Douglas, con su voto discrepante en el veredicto Terry, «conceder a la policía un poder mayor que el de un juez es avanzar un largo trecho por el camino del totalitarismo». En esta situación no es raro que se hayan dado casos paradigmáticos como los siguientes (Alexander, 2014):

- 1) Una mujer que sabía que su marido fumaba marihuana ocasionalmente vio confiscado su coche por el Gobierno porque le permitió al marido usar el vehículo, dado que los jueces consideraron que el coche es «culpable» de transportar a alguien que ha violado en algún momento una ley de droga: ella

perdió legalmente su único medio de transporte, aunque no cometió ningún delito. Esto es algo frecuente en Estados Unidos.

2) El caso de Clifford Runoalds, otra víctima afroamericana de la redada antidroga de Hearne, es particularmente penoso. Había vuelto a casa en Bryan (Texas), para asistir al funeral de su hijita de 18 meses. Antes de que empezara el funeral apareció la policía y le esposó, negándole ver a su hija por última vez antes de que la enterraran, a pesar de sus súplicas. La fiscalía le dijo que tenía que testificar contra uno de los acusados en una reciente redada. Él negó haber visto nada y dijo no saber siquiera de qué le estaban hablando. Por negarse a cooperar, se le acusó de delitos graves. Después de pasar un mes en la cárcel, le retiraron los cargos. Técnicamente ya era libre, pero como resultado de la detención y el mes de encarcelamiento, perdió el trabajo, el piso, los muebles y el coche. Y, por supuesto, no pudo despedir a su hijita muerta. Y es que «los afroamericanos, en particular los de los barrios más pobres, se ven sometidos a prácticas y tácticas que se considerarían un escándalo y producirían indignación pública si se cometieran en barrios blancos de clase media» (Alexander, 2014, p. 156).

3) Al William Munnerlynn, afroamericano rico, le confiscó la DEA su avión Learjet después de que él lo usara para transportar a un narco sin saber que lo era. Aunque los cargos contra él se retiraron a las 72 horas, la DEA se negó a devolverle el avión. Solo tras cinco años de litigios y cientos de miles de dólares en gastos legales consiguió recuperarlo. Cuando se lo devolvieron, el aparato había sufrido daños por valor de 100.000 dólares, que, por supuesto, nadie le pagó. Cuando se trata de negros pobres, que suele ser el caso más frecuente, normalmente no recuperan nunca lo confiscado, pues no tienen dinero para contratar un abogado. «Si la policía se incauta de tu coche que vale 5.000 dólares o se lleva 5.000 dólares en metálico de tu casa, ¿estarías dispuesto a pagar a un abogado una cantidad superior al valor de tus activos para que te los devuelvan?» (Alexander, 2014, p. 135).

4) Clinton Drake, un hombre afroamericano de 55 años de Montgomery (Alabama), fue detenido en 1988 por posesión de marihuana. Cinco años más tarde fue detenido de nuevo, esta vez por estar en posesión de droga por valor aproximado de diez dólares. Ante la posibilidad de ser condenado a entre

diez y veinte años de cárcel por ser reincidente, Drake, veterano de Vietnam y en aquel momento cocinero en una base aérea local, siguió el consejo del abogado de oficio y aceptó un acuerdo de reducción de condena, bajo el cual «solo» tendría que pasar cinco años encerrado. Cinco años por casi nada. Cuando salió, Drake se encontró con que la ley le prohibía votar hasta que pagara 900 dólares en costas judiciales, una tarea imposible, puesto que estaba desempleado y los empleos mal pagados que quizá podría encontrar nunca le permitirían ahorrar ese dinero. «A todos los efectos prácticos, nunca podrá votar de nuevo. [...] El voto de Drake, junto con los votos de otros millones de personas etiquetados como delincuentes, podría haber marcado la diferencia en 2004. No hay duda de que sus votos habrían cambiado las cosas en el año 2000. Después de las elecciones, salió a la luz que, si los 600.000 antiguos reclusos que habían completado su condena en Florida hubieran podido votar, Al Gore habría sido elegido presidente de Estados Unidos en lugar de George W. Bush» (Alexander, 2014, p. 250).

Como vemos, la legislación antidroga estadounidense perjudica enormemente a la población de color. De hecho, según Human Rights Watch (2000), en siete Estados los afroamericanos representan entre el 80 y el 90 % de todos los delincuentes enviados a prisión por droga. Y en al menos 15 Estados, los negros ingresan en prisión por delitos de drogas en una proporción entre 20 y 57 veces superior a la de los blancos. A pesar de que «la mayoría de los traficantes y usuarios de drogas ilegales en el país son blancos, tres cuartas partes de todos los reclusos por delitos de drogas son negros o latinos» (Mauer y King, 2004, p. 3).

Como vemos, tiene razón Melisa Hickman Barlow (1989) cuando escribe: «hoy día ya no hace falta hablar directamente de raza porque hablar de delincuencia es hablar de raza. De hecho, no mucho después de que se lanzara la Guerra contra las Drogas a bombo y platillo en los medios y en el discurso político, casi nadie se imaginaba que los delincuentes de la droga pudieran ser otra cosa que negros». En efecto, en 1995 se llevó a cabo una encuesta que incluía la siguiente pregunta: «¿Le importaría cerrar los ojos un momento, visualizar a un consumidor de drogas y describirme a esa persona?». El 95 % de quienes participaron en la encuesta describió a un consumidor negro, mientras que solo el 5 % restante lo imaginó como parte de otros grupos raciales (Burston *et al*, 1995, p. 19). Estos resultados contrastan fuertemente con los datos reales que dicen que en Estados

Unidos la mayoría de los consumidores de drogas son blancos y solo alrededor del 15 % son negros, pero casi nadie visualizó a una persona blanca cuando se le pidió que imaginara el aspecto que tenía un consumidor de drogas. Estamos ante uno de los efectos de los prejuicios, que se da también en el caso de los gitanos o los migrantes.

Y, sin embargo, todos los estudios de psicología social y de encuesta indican que los prejuicios y el racismo tradicional están reduciéndose de una forma importante en Estados Unidos (Ovejero, 2020a). Así, el 90 % de los blancos piensa que los niños blancos y negros deben asistir a las mismas escuelas, el 71 % no está de acuerdo con la idea de que los blancos tienen derecho a mantener a los negros fuera de sus barrios, el 80 % indica que apoyaría a un candidato negro a la presidencia del país y el 66 % se opone a las leyes que prohíben los matrimonios mixtos (Schuman *et al*, 1985). Pero el racismo no está desapareciendo en EE. UU. sino que se está transformando. Y esa transformación está en la base del éxito de la Guerra contra la Droga: es lo mismo que la etapa Jim Crow, pero en otro contexto de actitudes racistas. No olvidemos que la mayor parte del prejuicio racista opera inconsciente y automáticamente, incluso entre los policías y los jueces, que deberían estar comprometidos con un tratamiento igualitario a la hora de aplicar la ley. Así, los datos indican que los fiscales piden la pena de muerte en el 70 % de los casos cuando la víctima es blanca y el atacante negro, pero solo en el 19 % de los casos en los que el acusado es blanco y la víctima negra. Se ha encontrado también que los acusados de matar a víctimas blancas tenían 4,3 veces más posibilidades de ser condenados a muerte que los acusados de matar a negros. Y la policía sigue matando impunemente a personas de color en Estados Unidos. El tristemente famoso caso de George Floyd no es un caso aislado.

En suma, en algunos Estados norteamericanos los hombres negros ingresan en prisión por delitos de drogas en proporciones que son entre veinte y cincuenta veces más altas que las de los blancos (Human Rights Watch, 2000). Y en las principales ciudades asoladas por la Guerra contra la Droga, hasta el 80 % de los jóvenes afroamericanos tiene antecedentes penales y están por lo tanto sujetos a una discriminación legalizada para el resto de su vida (Street, 2002). Esos jóvenes, como señala Alexander (2014, p. 27), forman parte de una creciente casta inferior, permanentemente confinada y aislada de la sociedad general. Y, sin embargo, como ya he dicho, los datos indican que el porcentaje de blancos que se

implica en el tráfico ilegal de drogas es similar o incluso superior al de negros, y la proporción de la población blanca que consume droga es más alta que la de la población negra. La droga no es sino el arma que utilizan los blancos supremacistas para hacerle la guerra total a los negros, cuando la esclavitud es ilegal, el racismo es algo políticamente incorrecto y las prácticas criminales del KKK repugnan. Un buen ejemplo de ello es la historia de la política con la marihuana. «En los primeros años del siglo XX la marihuana era percibida correcta o incorrectamente como una droga consumida por los negros y los mexicoamericanos, lo que desembocó en la ley Boggs Act de la década de 1950, que penalizaba la posesión de marihuana por primera vez, con una condena de dos a cinco años de cárcel. Sin embargo, en la década de 1960, cuando la marihuana se asoció con la clase media blanca y los universitarios, se crearon rápidamente comisiones para estudiar si la marihuana era realmente tan dañina como se pensaba en un principio. En 1970, la Ley de Control, Prevención y Adicción a las Drogas separó la marihuana de otros narcóticos y rebajó las penas federales (Mauer, 2006, p. 149). La misma droga que había sido considerada temible cuando se asociaba con los afroamericanos y los latinos fue recatalogada como una sustancia relativamente inofensiva cuando fue asociada con los blancos» (Alexander, 2014, p. 164). Y ello ocurría casi a la vez de que Nixon, en 1971, declaraba la Guerra contra las Drogas y afirmara que «la adicción a las drogas es el enemigo público número uno de Estados Unidos». ¿No resulta paradójico? Y esta paradoja explica perfectamente qué era lo que de verdad buscaba Nixon con su Guerra contra la Droga: no iba contra el consumo de drogas, sino contra los negros, con la intención de eliminar los derechos que habían alcanzado durante los años anteriores. Y lo han conseguido con un instrumento, como es el encarcelamiento gratuito y aleatorio de jóvenes negros, que, en lugar de prevenir el delito, lo genera y lo multiplica «al desgarrar redes sociales frágiles, destrozando familias y crear una clase permanente de personas no aptas para el mercado laboral» (Clear, 2007, p. 3). Aunque resulta normal pensar en la pobreza y la falta de empleo como elementos que conducen a la delincuencia y al encarcelamiento, las investigaciones existentes sugieren que en la actualidad la Guerra contra la Droga es una causa principal de pobreza, desempleo crónico, familias rotas y delincuencia.

En conclusión, como subraya Michelle Alexander (2014, p. 18), «la grave y descarnada realidad es que, por razones que en gran medida no tienen nada que ver

con las tendencias reales de la delincuencia, el sistema penal estadounidense se ha ido configurando como un modelo de control social sin paralelo en la historia mundial». Y yo me pregunto, ¿podemos, en estas condiciones, hablar de democracia en Estados Unidos? Es evidente que ese país, en contra de lo que tantas veces se oye, no es la mejor democracia del mundo. Que se lo pregunten a los millones de negros que, una vez que salen de prisión o incluso sin haber entrado en ella, han perdido casi todos sus derechos de ciudadanía e incluso buena parte de los derechos humanos. No olvidemos que «en algunas ciudades más de la mitad de todos los adultos negros jóvenes está en la actualidad bajo control correccional: en cárcel o en prisión, en libertad provisional o condicional» (Alexander, 2014, p. 18). Michelle Alexander lo deja muy claro: «resulta difícil imaginar un sistema mejor para asegurar que se dé rienda suelta a los estereotipos y prejuicios raciales, mientras que, al mismo tiempo, sobre el papel, se da una apariencia de neutralidad racial, que el diseñado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos» (2014, p. 190).

9.6. Conclusión

En este capítulo he mostrado cómo se está llevando a cabo la criminalización contra los pobres –poniendo el acento en el caso de la población afroamericana– y cómo el actual capitalismo neoliberal, conectando con los valores más conservadores y supremacistas del pasado, está poniendo en práctica actualmente una de las experiencias más dramáticas de la historia de la humanidad, con el silencio casi absoluto de los medios de comunicación y de la intelectualidad mundial. La esclavitud como institución fue abolida, pero la esclavitud como negocio está lejos de haber finalizado. Hoy día, el número de esclavos es aún mayor y viven en peores condiciones que en siglos anteriores, pues, al estar prohibida la esclavitud, nadie puede ser propietario de esclavos. Por eso, por no ser propietarios, se preocupan menos de su salud, de su bienestar: si mueren, son sustituidos gratuitamente por otros (véase Bales, 2000; Ovejero, 2014a, Cap. 9). Y los prejuicios racistas contra los negros se mantienen. De hecho, durante muchos años, «pocas gentes en Europa o América dudaban que, por miserable que fuese, la situación de un esclavo en una plantación de caña o en una mina de oro en Jamaica o en Brasil era mejor que la que podría tener en África. Sin embargo, en los años en que más esclavos africanos se vendieron se inició una discusión acerca de si esta

era una manera correcta de que hombres civilizados hicieran fortuna» (Thomas, 1998, p. 286). Pero estas disquisiciones tardaron mucho más en hacerse con respecto a los esclavos negros que con respecto a los esclavos indios. Es evidente que el color de la piel produce una «saliencia» que facilita los prejuicios contra las personas de color. La cerrazón mental, el supremacismo, los dogmatismos religiosos y los intereses económicos hacen el resto para que la población negra siga siendo feroz y obscenamente discriminada, sobre todo en Estados Unidos. Pero sus males no comenzaron con las leyes de Jim Crow ni con la Guerra contra las Drogas, sino con su traslado forzoso desde África a América para convertirlos en esclavos. Como diría Malcolm X, los negros no eran negros antes de ser trasladados a América, eran solo personas. Comenzaron a ser negros cuando fueron categorizados como tales, una vez esclavizados: su actual situación todavía se debe en gran medida a las consecuencias de la esclavitud.

Lo que hemos visto no es sino un ejemplo, particularmente dramático, de lo que está ocurriendo actualmente en muchas partes del mundo. «La gestión neoliberal de la marginalidad y de la pobreza se concreta en la intensificación del uso del sistema penal como herramienta de control de las minorías excluidas, en la individualización de los problemas sociales y en la intervención profesional sobre dichos problemas priorizando la “reinserción laboral” como vía única de integración social. Apelando a la ética del trabajo, se estereotipa a las personas en situación de pobreza culpabilizándolas de sus propios problemas y atribuyendo su situación social a la vagancia, los vicios personales, la incapacidad para tomar las decisiones correctas o la inclinación hacia la transgresión de las normas» (Sales i Campos, 2014, p. 73).

CAPÍTULO 10

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

10.1. Introducción

Es cierto que, como decía Ramón de Campoamor, «en este mundo traidor, nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira». Pero también es cierto que la precisión de tal cristal depende del nivel intelectual y del grado de información y conocimiento de quien mira. De hecho, para «captar completamente la problemática de la desigualdad social, lo que está en juego, necesitamos abrir nuestras ventanas conceptuales y permitir que entre el aire fresco que se encuentra más allá de los discursos convencionales, tanto académicos como no académicos» (Therborn, 2015, p. 45). Pero una de las principales características del capitalismo es que, al dividir esencialmente entre los que tienen mucho y los que no tienen nada o muy poco, crea un porcentaje pequeño de ganadores y una gran mayoría de perdedores (Ovejero, 2014a; Sandel, 2020): pobres, mujeres en riesgo, excluidos, trabajadores precarios, migrantes, desempleados, minorías étnicas, etc. Y, por tanto, crea una gran incertidumbre hacia el futuro y una gran frustración para el presente en miles de millones de personas, tanto en los países ricos como, sobre todo, en los países pobres. Habría que llevar unos cristales muy distorsionadores para no ver la evidente incompatibilidad entre capitalismo y democracia (Wright, 2014, 2020). Mucho tendría que cambiar el capitalismo para que fuera compatible con los usos democráticos, como ocurrió, en parte, durante los años 1950-1980 gracias a las organizaciones obreras y ciudadanas organizadas políticamente. Como dice Erik Wright (2020), lo

que habría que hacer para limar la incompatibilidad entre capitalismo y democracia es implantar una renta básica universal que no sea solo un derecho social de la ciudadanía, sino que sea también un instrumento para fomentar la economía social y solidaria, para potenciar el cooperativismo, para democratizar el interior de las empresas tanto públicas como privadas y para apoyar y defender lo público alejándolo de la lógica mercantil (véase Ovejero, 2021a).

Los dos principales problemas que actualmente tiene la humanidad son el incremento de la desigualdad económica, laboral y social, y el destrozo, tal vez ya irreversible, del planeta. Y la solución de ambos problemas –algo realmente vital para la supervivencia de la especie humana– vendrá de la potenciación de lo público, de lo comunitario y de la solidaridad, o sea, vendrá de la ayuda mutua y de la cooperación solidaria de la que nos habló Kropotkin. Y podrá venir también del Estado, pero con la condición de que se trate de un Estado social y solidario, que no sirva a los intereses de los poderosos sino a los de toda la población, en particular a los grupos más excluidos (minorías étnicas, mujeres, mayores y menores en riesgo, migrantes, etc.), lo que no es fácil esperar de él. Solo un Estado de este tipo podría darnos seguridad en estos tiempos de profunda incertidumbre y riesgo. Pero ello exigiría antes la superación del capitalismo.

10.2. ¿Es posible recuperar el planeta y terminar con la desigualdad y la pobreza?

Tal vez se me acuse de ser pesimista. Pero quisiera recordar que a veces un pesimista no es sino un optimista bien informado, un optimista con los ojos bien abiertos. Veamos:

1) *La sostenibilidad del planeta:* en cuanto a la recuperación ecológica del planeta, todo parece indicar que en este terreno hemos llegado a un punto que ya es muy peligroso seguir contaminando. Pero las consecuencias serían tan terribles que no podemos perder toda esperanza, aunque resulta difícil mantenerla si, por un lado, los poderes públicos –empezando por la ONU– hacen muy poco por resolver este problema y siguen fomentando el crecimiento económico basado en energías fósiles (petróleo, gas, carbón, etc.) y, por otro lado, con una ciudadanía poco dispuesta a cambiar su estilo de vida (aire acondicionado día y noche en verano y calefacción a tope en invierno, utili-

zación del ascensor para subir uno o dos pisos, viajar mucho en avión, utilización del coche para todo, derroche de agua, despilfarro de alimentos, comer mucha carne, consumir alimentos producidos lejos de casa, uso masivo de pesticidas en la agricultura, etc.). Para resolver este problema que puede llevar a la extinción de la especie humana habría que tener otra forma de producir y sobre todo otra forma de vivir y de consumir. Pero soy poco optimista. El afán de consumo de gran parte de la población constituye un dique casi insalvable para modificar en profundidad las políticas de los gobiernos y de las grandes empresas y para cambiar el estilo de vida de la ciudadanía. Recordemos otra vez cuál fue la reacción de parte de la población ante la sugerencia del ministro de Consumo de moderar la ingesta de carne o cuando puso sobre el tapete los efectos nefastos de las macrogranjas para el medio ambiente, para los animales y para los consumidores. Tal reacción no invita precisamente al optimismo.

2) *La desigualdad*: escribe Piketty (2021, p. 271) que «si en los dos últimos siglos se ha producido en el mundo una tendencia histórica hacia una mayor igualdad social, económica y política, ha sido sobre todo gracias a una serie de revueltas, revoluciones y movilizaciones políticas a gran escala. Lo mismo ocurrirá en el futuro», si queremos superar la actual y preocupante situación en que estamos. Pero tampoco aquí soy muy optimista. El poder real –sobre todo el económico y su extensión al de los medios de comunicación– está controlando tanto la opinión pública que se hace difícil un cambio sustancial. Basta con ver lo que han hecho con un partido que parecía que venía a cambiar algunas cosas: a mi juicio, se montó un *lawfare* contra Podemos que muestra hasta dónde estarían dispuestos a llegar los más ricos y poderosos si alguna fuerza pretende poner límites a su poder y a sus beneficios. Según Piketty (2021, p. 271), «la verdadera alternativa es el socialismo democrático, participativo y federal, ecológico y con mestizaje social, que en realidad no es más que la prolongación lógica de una corriente de fondo igualitaria que está en marcha desde finales del siglo XVIII». A mi modo de ver, tal alternativa sería eficaz y satisfactoria si incluyera una alta dosis de talante libertario, sobre todo autogestionario (Ovejero, 2021a). De hecho, muchos de los avances sociales más importantes que han tenido lugar durante los dos últimos siglos han sido protagonizados especialmente por personas y grupos anarquistas,

como fue el caso de las colectividades libertarias en la España de los años treinta (Ovejero, 2017) o la consecución de las ocho horas de trabajo tras las manifestaciones de Chicago en 1886 en Estados Unidos y tras la huelga de la CNT en la empresa La Canadiense en Barcelona, en 1919, en España. Y otra razón por la que no resultará fácil cambiar en profundidad el curso actual de las cosas estriba en que el poder global quiere terminar con toda propiedad comunal para convertirla en privada. Es una vía más para que los más ricos se hagan con lo que es de todos. Así, en Etiopía, donde desde la Revolución de 1974, nadie era propietario de su tierra y solo existía el usufructo, ahora en algunas regiones del país el gobierno está dando ya pasos hacia la privatización de las tierras agrícolas, organizando la inscripción de las parcelas en el registro, bajo la presión del BM (Ziegler, 2006, p. 149). Y esa es una tónica general en gran parte del África subsahariana. Otra técnica, menos sutil, consiste en llevar a cabo una ofensiva en todos los frentes contra aquellos países que han intentado reducir la desigualdad. Me refiero a Cuba, Venezuela o Bolivia. No querían que estos países sirvieran de ejemplo a otros.

Por otra parte, a los neoliberales, con Von Hayek y Friedman a la cabeza, les costó mucho conseguir que sus ideas neoliberales se hicieran hegemónicas, por lo que no van a ceder fácilmente. Opondrán toda la resistencia posible para defender el actual capitalismo neoliberal, máxime cuando está generando tantos beneficios a una minoría que, no lo olvidemos, son los que tienen el poder global. Como mucho, intentarán cambiar todo lo que sea necesario para que todo siga igual. No olvidemos que su poder se basa también en el apoyo que han conseguido de la población y de millones de trabajadores. En efecto, «desde 1973 millones de personas de clase trabajadora –primero en Inglaterra y Estados Unidos, luego en el resto del mundo– comenzaron a apoyar proyectos de sumisión a las élites económicas que atentaban contra sus intereses materiales más inmediatos. El consumismo borró de la memoria colectiva las consecuencias que había tenido el capitalismo desbocado, la miseria y las decenas de millones de muertos que dejó a su paso. Porque la globalización neoliberal consistió, básicamente, en un retorno al capitalismo clásico, a una supuesta edad dorada de mercado libre, a los viejos buenos tiempos manchesterianos» (Rendueles, 2016, p. 184). Fue en ese momento, añade César Rendueles, «cuando vestir, comer, viajar o hablar como un idiota con la

billetera llena dejó de ser algo ridículo y se convirtió en nuestro ideal de vida. Fue entonces cuando pertenecer a la clase trabajadora comenzó a ser motivo de vergüenza», como bien explica Owen Jones (2013). Lo que había ocurrido, concluye Rendueles (p. 192), es que «el neoliberalismo había transformado el contrato social vigente desde la Segunda Guerra Mundial. Redefinió completamente lo que se consideraba políticamente posible, imposible o deseable. Así, millones de personas empezaron a sentirse más identificadas con los estilos de vida y las preocupaciones de unas élites inalcanzables que con vecinos de los que apenas les separaban un puñado de puntos de porcentajes en la escala de ingresos». Tener un apartamento en la playa o en la montaña llevó a miles de trabajadores a sentirse de clase media y, en consecuencia, a votar a la derecha, a la que ahora creían pertenecer.

Pero las cosas han cambiado en algunos aspectos y no a mejor. Si Schleidel (2018) mostró que cuando se redujo la desigualdad fue a causa de guerras, revoluciones y pandemias, durante las últimas cuatro décadas tanto las guerras de Irak y Afganistán, como la revolución de los más ricos o la pandemia de la covid, han incrementado aún más la desigualdad. Una pandemia puede aumentar la desigualdad o puede reducirla, dependiendo de cómo sea gestionada. Por tanto, depende mucho de quiénes estén en los gobiernos. «Es por eso por lo que las consecuencias de la pandemia deben ser aprovechadas por las fuerzas políticas que defienden proyectos igualitarios y emancipadores. Las izquierdas y todas las opciones políticas preocupadas por el aumento de la desigualdad en las últimas décadas deben aprovechar el contexto actual y tener en cuenta que la igualdad no solo se consigue con movilización y luchas, o con victorias electorales, por aplastantes que estas sean. Para combatir la desigualdad hace falta dar la batalla por las ideas. Producir marcos ideológicos coherentes que aúnen ambición política y posibilidades prácticas. El debate, la reflexión, la experimentación, la negociación y el acuerdo alrededor de qué instrumentos o mecanismos son los más justos para combatir la desigualdad son vitales para que estos sean considerados legítimos socialmente y eficaces en su cometido.» (Ríos Fernández, 2022).

Una forma eficaz de reducir la desigualdad consiste en terminar con el proceso por el que el capitalismo está produciendo mecánicamente desigualdades insostenibles. De hecho, se pregunta Piketty (2014, p. 473): «¿Podrían llevar

las fuerzas de la globalización financiera, en el siglo que se inicia, a una concentración del capital aún más grande que todas las observadas en el pasado? ¿O quizá esto ya ha ocurrido? [...] ¿Va a incrementarse de manera ilimitada en el siglo XXI el porcentaje del capital mundial propiedad de los ultrarricos que aparecen en las revistas?». Todo parece indicar que sí. De hecho, añade Piketty (p. 482): «Hoy en día, la participación del 0,1 % más rico es propietario del 20 % de la riqueza toda del planeta y el 1 % más rico tiene casi el 90 % de tal riqueza, mientras que los 3.700 millones más pobres poseen menos del 5 % de la riqueza mundial. Por ejemplo, solo entre 1990 y 2010, la fortuna de Bill Gates pasó de 4.000 millones de dólares a 50.000 millones, y la riqueza de Liliane Bettencourt pasó de 2.000 millones de dólares a 25.000. «Dicho de otro modo, Liliane Bettencourt jamás trabajó, pero eso no impidió que su fortuna aumentara exactamente tan rápido como la del inventor Bill Gates, cuyo patrimonio sigue incrementándose igual de rápido desde que abandonó sus actividades profesionales» (Piketty, 2014, p. 484).

El proceso de reducción de la desigualdad que vivió Europa entre 1914 y 1980 nos enseñó que «el Estado social y la fiscalidad progresiva son herramientas poderosas para transformar el capitalismo» (Piketty, 2021, p. 181). Pero tal proceso tuvo un alcance limitado ya que persistió una excesiva concentración de la propiedad. Además, después de 1980, volvieron a aumentar las desigualdades en Europa y sobre todo en EE. UU., donde el 50 % menos rico es en 2022 más pobre que en 1970 y gran parte de la clase media se ha hundido. «En casi todas partes, la desregulación económica y financiera en curso desde la década de 1980 ha favorecido a las mayores carteras financiera y apenas ha beneficiado a los más pobres, que a menudo se han visto abocados al sobreendeudamiento. Se observa una tendencia similar en la desigualdad de ingresos que también ha aumentado desde 1980, con bastante más intensidad en EE. UU. [...] la virulencia de las políticas antisindicales y el desplome del salario mínimo federal estadounidense (que, a base de mordiscos inflacionarios, ha pasado de casi 11 dólares por hora a 7,2 entre 1970 y 2020, y el cual muchos políticos demócratas querrían subir hoy) han sido decisivos en la caída de las rentas más bajas» (Piketty, 2021, p. 185). De hecho, hoy día en Europa «el 50 % más pobre sigue sin poseer nada verdaderamente tangible (comparten entre ellos el 5 % de la propiedad total), mientras que el 10 % más rico posee el

55 % del total. En otras palabras, los primeros tienen una riqueza media más de 500 veces inferior a la de los segundos. [...] En EE. UU., la situación es aún más extrema: el 50 % más pobre de la población apenas posee el 2 % del total en 2020, frente al 72 % del 10 % más rico» (Piketty, 2021, p. 183).

Sin embargo, el capitalismo, como todo, tuvo un principio y tendrá un fin. «Hemos necesitado tres o cuatro siglos de entrenamiento para llegar a aceptar que el trabajo, la tierra, los alimentos básicos o incluso el agua son mercancías que se pueden comprar y vender» (Rendueles, 2016, p. 25). Recordemos que todavía en 1718, un intelectual inglés decía que los comerciantes que especulaban con productos de primera necesidad eran «un grupo de hombres viles y perniciosos» (citado en Rendueles, 2016, p. 31). Por otra parte, añade Rendueles (p. 50), Europa tuvo que esperar hasta muy entrado el siglo XIX para que el miedo al hambre y los incentivos salariales sirvieran a los empresarios para asegurarse la mano de obra en sus fábricas. No les resultó fácil convencer a la población de que se sometiera a la disciplina de las fábricas. De hecho, por aquella época (en España hasta mucho más tarde) era frecuente que los obreros trabajaran hasta reunir el dinero que necesitaban para comer, luego abandonaban el trabajo hasta que volvían a necesitar dinero: aún no habían internalizado los valores del capitalismo. Pues bien, lo mismo que costó internalizar esos valores en la población, ahora costará mucho eliminarlos. Pero todo irá llegando, aunque necesitaremos muchos años para construir una alternativa –que ya está en camino– al capitalismo. Esa alternativa será más fácil de construir en los países no desarrollados, a causa de «la memoria colectiva, las estructuras ampliadas de parentesco, las cosmogonías singulares, las múltiples obligaciones de solidaridad entre las personas aportan coherencia y seguridad a las sociedades del Sur. El caso etíope lo prueba» (Ziegler, 2006, p. 159).

3) *La pobreza*: con respecto a la pobreza, y aunque es cierto que los datos son menos claros que en el caso de la desigualdad, parece evidente que el capitalismo neoliberal no ha conseguido reducirla significativamente ni siquiera en los momentos de gran crecimiento económico. Tal vez ni lo haya intentado, pues no le interesa. Merece la pena leer la siguiente cita de Michel Chossudovsky (2002, p. 3): «En todos los países que visité, incluidos Kenia, Nigeria, Egipto, Marruecos y Filipinas, observé el mismo patrón de manipulación

económica e intervención política de las instituciones de Washington. En la India, como resultado directo de las reformas del FMI, millones de personas quedaron en la indigencia. En Vietnam, una de las economías productoras de arroz más prósperas, brotaron hambrunas locales como consecuencia directa de la desaparición del control de los precios y la desregulación del mercado de granos. Coincidiendo con el final de la guerra fría, en el apogeo de la crisis económica, recorrí varias ciudades y zonas rurales de Rusia. Las reformas patrocinadas por el FMI habían entrado en una nueva fase, extendiendo su influencia fatal a los países del antiguo bloque soviético. A partir de 1992, extensas zonas de la antigua Unión Soviética, desde los Estados del Báltico hasta Siberia oriental, fueron lanzadas a una profunda pobreza». Algunos economistas afirman que las políticas neoliberales sí han reducido la pobreza, lo que es discutible, además de que olvidan dos cosas: que gran parte de la reducción de la pobreza habida la han conseguido países que no han aplicado las recetas neoliberales (Vietnam, India y China) y que no ha sido el capitalismo el que ha conseguido la reducción de la pobreza, sino el alza de los salarios, así como las mejores condiciones de vida y de trabajo gracias a las luchas sindicales precisamente contra el capitalismo. Y tampoco olvidemos que, sin la URSS y el miedo del capitalismo a que muchos países cayeran en la órbita soviética, probablemente no hubieran cedido en salarios o protección al desempleo. Por eso ahora, desaparecido el miedo al comunismo, las élites económicas y empresariales han comenzado a quitarles a los trabajadores todo aquello que habían conseguido con tantas luchas y tantas huelgas.

Además, hay que recordar que, en esta época neoliberal, «en el momento en que más necesarios son los mecanismos de protección social, los programas de atención a poblaciones vulnerables se reducen drásticamente y el sector público renuncia a lo que quedaba de su rol benefactor después de 30 años de avance de las políticas neoliberales» (Sales i Campos, 2014, p. 12). Es más, en un entorno de déficit público, sobre todo por la reducción de los impuestos a las grandes empresas y a las grandes fortunas, así como por la enorme permisibilidad al gran fraude fiscal, «se cuestiona abiertamente que esas personas y colectivos (los pobres) deban recibir asistencia pública, acabando así con toda referencia a los derechos sociales» (Sales i Campos, 2014, p. 13). Más aún, la psicologización de los problemas sociales agrava aún más la situación de los

pobres, pues «la progresiva transformación de los problemas sociales en asuntos individuales justifica la transferencia de responsabilidades del ámbito de los servicios sociales al de la política criminal» (Sales i Campos, 2014, p. 13). La generalización de la idea de que los pobres tienen lo que merecen, pues son los responsables únicos de su situación, justifica la presión penal sobre ellos. «La nueva gestión de la pobreza y de la marginalidad no tiene ninguna consideración por conceptos como la cohesión social. No hay voluntad política de rebajar las tensiones sociales en vistas a beneficios en el medio y largo plazo. Al igual que la actividad empresarial, la gestión neoliberal de la pobreza busca réditos inmediatos en forma de votos, poder o dinero, sin considerar las consecuencias de las fracturas sociales que la marginación y la represión termina causando» (Sales i Campos, 2014, pp. 14-15). Esta nueva gestión de la pobreza persigue dos objetivos: obtener beneficios económicos de la pobreza (cárceles privadas o trabajo de los reclusos mal remunerado) y conseguir que la gente no ponga el foco de su atención en las crecientes desigualdades, ni siquiera en el hecho de que durante la crisis financiera se destinaron tres billones de dólares para salvar a los bancos y a los banqueros responsables de la crisis, mientras se permitía que millones de familias fueran expulsadas de sus casas porque, al haber perdido el empleo a causa de la crisis, no podían pagar sus hipotecas. ¿Cuándo se ha visto tanta hipocresía? Sin embargo, solo con una décima parte de lo que se gastó en proteger a bancos y banqueros se podría haber erradicado el hambre en el planeta. Según la FAO, hacen falta 30.000 millones de dólares anuales durante seis años para solucionar lo más urgente del hambre en el mundo. No obstante, se trata de un tema complejo que requiere dinero, pero que no se soluciona solo con dinero: hace falta organización, incorporación de maquinaria a la agricultura de los países pobres, nuevas políticas agrícolas, etc.

En el Capítulo 6 vimos suficientes datos sobre la pobreza. Añadiré ahora algunos más. Según Oxfam Intermon, la cúpula de los más ricos se concentra cada año con más aceleración, hasta el punto de que en 2015 los 61 individuos más ricos acumulaban tanta riqueza como los 3.900 millones más pobres, pero en 2016 esa cifra era de solo 43 y en 2017 de 26. Es más, el 82 % de toda la riqueza mundial generada en 2017 fue a manos del 1 % más rico, mientras que no llegó nada al 50 % menos rico. Y no olvidemos que «los ingresos y la

riqueza de una generación se traducen en riqueza para la siguiente, como bien ejemplifica el caso de los Walton y los hermanos Koch. Las ventajas –y desventajas– se transmiten de generación en generación. Y con casi uno de cada cinco niños estadounidenses creciendo en la pobreza, esto bien puede redundar en el círculo vicioso de la pobreza. Aquellos que nacen pobres tienen escasas probabilidades de escapar de su condición. En EE. UU., el hecho de nacer en la familia correcta y crecer en el vecindario adecuado se ha convertido gradualmente en el ingrediente más relevante para el éxito en la vida (Chetty *et al.*, 2014; Chetty y Hendren, 2015; Chetty, Hendren y Katz, 2015). El sueño americano de la igualdad de oportunidades es un mito: el futuro de un joven estadounidense está condicionado por los ingresos y la educación de sus progenitores en mucho mayor grado que en cualquier otro país avanzado» (Stiglitz, 2020, p. 80). El nivel económico de la familia es más importante que el esfuerzo y el rendimiento académico como ascensor social. Así, añade este autor, un hijo de alguien en la cima social que tenga un rendimiento bajo en la escuela obtendrá un mejor empleo que el de alguien en la base que tenga un rendimiento alto. Pero ser pobre no es solamente no poder cubrir las necesidades básicas, sino también quedar excluido de los bienes, servicios, derechos y actividades que constituyen la base de la ciudadanía. De ahí que la propia ONU mantenga que «la erradicación de la pobreza tiene una importancia fundamental para consolidar la paz y lograr un desarrollo sostenible» (PNUD, 1994). Por eso, hoy día «la elección ya no es solo entre democracia y capitalismo, ahora es entre vida y capitalismo. Elegir el capitalismo no es ya solo ponerse del lado de la desigualdad y el privilegio. Hoy es, lisa y llanamente, elegir la muerte [...] La prosperidad asociada al hiper consumismo es un suicidio colectivo a cámara lenta» (Rendueles, 2020, pp. 336-337). Y solo la solidaridad y el apoyo mutuo, como nos enseñó Kropotkin, podrá evitar lo peor (véase Ovejero, 2021b).

10.3. ¿Tenemos motivos para ser optimistas?

Como creo haber mostrado en los capítulos anteriores, nuestros grandes problemas no son fatalidades y sí tienen arreglo. Otra cosa es que quienes tienen el poder económico y político no deseen arreglarlo ni la población esté dispuesta a hacer lo necesario para ello. Para solucionar el problema ecológico ya nos queda

poco tiempo. Por eso aquí soy pesimista, pues todo indica que quienes tienen el poder no están dispuestos a renunciar a nada para esa solución (de hecho, hace muy poco la Unión Europea decidió considerar a la energía nuclear y al gas como energías verdes, lo que hará más difícil la inversión en energías renovables). Tampoco los ciudadanos estamos dispuestos a cambiar nuestro estilo de vida, como ya he dicho. Sinceramente, veo difícil la solución a este problema.

En cuanto a la cuestión de la desigualdad, también soy pesimista, sobre todo porque se trata de un tema muy asociado con las relaciones de poder e incluso con la propia psicología humana. Las relaciones de poder son connaturales a las relaciones humanas: incluso aquellos que, desde posiciones explícitamente libertarias y antiautoritarias, intentan abolirlas, con demasiada frecuencia, en sus prácticas sociales y en sus relaciones interpersonales, instauran otras nuevas. Pero ni las relaciones de poder ni la propia desigualdad son cosa de todo o nada, y aunque veo prácticamente imposible eliminarlas, sí veo posible reducir su tamaño y su impacto.

Con respecto a la pobreza y el hambre, soy menos pesimista, al menos en teoría. De hecho, en el planeta hay recursos suficientes para solucionar ambos problemas. Producimos alimentos suficientes para que nadie pase hambre. El problema no es de falta de alimentos sino de falta de voluntad política. La pobreza es más difícil de solucionar que el hambre, pero tampoco es un problema insoluble. Con una fiscalidad progresiva, tanto dentro de los países desarrollados como a nivel internacional, podrían recaudarse los suficientes recursos para terminar con el hambre en el mundo, con la pobreza e incluso con ello podríamos reducir también las desigualdades.

Estamos, pues, ante problemas muy serios, pero no insolubles. Lo que falta es voluntad política para solucionarlos, pero la movilización popular podría conseguir que los gobiernos se movieran en la dirección correcta y que la solución estuviera más cerca, especialmente porque sería posible implementar las medidas vistas en el Capítulo 6. Si se aplicaran esas medidas habríamos avanzado mucho en la reducción tanto de la pobreza como de la desigualdad. Ahora bien, puntualiza Piketty, «la redistribución de la propiedad no basta por sí misma para superar el capitalismo. Si el objetivo fuera simplemente sustituir a los grandes propietarios por pequeños y medianos propietarios igualmente codiciosos y

despreocupados por las consecuencias sociales y medioambientales de sus acciones, el valor sería limitado. El proyecto que aquí se describe es de otra naturaleza. La redistribución de la propiedad va acompañada de escalas impositivas muy progresivas que impiden a las personas acumular o contaminar sin límites y que pueden endurecerse, si es necesario. [...] Quiero insistir en el hecho de que una herencia universal como la presentada aquí solo tiene sentido si se añade a los sistemas de renta mínima y de garantía de empleo (que, en mi opinión, deberían aplicarse prioritariamente, antes que la herencia universal) y, en general, si se inserta como elemento adicional dentro de un sistema de Estado social que tenga como objetivo la progresiva desmercantilización de la economía» (Piketty, 2021, pp. 197-198).

La propuesta que hace Thomas Piketty para salir del atolladero en que nos encontramos es «una nueva forma de socialismo democrático, descentralizado y autogestionado, ecológico y mestizo, que permita estructurar el mundo de otra manera más emancipadora e igualitaria que la actual» (2021, p. 188). Como puede observarse, esta propuesta tiene muchos puntos en común con la tradicional propuesta libertaria, aunque debería ir acompañada de un cambio radical en el sistema fiscal actualmente imperante, con una fiscalidad progresiva que cargue los costos sociales principalmente a las rentas más altas y a las grandes herencias, lo que impediría la concentración excesiva de recursos y poder en pocas manos, que tanto limita la democracia.

No olvidemos que casi todo lo bueno que tenemos ha necesitado muchas luchas colectivas, sociales, políticas y sindicales. Y la principal vía para mover la historia hacia la igualdad y la justicia sigue siendo la movilización popular. «Sin una potente movilización social y colectiva en favor de una nueva etapa, esta no se producirá. La influencia de la Revolución thatcheriana desde la década de 1980 no se ha debido únicamente a su amplio apoyo entre las clases dirigentes y a una poderosa red de influencia a través de los medios de comunicación, los *think tanks* y la financiación política (aunque estos factores han desempeñado obviamente un papel). También se ha debido a las debilidades de la coalición igualitaria, que no ha logrado construir una narrativa alternativa ni apoyarse en una movilización popular suficientemente fuerte en defensa del Estado social y la fiscalidad progresiva» (Piketty, 2021, pp. 187-188). Sin embargo, tal vez el principal problema estriba en que los pobres no suelen unirse para conse-

guir sus objetivos. Como ha demostrado la psicología, las personas suelen estar más dispuestas a unirse y a hacer esfuerzos por conservar lo que tienen, cuando temen perderlo, que por conseguir lo que no tienen y salir de la pobreza. De hecho, la amenaza de perder algo motiva más que la expectativa de ganar algo de un valor similar. Es el llamado «sesgo de la aversión a la pérdida» (Tversky y Kahneman, 1981). De ahí la gran dificultad que tienen los pobres para organizarse y movilizarse.

En todo caso, estamos asistiendo actualmente a lo que suele llamarse «colonialismo del bienestar» cuyas políticas son realmente desalentadoras. «En una economía mundial en expansión, en la que muchas materias primas se están convirtiendo rápidamente en artículos estratégicos, los pobres son un “estorbo en el camino” de acceso a esas materias primas, de forma muy parecida al estorbo que suponían los nativos americanos para el uso de la tierra por los colonos. Algunos observadores estadounidenses consideran seriamente la opción de encerrar a los pobres en “reservas”. Tan solo hace una década, dos autores estadounidenses recomendaban la creación de un “estado custodio” en un libro que recibió mucha publicidad» (Reinert, 2007, pp. 267-268). Se trata del famoso libro de psicología *The Bell Curve* [véase Ovejero (2003)], en el que sus autores escribían textualmente: «Por estado custodio entendemos una versión de alta tecnología, pero más generosa que las reservas indias, para una minoría sustancial de la población del país, mientras el resto de Estados Unidos se dedica a sus negocios» (Herrnstein y Murray, 1994, p. 526).

No hay más remedio que movilizarse para que eso no ocurra. Sería un mundo realmente espantoso. «Los lazos insidiosos de políticos y funcionarios internacionales con los poderosos intereses financieros deben ponerse al descubierto. Para poder efectuar cambios significativos, las instituciones del Estado y las organizaciones intergubernamentales deben desprenderse de las garras del *establishment* financiero. Por otra parte, debemos democratizar el sistema económico y sus estructuras administrativas y de propiedad, desafiar con determinación la descarada concentración de la propiedad y de la riqueza privada, dismantelar los mercados financieros, congelar el comercio especulativo, detener el lavado de dinero, dismantelar los paraísos bancarios y fiscales, redistribuir el ingreso y la riqueza, reinstaurar los derechos de los productores directos y reconstruir el estado benefactor» (Chossudovsky, 2002, p. 20). Y añade este autor

(p. 22): «La unidad de propósito y la coordinación entre los diversos grupos y los diversos movimientos sociales de todos los rincones del mundo serán decisivas. Se requiere un gran impulso que reúna a todos los movimientos sociales de las principales regiones del mundo en un propósito y un compromiso comunes de eliminar la pobreza y alcanzar una paz mundial duradera».

Pero tal solución no es de fácil aplicación, pues no olvidemos que «el aparato militar y de seguridad respalda y apoya los intereses económicos y financieros dominantes; esto es, el robustecimiento y el ejercicio de la fuerza militar promueve el “libre comercio”. El Pentágono es un arma de Wall Street; la OTAN coordina sus operaciones militares con las medidas intervencionistas del BM y el FMI, y viceversa. Además, los cuerpos de seguridad y defensa de la alianza militar occidental, junto con los diversos gobiernos civiles y las burocracias intergubernamentales (el FMI, el BM, la OMC), tienen un común entendimiento, un consenso ideológico y la determinación de establecer el Nuevo Orden Mundial» (Chossudovsky, 2002, p. 21). Por tanto, según este autor, la campaña mundial contra la globalización neoliberal debe formar parte de una coalición más amplia de fuerzas sociales que persiga desmantelar el complejo militar-industrial, la OTAN y el *establishment* de defensa, junto con sus aparatos de inteligencia, de seguridad y de policía. Y eso no resulta nada fácil, creo yo.

Además, los pueblos y los individuos de buena parte del planeta están respondiendo a la globalización y a sus tendencias homogeneizadoras incrementando sus sentimientos locales y reivindicando sus características particulares e idiosincrásicas, negándose a perder su identidad. De hecho, «la novedad es hoy el surgimiento de la política de la identidad. En contextos muy diferentes y de modos también diversos –desde los pueblos indígenas de América Latina, las minorías religiosas de Asia meridional, las minorías étnicas de los Balcanes y África, hasta los inmigrantes en Europa occidental– la gente vuelve a movilizarse en torno a antiguos resentimientos de carácter étnico, religioso, racial y cultural y exige el reconocimiento, la valoración y la acogida de su identidad por parte de la sociedad en su conjunto» (PNUD, 2004, pág. 1). Todo ello hace aún más difícil la formación de esa coalición planetaria antes mencionada. Además, la creciente reivindicación de la identidad puede dificultar en cierta medida las mejoras hacia la igualdad de las personas individuales, pues en ocasiones los intereses de los individuos chocan con los intereses de sus etnias o culturas. Por eso a veces

es necesario establecer prioridades entre dos cosas deseables. Así, el derecho a la educación de una niña debería estar por encima de la exigencia de su padre de que se respete la costumbre cultural de que su hija no asista a la escuela por razones religiosas. Ahora bien, si los derechos humanos deben prevalecer sobre los estrictamente culturales o religiosos, ello debe aplicarse también a nuestro país, donde la Iglesia católica mantiene privilegios y hábitos que están claramente reñidos con los derechos humanos de igualdad de género.

En resumidas cuentas, si realmente queremos mejorar el mundo y hacerlo más justo, lo primero que habría que conseguir es terminar con la actual hegemonía neoliberal y, mientras tanto, conseguir que se aprueben medidas de acción social similares a las adoptadas por la socialdemocracia sueca hace unas décadas, pero con un mayor protagonismo de la solidaridad y la ayuda mutua, en especial con el tercer mundo. De hecho, «para que todos los seres humanos puedan desarrollar al máximo su potencial, es necesario prestar una atención urgente a la desigualdad y a las capacidades y oportunidades relativas. No basta con hacer posible que las personas con menores capacidades superen los umbrales mínimos. Por ejemplo, aunque se erradicase la pobreza extrema a nivel mundial o se lograra la matriculación universal en la enseñanza primaria, las personas ricas y con mayor nivel educativo simultáneamente podrían acumular enormes recursos económicos o lograr tasas de matriculación terciaria más altas, con lo que se mantendrían o incluso se ampliarían las diferencias en lo que respecta a las capacidades fundamentales. A pesar de los avances absolutos para todas las personas, las posibilidades que tienen aquellas con menor riqueza y educación de desarrollar plenamente su potencial seguirían estando por detrás» (PNUD, 2016, p. 51).

Según Göran Therborn (2015), los más importantes campos de batalla donde se dirimirá el asunto de la igualdad del futuro son estos dos:

1) *La imagen que tengamos de la desigualdad*: el tema de la igualdad no está relacionado con tener envidia a los más ricos, sino sencillamente con entender que es algo que «interfiere de un modo muy profundo en las vidas humanas, causando millones de muertes prematuras innecesarias, reduciendo las posibilidades vitales de generaciones, creando humillaciones, falta de libertad, inseguridad y ansiedad a poblaciones de continentes enteros en todo el planeta. [...] Las tendencias actuales que acentúan la desigualdad de renta en el mundo

tienen efectos sociales y políticos, médicos y psicológicos devastadores. El esfuerzo igualitario debe centrarse en las violaciones multidimensionales de la capacidad de todo ser humano para desarrollarse y prosperar» (Therborn, 2015, p. 174).

2) *Las tres principales instituciones de la igualdad*: «familia, capitalismo y nación son las tres instituciones que más favorecen la desigualdad contemporánea. Las tres han tenido sus altas y sus bajas y, aunque ninguna de ellas se encuentra en el apogeo de su poder, lo cierto es que están aumentando su capacidad inigualitaria; la familia, especialmente en el mundo rico; el capitalismo en todas partes, sobre todo tras penetrar en las antiguas sociedades de socialismo de Estado y de subsistencia; y la nación en todo el mundo, por el cambio del papel que representa en la globalización actual» (Therborn, 2015, p. 175). Para bien y para mal, la familia sigue siendo la principal instancia de socialización existente. Por eso, no es raro que siga siendo la principal correa de transmisión intergeneracional de las desigualdades, cosa que consigue sobre todo a partir de la educación, tanto dentro de la familia como en la escuela (Ovejero, 2020b). En efecto, «una consecuencia de la expansión de la educación superior para ambos sexos es el aumento de los matrimonios entre personas con el mismo nivel educativo. Los hombres universitarios se casan con mujeres universitarias; las mujeres que abandonan los estudios de secundaria se casan con compañeros que tampoco terminan su bachillerato (Schwartz y Mare, 2005). Por alguna razón, el aumento de la homogamia de clase ha sido especialmente pronunciado en el Reino Unido. Entre 1987 y 2004, se triplicó la brecha salarial entre las esposas de maridos ricos y las de maridos pobres (OCDE, 2011)» (Therborn, 2015, p. 175). Y obviamente, eso repercute mucho en los hijos y en las siguientes generaciones.

Como ya hemos visto, el capitalismo es el segundo gran generador de desigualdad. Y todo parece indicar que, aunque hoy día se encuentra con serios problemas, tendremos capitalismo para rato. Pero hay que dejar muy claro que la puesta en marcha de las medidas citadas para reducir la pobreza y la desigualdad no menoscaban en absoluto el crecimiento económico. Por el contrario, el World Economic Forum (2012), poco sospechoso de atacar al capitalismo, muestra que las cinco naciones más competitivas, según criterios capitalistas, forman parte de las naciones menos desiguales del mundo. Son, en este orden, Suiza, Finlan-

dia, Suecia, Países Bajos y Alemania. Dentro del grupo más competitivo están también las dos economías con mayor participación sindical del mundo (Suecia y Finlandia). En cuanto a la nación, hay que decir que fue una institución de igualdad en la época de las revoluciones francesa o estadounidense, pero no hoy día. También hubo proyectos nacionales de igualdad en Europa, tras la Segunda Guerra Mundial. «Las naciones y las fronteras nacionales siguen manteniendo su importancia bajo la globalización actual, pero ahora se han convertido, en su mayor parte, en instituciones de desigualdad» (Therborn, 2015, p. 181).

Por último, tengamos en cuenta, como señala Walter Scheidel (2018), que todo apunta a que, en el futuro, la ciencia y la tecnología científica podrían incrementar mucho más aún las desigualdades existentes hasta límites ahora ni siquiera sospechados. En efecto, «la transformación del cuerpo humano abrirá nuevas fronteras en la evolución de la desigualdad. La creación de organismos cibernéticos y la ingeniería genética tienen potencial para acrecentar las disparidades entre individuos e incluso sus descendientes más allá de sus talentos naturales y los recursos extraordinarios que dominan, y puede que al hacerlo influyan en la futura distribución de ingresos y riqueza. A medida que los avances en nanotecnología amplíen enormemente el uso y utilidad de los implantes artificiales, las aplicaciones podrán pasar del restablecimiento de funciones a su mejora. En los últimos años, los avances en la edición genética han hecho posible borrar e insertar fragmentos de ADN en placas de Petri y en organismos vivos con una facilidad sin precedentes. Aunque las consecuencias de esas intervenciones pueden estar limitadas a organismos individuales, también pueden convertirse en hereditarias manipulando la configuración genética de espermatozoides, óvulos y pequeños embriones. Los resultados del primer experimento de modificación del genoma de embriones humanos (no viables) fueron publicados en 2015. Los progresos recientes en este terreno han sido extremadamente rápidos y seguirán llevándonos a territorios desconocidos. Dependiendo del coste y la disponibilidad, es posible que los adinerados gocen de un acceso privilegiado a algunos de esos avances biomecánicos y genéticos. Hay motivos para poner en duda que las limitaciones políticas bastarán para eliminar esas oportunidades. [...] Las restricciones legales en las democracias occidentales, que ya están siendo propuestas, podrían precipitar resultados aún más desiguales otorgando ventaja a quienes puedan permitirse tratamientos privados en los países en los que sean

ofrecidos, con toda probabilidad algunas regiones de Asia. A la larga, la creación de bebés de diseño para los ricos y bien relacionados podría restringir la movilidad entre ricos y pobres genéricos o cíborgs e incluso, al menos en teoría, provocar una bifurcación entre dos especies diferentes» (Scheidel, 2018, p. 453). En definitiva, concluye Scheidel (p. 465), «puede que los avances tecnológicos lleven a las desigualdades a nuevos extremos separando a una élite biomecánica y genéticamente mejorada de los simples mortales, estos siempre controlados por las capacidades cada vez mayores de sus superiores». Ojalá no llegemos a conocer ese escenario.

10.4. Conclusión

El rasgo más esencial y definitorio de nuestra época es el auge y hegemonía del neoliberalismo tanto a nivel ideológico, como económico y político. Y sus efectos son bien visibles y sumamente dañinos para miles de millones de personas en todo el mundo: 1) un crecimiento imparable de las desigualdades; 2) un insostenible crecimiento de la pobreza; 3) un gran aumento del desempleo; 4) una deuda impagable en muchos países pobres; y 5) un peligroso destroz del planeta y del medio ambiente. Y lo grave es que todo ello está peor aún de lo que se dice. Soy pesimista en cuanto a las posibilidades de solución de todos esos problemas. Pero también quiero decir que ser pesimista no es lo mismo que decir que no tienen solución. Por el contrario, significa que la solución es sumamente difícil y que requiere mucho esfuerzo, mucha concienciación y, sobre todo, mucha acción colectiva, cooperativa, solidaria y coordinada. Estoy plenamente convencido de que otro mundo es posible, y que de nosotros –y solo de nosotros– depende el que se haga realidad.

Con respecto a la pobreza, diré, con Albert Sales i Campos (2014, pp. 16-17), que «es una construcción social cambiante en el tiempo y en el espacio en función de factores económicos, culturales, sociales y políticos. [...] la construcción social de la pobreza, tal como la conocemos hoy, es fruto, pues, de la industrialización y de la organización capitalista del trabajo». Dado que es una construcción social, su cuantificación es muy relativa. Normalmente se mide en función de la riqueza media o de la mediana. Por tanto, «el umbral de riesgo de pobreza es una cifra relativa que cambia en función de los ingresos de la población» (Sales i Campos, 2014, p. 13). Por ejemplo, si, como suele ocurrir, se fija en el 60 % de la

mediana de ingresos de todos los hogares, entonces eso significa que, si el salario medio de los trabajadores baja, bajará también el porcentaje de pobres existentes. Pero ello se debe a que cada vez hay que ser más pobre para ser considerado oficialmente pobre. Y de ahí se deriva la paradoja –que a veces ocurre– de que cuanto más empeora la situación de la gente durante una gran crisis económica, más disminuye el porcentaje de pobres. No obstante, las inadmisibles tasas actuales de pobreza pueden ser reducidas de forma importante. Solo hace falta voluntad política.

En cuanto al peligroso deterioro del planeta, también veo difícil que pueda solucionarse a corto o medio plazo. Y lo dramático es que, como señalan los expertos, va quedando poco tiempo para solucionar este problema Y no parece que haya muchos dispuestos a hacer ningún sacrificio para lograrlo, ni entre la población general, ni entre los gobernantes, y menos aún entre los máximos responsables de tal deterioro: las grandes empresas multinacionales (las petroleras, armamentísticas, farmacéuticas y las de transporte marítimo y terrestre, así como las macrogranjas industriales) y los grandes países, como China o EE. UU..

Por otra parte, las desigualdades son cada vez mayores, de manera que en los últimos años están alcanzando unos niveles insoportables. Más grave aún es el hecho de que cuanto mayores sean esas desigualdades, más difícil será corregirlas, pues el desequilibrio de poder no lo permitirá. Si los más ricos acumulan unos recursos inmensos y tienen un poder colosal no van a permitir que se tome ninguna medida que reduzca sus recursos, su poder y sus beneficios. Y, sin embargo, es esencial reducir la desigualdad, pues tengamos presente que el incremento de la igualdad mejora la cohesión social, y esta lleva a unos mejores niveles de salud física y mental, a una reducción sustancial de la violencia y la conflictividad social y a más altos índices de satisfacción y felicidad, como ya había adelantado Émile Durkheim y como se demostró en la ciudad estadounidense de Roseto. César Rendueles (2020) nos dice también que la reconversión industrial en Asturias en los años 80 aumentó las tasas de ansiedad, de alcoholismo y de depresión en esa región. Sin embargo, añade, quienes se involucraron activamente en las movilizaciones contra la reconversión industrial mejoraron su salud mental espectacularmente y de forma espontánea, como consecuencia, entre otros factores, de que percibían el apoyo social y la solidaridad. De hecho, el propio Rendueles informa de que en varios estudios a gran escala, llevados a cabo por

la OMS, se pudo observar que a las personas diagnosticadas de esquizofrenia les iba mucho mejor en los países pobres que conservaban fuertes sistemas de solidaridad social que en los países ricos. En efecto, en los primeros, el 63 % de los pacientes mejoraba significativamente a los cinco años, mientras que en los países ricos solo lo hacía entre un tercio y la mitad (Ryan, 2020).

En suma, es absolutamente crucial reducir las desigualdades en el mundo, tanto en los países ricos como, en especial, en los países pobres. «Existen varias razones para frenar la desigualdad. Si reducimos la desigualdad de resultados económicos, entonces esto contribuye a asegurar la igualdad de oportunidades, que se considera una característica clave de una sociedad democrática moderna. Los males sociales, como el crimen y la mala salud, se atribuyen a la naturaleza altamente desigual de las sociedades de hoy en día. Estos males proveen una razón instrumental para procurar alcanzar niveles más bajos de pobreza y desigualdad, del mismo modo que también la provee el miedo de que la desigualdad extrema es incompatible con una democracia funcional. Y hay quienes, como yo, creen que los niveles actuales de desigualdad económica son intrínsecamente inconsistentes con la concepción de una buena sociedad» (Atkinson, 2016, p. 404). Una sociedad justa y democrática no puede tener ni los niveles de desigualdad que hay actualmente en los países desarrollados ni la pobreza que existe en el llamado cuarto mundo, ni los demócratas de cualquier país pueden aceptar las altas tasas de pobreza y desigualdad que existen en el tercer mundo. Tenemos recursos suficientes en el planeta para que nadie pase hambre. El hambre existente en el mundo actual no es la consecuencia de una escasez de alimentos, sino de una serie de decisiones políticas y de la exagerada desigualdad que tiene que soportar la población. Pero tal vez el mayor problema que se nos plantea para los próximos años sea frenar el crecimiento económico sin incrementar ni la desigualdad ni la pobreza. Otro mundo mejor es posible, y de nosotros depende. Ello puede parecer una utopía, pero sin duda es una utopía realizable. No renunciemos a ella.¹

1 Tengo que agradecer a mi amigo Manolo Martínez Mauleón el hecho de que, en su día, me hiciera una interesante sugerencia, a la que este libro debe su existencia.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- Acemoglu, D. y Johnson, S. R. (2006). «Understanding Prosperity and Poverty: Geography, Institutions, and the Reversal of fortune. En A. Banerjee, R. Benabou y D. Mookherjee», *Understanding poverty* (pp. 19-36). New York, Oxford University Press.
- Acemoglu, D., S. Johnson, y J. A. Robinson (2005). «Institutions as a fundamental cause of long run economic growth». En P. Aghion y S. N. Durlauf (eds.). *Handbook of Economic Growth*, (Vol. 1, pp. 385-472). Amsterdam, Elsevier,
- Alexander, M. (2014). *El color de la justicia: La nueva segregación racial en Estados Unidos*. Madrid, Capitán Swing.
- Alfaro, J. (2013). «Psicología comunitaria y políticas sociales: Institucionalidad y dinámicas de actores». *Global Journal of Community Psychology Practice*, 4(2). <http://www.gjcpp.org/pdfs/alfaro-v4i2-20130613.pdf>
- Alonso, L.E. (1999). *Trabajo y ciudadanía: Estudios sobre la crisis de la sociedad salarial*. Madrid, Trotta.
- Alonso Torrén, F.J. (1999). «Las condiciones de vida de la población pobre en España». En José Félix Tezanos (ed.), *Tendencias de desigualdad y exclusión social* (pp. 227-249). Madrid, Editorial Sistema.
- Althusser, L. (1988). *Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Freud y Lacan*. Nueva Visión, Buenos Aires.
- Álvarez, J. M. (2008). *Invencción de las enfermedades mentales*. Madrid, Gredos.
- Appfelbaum, E. y Batt, R. (2014). *Private equity at work: When Wall Street manages Main Strait*. Nueva York, Russell Sage Foundation.
- Amin, S. (1970). *L'accumulation à l'échelle mondiale. Critique de la théorie du sous-développement*. París, Anthropos.
- Ardila, R. (2011). *El mundo de la psicología*. Bogotá, Editorial Manual Moderno.
- Ariño, A. y Romero, J. (2016). *La secesión de los ricos*. Barcelona, Galaxia Gutenberg.

Arrighi, G. (2014). *El largo siglo XX: dinero y poder en los orígenes de nuestra época*. Madrid, Akal.

Atkinson, A. B. (2016). *Desigualdad, ¿qué podemos hacer?* México, DF, Fondo de Cultura Económica (original, inglés, 2016).

Attali, J. (2021). *La economía de la vida*. Madrid, Libros del Zorzal.

Ayala, A. (2014). *El papel de garantía de mínimos frente a la crisis* (documento de trabajo. VII Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España). Madrid, FOESSA.

Ayala Cañón, L. (2018). «Desigualdad estructural: Los límites del crecimiento económico». En G. Jaraíz Arroyo (Coord.), *Bienestar social y políticas públicas Retos para pactar el futuro* (pp. 135-162). Madrid, La Catarata.

Bales, K. (2000). *La nueva esclavitud en la economía global*. Madrid, Siglo XXI (original, 1999).

Banco Mundial (1990). *World development report, 1990. Poverty*. Washington, D.C., Banco Mundial

Banco Mundial (1993). *World development report, 1993: Investing in health*. Washington, D.C., Banco Central.

Banco Mundial (1994). *World debt tables, 1993-1994*. Washington, D.C., Banco Mundial.

Banco Mundial (2008). *Poverty Data. A supplement to World Development Indicators 2008*. Washington, DC, Banco Mundial.

Banco Mundial (2010). *World Development Report, 2010: Development and climate change*. Washington, DC, Banco Mundial.

Banco Mundial (2011). *Conflicto violento e inseguridad: Informe sobre el desarrollo mundial 2011 examina riesgos y propone medidas*. México, DF, Banco Mundial.

Banco Mundial (2015). *World Development Report 2015: Mind, Society, and Behavior*. Washington, Banco Mundial.

Banco Mundial (2020). *La COVID-19 (coronavirus) hunde a la economía mundial en la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial*. <https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-economy-into-worst-recession-since-world-war-ii>

Barefoot, J.C., Maynard, K.E., Beckham, J.C., Brummett, B.H., Jooker, K. y Siegler, I.C. (1998). «Trust, health and longevity». *Journal of Behavioral Medicine*, 21(6). 517-526.

Barlow, M.H. (1989). «Race and the problem of crime in Time and Newsweek Cover Stories, 1946-1995». *Social Justice*, 25, 149-183.

Barrero, E. (2012). *Psicología de la liberación: Aportes para la construcción de una Psicología desde el Sur*. Bogotá, Colombia, Ediciones Cátedra Libre (versión digital, 2015).

Bauman, Z. (1999). *La globalización: Consecuencias humanas*. México, F.C.E.

- Bauman, Z. (2005). *Vidas desperdiciadas: La modernidad y sus parias*. Barcelona, Paidós.
- Bauman, Z., (2011). *Daños colaterales: Desigualdades sociales en la era global*. México, Fondo de Cultura Económica.
- Bauman, Z. (2014). *¿La riqueza de unos pocos nos beneficia a todos?* Barcelona, Paidós.
- Bauwens, M., Bellivier, F., Benhamou, F. et al. (2015). *Le retour des communs : la crise de l'idéologie propriétaire*. París, Editions les Liens qui libèrent.
- BBC (2014). *World prison populations*.
<http://news.bc.co.uk/1/shared/spl/hi/uk/06/prison/html/nn2pager.stm>.
- Beauvois, J.L. y Joule, R. (1981). *Soumission et idéologie*. París, P.U.F.
- Becerra, J.C. (2016). *El capital social y su relación con la situación de pobreza de dos asentamientos vulnerables en Bogotá*. Tesis. Pontificia Universidad Javeriana.
- Beck, U. (1992). *Risk society: Towards a new modernity*. Londres, Sage (edición en castellano, 1998).
- Beck, U. (2007). *La sociedad del riesgo mundial*. Barcelona, Paidós.
- Beckert, S. y Rockman, S. (2016). *Slavery's capitalism: A new history of American economic development*. Philadelphia, Universidad de Pensilvania.
- Becker, G. (1992). Human Capital and the Economy. *Proceedings of the American Philosophical Society*, 136(1). 85-92.
- Berghman, J. (1995). «Social exclusión in Europe: Policy context and analytical framework». En Graham Room (ed.), *Beyond the threshold: The measurement and analysis of social exclusión*. Bristol, The Policy Press.
- Bernabé, D. (2021). «Boric y la izquierda española: qué encierran los análisis sobre Chile». *Infolibre*, 22/12/2022.
- Berzosa, C. (2010). «Escasos resultados en el combate contra el hambre y la pobreza». En A. Guerra, J.F. Tezanos y S. Tezanos Vázquez (eds.), *La lucha contra el hambre y la pobreza* (VIII Encuentro Salamanca) (pp. 45-52). Madrid, Sistema.
- Blanco, A. (1998). *Psicología de la liberación*. Ignacio Martín-Baró. Madrid, Trotta
- Boccon-Gibod, Th. y Crétois, P. (2015) (dir.). *État social, propriété publique et biens communs*. Lormont, Le Bord de l'eau.
- Bois, G. (2004). *Una nueva servidumbre: Ensayos sobre la mundialización*. Granada, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada.
- Bourdieu, P. (1989). «Social space and symbolic power». *Sociological theory*, 7(1).
- Bourdieu, P. (1998). «L'essence du néolibéralisme», *Le Monde Diplomatique*. París, Marzo.
- Bourguignon, F. (2012). *La mondialisation de l'inégalité*, París, Seuil.

Brunner, E., Juneja, M. y Marmot, M. (1998). «Abdominal obesity and disease are linked to social position». *British Medical Journal*, 316, p. 308.

Burston, B.W., Jones, D. y Robertson-Saunders, P. (1995). «Drug use and African Americans: Myth versus reality». *Journal of Alcohol and Drug Abuse*, 40, invierno de 1995.

Búster, G. (2005). «El proyecto Milenio o la globalización capitalista compasiva». En A. Dubois y cols, *Tendencias a la cooperación para el desarrollo y futuro de las ONGD* (pp. 125-150). San Sebastián, PTM-Mundubat.

Cagé, J. y Huet, B. (2021). *L'information est un bien public: repenser la propriété des médias*. París, Seuil.

CaixaBank (2021). *Inequality Tracker*.
<https://inequality-tracker.caixabankresearch.com>.

Camacho Salcedo, N. (2019). *Consecuencias psicológicas y sociales de la pobreza en Colombia y sus vínculos con la participación ciudadana: Revisión sistemática de literatura*. Bogotá (Colombia), Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas.

Canet, E. (2001). *Pobreza y exclusión social*. Madrid, Editorial CCS-ICCE.

Caparrós, M. (2015). *El Hambre*. Barcelona, Anagrama.

Carreras, I. y Fanjul, G. (2005). «Desastres naturales y la lucha contra la pobreza en 2005: Un año para la historia». *El País*, 23, enero, 2005.

Case, A. y Deaton, A. (2020). *Muertes por desesperación y el futuro del capitalismo*. Bilbao, Deusto.

Castel, R. (1996). «Trabajo y utilidad para el mundo». *Revista Internacional del Trabajo*, 115(6). 671-678.

Castells, M. (2000). *La era de la información, 1. La sociedad red*. Madrid, Alianza.

Castells, M. (2001a). *La era de la información: economía, sociedad y cultura, Vol 2: El poder de la identidad*. Madrid, Alianza.

Castells, M. (2001b). *La era de la información: economía, sociedad y cultura, Vol. 3: Fin de milenio*. Madrid, Alianza.

Castillo, J. C., Miranda, D. y Carrasco, D. (2011). «La percepción desigual de la desigualdad. Una comparación de indicadores de percepción de desigualdad económica». *Centro de medición MIDE*. Escuela de Psicología, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Cebrián, I. (2016). «La Reforma laboral del 2012 y la flexiseguridad. Aspectos económicos». En S. Ruesga *et al.* (eds), *Reformas laborales en la gran recesión*. Valencia, Tirant lo Blanch.

- Cebrián, I. (2018). «El modelo de empleo existente en España y las consecuencias de las reformas laborales». En Jaraíz, G. (ed.), *Bienestar social y políticas públicas: Retos para pactar el futuro* (pp. 184-202). Madrid, Editorial Catarata.
- CEPAL (2017). *Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2017: La dinámica del ciclo económico actual y los desafíos de política para dinamizar la inversión y el crecimiento*. Santiago (Naciones Unidas), Editorial Cepal.
- Chen, S. y Ravallion, M. (2008). *The developing world is poorer than we thought, but no less successful in the fight against poverty*. Washington, The World Banc, Policy Research Working Paper 4703.
- Chetty, R. et al. (2014). «Where is the land or opportunity? The geography on intergenerational mobility in the United States». *Quarterly Journal of Economics*, 129(4). 1.553-1623.
- Chetty, R. y Hendren, N. (2015). *The impacts of neighborhoods in intergenerational mobility childhood exposure effects and county-level estimates*. Cambridge, Mass., Harvard University Press.
- Chetty, R., Hendren, N. y Katz, L.F. (2015). *The long-term effects of exposure to better neighborhoods: New evidence from the moving to opportunity experiment*. Cambridge, Mass., Harvard University Press.
- Chomsky, N. (2001). *El beneficio es lo que cuenta: Neoliberalismo y orden global*. Barcelona, Crítica
- Chomsky, N. (2017). *Requiem por el sueño americano*. Madrid, Sexto Piso.
- Chomsky, N. y Herman, E. (1990). *Los guardianes de la libertad*. Barcelona, Grijalbo Mondadori.
- Chossudovsky, M. (2002). *Globalización de la pobreza y nuevo orden mundial*. México, Siglo XXI.
- Cidade, E., Moura Jr., J. y Ximenes, V. (2012). «Implicações psicológicas da pobreza na vida do povo latino-americano». *Psicologia Argumento*, 30(68). 87-98.
- Clastres, P. (1978). *La sociedad contra el estado*. Barcelona, Monte Ávila Editores.
- Clastres, P. (1981). *Investigaciones en antropología política*. Barcelona, Gedisa.
- Clastres, P. (1986). *Crónica de los indios guayaquís*. Barcelona, Editorial Alta Fulla.
- Coady, D., Parry, I., Le, N.-P. y Shang, B. (2019). «Global Fossil Fuel Subsidies Remain Large: An Update Based on Country-Level Estimates». *Documento de trabajo W/P/19/89*, Fondo Monetario Internacional, Washington, DC.
- Cole, E. y Olstrom, E. (2012) (eds). *Property in land and other resources*. Cambridge, Mass., Lincoln Institute of Land Policy.

Commins, P. (1993). *Combating exclusion in Ireland, 1990-1994: A midway report*. Bruselas, Comisión Europea.

Coriat, B. (Ed.). *Le retour des communs. La crise de l'ideologie propriétaire*. París, LLL.

Cornia, G.A. y Paniccià, R. (2000). «The transition mortality and policy responses». En G.A. Cornia y R. Paniccià (Eds.), *The mortality crisis in transitional economics* (pp. 3-37). Oxford, Oxford University Press.

Cortés, J.L. (1989). *La esclavitud negra en la España peninsular del siglo XVI*. Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca.

Cortés, V. (1964). *La esclavitud en Valencia durante el reinado de los Reyes Católicos, 1479-1516*. Valencia, Ayuntamiento de Valencia.

Cozzarelli, C., Wilkinson, A.V. y Tagler, M. J. (2001). «Attitudes toward the poor and attributions for poverty». *Journal of Social Issues*, 57, 207-227.

Crozier, M. J., Huntington, S. P. y Watanuki, J. (1975). *The Crisis of Democracy. Report on the Governability of Democracies to The Trilateral Commission*. New York University Press.

Curtin, Ph. D. (1969). *The Atlantic slave trade: A census*. Madison, The University of Wisconsin Press.

Darity, W. y Mullen, K. (2020). *From here to equality: Reparations for black Americans in the twenty-first century*. Chapel Hill, University of North Carolina Press.

De la Corte, L. (1998). *Compromiso y ciencia social: el ejemplo de Ignacio Martín Baró* (tesis doctoral). Madrid, Universidad Autónoma de Madrid.

De la Corte, L. (2000a). «La psicología de Ignacio Martín-Baró como psicología social crítica: Una representación de su obra». *Revista de Psicología General y Aplicada*, 53 (3). 437-450.

De la Corte, L. (2000b). «Para una ciencia social comprometida; reflexiones desde la obra de Ignacio Martín-Baró». En Vásquez, J. (edit.), *Psicología Social y Liberación en América Latina*. México, UAM Itztapalapa.

De Miguel, J. (2005). «Prólogo». En E. López-Aranguren (2005). *Problemas sociales: Desigualdad, pobreza, exclusión social* (pp. 13-23). Madrid, Editorial Biblioteca Nueva.

Deaton, A. (2015). *El gran escape: Salud, riqueza y los orígenes de la desigualdad*. Madrid, Fondo de Cultura Económica.

Díaz P. I. (2011). *Análisis de los factores de éxito y fracaso del control social a la gestión pública estatal. estudio de caso: la red ciudadana de control social en bienestar-componente de discapacidad en Bogotá*. (tesis doctoral). Bogotá, Universidad colegio mayor de nuestra señora del rosario, Facultad de ciencia política y gobierno.

Díaz-Salazar, R. (2011). *Desigualdades internacionales, ¡Justicia ya!* Barcelona, Icaria.

Dubet, F. (2014). *La preference pour l'inegalité. Comprendre la crise des solidarities*. París, Seuil.

- Dubois, A. (2005). «La revisión del desarrollo a principio de siglo: Entre el nuevo consenso y la propuesta alternativa». En A. Dubois y cols., *Tendencias a la cooperación para el desarrollo y futuro de las ONGD* (pp. 9-32). San Sebastián, PTM-Mundubat.
- Ellwood, W. (2007). *Globalización*. Barcelona, Oxfam Intermon Ediciones.
- Elo, I. (2009). «Social class differentials in health and mortality: Patterns and explanation in comparative perspective». *Review of Sociology*, 35, 553-572.
- Eltis, D. (1987). *El crecimiento económico y el fin de la trata transatlántica de esclavos*. Nueva York, Oxford University Press.
- Eltis, D., Behrendt, S., Richardson, D. y Klein, H.S. (2008). *The Trans-Atlantic slave trade: A database*.
<https://www.slavevoyages.org/voyage/database>
- Estefanía, J. (2001). *La nueva economía: La globalización*. Barcelona, Debate.
- Estefanía, J. (2017). *Abuelo, ¿cómo habéis consentido esto? Los graves errores que nos han llevado a la era Trump*. Barcelona, Planeta.
- Estefanía, J. (2021). «El capitalismo cambia de piel». *El País, Babelia*, número 1533.
- Etxezarreta, M. (2001). «Algunos rasgos de la globalización». En R. Fernández Durán, Etxezarreta, M. y Sáez, M. (Eds.), *Globalización capitalista: Luchas y resistencias*. Bilbao, Virus Editorial.
- European Anti-Poverty Network (2019). *Poverty watch Spain 2019*. Madrid, EAPN SPAIN.
- Falk, T. (2002). *La globalización depredadora: Una crítica*. Madrid, Siglo XXI.
- FAO (2008). *El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo*. Roma, FAO.
- FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF (2020). *El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2020*. Roma, FAO
- Fariñas, M.J. (2005). *Mercado sin ciudadanía: Las falacias de la globalización neoliberal*. Madrid, Biblioteca Nueva.
- Feldstein, M. (2005). «Rethinking social insurance». *American Economic Review*, 95,1-24.
- Fernández Albertos, J. (2012). *Democracia intervenida. Políticas económicas en la gran recesión*. Madrid, Editorial Catarata/Fundación Alternativas.
- Fernández Aúz, T. y Eguibar, B. (2016). *El imperio del algodón: una historia global*. Barcelona, Crítica.
- Fernández Cháves, M.F. y Pérez García, R. (2010). «Las redes de la trata negrera: mercados portugueses y tráfico de esclavos en Sevilla (1560-1590)». En A. Martín Casares y M. García Barranco (Comps.), *La esclavitud negroafricana en la historia de España: Siglos XVI y XVII* (pp. 5-34). Granada, Editorial Comares.

- Ferro, M. (2005). *El libro negro del colonialismo*. Madrid, La Esfera de los Libros.
- Fisher, I. (2019). «Economists in public service». *The American Economic Review*, 9, 5-21.
- FOESSA (2016). «Exclusión social y recuperación económica». *Análisis y perspectivas*. Madrid, FOESSA.
- FOESSA y Cáritas (2022). *Evolución de la cohesión social y consecuencias de la Covid19 en España*. Madrid, Fundación FOESSA y Cáritas Española Editores.
- Foucault, M. (1976). *Vigilar y castigar*. México, Siglo XXI.
- Franco, J.L. (1980). *Comercio clandestino de esclavos*. La Habana, Ciencias Sociales.
- François, P. y Lemerrier, C. (2021). *Sociologie historique du capitalisme*. París, La Découverte.
- Frank, R.H. (1999). *Luxury Fever*. Nueva York, Free Press.
- Frank, R.H. (2007). *Falling behind: How rising inequality harms the middle class*. Berkeley, CA, University of California Press.
- Freidson, E. (2001). *Professionalism, the Third Logic: On the Practice of Knowledge*. Chicago, University of Chicago Press.
- Fromm, E. (1976). *El miedo a la libertad*. Buenos Aires, Paidós (original, 1941).
- Fundación Secretariado Gitano (2019). *Estudio comparado sobre la situación de la población gitana en España en relación al empleo y la pobreza 2018*. Informe de 2019.
- Furió, An (2000). «Esclaus i assalariats. La funció econòmica de l'esclavitud en la Península Ibèrica a la Baixa Edat Mitjana». En M.T. Ferrer y J.Mutgé (eds.), *De l'esclavitud a la llibertat: esclaus i lliberts a l'edat mitjana* (pp. 15-39). Barcelona, CSIC.
- Furió, An (2002). «Mercancías humanas: El nuevo auge de la esclavitud al final de la Edad Media». En M. Chust (ed.), *De la cuestión señorial a la cuestión social. Homenaje al profesor Enric Sebastiá* (pp. 23-38). Valencia, PUV.
- Galindo, O. y Ardila, R. (2012). «Psicología y pobreza: Papel del locus de control, la autoeficacia y la indefensión aprendida». *Avances en Psicología Latinoamericana*, 30 (2). pp. 381-407.
- Galindo, P. (2006). «Frente a la globalización e inseguridad alimentarias, agroecología y consumo responsable». *Archipiélago*, 71, 35-45.
- Gálvez, L. y Torres, J. (2010). *Desiguales: Mujeres y hombres en la crisis financiera*. Madrid, Icaria.
- Gatica, L., Martini, J.P., Matias Dreizik, M. e Imhoff, D. (2017). *Revista de Psicología*, 35, 279-310.
- George, S. (2007). *Otro mundo es posible si...* Barcelona, Icaria-Oxfam Intermon.

- George, S. (2009). *El pensamiento secuestrado*. Madrid, Editorial Icaria/Diario Público.
- George, S. (2010). *Sus crisis, nuestras soluciones*. Barcelona, Icaria.
- Gethin, A., Martínez-Toledano, C. y Morgan, M. (2019). *Desigualdades crecientes y divisiones políticas en España*. World Inequality Database.
- Giner, S., Lamo de Espinosa, E y Torres, C. (Eds) (1998). *Diccionario de Sociología*. Madrid, Alianza.
- Gledhill, J. (2016). *La nueva guerra contra los pobres: La producción de inseguridad en Latinoamérica*. Barcelona, Ediciones Bellaterra (original, 2015).
- Góis, C. (2008). *Saúde comunitária: pensar e fazer*. São Paulo, Editora HUCITEC.
- Gondra, J.M. (2013). «A psychology of liberation for Central America: The unfinished work of Ignacio Martín-Baró». *Spanish Journal of Psychology*, 16, 1-17.
- Gondra, J.M. (2014). «Ignacio Martín Baró, psicólogo de la liberación». *Razón y Fe*, 1393, 483-490.
- González, H. y Pérez, M. (2008). *La invención de trastornos mentales*. Madrid, Alianza.
- Gramsci, A. (1997). *Los intelectuales y la organización de la cultura*. Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión
- Gray, J. (1998). *The delusions of global capitalism*. Londres, Granta Books.
- Gross, G. (1974/1983). «Selección artificial». En N. Armistead (Ed.), *La reconstrucción de la psicología social* (pp. 41-50). Barcelona, Hora.
- Guareschi, P. (2001). «Pressupostos psicossociais da exclusão: competitividade e culpabilização». En B.Sawaia (Org.), *As artimanhas da exclusão: análise psicossocial e ética da desigualdade social* (9ª ed., pp. 141-156). Petrópolis, Vozes.
- Guex, 2020). «L'Émergence du paradis fiscal suisse», En D. Fraboulet y P. Verheyde (Eds.), *Pour une histoire sociale et politique de l'économie*. Paris, Éditions de la Sorbonne.
- Harvey, D. (2010). *Géographie du capital: vers un matérialisme histórico-géographique*. Paris, Syllepse.
- Hayek, F. von (2020). *Los fundamentos de la libertad*. Madrid, Unión Editorial (10ª edición; original, 1960).
- Henri Giret, C. (2019). *Rester Riche: Enquête sur les Gestionnaires de Fortune et Leurs Clients*. Paris, Le bord de l'eau,
- Henry, P. y Saul, A. (2006). «El desarrollo de la justificación del sistema en el mundo en vías de desarrollo». *Social Justice Research*, 19, 365-378.
- Herrnstein, R. y Murray, Ch. (1994). *The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American Life*. Nueva York, Free Press.

Hobsbawm, E. (1995). *Historia del siglo XX*. Madrid, Crítica/Grijalbo.

House, J. S. (2008). «Social psychology, social science, and economics: Twentieth century progress and problems, twenty-first century prospects», *Social Psychology Quarterly*, 71(3). 332-356.

Houtart, F. y Polet, F. (Eds.) (2001). *El otro Davos: Globalización de resistencias y de luchas*. Madrid, Editorial Popular.

Human Rights Watch (2000). «Punishment and prejudice: Racial disparities in the war on drugs». *HRW Report*, 12(2).

Iglesias, P. (2022). «La ofensiva mediático-judicial contra la izquierda» (entrevista a Arantxa Tirado). *CTXT*, 2 enero 2022.

Informe de relator de la ONU (2020). *Informe del relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos*. Nueva York, ONU.

Instituto Nacional de Estadística (2019). *Riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE) por nivel de formación alcanzado (personas de 16 y más años)*. Madrid, INE.

Institution of Mechanical Engineers (2013). *Global food waste not, want not*. Londres, IME.

International Labour Organization (2008). «Income inequalities in the age of financial globalization». *World of Work Report 2008*. Ginebra, ILO.

Israel, J. (1979). «From level of aspiration to dissonance: Or, what the middle class worries about», En A. R. Buss (ed.), *Psychology in social context* (pp. 239-257). Nueva York: Wiley.

James O. (2007). *Affluenza*. Londres, Vermilion.

Jones, O. (2013). *Chavs: la demonización de la clase obrera*. Madrid, Capitán Swing.

Jost, J. (2006). «The end of the end of ideology». *American Psychologist*, 61 (7). 651- 670.

Jost, J. y Banaji, M. R. (1994). «The role of stereotyping in systemjustification and the production of false consciousness». *British Journal of Social Psychology*, 33, 1-27.

Jost, J. T., Blount, S., Pfeffer, J. y Hunyady, O. (2003). «Fair market ideology: Its cognitive-motivational underpinnings». *Research in Organizational Behavior*, 25, 53-91.

Jost, J., Federico, C. y Napier, J. (2009). «Political Ideology: Its Structure, Functions, and Elective Affinities». *Annual Review of Psychology*, 60, 307-337

Jost, J.T. y Hunyady, O. (2002). «The psychology of system justification and the palliative function of ideology». *European Review of Social Psychology*, 13, 111-153.

Jost, J.T. y Hunyady, O. (2005). Antecedents and consequences of system-justifying ideologies. *Current Directions in Psychological Science*, 14, 260-265.

- Kharas, H. (2010). «La ayuda al desarrollo en el siglo XXI». En A. Guerra, J.F. Tezanos y S. Tezanos Vázquez (eds.). *La lucha contra el hambre y la pobreza* (VIII Encuentro Salamanca) (pp. 299-340). Madrid, Sistema.
- Kiecolt-Glaser, J.K., Loving, T.J., Stowell, J.R., Malarkey, W.B., Lemeshow, S., Dickinson, S.L. y Glaser, R. (2005). «Hostile marital interactions, proinflammatory cytokine production, and wound healing». *Archives of General Psychiatry*, 62(12). 1.377-1.384.
- Kimmel, M. (2019). *Hombres (blancos) cabreados: La masculinidad al final de una era*. Valencia, Barlin Libros.
- Klein, N. (2007). *La doctrina del shock*. Barcelona, Paidós.
- Kliksberg, B. (2015). «Un escándalo ético mayor». *Página12*, 4 de febrero.
- Korpi, W. (1983). *The democratic class struggle*. Londres, Routledge.
- Kropotkin, P.A. (2005/1902). *El apoyo mutuo: Un factor de la evolución*. Santiago de Chile, Instituto de Estudios Anarquistas.
- Krugman, P. (2012). *Acabad con esta crisis*. Madrid, Crítica.
- Lachman, M. y Weaver, S. (1998). «The sense of control as a moderator of social class differences in health and well-being». *Journal of Personality and Social Psychology*, 74, 763-773.
- Landais, C., Piketty, T. y Saez, E. (2011). *Pour une révolution fiscale. Un impôt sur le revenu pour le XXI siècle*. París, Seuil.
- Landes, D. (2000). *La riqueza y la pobreza de las naciones: Por qué algunas naciones son tan ricas y otras son tan pobres*. Barcelona, Crítica.
- Laparra, M. y Aguilar, M. (1999). «Tendencias de la exclusión y las políticas de integración en España». En J.F. Tezanos (ed.). *Tendencias en desigualdad y exclusión social*. Madrid, Editorial Sistema.
- Lappé, F.M. (2006). «Terminar con el hambre: La respuesta no es nuevos alimentos, sino una nueva mirada». *Archipiélago*, 71, 11-14.
- Lassner, J.B., Matthews, K.A. y Stoney, C.M. (1994). «Are cardiovascular reactors to asocial stress also reactors to social stress?». *Journal of Personality and Social Psychology*, 66, 67-77.
- Laval, C. y Dardot, P. (2013). *La nueva razón del mundo. Ensayo sobre la sociedad neoliberal*, Barcelona, Gedisa.
- Lazzarato, M. (2013). *La fábrica del hombre endeudado*. Amorrortu, Buenos Aires (original, 2011).
- Leahy, J. (2013). «Brazil opens prison doors to investors». *Financial Times*, 29 de enero.
- Lenoir, R. (1974). *Les exclus: Un français sur dix*. Le Seuil, Paris.

- Leon, D.A., Vagero, D. y Olausson, P.O. (1992). «Social class differences in infant mortality in Sweden: comparison with England and Wales». *British Medical Journal*, 305, 6855, 687-691.
- Levy, J. (2021). *Ages of American capitalism: A history of the United States*. Nueva York, Random House.
- Lindert, P. (2000). «Three centuries of inequality in Britain and America». En A. Atkinson y F. Bourguignon (Eds.), *Handbook of income distribution* (Vol. I, pp. 167-216). Amsterdam, Elsevier.
- López-Aranguren, E. (2005). *Problemas sociales: Desigualdad, pobreza, exclusión social*. Madrid, Editorial Biblioteca Nueva.
- Maalouf, A. (2009). *El desajuste del mundo: Cuando nuestras civilizaciones se agotan*. Madrid, Alianza.
- Markovits, D. (2019). *The meritocracy trap*. Londres, Penguin.
- Marmot, M. (2004). *Status síndrome*. Londres, Bloomsbury.
- Marshall, T.H. (2004). *Ciudadanía y clase social*. Madrid, Alianza (original, 1950).
- Marshall, T. H. y Bottomore, T. (1998). *Ciudadanía y clase social*. Madrid, Alianza.
- Martel, F. (2019). *Sodoma: Poder y escándalo en el Vaticano*. Barcelona, Editorial Roca.
- Martin, H.P. y Schumann, H. (1998). *La trampa de la globalización*. Madrid, Taurus.
- Martín-Baró, I. (1983). *Acción e ideología. Psicología social desde Centroamérica*. San Salvador, UCA editores.
- Martín Baró, I. (1998). *Psicología de la liberación*. Madrid, Trotta.
- Martín-Baró, I. (2003). *Poder, ideología y violencia*. Madrid, Trotta.
- Martín Casares, A. y García Barranco, M. (2010). «Introducción». En A. Martín Casares y M. García Barranco (Comps.), *La esclavitud negroafricana en la historia de España: Siglos XVI y XVII* (pp. 1-4). Granada, Editorial Comares.
- Martín Seco, J.F. (1995). *La farsa neoliberal: Refutación de los liberales que se creen libertarios*. Madrid, Temas de Hoy.
- Martínez, J. (2002). «Desarrollar el subdesarrollo». En G. Galdón (Ed.), *Mundo, S.A.: Voces contra la globalización*, págs. 45-56. Barcelona, Ediciones de la Tempestad.
- Martínez Osés, P.J. (2010). «ONGD y ciudadanía del siglo XXI: Incidencia política para el desarrollo mundial». En A. Guerra, J.F. Tezanos y S. Tezanos Vázquez (eds.), *La lucha contra el hambre y la pobreza* (VIII Encuentro Salamanca) (pp. 415-451). Madrid, Sistema.
- Martínez Peria, J. F. (2010). «Haití, el Antiguo Régimen». *Revista del Centro Cultural de Cooperación Floreal Gorini*. Enero/Abril 2010, n.º 8.

- Mauer, M. (2006). *Race to incarcerate*. Nueva York, The New York Press.
- Mauer, M. y King, R.S. (2004). *Schools and Prisons: Fifty years after Brown v. Board of Education*. Washington, DC, The Sentencing Projects.
- McCord, C. y Freeman, H.P. (1990). «Excess mortality in Harlem». *New England Journal of Medicine*, 322(3). 173-177.
- Merman, G. (2010). «La república negra». *Suplemento Radar Libros* del diario *Página 12*, 20 de junio de 2010.
- Mestrum, F. (2018). «Justicia social para la sostenibilidad de la vida: Sobre la necesidad de un nuevo pacto social global». En Jaraíz, G. (ed.), *Bienestar social y políticas públicas: Retos para pactar el futuro* (pp. 91-110). Madrid, Editorial Catarata.
- Micheletti, P. (2020). *0,03%: pour une transformation du mouvement humanitaire international*. Artignosc-sur-Verdon, Éditions Parole.
- Mijs, J.B. (2018). «Visualizing belief in meritocracy, 1930-2010», *Socius*, 4, 1-2.
- Milanovic, B. (2005). *Worlds apart: Measuring international and global inequality*. Princeton, Princeton University Press.
- Milanovic, B. (2012). *Los que tienen y los que no tienen. Breve y particular historia de la desigualdad global*. Madrid, Alianza.
- Milanovic, B. (2016). *Global inequality. A new approach for the age of globalization*. Cambridge, Harvard University Press.
- Miller, G. A. (1969). «Psychology as a means of promoting human welfare». *American Psychologist*, 24(12). 1063-1075.
- Molina Guzmán, J. y Rottenbacher de Rojas, J. (2013). *Justificación de la inequidad y su relación con la ideología política en dos muestras limeñas de diferentes sectores socioeconómicos*. (tesis de grado, Licenciatura en Psicología). Facultad de Ciencias Humanas y Letras, Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Moreno, L. (2012). *La Europa asocial: Crisis y Estado del bienestar*. Barcelona, Península.
- Moreno, L. y Conversi, D. (2018). «Cambio climático y modelo de bienestar en la era del Antropoceno». En Jaraíz, G. (ed.), *Bienestar social y políticas públicas: Retos para pactar el futuro* (pp. 74-90). Madrid, Catarata.
- Morin, F. (2015). *L'hydre mondiale: L'oligopole bancaire*. Montreal, Lux Editeur.
- Montero, M. (1993). «La psicología de la liberación de Ignacio Martín-Baró: El impulso práxico y el freno teórico». *Comportamiento*, 2, 61-75.
- Morrisson, C. (2000). «Historical perspectives on income distribution: the case of Europe». En A. Atkinson y F. Bourguignon (Eds.). *Handbook of Income Distribution* (pp. 217-260). Amsterdam, Elsevier.

Muñoz Ramírez, G. (2014) «Me quieren matar o enloquecer, acusa Nestora Salgado; cumple un año en prisión». *La Jornada*, 21 de agosto.

Myrdal, G. (1975). *Against the Stream*. Vintage Books, Nueva York.

Naciones Unidas (2013). *Inequality matters: Report on World Social Situation 2013*. Nueva York, Naciones Unidas.

Naciones Unidas (2015). *Changing our World*, res. GA A/69/L.85.

Napier, JL y Jost, JT (2008). «¿Por qué los conservadores son más felices que los liberales?» *Ciencia Psicológica*, 19 (6). 565-572.

OCDE (2011). *Divided we stand*. OCDE, www.oecd.org

OCDE (2015). *In it together: Shy less inequality benefits all*, París, OCDE.

Oficina del Censo de Estados Unidos (1997). *Powerty in the United State: 1996* (Current Population Reports, serie P60-198). Washington, OCEU.

Olshansky, J. *et al.* (2012). «Differences in life expectancy due to race and educational diferentes are widening, and many may not catch up». *Health Affairs*, 31(8). 1803-1813.

Ortiz, I. y Cummins, M. (2011). «Global inequality: beyond the bottom billion – a rapid review on income distribution in 141 countries». *Social and Economic Polity Working Paper*. Nueva York, United Nations Chindren's Fund.

Ortiz, I. y Cummins, M. (2013). «The age of austerity: A review of public expenditures and adjustment measures in 181 countries.». *SSRN*, marzo de 2013.

Ostram, J.D., Loungani, P. y Furceri, D. (2016). «El neoliberalismo ¿un espejismo?». *Finanzas y desarrollo* (publicación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial). 53, 38-41

Ostry, J.D., Berg, A. y Tsangarides, C.G. (2014). «Redistribution, inequality, and growth». *IMF Staff Discussion Note*, SDN/14/02.

Otte, M. (2010). *El crash de la información*. Barcelona, Ariel/Planeta.

Ouwerkerk, J.W., Van Lange, P.M.A. y Galluci, M. (2005). «Avoiding the social death penalti: Ostracism and cooperation in social dilemas». En K.D. Williams, J.P. Forgas y W. von Hippel (eds.), *The social Outcast: Ostracism, social exclusión, rejection and bullying*. Nueva York, Psychology Press.

Ovejero, A. (1981). *El autoritarismo como variable de personalidad*. Madrid, Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense (Colección Tesis Doctorales).

Ovejero, A. (1990). *El aprendizaje cooperativo: Una alternativa eficaz a la enseñanza tradicional*. Barcelona, PPU.

Ovejero, A. (1997). «Paulo Freire y la psicopedagogía de la liberación», *Psicothema*, 9, 671-688.

- Ovejero, A. (2000). «Necesidad de una nueva psicología social: Perspectivas para el siglo XXI». En A. Ovejero (Ed.), *La psicología social en España al filo del año 2000*, pp. 15-39. Madrid, Biblioteca Nueva.
- Ovejero, A. (2000). «Cultura de la pobreza: Violencia, inmigración y fracaso escolar en la actual sociedad global». *Aula Abierta*, 79, 71-83.
- Ovejero, A. (2003). *La cara oculta de los test de inteligencia*. Madrid, Biblioteca Nueva.
- Ovejero, A. (2004). *Globalización, sociedad y escuela*. Valladolid, Universidad de Valladolid.
- Ovejero, A. (2010). *Psicología Social: algunas claves para entender la conducta humana*. Madrid, Biblioteca Nueva (4ª edición, 2020).
- Ovejero, A. (2011). «Psicología y contexto social: El desarrollo histórico de la psicología social y sus implicaciones para el futuro». En A. Ovejero y J. Ramos (Eds.), *Psicología Social Crítica* (pp. 25-47). Madrid, Biblioteca Nueva.
- Ovejero, A. (2014a). *Los perdedores del nuevo capitalismo: Devastación del mundo del trabajo*. Madrid, Biblioteca Nueva.
- Ovejero, A. (2014b). «Neoliberalismo y psicología social». En M.A. Carrillo Pacheco y R.J. Salinas García (Coords.), *Avances disciplinarios en el campo de los estudios de trabajo* (pp. 15-45). Querétaro (México). Universidad Autónoma de Querétaro.
- Ovejero, A. (2016a). «Neoliberalismo y bienestar humano: El papel que debe desempeñar la Psicología Social». En J. J. Paulín Larracochea y A. M. Aguado Hernández (Coords.), *Temáticas actuales en psicología* (e-book). Querétaro (México). Universidad Autónoma de Querétaro.
- Ovejero, A. (2016b). «Neoliberalismo y criminalización de la pobreza». En F. Pérez Álvarez (Dir.), *In Memoriam Louk Hulsman* (pp. 149-167). Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca.
- Ovejero, A. (2016c). «Psicología Social e identidad: Dificultades para un análisis psicosociológico». *Papeles del CEIC*, 2.
<http://dx.doi.org/10.1387/pceic.14314>
- Ovejero, A. (2017a). *Autogestión para tiempos de crisis: Utilidad de las colectividades libertarias*. Madrid, Biblioteca Nueva.
- Ovejero, A. (2017b). «Las colectividades libertarias (España 1936-1938): Un caso de autogestión obrera único en la historia moderna». *Athenea Digital*, 17, 2, 201-235.
- Ovejero, A. (2017c). «Paulo Freire: Una pedagogía libertaria y psicosocial». En A. Shigunov Neto e I. Fortunato (Ed.), *20 anos sem Paulo Freire: trajetórias de sua pedagogia libertária* (pp. 61-76). São Paulo, Edições Hipótese.
- Ovejero, A. (2018). *Aprendizaje cooperativo crítico: Mucho más que una eficaz técnica pedagógica*. Madrid, Pirámide.

- Ovejero, A. (2020). *Fracaso escolar y reproducción social: La cara oscura de la escuela*. Barcelona, Creative Commons.
- Ovejero, A. (2021a). *Autogestión laboral: Un instrumento útil para hacer frente a las secuelas de la pandemia* (lección inaugural curso 2021-2022). Palencia, Vicerrectorado Campus de Palencia (Universidad de Valladolid).
- Ovejero, A. (2021b). «Kropotkin como antídoto contra la actual hegemonía neoliberal». *Revista Libre Pensamiento*, 108, 27-33.
- Oxfam Intermon (2014). *Iguales: Acabemos con la desigualdad extrema*. Madrid, Oxfam Intermon.
- Oxfam Intermon (2015). *Extreme Carbon Inequality*. Oxford, Oxfam.
- Oxfam Intermon (2002). *Cambiar las reglas. Comercio, globalización y lucha contra la pobreza*. Madrid, Oxfam Intermon.
- Oxfam Intermon (2017). *Una economía para el 99%. Es hora de construir una economía más humana y justa al servicio de las personas*.
https://www.oxfamintermon.org/es/publicacion/Una_economia_para_el_99
- Oxfam Intermon (2022). *Las desigualdades matan*.
<https://www.oxfam.org/es/informes/las-desigualdades-matan>
- Oxfam Intermon (2018). *Realidad de la ayuda*.
https://www.oxfamintermon.org/es/publicacion/Realidad_de_la_Ayuda_2018
- Páez de la Cruz, B. (2017). *Bienestar social, bienestar psicológico y fatalismo en jóvenes pertenecientes a pandillas radicados en la ciudad de Barranquilla*. Barranquilla, Universidad del Norte, División de Humanidades y Ciencias Sociales Maestría en Desarrollo Social.
- Palomar, J. y Lanzagorta, N. (2005). «Pobreza, recursos psicológicos y movilidad social». *Revista Latinoamericana de Psicología*, 37, 9-45.
- Palomar, J. y Valdés, L. (2004). «Pobreza y locus de control». *Revista Interamericana de Psicología / Interamerican Journal of Psychology*, 38, 225-240.
- Parthasarathi, P. (2011). *Why Europe grew rich and Asia did not: Global economic divergent 1600-1850*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Paxton, R.O. (2019). *Anatomía del fascismo*. Madrid, Capitán Swing.
- Peet, R. (2005). *La maldita trinidad*. Pamplona, Editorial Laetoli.
- Pérez de la Riva, J. (1976). *Para la historia de las gentes sin historia*. Barcelona, Ariel.
- Pérez Yruela, M. (2018). «Condiciones y contenido para la renovación de la agenda en torno al bienestar». En G. Jaraíz (ed.), *Bienestar social y políticas públicas: Retos para pactar el futuro* (pp. 44-73). Madrid, Editorial Catarata.
- Periáñez, R. (2010). «La introducción de los negros por la frontera extremeña y su

- distribución posterior». En A. Martín Casares y M. García Barranco (Comps.), *La esclavitud negroafricana en la historia de España: Siglos XVI y XVII* (pp. 35-53). Granada, Editorial Comares.
- Petrella, R. (1999). *Le Manifeste de l'eau*. Lausana: Éditions Page Deux.
- Pew Center on the States) (2009). *One in 31: The long reach of American corrections*. Whashington, DC, Pew Charitable Trusts.
- Phelps, H. (1999). *Las desigualdades de los salarios*. Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
- Phillips Jr., W. D. (1989). *La esclavitud desde la época romana hasta los inicios del comercio transatlántico*. Madrid, Siglo XXI.
- Pick, S. y Sirkin, J. (2010). *Breaking the poverty cycle: The human basis for sustainable development*. New York, Oxford University Press.
- Pijuán, M.B. y López García, D. (2006). «Hacia un movimiento agroecológico en el Estado español». *Archipiélago*, 71, 29-34.
- Piketty, Th. (2014). *El capital en el siglo XXI*. México, DF, Fondo de Cultura Económica.
- Piketty, Th. (2021). *Breve historia de la igualdad*. Bilbao, Deusto.
- Piqueras, J.A. (2011). *La esclavitud en las Españas: Un lazo transatlántico*. Madrid, Catarata.
- PNUD (1994). *Informe sobre desarrollo humano, 1994*. Madrid, Mundi Prensa.
- PNUD (1998). *Human development report, 1997*. Nueva York, PNUD.
- PNUD (2002). *Informe sobre desarrollo humano, 2002: Profundizar en la democracia en un mundo fragmentado*. México, Mundi Prensa.
- PNUD (2003). *Informe sobre desarrollo humano 2003: Los Objetivos del Desarrollo del Milenio. Un pacto entre las naciones para eliminar la pobreza*. Madrid, Mundi Prensa.
- PNUD (2004). *Informe sobre desarrollo humano 2004: La libertad cultural en el mundo diverso de hoy*. Madrid, Mundi Prensa.
- PNUD (2005a). *Informe sobre desarrollo humano 2005: La cooperación internacional ante una encrucijada: Ayuda al desarrollo, comercio y seguridad en un mundo desigual*. Madrid, Mundi Prensa.
- PNUD (2005b): «Perspectiva general». En PNUD (2005a), *Informe sobre desarrollo humano 2005: La cooperación internacional ante una encrucijada: Ayuda al desarrollo, comercio y seguridad en un mundo desigual* (pp. 1-16). Madrid, Mundi Prensa.
- PNUD (2005c). «La situación del desarrollo humano». En PNUD (2005a), *Informe sobre desarrollo humano 2005: La cooperación internacional ante una encrucijada: Ayuda al desarrollo, comercio y seguridad en un mundo desigual* (pp. 19-54). Madrid, Mundi Prensa.

- PNUD (2005d): «Desigualdad y desarrollo humano». En PNUD (2005a). *Informe sobre desarrollo humano 2005: La cooperación internacional ante una encrucijada: Ayuda al desarrollo, comercio y seguridad en un mundo desigual* (pp. 57-80). Madrid, Mundi Prensa.
- PNUD (2010). *Informe sobre desarrollo humano 2010. Superando barreras: Movilidad y desarrollo humanos*. <https://repositorio.uam.es/handle/10486/678146>
- PNUD (2015). *Objetivos de Desarrollo del Milenio, Informe de 2015*. Nueva York, PNUD.
- PNUD (2016). *Informe sobre Desarrollo Humano 2016. Desarrollo humano para todas las personas*. Nueva York, PNUD.
- PNUD (2018). *Índices e indicadores de desarrollo humano: Actualización estadística de 2018*. Nueva York, PNUD.
- PNUD (2019). *Informe sobre Desarrollo Humano. Más allá del ingreso, más allá de los promedios, más allá del presente: Desigualdades del desarrollo humano en el siglo XXI*. Nueva York, PNUD.
- PNUD (2020). *Informe sobre Desarrollo Humano. La próxima frontera: el desarrollo humano y el Antropoceno*. Nueva York, PNUD.
- Pochman, M. (2009). *A volta da mobilidade social*. https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&id=521&Itemid=2
- Pomeranz, K. (2000). *The great divergence: China, Europe, and the making of the modern world economy*. Princeton, NJ, Princeton University Press.
- Pozzi, S. (2011). «El “tío Sam” reclama su dinero». *El País-Negocios*, 24 de abril, p. 15.
- Prilleltensky, I. (1994). «The morals and politics of psychology: Values, assumptions, and the status quo». En D. Fox e I. Prilleltensky (eds.), *Critical psychology: An introduction* (3-20). Londres, Sage.
- Putnam, R. (2002). *Solos en la bolera*. Barcelona, Galaxia Gutenberg/ Círculo de Lectores.
- Quatrepoint; J.M. (2008). *La crise globale*. París, Mille et une nuits.
- Ramonedá, J. (1999). *Después de la pasión política*. Barcelona, Taurus.
- Ramonet, I. (2009). *La catástrofe perfecta: Crisis del siglo y refundación del porvenir*. Barcelona, Icaria.
- Reinarman, C. y Levine, H. (1995). «The crack attack: America's latest drug scare, 1986-1992». En J. Best (ed), *Images of issues: Typifying contemporary social problems*. Nueva York, Aldine De Gruyter.
- Reinert, E.S. (2007). *La globalización de la pobreza: Cómo se enriquecieron los países ricos... y por qué los países pobres siguen siendo pobres*. Barcelona, Crítica.
- Rendueles, C. (2016). *Capitalismo canalla: Una historia personal del capitalismo a través de la literatura*. Barcelona, Seix Barral.

- Rendueles, C. (2020). *Contra la igualdad de oportunidades: Un panfleto igualitarista*. Barcelona, Seix Barral.
- Ricaute C. J (2016). «¿Desigualdad y pobreza como determinantes de la confianza generalizada? Análisis con datos panel». *Desarrollo y sociedad*, 76, 91-121,
- Richardson, F. C. y Fowers, B. J. (1997). «Critical theory, postmodernism, and hermeneutics: Insights for critical psychology». En D. Fox e I. Prilleltensky (eds.), *Critical psychology: an introduction* (pp. 265-283). Londres, Sage.
- Rilling, J.K., Gutman, G.A., Zeh, T.R., Pagnoni, G., Berns, G.S. y Kilts, C.D. (2002). «A neural basis for social cooperation», *Neurology*, 35, 395-405.
- Ríos Fernández, M. (2022). «La eterna lucha por la igualdad: A propósito del último libro de Piketty». *Público*, 14, enero, 2022.
- Ring, K. (1967). «Experimental Social Psychology. Some sober questions about some frivolous values», *Journal of Experimental Social Psychology*, 3, 113-123.
- Rodríguez Cabrero, G. (2018). «Políticas sociales e inversión social en un horizonte de consolidación fiscal y reestructuración permanente del Estado del bienestar». En G. Jaraíz (ed.), *Bienestar social y políticas públicas: Retos para pactar el futuro* (pp. 15-43). Madrid, Editorial Catarata.
- Rodríguez Gil, A. (2005). «Mitos y mentiras de la cooperación al desarrollo y de las ONGD». En A. Dubois y cols., *Tendencias a la cooperación para el desarrollo y futuro de las ONGD* (pp. 151-192). San Sebastián, PTM-Mundubat.
- Rodríguez Ramos, S. (2010). «Seguridad alimentaria: Un reto de la cooperación española». En A. Guerra, J.F. Tezanos y S. Tezanos Vázquez (eds.), *La lucha contra el hambre y la pobreza* (VIII Encuentro Salamanca) (pp. 37-42). Madrid, Sistema.
- Rosanvallon, P. (2012). *La sociedad de los iguales*, Barcelona, RBA
- Rousselet, M. (1996). *Los terceros mundos*. Barcelona, Salvat.
- Rügemer, W. (2013). *Las agencias de calificación: Una introducción al actual poder del capital*. Barcelona, Virus Editorial.
- Ryan, C. (2020). *Civilizados hasta la muerte: El precio del progreso*, Madrid, Capitán Swing.
- Sachs, J. (2005a). *El fin de la pobreza: Cómo conseguirlo en nuestro tiempo*. Barcelona, Debate.
- Sachs, J. (2005b). *Invertir en Desarrollo: Un plan práctico para conseguir los Objetivos del Milenio*. Nueva York, Millennium Project.
- Sáez, E. y Zucman, G. (2021). *El triunfo de la injusticia: cómo los ricos eluden los impuestos y cómo hacer que paguen*. Barcelona, Taurus.
- Safranski, R. (2004). *¿Cuánta globalización podemos soportar?* Barcelona, Tusquets.

- Sahlins, M. (1993). *Economía de la Edad de Piedra*. Madrid, Akal.
- Sales i Campos, A. (2014). *El delito de ser pobre: Una gestión neoliberal de la marginalidad*. Barcelona, Icaria.
- Sampedro, J.L. y Taibo, C. (2006). *Sobre política, Mercado y convivencia*. Madrid, Catarata.
- Sampson, E. E. (1983). *Justice and the critique of pure psychology*, Nueva York, Plenum Press.
- Sanahuja, J.A. (2009). «Desequilibrios globales: El impacto de la crisis en los países en desarrollo». En M. Mesa (ed.), *Crisis y cambio en la sociedad global. Anuario 2009-2010*. Madrid, Icaria.
- Sánchez, M. (2001). *Ricos por la patria. Grandes magnates de la dictadura, altos financieros de la democracia*. Plaza & Janés, Madrid.
- Sánchez, M. (2007). *Ricos por la guerra de España*. Raíces, Madrid.
- Sánchez-Rodríguez, Á., Willis, G. B., Jetten, J. y Rodríguez-Bailón, R. (2019). «Economic Inequality Enhances Inferences that the Normative Climate is Individualistic and Competitive». *European Journal of Social Psychology*. 49 (6). 1114 – 1127.
<http://doi.org/10.1002/ejsp.2557>
- Sandel, M.J. (2020). *La tiranía del mérito*. Barcelona, Debate.
- Santacruz H. O. y Ardila G. S (2003). «¿La pobreza del desastre o el desastre de la pobreza? efectos psicológicos y psicopatológicos en damnificados con larga estancia en campamentos después del terremoto de Armenia». *Revista Colombiana de Psiquiatría*, 32(2).
- Scheidel, W. (2018). *El gran nivelador: violencia e historia de la desigualdad desde la Edad de Piedra hasta el siglo XXI*. Barcelona, Crítica.
- Schuman, H., Steeh, Ch., Bobo, L. y Krysan, M. (1985). *Racial attitudes in America: Trends and interpretations*. Cambridge, MA, Harvard University Press.
- Schwartz, J.M. y Mare, 2005). «Trends in educational assortative marriage from 1940 to 2003». *Demography*, 42, 621-646.
- Sebastián, C. (2021). *El capitalismo del siglo XXI*. Barcelona, Galaxia Gutenberg.
- Secchi, B. (2015). *La ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres*. Madrid, La Catarata.
- Seligman, M. (1975). *Helplessness: On depression, development and death*. San Francisco, Freeman.
- Smith, L. (2010). *Psychology, poverty, and the end of social exclusion*. New York, Teachers College, Columbia University.
- Solé, C. y Cachón, L. (2006). *Globalización e inmigración los debates actuales* (presentación). REIS, 116, 13-54.

- Solnick, S.J. y Hemenway, D. (1998). «Is more always better? A survey on positional concerns». *Journal of Economic Behavior and Organization*, 37, 373-383.
- Sousa Santos, B. (2003). *Crítica de la razón indolente: Contra el desperdicio de la experiencia*. Bilbao, Desclée de Brouwer.
- Souza, J. (2009). *A ralé brasileira: quem é e como vive*. Belo Horizonte, Editora UFMG.
- Stiglitz, J.E. (2002). *El malestar en la globalización*. Madrid, Taurus (original, 2002).
- Stiglitz, J. (2012). *El precio de la desigualdad: El 1 por 100 de la población tiene lo que el 99 por 100 necesita*. Madrid, Taurus.
- Stiglitz, J. (2020). *Capitalismo progresista: La respuesta a la era del malestar*. Madrid, Taurus.
- Stone, O. y Kuznick, P. (2020). *Obama, Trump y la historia silenciada de los Estados Unidos en el siglo XXI*. Madrid, La Esfera de los Libros.
- Story, L. (2010). «A secretive banking elite rules trading in derivatives». *The New York Times*, 11 de diciembre de 2010.
- Street, P. (2002). *The vicious circle: Race, prison, jobs, and community in Chicago, Illinois and the nation*. Chicago, Chicago Urban League, Department of Research and Planning.
- Subirats, J. (dir.) (2004). *Pobreza y exclusión social: Un análisis de la realidad española y europea*. Barcelona, Fundación La Caixa.
- Subirats, J. (2018). «Una concepción del envejecimiento abierta e inclusiva. Edad y ciudadanía». *Aula abierta*, ISSN 0210-2773, 47, 13-20.
- Tezanos, J.F. (Ed.) (1999a). *Tendencias en desigualdad y exclusión social*. Madrid, Sistema.
- Tezanos, J.F. (1999b). «El contexto socio-político de los procesos de exclusión social». En J.F. Tezanos (Ed.), *Tendencias en desigualdad y exclusión social* (pp. 105-151). Madrid, Sistema.
- Tezanos, J.F. (2001). *La sociedad dividida. Estructuras de clases y desigualdades en las sociedades tecnológicas*. Madrid, Biblioteca Nueva.
- Tezanos, S. (2010). «Geopolítica de la ayuda: Un mapa estratégico para la cooperación del siglo XXI». En A. Guerra, J.F. Tezanos y S. Tezanos Vázquez (eds.), *La lucha contra el hambre y la pobreza* (VIII Encuentro Salamanca) (pp. 369-413). Madrid, Sistema.
- Therborn, G. (1977). «The rule of capital and the rise of democracy». *New Left Review*, 103, 3-42.
- Therborn, G. (1984). «The prospects of labour and the transformation of advanced capitalism». *New Left Review*, 145, 5-38.
- Therborn, G. (2011). *The world: A beginner's guide*. Cambridge, Polity.
- Therborn, G. (2015). *La desigualdad mata*, Madrid, Alianza.

Thomas, H. (1998). *La trata de esclavos: Historia del tráfico de seres humanos de 1440 a 1870*. Barcelona, Planeta.

Tirado, A. (2021). *El lawfare: Golpes de estado en nombre de la ley*. Madrid, Akal.

Torregrosa, J. R. (1985/1988). «Hacia una definición psicosociológica de los problemas sociales: El problema de las relaciones entre teoría y práctica en la psicología social», *Actas del I Congreso Nacional de Psicología social*. Granada, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada.

Torregrosa, J. R. (2003). «Prólogo». En A. Ovejero, *La cara oculta de los test de inteligencia* (pp. 13-18). Madrid, Biblioteca Nueva.

Torres, J. (2021). *Econofakes: Las 10 grandes mentiras económicas de nuestro tiempo y cómo condicionan nuestra vida*. Barcelona, Ediciones Deusto.

Torres, J. y Montero, A. (1999). «Políticas económicas, pobreza y desigualdad». En J.F. Tezanos (Ed.), *Tendencias en desigualdad y exclusión social* (pp. 77-104). Madrid, Sistema.

Tortosa, J.M. (1999). «Pobreza y desigualdad social». En J.F. Tezanos (Ed.), *Tendencias en desigualdad y exclusión social*, págs. 57-78. Madrid, Sistema.

Toynbee, P. (2004). «Inequality is fattening». *The Guardian*, 28 de mayo de 2004.

Tversky, A. y Kahneman, D. (1981). «The Framing of Decisions and the Psychology of Choice». *Science*, 211, 453-458.

UNICEF (2004). *Inocenti social monitor 2004*. Florencia, Innocenti Research Centre.

UNICEF (2012). *The state of the world's children 2012*.
<https://www.unicef.org/reports/state-worlds-children-2012>

UNCTAD (1984). *Trade and Development Report, 1984*. Nueva York, UNCTAD.

Uslaner, E. (2002). *The moral foundations of trust*. Cambridge, Cambridge University Press.

Vagero, D. y Lundberg, O. (1989). «Health inequalities in Britain and Sweden». *The Lancet*, 2, 8653, 35-36.

Valla, V. (2000). «Redes sociais, poder e saúde à luz das classes populares numa conjuntura de crise». *Interface: Comunicação, Saúde, Educação*, 4(7). 37-56.

Varoufakis, Y. (2017). *Comportarse como adultos. Mi batalla contra el establishment europeo*. Deusto, Editorial Deusto.

Vera, J., Laborín, J., Domínguez, M., Parra, E. y Padilla, M. (2009). «Locus de control, autoconcepto y orientación al éxito en adultos mayores del norte de México». *Enseñanza e Investigación en Psicología*, 14 (1). 119-135.

Vidal-Beneyto, J. (2008): «¿Comienza el deshielo?». *El País*, 20 de diciembre (pág. 8).

Villareal, M. y Osorio, M. (2010). «El hambre en el contexto de las crisis recientes:

- factores subyacentes». En A. Guerra, J.F. Tezanos y S. Tezanos Vázquez (eds.), *La lucha contra el hambre y la pobreza* (VIII Encuentro Salamanca) (pp. 95-141). Madrid, Sistema.
- Vygotsky, L. (2000). «Manuscrito de 1929». *Educação e Sociedade*, 21(71). 21-44.
- Wacquant, L. (2000). «America's new "Peculiar Institution": on the prison as surrogate ghetto». *Theoretical Criminology*, vol. 4, número 3.
- Wacquant, L. (2010). *Castigar a los pobres: el gobierno neoliberal de la inseguridad social*. Barcelona, Gedisa.
- Wallerstein, I. (1979). *El moderno sistema mundial: La agricultura capitalista y los orígenes de la economía-mundo europea en el siglo XVI*. México, DF, Siglos XXI.
- Wallich, H. (1972). «Zero growth». *Newsweek*, 24 de enero de 1972.
- Weeks, S. (2021). «Collective effort, private accumulation: constructing the Luxemburg Investment Fund, 1956-2019». En M. Benquet y T. Bourgeron (Eds.), *Accumulating capital today: contemporary strategies of profit and dispossessive policies*. Nueva York, Routledge.
- WHO (2012). *World Health statistics 2012*.
<https://apps.who.int/iris/handle/10665/44844>
- Wiesenfeld, E. y Sánchez, E. (2012). «Participación, pobreza y políticas públicas: 3P que desafían la psicología ambiental comunitaria (el caso de los Consejos Comunales de Venezuela)». *Psychosocial Intervention*, 21(3). 225-243.
- Wilkinson, R. (1996). *Unhealthy societies: The afflictions of inequality*. Londres, Routledge.
- Wilkinson, R. (2001). *Las desigualdades perjudican: Jerarquías, salud y evolución humana*. Barcelona, Crítica.
- Wilkinson, R. (2004). «Why is violence more common where inequality is greater», *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1.036, 1-12.
- Wilkinson, R. y Pickett, K. (2009). *Desigualdad: Un análisis de la (in)felicidad colectiva*. Madrid, Turner.
- Williamson, J.G. (1987). *Capitalismo y desigualdad social en Gran Bretaña*. Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
- World Economic Forum (2012). *Global competitiveness report 2012-2013*.
<http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2012-2013/>
- World Inequality Lab. (2017). *Informe sobre desigualdad global 2018*. Creative Commons.
<https://wir2018.wid.world/>
- World Inequality Lab (2018). *Informe sobre la desigualdad global 2018: Resumen ejecutivo*.
<https://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-summary-spanish.pdf>
- World Inequality Lab (2021). *World Inequality Lab*. Creative Commons.
- Wright, E.O. (2014). *Construyendo utopías reales*. Madrid, Akal.

Wright, E.O. (2020). *Cómo ser anticapitalista en el siglo XXI*. Madrid, Akal.

Ximenes, V., Cidade, E. y Nepomuceno, B. (2015). «Psicología comunitaria y expresiones psicosociales de la pobreza: Contribuciones para la intervención en políticas públicas». *Universitas Psychologica*, 14(4). 1411-1424

Zavaleta, R. (2007). *The ability to go about without shame: A proposal for internationally comparable indicators of shame and humiliation* (OPHI Working Paper Series N.º 3). Oxford: Oxford Poverty & Human Development Initiative.

Ziegler, J. (2004). *Los nuevos amos del mundo*. Barcelona: Destino.

Ziegler, J. (2006). *El imperio de la vergüenza*. Madrid, Taurus.



SOBRE EL AUTOR

Anastasio Ovejero Bernal es catedrático de Psicología Social de la Universidad de Valladolid (Campus de Palencia), después de haber pasado por la Universidad de Salamanca y por la Universidad de Oviedo, donde fue Profesor Titular primero y Catedrático de Psicología Social, después.

Licenciado en Psicología y en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, se doctoró en Psicología en la misma Universidad bajo la dirección del profesor José Luis Pinillos, en 1981. Posteriormente amplió estudios de doctorado en psicología social en la Sorbona de París, bajo la dirección de la profesora Germaine de Montmollin.

Ha desempeñado diferentes cargos de gestión tanto en la Universidad de Oviedo, donde fue secretario de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, y vicedecano de la Facultad de Psicología, como en la Universidad de Valladolid, donde ha sido director del Departamento de Psicología.

En cuanto a su labor investigadora, ha publicado unos 250 trabajos científicos sobre distintos temas de psicología social, entre ellos unos veinte artículos de impacto JCR, así como más de treinta libros en el mismo campo, lo que le ha

valido para obtener los seis sexenios posibles de investigación por parte de la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Evaluación) del Ministerio de Educación.

En cuanto a los libros que ha publicado habría que destacar los siguientes: *Psicología social de la educación* (Barcelona, Herder, 1988); *El aprendizaje cooperativo* (Barcelona, P.P.U., 1990); *El individuo en la masa: Psicología del comportamiento colectivo* (Oviedo, Nobel, 1997); *Las relaciones humanas: Psicología social teórica y aplicada* (Madrid, Biblioteca Nueva, 1998); *Ortega y la actual postmodernidad* (Madrid, Biblioteca Nueva, 1998); *Psicología social y la actual postmodernidad* (Oviedo, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 1999); *La cara oculta de los test de inteligencia* (Madrid, Biblioteca Nueva, 2003); *Técnicas de negociación* (Madrid, McGraw-Hill, 2004); *Psicología del trabajo en un mundo global* (Madrid, Biblioteca Nueva, 2006); *Fundamentos de psicología jurídica e investigación criminal* (Salamanca, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Salamanca, 2009); *Psicología social: Algunas claves para entender la conducta humana* (Madrid, Biblioteca Nueva, 2010); *Los perdedores del nuevo capitalismo: Devastación del mundo del trabajo* (Madrid, Biblioteca Nueva, 2014); *Autogestión para tiempos de crisis* (Madrid, Biblioteca Nueva, 2017); *Aprendizaje cooperativo crítico: Mucho más que una eficaz técnica pedagógica* (Madrid, Editorial Pirámide, 2018).

Ha sido profesor visitante en las siguientes universidades: Vrije Universiteit Amsterdam (Amsterdam, Holanda), Università di Bologna (Bologna, Italia), Universidad de Chile (Santiago de Chile, Chile), Universidade Federal de Santa Catarina (Florianópolis, Brasil) y Libera Università di Bolzano (Bolzano, Italia).

Contacto: tasio@psi.uva.es

Obras publicadas de Anastasio Ovejero

I) Libros

- 1) Ovejero, A. (1982), *El autoritarismo como variable de personalidad*. Madrid: Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense (Colección Tesis Doctorales) (504 págs.). Depósito Legal: M-36690-1981.
- 2) Ovejero, A. (1986), *Psicología Social y Educación*. Oviedo: I.C.E. (350 págs.). Depósito Legal: o/521-85.
- 3) Ovejero, A. (1987), *Psicología Social*. Oviedo: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 2 vols., I (458 págs.). Depósito Legal: AS/2476/88; II (550 págs.) Depósito Legal: AS/3504/88.
- 4) Ovejero, A. (1987), *Psicología Social y Salud*. Oviedo: Universidad de Oviedo (336 págs.) Depósito Legal: O/3785-87.
- 5) Ovejero, A. (1988), *Psicología Social de la Educación*. Barcelona: Ed. Herder (378 págs.). ISBN 84-254-1579-9; Depósito Legal: B/23.141-1987.
- 6) Ovejero, A. (1990), *El aprendizaje cooperativo: Una alternativa eficaz a la enseñanza tradicional*. Barcelona: P.P.U. (334 págs.); ISBN: 84-7665-772-2; Depósito Legal: B/42.526-90.
- 7) Gil, F., Gómez, T., Jarana, L., León, J.M. y Ovejero, A. (1991), *Entrenamiento en Habilidades Sociales: En el marco de los Servicios de Salud*. Sevilla: Diputación Provincial (81 págs.). (Autores: F. Gil, T. Gómez, L. Jarana, J.M. León y A. Ovejero).
- 8) Lemos, S., Martín, F., Ovejero, A. y Rodríguez, R. (1995), *Dimensiones psicológicas en la educación secundaria*, Universidad de Oviedo: I.C.E. (240 págs.) (ISBN: 84-88828-12-8).
- 9) Ovejero, A. (1997), *El individuo en la masa: Psicología del comportamiento colectivo*. Oviedo: Ediciones Nobel (365 págs.). ISBN: 84-87531-93-8; Depósito Legal: AS-270/1997.
- 10) Ovejero, A. (1998), *Las relaciones humanas: Psicología social teórica y aplicada*. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva (511 págs.). Depósito Legal: M-29.365-1998. ISBN: 84-7030-565-4 (Reimpresión, 2007).
- 11) Ovejero, A. (1999), *La nueva psicología social y la actual postmodernidad: Raíces, constitución y desarrollo histórico*. Oviedo: Universidad de Oviedo (607 págs.). Depósito Legal: AS/2994-99. ISBN: 84-8317-183-8.

- 12) Páez, D. y Ovejero, A. (eds.) (2000), *Culture and Social Psychology*. Monográfico de la revista *Psicothema*, Oviedo. 130 pp. Depósito Legal: AS/3.779/89. ISSN: 0214-9915.
- 13) Ovejero, A. (2000), *Ortega y la Postmodernidad: Elementos para la construcción de una psicología postpositivista*. Madrid: Biblioteca Nueva (229 págs.). Depósito Legal: M-35.580-200; ISBN: 84-7030-860.2.
- 14) Ovejero, A. (2000c) (ed), *La psicología social en España al filo del año 2000: Balance y perspectivas*. Madrid: Biblioteca Nueva (374 págs.). Depósito Legal: M-31.380-2000; ISBN: 84-7030-835-1.
- 15) Ovejero, a., Moral, M.V. y Vivas, P. (2000) (eds.), *Aplicaciones en Psicología Social*. Madrid: Biblioteca Nueva (514 págs.). Depósito Legal: M-31.379.2000; ISBN: 84-7030-834-2.
- 16) Agulló, E. y Ovejero, A. (2001), *Trabajo, individuo y sociedad: Perspectivas psicocológicas sobre el futuro del trabajo*. Madrid: Pirámide (201 págs.). Depósito Legal: M. 3.557-2001; ISBN: 84-368-1360-X.
- 17) 17) Ovejero, A. (2003), *La cara oculta de los test de inteligencia: Un análisis crítico*. Madrid: Biblioteca Nueva (317 págs.). Depósito Legal: M-25.100-2003; ISBN: 84-9742-105-1) (317 págs) .
- 18) Ovejero, A. (2004), *Técnicas de negociación: Cómo negociar eficaz y exitosamente*. Madrid: McGraw-Hill (260 págs.). Depósito Legal: M.7336-2004; ISBN: 84-481-4070-2.
- 19) Ovejero, A. (2004), *Globalización, sociedad y escuela*. Valladolid: Universidad de Valladolid (158 págs.). Depósito Legal: VA. 1.004-2004; ISBN: 84-8448-315-0) (Reimpresión, 2009).
- 20) Ovejero, A. y Rodríguez, F.J. (2005): *La convivencia sin violencia: Recursos para educar*. Sevilla: Editorial MAD (Depósito Legal: SE-3451-2005; ISBN: 84-665-1981-5).
- 21) Ovejero, A. (2006), *Psicología del trabajo en un mundo globalizado: Cómo hacer frente al mobbing y al estrés laboral*. Madrid: Biblioteca Nueva (Depósito Legal: M-36.460-2006; ISBN: 84-9742-598-7).
- 22) Pastor, J. y Ovejero, A. (2007): *Michel Foucault: Una caja de herramientas contra la dominación*. Oviedo: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo (ISBN: 978-84-8317-633-7).
- 23) Ovejero, A. (2008): *Fundamentos de Psicología Jurídica e Investigación Criminal*. Salamanca: Universidad de Salamanca (ISBN: 978-84-691-6009-1).
- 24) Ovejero, A. y Rodríguez, F.J. (2008), *La convivencia sin violencia: Recursos para educar*. Bogotá (Colombia): Editorial Magisterio (Colección Aula Múltiple) (ISBN: 978-958-20-0936-6) (Nueva edición para Colombia).
- 25) Ovejero, A. (2009), *Fundamentos de Psicología Jurídica e Investigación Criminal*. Salamanca: Univ. de Salamanca (ISBN: 978-84-691-6009-1).

- 26) Ovejero, A. (2010), *Psicología social: algunas claves para entender la conducta humana*. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva (ISBN: 978-84-9940-153-3). 365 páginas (2ª edición, 2015).
- 27) Ovejero, A. y Ramos, J. (eds.) (2011), *Psicología Social Crítica*. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva (ISBN: 978-84-9940-202-4). 278 páginas.
- 28) Ovejero y otros (2012) (Compiladores: E. Hincapié y M.D. Morales), *Subjetividad, memoria y educación. Contextos de aplicación de la psicología social en un mundo en crisis*. Medellín (Colombia): Universidad Pontificia Bolivariana.
- 29) Ovejero, A., Smith, P. y Yubero, S. (Eds.) (2013), *El acoso escolar y su prevención: Perspectivas internacionales*. Madrid: Biblioteca Nueva.
- 30) Ovejero, A. (ed.) (2013), *El Campus de Palencia: Impacto socioeconómico y proyección social (1971-2012)*. Valladolid: Universidad de Valladolid (348 páginas).
- 31) Ovejero, A. (2014), *Los perdedores del nuevo capitalismo: Devastación del mundo del trabajo*. Madrid, Biblioteca Nueva.
- 32) Ovejero, A. (2017), *Autogestión para tiempos de crisis: Las colectividades libertarias: Ejemplo y utilidad de las colectividades libertarias*. Madrid, Biblioteca Nueva.
- 33) Ovejero, A. (2018), *Aprendizaje cooperativo crítico: Mucho más que una mera técnica pedagógica*. Madrid, Pirámide
- 34) Ovejero, A., Morales, J.F. y Yubero, S. (Eds.) (2018), *Psicología Social de la Educación*. Barcelona, UOC (en prensa).
- 35) Ovejero, A. (2019), *Fracaso escolar y reproducción social: La cara oscura de la escuela*. Barcelona, Creative Commons (acceso gratuito en: anastasio.ovejero.net).
- 36) Ovejero, A. (2020), *Trauma y memoria de las víctimas del franquismo: Su transmisión a las siguientes generaciones*. Barcelona, Creative Commons (acceso gratuito en: anastasio.ovejero.net).

II) Artículos

- 1) Ovejero, A. (1982), La personalidad autoritaria: un enfoque psicológico, *El Basilisco*, 13, 40-44.
- 2) Ovejero, A. (1983), Un estudio sobre el autoritarismo en una muestra de la Universidad de Oviedo, *Aula Abierta*, 39, 215-238.
- 3) Ovejero, A. (1984), Psicología Social Cognitiva. ¿una nueva psicología social?, *Revista de Investigación Psicológica*, 2, 67-98.
- 4) Ovejero, A. (1985a), Tradición cognitivista de la Psicología Social, *Estudios de Psicología*, 23/24, 166-185.

- 5) Ovejero, A. (1985b), El dogmatismo: un concepto todavía útil en educación, *Aula Abierta*, 43, 59-98.
- 6) Ovejero, A. (1985c), Crisis económica y personalidad autoritaria, *Revista del Colegio de Psicólogos de Castilla y León*, Valladolid, nº 0, 12-17.
- 7) Ovejero, A. (1985d), Influencia social bajo una tarea perceptiva. *Universitas Tarraconensis*, VII(2), 207-218.
- 8) Ovejero, A. (1986a), Liderazgo y Maquiavelismo en el aula, *Bordón*, 264, 723-733.
- 9) Ovejero, A. (1986b), Diferencias entre los sexos en autoritarismo y dogmatismo, *Tabanque*, 2, 237-249.
- 10) Ovejero, A. (1986c), Diferencias entre hombres y mujeres en atribución del éxito/ fracaso académico, *Revista de Psicología General y Aplicada*, 41, 771-795.
- 11) Ovejero, A. (1987a), Relación entre los estudios cursados y el autoritarismo, el dogmatismo y el maquiavelismo, *Magister*, 5, 93-109.
- 12) Ovejero, A. (1987b), Procesos de influencia social: de los factores cognitivos al contexto social (1ª parte), *Universitas Tarraconensis*, IX(1), 13-22.
- 13) Ovejero, A. (1987c), Procesos de influencia social: de los factores cognitivos al contexto social (2ª parte), *Universitas Tarraconensis*, IX (2), 203-214.
- 14) Ovejero, A. (1987d), Maquiavelismo y sociedad contemporánea. *Tabanque*, 3, 95-107.
- 15) Ovejero, A. (1987e), Un estudio sobre las actitudes autoritarias, dogmáticas y maquiavélicas en el distrito universitario de Oviedo, *Aula Abierta*, 50, 35-53.
- 16) Ovejero, A. (1988), El problema del leonesismo: una aproximación desde la Psicología Social de los estereotipos, *Tabanque*, 4, 85-96.
- 17) Ovejero, A. (1989a), ¿Cómo se origina el maquiavelismo?, *Magister*, 7, 163-170.
- 18) Ovejero, A. (1989b), ¿Influye el paso por la Universidad en las actitudes autoritarias?: un enfoque longitudinal. *Boletín de Psicología*, 22, 41-57.
- 19) Ovejero, A. (1989c), Aprendizaje cooperativo en el aula: una alternativa a la educación tradicional, *Revista Galega de Psicopedagogía*, 3, 63-81.
- 20) Ovejero, A. y otros (1989d), Aprendizaje cooperativo: una alternativa a la integración escolar, *Revista Galega de Psicopedagogía*, 2, 143-164.
- 21) Ovejero, A. (1990), Algunos datos y breves consideraciones sobre el nacionalismo asturiano, *Boletín de Psicología*, 26, 53-75.
- 22) Ovejero, A. (1990), Las habilidades sociales y su entrenamiento: un enfoque necesariamente psicosocial, *Psicothema*, 2, 93-112.
- 23) Ovejero, A. (1991a), Algunas consideraciones sobre la “crisis” de la Psicología Social: causas, consecuencias y tendencias futuras, *Interacción Social*, 1, 169-184.

- 24) Ovejero, A. (1991b), Estereotipos raciales/nacionales de los universitarios: 30 años después, *Revista de Psicología General y Aplicada*, 44, 485-493.
- 25) Ovejero, A. (1992a), Sobre la cuestión del autoritarismo de izquierdas, *Psicología Política*, 5, 53-69.
- 26) Ovejero, A. (1992b), Algunas consideraciones sobre la psicociología de Ortega, *Interacción Social*, 2, 85-108.
- 27) García, A.I. y Ovejero, A. (1992), Madurez vocacional y motivo de logro en la elección de carrera en una muestra de estudiantes de C.O.U., *Revista de Psicología Social Aplicada*, 2, 44-62.
- 28) Ovejero, A. (1993a), Leon Festinger y la psicología social experimental: La Teoría de la Disonancia Cognoscitiva 35 años después, *Psicothema*, 5, 183-206.
- 29) Ovejero, A. (1993b), Aprendizaje cooperativo: Una eficaz aportación de la Psicología Social a la escuela del siglo XXI, *Psicothema* (Suplemento Especial dedicado a Psicología Social, Septiembre de 1993), pp. 373-391.
- 30) Ovejero, A. (1993c), La adicción al tabaco: algunos aspectos psicosociales, *Intervención Psicosocial*, 5, 95-114.
- 31) Ovejero, A., García, A.I. y J.A. Fernández. (1994a), Correlatos psicosociales del fracaso escolar en estudiantes de bachillerato y formación profesional, *Psicothema*, 6, 245-258.
- 32) Ovejero, A. (1994b), Cómo enfrentarnos a los problemas de la integración escolar: Una alternativa psicosocial a la educación especial, *Revista Galega de Psicopedagogía*, 8/9, pp. 67-81.
- 33) Ovejero, A. (1994b), Wilhelm Wundt: ¿Fundador de la Psicología Experimental No Social o de la Psicología Social no Experimental?, *Revista de Historia de la Psicología*, 15, 123-150.
- 34) Grossi, F.J. y Ovejero, A. (1994), Alienación y participación política en la Universidad de Oviedo, *Psicología Política*, 8, 45-61.
- 35) Ovejero, A. (1995a), Breves reflexiones sobre las aportaciones de Benito J. Feijóo a la Psicología Española, *Psicothema*, 7, 219-231.
- 36) Fernández, J.A. y Ovejero, A. (1995b), Satisfacción laboral en un centro hospitalario: Un análisis del cuestionario de Porter. *Psicología del Trabajo y Organizaciones*, 10, 39-61.
- 37) Ovejero, A. (1995c), Dinámica de grupo: Conceptos e Introducción General, en Curso Superior de Animación Sociocultural: Dinámica de Grupo (Anexo V). Oviedo: Universidad de Oviedo.
- 38) Ovejero, A. (1995d), Identidad y diversidad: Una cuestión psicosocial necesariamente interdisciplinar, *Anthropologica*, 18, 15-33.

- 39) Ovejero, A., Gutiérrez, M. y J.A. Fernández (1996), Eficacia del aprendizaje cooperativo para la integración escolar: Una experiencia en 2º ciclo de E.G.B., *Aula Abierta*, 68, 97-114.
- 40) Ovejero, A. (1997), Paulo Freire y la Psicopedagogía de la educación. *Psicothema*, 9, 671-688.
- 41) Ovejero, A. (1998), Nuevas tecnologías y educación en la actual sociedad postmoderna: Una perspectiva psicosocial. *Revista de Psicología Social Aplicada*, 8, 21-41.
- 42) García, A.I. y Ovejero, A. (1998), La medida del feedback laboral en las organizaciones: Adaptación del cuestionario "Job Feedback Survey", *Psicothema*, 10, 241-257.
- 43) Fernández, E.M., Ovejero, A. y Fernández, A. (1998), Factores psico-socio-familiares que influyen en el desarrollo del niño/a con Síndrome Down. *Polibea*, 46, 30-38.
- 44) García, A.I. y Ovejero, A. (1998), "Feedback" laboral y precisión de las autoevaluaciones de desempeño. *Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones*, 14, 65-87.
- 45) Moral, M.V. y Ovejero, A. (1998), La construcción de la conexión entre la percepción de la autoimagen física en adolescentes y la identidad psicosocial, *Aula Abierta*, 71, 145-171.
- 46) García, A.I. y Ovejero, A. (1998), "Feedback" laboral y satisfacción. *Revista Electrónica Iberoamericana de Psicología Social*, 1, artículo 3.
- 47) Ovejero, A., García, A.I. y Fernández, J.A. (1998), Satisfacción laboral en dos compañías: Un estudio comparativo. *Revista Electrónica Iberoamericana de Psicología Social*, 1.
- 48) Moral, M.V. y Ovejero, A. (1999), La construcción retardada de la identidad profesional en jóvenes. *Psicothema*, 11, 83-96.
- 49) Ovejero, A. (1999), Luis Vives: Precursor de la psicología empírica moderna. *Revista de Psicología General y Aplicada*, 52, 105-120.
- 50) García Álvarez, A. I. y Ovejero, A. (1999). Work feedback and the accuracy of performance self-assessments. *Psychology in Spain*, 3, 126-137
- 51) Ovejero, A. (2000a), Emotions: Reflections from a Socioconstructionist Perspective. *Psicothema*, 12, 16-24.
- 52) Ovejero, A. (2000b), Ortega y la Psicología Social de la Acción: El análisis del comportamiento de la vida cotidiana, *Revista de Historia de la Psicología*, 21, 1, 43-67.
- 53) Ovejero, A. (2000c), La adicción como búsqueda de identidad: Una base teórica psicosocial para una intervención psicosocial. *Intervención Psicosocial*, 9, 35-48.
- 54) Ovejero, A. (2000d), Ortega y Gasset: Un pensador pre-postmoderno altamente fértil para la psicología post-positivista del siglo XXI. *Revista de Historia de la Psicología*, 21, 2/3, pp. 35-52.
- 55) Ovejero, A. (2001a), "La rebelión de las masas" 75 años después: El imperio del hombre masa. *Revista de Historia de la psicología*, 22, 447-456.

- 56) Ovejero, A. y Pastor, J. (2001b), La dialéctica saber/poder en Michel Foucault: Un instrumento de reflexión crítica sobre la escuela. *Aula Abierta*, 77, 99-109.
- 57) Ovejero, A. (2002a), Globalización, escuela y nuevas formas de exclusión social, *Aula Abierta*, 79, 153-175.
- 58) Ovejero, A. (2002b), Cultura de la pobreza: Violencia, inmigración y fracaso escolar en la actual sociedad global. *Aula Abierta*, 79, 71-83.
- 59) Ovejero, A. (2002c), Escuela y postmodernidad: Reflexiones sobre los actuales problemas escolares. *Revista de Psicología Social Aplicada*, 12, 67-86.
- 60) S.Lucas; A.Ovejero; F.Cruz y C.García (2003), Psicología social aplicada a los valores del trabajo: estrategias educativas. *Encuentros en Psicología Social*, 1(4), 348-352.
- 61) Ovejero, A (2003a), Educación y globalización: un enfoque psicociológico. *Encuentros en Psicología Social*, 1(5), 16-21.
- 62) Ovejero, A (2003b), Globalización y condiciones de vida laboral. *Encuentros en Psicología Social*, 1(5), 184-186.
- 63) Ovejero, A (2003c), Psicología colectiva y compromiso. *Revista de Psicología Social*, 18(2), 213-221.
- 64) Ovejero, A (2003d), Ortega y Gasset como antecedente de la actual psicología socioconstruccionista. *Revista de Psicología General y Aplicada*, 56, 371-384.
- 65) Moral, M. y Ovejero, A (2003). Actitudes ante el consumo de sustancias psicoactivas y mentalidades del usuario en adolescentes de secundaria, *Entemu (Revista del Centro Asociado de Asturias de la UNED)*, XV, 151-175.
- 66) Moral, M.; Ovejero, A., Rodríguez, J.F. y Sirvent, C. (2003), Hábitos de consumo alcohol y otras sustancias psicoactivas asociadas a pautas de ocio juvenil. *Revista de Psicología Social Aplicada*, 13, 5-27.
- 67) Moral, M.V. y Ovejero, A. (2004): Jóvenes, globalización y postmodernidad: Crisis de la adolescencia social en una sociedad adolescente en crisis. *Papeles del Psicólogo*, 87, 72-79.
- 68) Moral, M.V., Sirvent, C., Ovejero, A. y Rodríguez, F.J. (2004), Comparación de la eficacia preventiva de programas de intervención psicosocial sobre las actitudes hacia el consumo juvenil de sustancias psicoactivas. *Trastornos Adictivos*, 6, 248-261.
- 69) Ovejero, A. y otros (2004), La práctica en la empresa: El reto universitario del siglo XXI. *Revista Universitaria de Ciencias del Trabajo*, 5, 161-178.
- 70) Ovejero, A. (2004), Los test de inteligencia: Algunas consecuencias de su aplicación. *Tabanque*, 18, 153-168.
- 71) Moral, M.V. y Ovejero, A. (2004): Consumo de sustancias psicoactivas, género e identidad psicosocial: análisis de las diferencias intergénero en las actitudes juveniles ante el uso de alcohol. *Revista Española de Drogodependencias*, 20(3/4), 167-187.

- 72) Ovejero, A. (2005a), Utilidad de Ortega y Gasset para la actual psicología social. *Revista de Psicología Social*, 20, 3-17.
- 73) Ovejero, A. (2005b), Psicología Social de la Educación y Cooperación: Otro mundo es posible. *Encuentros en Psicología Social*, 3(1), 148-156.
- 74) Ovejero, A. (2005c), Anarquismo español y educación. *Athenea Digital*, 8, 145-158.
- 75) Moral, M.V., Ovejero, A., Sirvent, C. y Rodríguez, F.J. (2005), Prevención e intervención psicosocial sobre el consumo juvenil de sustancias psicoactivas: Comparación de la eficacia preventiva de cuatro programas. *Intervención Psicosocial*, 14, 189-208.
- 76) Moral, M.V. y Ovejero, A. (2005a), Juventus digitalis y Juventus ludens como tipologías psicosociológicas de jóvenes contemporáneos. *Intervención Psicosocial*, 14, 161-175.
- 77) Moral, M.V. y Ovejero, A. (2005b), Modificación de las actitudes, hábitos y frecuencia de consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas en adolescentes españoles a partir de un programa educativo-preventivo. *Revista Colombiana de Psicología*, 14, 100-118.
- 78) Moral, M.V. y Ovejero, A. (2005c), Análisis diferencial por niveles de edad de las actitudes hacia el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes españoles. *Revista Interamericana de Psicología/Interamerican Journal of Psychology*, 39(3), 325-338.
- 79) Moral, M.V. y Ovejero, A. (2005d), Un programa de intervención psicosocial para la mejora de las habilidades sociales de adolescentes consumidores de alcohol y otras sustancias psicoactivas. *Apuntes de Psicología*, 23(1), 3-26.
- 80) Moral, M.V. y Ovejero, A. (2005e), Funciones (re)veladas de la educación contemporánea: Aproximación crítica desde la Psicología Social de la Educación en España. *Revista Iberoamericana de Educación*, 37, 175-203.
- 81) Ovejero, A. y Lucas, S. (2005): Algunas consecuencias psicosociales de las expectativas educativas. *Revista de Psicología Social Aplicada*, 15, 5-36.
- 82) Ovejero, A. y Pastor, J. (2005), Michel Foucault, pensador; intelectual específico y profesor universitario comprometido. *Aula Abierta*, 86, 75-86.
- 83) Lucas, S., Arias, B., Ovejero, A., Cruz, F., Retortillo, A. y Rodríguez, H. (2005), Orientación profesional e inserción sociolaboral de personas con discapacidad intelectual. *Revista Universitaria de Ciencias del Trabajo*, 6, 394-414.
- 84) Ovejero, A. (2006), El mobbing o acoso psicológico en el trabajo: Una perspectiva psicosocial. *Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones*, 22(1), 101-121.
- 85) Pastor, J. y Ovejero, A. (2006), Michel Foucault: Un ejemplo de pensamiento postmoderno. *A Parte Rei* (Revista Electrónica de Filosofía., Madrid), 46, 1-8.
- 86) Moral, M.V. y Ovejero, A. (2006). Ocio dionisiaco y experimentación juvenil con sustancias psicoactivas: aproximación crítica desde la psicología social. *Revista de Psicología General y Aplicada*, 59, 241-255.

- 87) 2006d. Ovejero, A., Retortillo, A., Cruz, F., Arias, B. y Lucas, S.: Inmigración: Lugar de procedencia y mercado de trabajo en Castilla y León. *Revista Universitaria de Ciencias del Trabajo*, 7, 104-122.
- 88) Retortillo, A., Ovejero, A., Cruz, F., Lucas, S. y Arias, B. (2006), Inmigración y modelos de integración: Entre la asimilación y el multiculturalismo. *Revista Universitaria de Ciencias del Trabajo*, 7, 122-139.
- 89) Ovejero, A. y Pastor, J. (2007), Sueños y realidades del movimiento antiglobalización. *Revista de Psicología Social*, 22, 167-176.
- 90) Ovejero, A. (2007a), Adicciones y contexto sociocultural: Perspectivas psicossociológicas críticas. *Revista Española de Drogodependencias*, 32, 292-309.
- 91) Ovejero, A. (2007b), Sigmund Freud: Reflexiones sobre una historia de vida. Encuentros en *Psicología Social*, 4, 41-51.
- 92) Ovejero, A. (2007c), Una aproximación a la psicología social del psicoanálisis: ¿Es el psicoanálisis una ciencia, una mitología o una impostura? *Encuentros en Psicología Social*, 4, 52-63.
- 93) Arias, B., Morentín, R., Ovejero, A. y Calleja, F. (2007), Elaboración de un instrumento para evaluar las creencias y percepciones de riesgo de los adolescentes sobre el uso del alcohol. *Revista Española de Drogodependencias*, 32(4), 559-582.
- 94) Ovejero, A., Orejas, J.A. y Arias, B. (2007), Constitución de las bases para la implementación de un programa de orientación profesional en Relaciones Laborales y en Ciencias del Trabajo. *Trabajo*, 19, 93-114.
- 95) Ovejero, A. (2008a), Algunas reflexiones sobre la relación entre la Psicología Social la Literatura. *Atenea Digital*, 13, 225-235.
- 96) Ovejero, A. (2008b), La escuela contra el racismo y la xenofobia: El aprendizaje cooperativo. *Rescaldos*, 18, 17-33.
- 97) Bringas, C., Ovejero, A., Herrero, F.J. y Rodríguez, F.J. (2008), Medios electrónicos y comportamiento antisocial en adolescentes. *Revista Colombiana de Psicología*, 17, 93-104.
- 98) Moral, M.V., Ovejero, A., Sirvent, C., Rodríguez, F.J. y Pastor, J. (2009), Efectos diferenciales sobre las actitudes ante la experimentación con alcohol y la percepción de riesgo en adolescentes españoles consumidores de cannabis y alcohol. *Salud Mental*, 32(2), 125-138.
- 99) Moral, M.V., Rodríguez, F.J., Ovejero, A. y Sirvent, C. (2009), Cambios actitudinales y reducción del consumo de alcohol en adolescentes a partir de un programa de intervención psicosocial. *Adicciones*, 21(3), 207-219.
- 100) Moral, M.V. y Ovejero, A. (2009): Experimentación con sustancias psicoactivas en adolescentes españoles: perfil de consumo en función de los niveles de edad. *Revista Latinoamericana de Psicología*, 41(3), 533-55.

- 101) Ovejero, A. (2009a), Cómo combatir el racismo, la xenophobia y la violencia escolar desde la escuela: El aprendizaje cooperativo. *Uaricha*, 12, 45-68.
- 102) 2009e. Ovejero, A. (2009b), ¿Hemos llegado al final de la globalización ultraliberal? *Libre Pensamiento*, 60, 4-7.
- 103) Irurtia, M.J., Caballo, V. y Ovejero, A. (2009), Trastorno de ansiedad provocado por sustancias psicoactivas. *Behavioral Psychology/Psicología Conductual*, 17(1), 155-168.
- 104) Arias, B., Ovejero, A y Morentin, R. (2009), Love and Emotional Well-being in People with Intellectual Disabilities. *Spanish Journal of Psychology*, 12(1), 204-216.
- 105) Pastor, J. y Ovejero, A. (2009), Historia de la locura en la época clásica y movimiento antipsiquiátrico. *Revista de Historia de la Psicología*, 30, 293-299.
- 106) Bringas, C., Ovejero, A., Herrero, F.J. y Rodríguez, F.J. (2009), Medios electrónicos y adaptación comportamental adolescente. Relación entre ocio y rendimiento escolar. *Revista Galego-portuguesa de Psicoloxía e Educación*, 17, 131- 140.
- 107) Rodríguez, F.J., Herrero Olaizola, J., Ovejero, A. y Verónica, A. (2010), New expressions of racism among young people in Spain: An adaptation of the Meertens and Pettigrew (1992) Prejudice Scale, *Adolescence*, 44, 1033-1043.
- 108) Moral, M.V., Rodríguez, F.J. y Ovejero, A. (2010), Correlatos psicosociales del consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes españoles. *Salud Pública de México*, 52(5), 406-415.
- 109) Yubero, S., Ovejero, A. y M.E. Larrañaga (2010), Apoyo social percibido en el contexto escolar y victimización entre iguales durante la adolescencia. *Revista de Psicología Social*, 25, 283-293.
- 110) Ovejero, A. (2010), Spanish Libertarian Collectivisations: A Unique Historical Case of Worker Self-Management. *WorkingUSA: The Journal of Labor and Society* (Nueva York), 13, 521-535 (2010).
- 111) Ovejero, A. (2011). Reseña de Parker (2010) La psicología como ideología: contra la disciplina. *Quaderns de Psicologia*, 13(1), 117-120.
- 112) Moral, M.V., Ovejero, A., Castro, A., Rodríguez-Díaz, F.J. y Sirvent, C. (2011): Modificación de las actitudes hacia el consumo de sustancias en adolescentes: seguimiento de las diferencias inter-género. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 11(2), 291-312
- 113) Ovejero, A., Yubero, S. y Moral, M.V. (2011): Acoso laboral: Un enfoque psicosocial. *Behavioral Psychology/Psicología Conductual*, 19(1), 183-205.
- 114) Moral, M.de la V. y A. Ovejero (2011). Consumo abusivo de alcohol en adolescentes españoles: tendencias emergentes y percepciones de riesgo. *Universitas Psychologica*, 71-87.
- 115) Larrañaga, E., Yubero, S., Ovejero, A. y Navarro, R. (2012). Validación de la versión española de la Gender Role Conflict Scale for Adolescents (GRCS-A). *Anales de Psicología*, 28(3), 662-669.

- 116) Ovejero, A. (2012). Lo que la Literatura puede aportar a la Psicología Social. *Ocnos*, 8, 7-20.
- 117) Arias, B., Ovejero, A., Arias, V. e Irurtia, M.J. (2012). Factores psicosociales de la violencia escolar: relación entre género, ansiedad social y ser agresor o víctima. *Prolepsis* (Revista publicada por el Colegio de Psicólogos de Castilla y León), Número monográfico, pp. 149-159.
- 118) Bringas, C., Rodríguez-Díaz, F.J., Moral, M. de la V., Pérez-Sánchez, B. y Ovejero, A. (2012): Comportamiento delictivo reincidente. Análisis diferencial de la variable edad. *Revista Interamericana de Psicología/Interamerican Journal of Psychology*, 46(3), 365-374.
- 119) Ovejero, A., Yubero, S., Larrañaga, E. y Navarro, R. (2013): Sexismo y comportamiento de acoso escolar en adolescentes. *Behavioral Psychology/Psicología Conductual*, 2(1), 157-171.
- 120) Rodríguez-Díaz; F.J., Bringas-Molleda, C.; Moral-Jiménez, M.; Pérez-Sánchez, B. y Ovejero-Bernal, A. (2013). Relationship between psychoactive substance use and family maltreatment: A prison population analysis. *Anales de Psicología*, 29(2), 360-367.
- 121) Moral Jiménez, M. y Ovejero, A. (2013). Percepción del clima familiar y actitudes ante el acoso escolar en adolescentes, *European Journal of Investigation in Health, Psychology, and Education*, 2, 149-160.
- 122) Moral Jiménez, M. y Ovejero, A. (2014). Relación entre el clima social familiar y las actitudes juveniles ante el acoso escolar. *International Journal of Developmental and Educational Psychology (INFAD Revista de Psicología)*, 1(5), 329-342.
- 123) Ovejero, A. (2015). Psicología Social Crítica y Emancipadora: fertilidad de la obra de José Ramón Torregrosa, *Quaderns de Psicologia*, 17(1), 63-80.
- 124) Ovejero, A. (2016). Psicología Social e identidad: Dificultades para un análisis psicosociológico. *Papeles del CEIC* (Revista electrónica editada en Bilbao), 2. <https://doi.org/10.1387/pceic.14314>
- 125) Rodríguez-Medina, J., Martín-Antón, L.J., Carbonero, M.A. y Ovejero, A. (2016), Peer-Mediated Intervention for the Development of Social Interaction Skills in High-Functioning Autism Spectrum Disorder: A Pilot Study. *Frontiers in Psychology* (Section Educational Psychology). <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01986>
- 126) Ovejero, A (2016), Psicología y anarquismo, *Les cahiers psychologie politique* [En línea], número 28, janvier 2016. <http://odel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=3203>
- 127) Yubero, S., Larrañaga, E., Ovejero, A. y Navarro, R (2016). Loneliness, parent-child communication and cyberbullying victimization among Spanish youths. *Computers in Human Behavior*, 65, 1-8.
- 128) Topa, G., Jiménez, I., Valero, E. y Ovejero, A. (2017), Resources Losses and Gains, Life Satisfaction, and Health Among Retirees in Spain: Metiation of Social Support. *Journal of Aging and Health*, 29(3), 415-436. Doi: 10.1177/0898264316635589.

- 129) Yubero, S., Navarro, R., Elche, M., Larrañaga y Ovejero, O. (2017), Cyberbullying victimization in higher education: An exploratory analysis of its association with social and emotional factors among Spanish students. *Computers in Human Behavior*, 75, 449.
- 130) Ovejero, A. (2017), Las colectividades libertarias en España (1936-1938): un caso de autogestión obrera único en la historia moderna, *Athenea Digital*, 17(2), 201-235.
- 131) Ovejero, A. (2018), Las colectividades libertarias: una propuesta para salir de la crisis global en que nos encontramos. *Libre Pensamiento*, 195, 19-25.
- 132) Ovejero, A. (2020), Efectos psicológicos y psicosociales de la actual pandemia. *Libre Pensamiento*, 103, 83-89.
- 133) María de la Villa Moral, Carlos Sirvent, Anastasio Ovejero, Glenda Cuetos (2018), Dependencia emocional en las relaciones de pareja como Síndrome de Artemisa: modelo explicativo, *Terapia Psicológica*, 36(3), 156-166.
- 134) Ovejero, A. (2021): Reseña del libro: Biesta, Gert J. J. (2017). El bello riesgo de educar: Cada acto educativo es singular y abierto a lo imprevisto. *Boletín Veritas*. <https://doi.org/10.36008/monograma.2021.08.3031>
- 135) Javier Fernandez-Rio, Anastasio Ovejero, Myriam de la Iglesia, Gustavo González-Calvo, Alejandro Carriedo, Jose A. Cecchini & Antonio Mendez-Gimenez (2021): Understanding the people confined by the COVID-19 pandemic: A qualitative analysis. *Studies in Psychology* (Revista JCR, Q4). <https://doi.org/10.1080/02109395.2021.1950458>
- 136) Moral, M.V. y Ovejero, A. (2021), Adolescents' Attitudes to Bullying and its Relationship to Perceived Family Social Climate. *Psicothema*, Vol. 33, No. 4 (en prensa). <https://doi.org/10.7334/psicothema2021.45>.
- 137) Ovejero, A. (2021b), Kropotkin como antídoto contra la actual hegemonía neoliberal. *Libre Pensamiento*, 108, 27-33.

III) Capítulos de libros

- 1) Ovejero, A. (1990a). Apoyo Social y Salud, en S. Barriga y cols. (coords): *Psicología de la Salud: Aportaciones desde la Psicología Social*, Sevilla: Ed. Sedal; pp. 103-134.
- 2) Ovejero, A. (1990b). Relaciones entre el profesional de la salud y el enfermo, en S. Barriga y cols. (coords): *Psicología de la Salud: Aportaciones desde la Psicología Social*, Sevilla: Ed. Sedal, pp. 135-158.
- 3) Ovejero, A. (1990c). ¿Influye el paso por la Universidad en las actitudes autoritarias: un estudio longitudinal, en J. Seoane (comp.): *Psicología Política de la Sociedad Contemporánea*, Valencia: Promolibro, pp. 133-148.
- 4) Ovejero, A. (1990d). Ordenador, escuela y cambio social, en J.M. Peiró (comp.): *Trabajo, organizaciones y marketing social*, Barcelona: P.P.U., ISBN: 84-7665-686-6, depósito legal: B/31.833-90, pp. 215-223 (este libro es el V de las Actas del II Congreso Nacional de Psicología Social).

- 5) Ovejero, A. (1990e). Psicología Social de la Educación: Panorámica general, en I. Quintanilla (comp.): *Calidad de vida, educación, deporte y medio ambiente*, Barcelona: P.P.U., pp. 177-194 (este libro es el IV de las Actas del II Congreso Nacional de Psicología Social).
- 6) Ovejero, A. (1990f). Efectos del ambiente cooperativo sobre el aprendizaje escolar, en I. Quintanilla (comp.): *Calidad de vida, educación, deporte y medio ambiente*, Barcelona: P.P.U., pp. 195-203.
- 7) Ovejero, A. (1990g). Algunos datos y breves consideraciones sobre el nacionalismo asturiano, en J. Seoane (comp.): *Psicología Política de la Sociedad Contemporánea*, Valencia: Promolibro, pp. 149-167.
- 8) Ovejero, A. (1991). Aprendizaje cooperativo e integración escolar: una perspectiva psicosociológica, en C. Fernández Villanueva y cols. (Eds.): *Cuestiones en Psicología Social*, pp. 197-212. Madrid: Editorial Complutense.
- 9) Ovejero, A. (1993a). El aprendizaje cooperativo como alivio del malestar docente, en F. Loscertales y M. Marín (Eds.): *Dimensiones psicosociales de la educación y de la comunicación*, Madrid: Eudema, pp. 43-48
- 10) Ovejero, A. (1993b). Necesidad de una perspectiva crítica en Psicología Social de la Educación, en F. Loscertales y M. Marín (Eds.): *Dimensiones psicosociales de la educación y de la comunicación*, Madrid: Eudema, pp. 87-94.
- 11) Ovejero, A. (1993c). Entrenamiento de habilidades sociales en niños, en F. Loscertales y M. Marín (Eds.): *Dimensiones psicosociales de la educación y de la comunicación*. Madrid: Eudema, pp. 229-240.
- 12) Ovejero, A. (1993d). Nuevas tendencias teóricas y epistemológicas en la Psicología Social de fin de siglo, en B. González y A. Güil (Eds.): *Psicología cultural*, Madrid: Eudema, pp. 323-332.
- 13) Ovejero, A., García, A. I. y Fernández, J.A. (1993a). Clase social, actitudes escolares, nivel de aspiración educativa y rendimiento académico, en F. Loscertales y M. Marín (Eds.): *Dimensiones psicosociales de la educación y de la comunicación*, Madrid: Eudema, pp. 173-184.
- 14) Ovejero, A., García, A. I. y Fernández, J.A. (1993b). Clase social y aptitudes escolares: Diferencias entre B.U.P. y F.P., en F. Loscertales y M. Marín (Eds.): *Dimensiones psicosociales de la educación y de la comunicación*. Madrid: Eudema, pp. 185-197 (Autores: Ovejero, García y Fernández)
- 15) Ovejero, A., García, A. I. y Fernández, J.A. (1993c). Autoconcepto y rendimiento académico en B.U.P. y F.P., en F. Loscertales y M. Marín (Eds.): *Dimensiones psicosociales de la educación y de la comunicación*. Madrid: Eudema, pp.199-206 (Autores: A. Ovejero, A. García y J.A. Fernández).
- 16) Ovejero, A., García, A. I. y Fernández, J.A. (1993d). Satisfacción/insatisfacción laboral en una muestra de mineros asturianos de HUNOSA, en L. Munduate y M. Barón (Eds.): *Gestión de Recursos Humanos y Calidad de Vida Laboral*, Madrid: Eudema.

- 17) Ovejero, A., García, A. I. y Fernández, J.A. (1993e). Algunos datos sobre el S20/23 de satisfacción laboral de Meliá y Peiró en una muestra de mineros asturianos, en L. Munduate y M. Barón (Eds.): *Gestión de Recursos Humanos y Calidad de Vida Laboral*. Madrid: Eudema, pp. 399-409 (Autores: Ovejero, García y Fernández).
- 18) Ovejero, A. (1994). Psicología Social de la Educación y Formación del Profesorado, en: *A Psicologia na Formação Contínua*, Actas do 5º Seminário, Evora: Departamento de Pedagogia e Educação, 1994.
- 19) Ovejero, A. (1995a). El contexto de la educación: El grupo y su dinámica, en S. Lemos, F. Martín, A. Ovejero y R. Rodríguez: *Dimensiones psicológicas en la educación secundaria*, pp. 181-208. Universidad de Oviedo: I.C.E.
- 20) Ovejero, A. (1995b). Psicología Social del Adolescente, en S. Lemos, F. Martín, A. Ovejero y R. Rodríguez: *Dimensiones secundarias en la educación secundaria*, pp. 93-128. Universidad de Oviedo: I.C.E.
- 21) Ovejero, A. (1995c). La actual Psicología Social de la Educación: Entre el modernismo y el postmodernismo. En M.T. Vega y M.C. Tabernero (Eds.): *Psicología Social de la Educación y de la Cultura*, Ocio, Deporte y Turismo, pp. 41-56. Madrid: Eudema.
- 22) Ovejero, A., García, A.I., Fernández, J.A., Grossi, F.J., Agulló, E. y Moral, M. (1995). Situación laboral y actitudes de los jóvenes hacia el trabajo: Diferencias entre dos concejos asturianos. En L. González, A. de la Torre y J. de Elena (Eds.): *Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, Gestión de Recursos Humanos y Nuevas Tecnologías*, pp. 473-494. Madrid: Eudema.
- 23) Ovejero, A., Grossi, F.J., Fernández, J.A., Agulló, E. García, A.I., y Moral, M. (1995). Actitudes, valores y participación política de los jóvenes asturianos: Diferencias entre dos concejos. En E. Garrido y C. Herrero (Eds.): *Psicología Política, Jurídica y Ambiental*, pp. 65-82. Madrid: Eudema.
- 24) Ovejero, A. (1996). Psicología Social de la Educación. En A. Garrido, J.L. Alvaro y J.R. Torregrosa (Eds.): *Psicología Social Aplicada* (Cap. 11, págs. 317-349). Madrid: Mc Graw-Hill.
- 25) Ovejero, A. (1998). Habilidades sociales y su entrenamiento en el ámbito escolar. En P. Gil y J.M. León (Eds.): *Entrenamiento de las habilidades sociales*. Cap. 8: págs. 169-185. Madrid: Síntesis.
- 26) Ovejero, A. (1999). Del moderno optimismo tecnológico al actual pesimismo posmoderno: Una propuesta moderadora desde la psicología social. En E. Agulló, F.J. Grossi y cols.: *Siglo XXI: Problemas, perspectivas y desafíos. Entre el individuo y la sociedad*. Oviedo: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, pp. 323-337.
- 27) Ovejero, A. (2000a): Necesidad de una nueva psicología social: Perspectivas para el siglo XXI. En A. Ovejero (Ed.): *La psicología social en España al filo del año 2000*, pp. 15-39. Madrid: Biblioteca Nueva.

- 28) Ovejero, A. (2000b). Psicología Social de la Educación en España: Balance de lo hecho y perspectivas de futuro. En A. Ovejero (Ed.): *La psicología Social en España al filo del año 2000*, pp. 241-264. Madrid: Biblioteca Nueva.
- 29) Ovejero, A. (2000c). Psicología social aplicada: Aplicación a “la realidad social”. En A. Ovejero, M. Moral y P. Vivas (Eds.): *Aplicaciones en Psicología Social*, pp. 15-21. Madrid: Biblioteca Nueva.
- 30) Ovejero, A. (2000d). Educación, poder y postmodernidad: Una visión foucaultiana (autores: M. Moral y A. Ovejero). En A. Ovejero, M. Moral y P. Vivas (Eds.): *Aplicaciones en Psicología Social*, pp. 261-267. Madrid: Biblioteca Nueva.
- 31) Ovejero, A. (2000e). Psicologías rodeo “adversus” psicologías radicales: La necesidad de una psicología (radical) del mundo de la vida. (Autores: J. Pastor, A. Ovejero y M. Moral). En D. Caballero, M. Méndez y J. Pastor (Eds.): *La mirada psicosociológica*, pp. 122-127. Madrid: Biblioteca Nueva.
- 32) Ovejero, A. (2000f). Aproximación socioconstruccionista al estudio de las emociones. En D. Caballero, M. Méndez y J. Pastor (Eds.): *La mirada psicosociológica*, pp. 580-584. Madrid: Biblioteca Nueva.
- 33) Ovejero, A. (2001). El trabajo del futuro y el futuro del trabajo: Algunas reflexiones desde la psicología social de la educación. En E. Agulló y A. Ovejero (Eds.): *Trabajo, individuo y sociedad: Perspectivas psicosociológicas sobre el futuro del trabajo*, pp. 145-164. Madrid: Pirámide.
- 34) Ovejero, A. (2003a). Pobreza, subdesarrollo y globalización. En Instituto de Estudios por la Paz y la Cooperación (Universidad Abierta): *Educación para la paz, la cooperación y la resolución de conflictos*. Oviedo: Eukasia Editorial.
- 35) Ovejero, A. (2003b). Importancia de las dimensiones psicosociológicas en el ámbito educativo. En S. Yubero, E. Larrañaga y J.F. Morales (Eds.): *La sociedad educadora*, pp. 17-32. Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha.
- 36) Ovejero, A. (2003c). Aprendizaje cooperativo: Una escuela diferente para una sociedad diferente. En A. Guil (Dir.): *Psicología social del sistema educativo: Líneas actuales de trabajo e investigación*, pp. 71-90. Sevilla: Kronos.
- 37) Ovejero, A. (2003d). Aspectos socioconstruccionistas en La idea de principio en Leibniz. En L.X. Álvarez y J. de Salas (Eds.): *La última filosofía de Ortega y Gasset en torno a “La idea de principio en Leibniz”*, págs. 207-222. Oviedo: Universidad de Oviedo.
- 38) Ovejero, A. (2004a). La psicología social de la ciencia y el giro “sociopsicológico” en el análisis de la ciencia y del conocimiento científico. En J. Valero (Coord.): *Sociología de la ciencia*, págs. 231-256 Madrid: EDAF.
- 39) Ovejero, A. (2004b). Delito y exclusión social: Una aproximación desde la psicología social crítica. En Pérez Álvarez, F. (Ed.): *SERTA: In memoriam Alexandri Baratta*, págs. 531-546. Salamanca: Universidad de Salamanca.

- 40) Ovejero, A. (2005a). Modelos de gestión de recursos humanos: Evolución y desarrollo histórico. En J. Valero y M. Lamoca (Eds.): *Recursos humanos*, pp. 15-34. Madrid: Tecnos.
- 41) Ovejero, A. (2005b). Psicología Social y memoria colectiva de la Guerra Civil. En J.M. Sabucedo, J.Romay y A. López-Cortón (Eds.): *Psicología Política, Cultura, Inmigración y Comunicación Social*, pp. 15-24. Madrid: Biblioteca Nueva.
- 42) Ovejero, A. (2005c). *Pobreza, subdesarrollo y globalización. En Curso de Cooperación Internacional*, Tema 2, pp. 78- Oviedo: Eikasía Ediciones.
- 43) Moral, M. y Ovejero, A. (2005). Identidades y contradicciones de la escuela en las condiciones posmodernas de la sociedad global. En R. García, A. Fernández, M.D. Losada y M. Goluboff (Eds.): *Psicología Ambiental, Comunitaria y de la Educación*, pp. 343-350. Madrid: Biblioteca Nueva.
- 44) Ovejero, A. (2006a). Algunas aportaciones de la Psicología Social a las mujeres emprendedoras en territorios rurales. En AA.VV.: *Aportes para la construcción de lo colectivo* (pp. 333-347). Montevideo (Uruguay): Psicolibros.
- 45) Ovejero, A. (2006b). Psicología Social y mediación. En C. Guillén y R. de Diego (Eds.): *Mediación: Procesos, tácticas y técnicas*. Madrid: Pirámide.
- 46) Ovejero, A. (2006c). Desigualdad, subdesarrollo y pobreza en la actual globalización ultraliberal. Tema 2. pp. 1-86. *Curso de Cooperación Internacional*. Oviedo: Editorial Eikasía.
- 47) Ovejero, A. (2006c). Memoria, emoción y afectos: traumas psicosociales en las víctimas del franquismo. En Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid y de Palencia (Coord.): *La represión franquista: Mito, olvido y memoria* (pp. 67-83). Valladolid: Universidad de Valladolid.
- 48) Ovejero, A. (2007a). Psicociología de la memoria y el olvido de la guerra civil española. En P. García Colmenares (Coord.): *La represión franquista: Mito, olvido y memoria* (pp. 61-83). Valladolid: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valladolid.
- 49) Ovejero, A. (2007b). Psicología Social de la Educación. En M.A. Aguilar y Anne Reid (Ed.): *Tratado de Psicología Social*, pp. 187-209. Barcelona: Anthropos.
- 50) Ovejero, A. (2007c). Colectividades y educación racionalista: Una experiencia de cooperación y solidaridad. En J. Romay (Ed.): *Perspectivas y prospectivas de la Psicología Social en los albores del siglo XXI* (pp. 183-203). Madrid: Biblioteca Nueva.
- 51) Ovejero, A. (2007d). Presentación del Simposium de "Psicología Social y Literatura". En Carlos Guillén y Rocío Guil (Eds.): *Psicología Social: Un encuentro de perspectivas, vol. II* (pp. 1537-1539). Cádiz: Asociación de Profesionales de Psicología Social.
- 52) Ovejero, A., Morentin, R. y Arias, B. (2007a). Amor e influencia en el bienestar social de personas con discapacidad intelectual. En Carlos Guillén y Rocío Guil (Eds.): *Psicología Social: Un encuentro de perspectivas, vol. II* (pp. 1679-1683). Cádiz: Asociación de Profesionales de Psicología Social.

- 53) Ovejero, A., Morentin, R. y Arias, B. (2007b). Un modelo conceptual del amor en personas con discapacidad intelectual. En Carlos Guillén y Rocío Guil (Eds.): *Psicología Social: Un encuentro de perspectivas, vol. II* (pp. 2026-2030). Cádiz: Asociación de Profesionales de Psicología Social
- 54) Ovejero, A. y Pastor, J. (2007). Utilidad de Michel Foucault para la Psicología Social actual: La genealogía del sujeto moderno. En Carlos Guillén y Rocío Guil (Eds.): *Psicología Social: Un encuentro de perspectivas, vol. I* (pp. 74-78). Cádiz: Asociación de Profesionales de Psicología Social.
- 55) Javaloy, F., Cornejo, J.M., Rodríguez, A., Espelt, E. y Ovejero, A. (2008): Hacia una psicología social de la globalización. En J.F. Morales, C. Huici, A. Gómez y E. Gaviria (Eds.): *Método, teoría e investigación en psicología social* (pp. 687-710). Madrid: Prentice.
- 56) Ovejero, A. (2009a). Mujer y discriminación laboral en la actual globalización neoliberal. En J.A. Orejas, O. Retortillo y A. Piñeyoa (Dirs.): *Mujer, empresa y medio rural* (pp. 81-99). Palencia: Diputación de Palencia.
- 57) Ovejero, A. (2009b). Educación y exclusión en una sociedad globalizada. En S. Yubero, E. Larrañaga y J.F. Morales (Coordinadores): *Exclusión: Nuevas formas y nuevos contextos* (pp. 25-39). Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
- 58) Ovejero, A. (2011a). Psicología y contexto social: El desarrollo histórico de la psicología social y sus implicaciones para el futuro. En A. Ovejero y J. Ramos (Eds.). *Psicología Social Crítica* (pp. 25-47). Madrid: Editorial Biblioteca Nueva.
- 59) Ovejero, A. (2011b). La construcción social de las emociones. En Ovejero y J. Ramos (Eds.). *Psicología Social Crítica* (pp. 154-182). Madrid: Editorial Biblioteca Nueva.
- 60) Ovejero, A. y Ramos, J. (2011). Introducción. En A. Ovejero y J. Ramos (Eds.). *Psicología Social Crítica* (pp. 11-24). Madrid: Editorial Biblioteca Nueva.
- 61) Ovejero, A. (2012a). El papel del azar en la vida humana: un enfoque psicosocial. En Ovejero y otros (Compiladores: E. Hincapié y M.D. Morales): *Subjetividad, memoria y educación. Contextos de aplicación de la psicología social en un mundo en crisis* (Cap. 1). Medellín (Colombia): Universidad Pontificia Bolivariana.
- 62) Ovejero, A. (2012b) Frente a la globalización..., cooperación y solidaridad. En Ovejero y otros (Compiladores: E. Hincapié y M.D. Morales): *Subjetividad, memoria y educación. Contextos de aplicación de la psicología social en un mundo en crisis* (Cap. 2). Medellín (Colombia): Universidad Pontificia Bolivariana.
- 63) Ovejero, A. (2012c) El fracaso escolar. Un fenómeno construido socialmente. En Ovejero y otros (Compiladores: E. Hincapié y M.D. Morales): *Subjetividad, memoria y educación. Contextos de aplicación de la psicología social en un mundo en crisis* (Cap. 14). Medellín (Colombia): Universidad Pontificia Bolivariana.
- 64) Ovejero, A. (2012d). Violencia y conducta agresiva: el caso del acoso escolar. En Ovejero y otros (Comp E. Hincapié y M.D. Morales): *Subjetividad, memoria y educación. Contextos de aplicación de la psicología social en un mundo en crisis* (Cap. 15). Medellín (Colombia): Universidad Pontificia Bolivariana.

- 65) Ovejero, A. (2012e). El aprendizaje cooperativo como vía de solución a los principales problemas escolares. En Ovejero y otros (Compiladores: E. Hincapié y M.D. Morales): *Subjetividad, memoria y educación. Contextos de aplicación de la psicología social en un mundo en crisis* (Cap. 16). Medellín (Colombia): Universidad Pontificia Bolivariana.
- 66) Ovejero, A. (2013a). El acoso escolar entre compañeros: cuatro décadas de investigación internacional. En A. Ovejero, P.K. Smith y S. Yubero (Eds.), *El acoso escolar y su prevención: Perspectivas internacionales* (pp. 9-54). Madrid: Biblioteca Nueva.
- 67) Ovejero, A. (2013b). 15-M: Un movimiento colectivo rebelde a la contra de la educación dominante. En E. Hincapié, N. Carrasco y A. Martínez (Eds.) (2013): *Afectividad y Educación*. Medellín (Colombia): Universidad Pontificia Bolivariana.
- 68) Moral, M. y Ovejero, A. (2013). Actitudes ante la problemática del bullying: diferencias intergénero. En A. Ovejero, P.K. Smith y S. Yubero (Eds.), *El acoso escolar y su prevención: Perspectivas internacionales* (pp. 73-87). Madrid: Biblioteca Nueva.
- 69) Ovejero, A. (2014). Neoliberalismo y psicología social. En M.A. Carrillo Pacheco y R.J. Salinas García (Coords.). *Avances disciplinarios en el campo de los estudios de trabajo* (pp. 15-45). Querétaro (México), Universidad Autónoma de Querétaro (ISBN: 979-607-736-096-4).
- 70) Ovejero, A. (2016a). Neoliberalismo y criminalización de la pobreza. En Fernando Pérez Álvarez (Dir.) *Serta: In Memoriam Louk Hulsmán* (pp. 149-167). Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca.
- 71) Ovejero, A. (2016b). Factores psicosociales intervinientes en el acoso escolar: Aportaciones desde un modelo ecológico. En S. Yubero, E. Larrañaga y R. Navarro (Eds.), *La violencia en las relaciones humanas: contextos y entornos protectores del menor* (pp. 31-48). Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha.
- 72) Ovejero, A. (2016c). Neoliberalismo y bienestar humano: el papel que debe desempeñar la Psicología Social. En José Jaime Paulín Larracochea y Angélica María Aguado Hernández (Coords.), *Temáticas actuales en psicología* (e-book), Querétaro (México), Universidad Autónoma de Querétaro
- 73) Ovejero, A., Yubero, S., Larrañaga, E. y Moral, M. (2016). Cyberbullying: Definitions and facts from a psychosocial perspective. En Navarro, R., Yubero, S. y Larrañaga, E. (Eds.), *Cyberbullying across the globe: Gender, family, and mental health* (Cap. 1, pp. 1-34). Printforce, Neetherlands: Springer.
- 74) Larrañaga, E., Yubero, S. y Ovejero, A. (2016). Gender variables and cyberbullying in college students. En Navarro, R., Yubero, S. y Larrañaga, E. (Eds.), *Cyberbullying across the globe: Gender, family, and mental health* (Cap. 3, pp. 63-78). Printforce, Neetherlands: Springer.
- 75) Ovejero, A. (2017c). Paulo Freire: Una pedagogía libertaria y psicosocial. En A. Shigunov Neto e I. Fortunato (Ed.), *20 anos sem Paulo Freire: trajetórias de sua pedagogia libertária* (pp. 61-76). São Paulo: Edições Hipótese.

76) Ovejero, A. (2018a), Utilidad de la teoría del hombre-masa de Ortega y Gasset para el siglo XXI. En H, Aznar, E. Alonso y M. Menéndez (Eds.), *Ortega y el tiempo de las masas* (Cap. 4, pp. 91-122). Madrid, Plaza y Valdés.

77) Ovejero, Anastasio (1918b). Epistemología y transformación social en José Ramón Torregrosa. En José Luis Alvaro (Ed.): *La Interacción Social. Homenaje a José Ramón Torregrosa* (345-361). Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.

78) Larrañaga , E., Yubero, S., Navarro, R. y Ovejero, A. (2018), From traditional bullying to cyberbullying: Cybervictimization among higher education students. En W. Cassidy, Ch. Faucher y M. Jackson (Eds.), *Cyberbullying at university in international contexts* (pp. 97-111). Londres y Nueva York: Routledge.



Anastasio Ovejero

Desigualdad y pobreza en el mundo actual



En el siglo XX la desigualdad en Europa no dejó de disminuir durante casi setenta años. Sin embargo, a partir de 1980 –como consecuencia de la hegemonía neoliberal y de sus políticas– la desigualdad no ha dejado de crecer, hasta alcanzar hoy día unos niveles realmente inaceptables, tanto entre países (con un tercer mundo cada vez más pobre), como dentro de los países desarrollados (con un cuarto mundo cada día mayor). Por otra parte, a pesar de la mucha riqueza creada por la revolución tecnológica, y a pesar del enorme incremento de la producción agrícola, la pobreza y el hambre apenas se han reducido en los países sin desarrollar: el hambre no es la consecuencia de la falta de alimentos.

El objetivo de este libro es analizar esa situación, mostrar la hipocresía de los países ricos y de las propias instituciones supranacionales en este campo y plantear vías de solución que pasan, indefectiblemente, por una mayor movilización colectiva que lleve a una transformación profunda de la actual trayectoria del capitalismo y a un aumento de nuestros niveles de justicia y de solidaridad. Otro mundo es posible y de nosotros depende.

Este libro está publicado bajo una licencia Creative Commons. Su versión digital está disponible gratuitamente en el sitio web del autor: anastasio.ovejero.net

